

ECUADOR **Debate**

CONSEJO EDITORIAL

José Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira,
Simón Espinosa, Diego Cornejo Menacho, Manuel Chiriboga,
Fredy Rivera Vélez, Marco Romero.

Director: - Francisco Rhon Dávila. Director Ejecutivo del CAAP
Primer Director: José Sánchez Parga. 1982-1991
Editor: Hernán Ibarra Crespo
Asistente General: Margarita Guachamín

REVISTA ESPECIALIZADA EN CIENCIAS SOCIALES

Publicación periódica que aparece tres veces al año. Los artículos y estudios impresos son canalizados a través de la Dirección y de los miembros del Consejo Editorial. Las opiniones, comentarios y análisis expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de quien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE.

© **ECUADOR DEBATE. CENTRO ANDINO DE ACCION POPULAR**

Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE.

SUSCRIPCIONES

Valor anual, tres números:

EXTERIOR: US\$ 45

ECUADOR: US\$ 15,50

EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US\$. 15

EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR US\$ 5,50

ECUADOR DEBATE

Apartado Aéreo 17-15-173B, Quito-Ecuador

Telf: 2522763 . Fax: (5932) 2568452

E-mail: caaporg.ec@uio.satnet.net

Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito.

PORTADA

Gisela Calderón/Magenta

DIAGRAMACION

Martha Vinuesa

IMPRESION

Albazul Offset

ECUADOR DEBATE 89

Quito-Ecuador, Agosto 2013

PRESENTACION / 3-6

COYUNTURA

Diálogo sobre la coyuntura: ejes y contornos de un régimen disciplinario / 7-20

Conflictividad socio-política: marzo-junio 2013 / 21-28

TEMA CENTRAL

Las movilizaciones de protesta: nueva forma de lucha social

J. Sánchez Parga / 29-40

Un mundo en eferescencia política

Albert Ogien / 41-50

Obstáculos a la democracia luego de las Nuevas Revoluciones árabes

Farhad Khosrokhavar / 51-70

Movilizaciones y protestas estudiantiles y sociales en Chile

José Lino Contreras Véliz / 71-92

España: de los impactos de la crisis a las movilizaciones de protesta

Antonio Alaminos y Clemente Penalva / 93-118

DEBATE AGRARIO-RURAL

La asociación lechera, ¿Desarrollo local o subordinación productiva?

El caso de la comunidad La Chimba, Cayambe

Diego Martínez G. / 119-134

ANÁLISIS

¿Punto y final del partido indígena? Análisis desde las elecciones ecuatorianas del 2013

Ferran Cabrero / 135-156

La indiferencia ante los derechos humanos y la educación moderna en un régimen populista. La ideología de la descolonización en Bolivia

H. C. F. Mansilla / 157-172

2 Índice

RESEÑA

El rey de la leña / 173-178

PRESENTACIÓN

En lugares tan distintos del mundo como pueden ser Madrid, New York, México, Sao Paulo, Santiago, Egipto o Túnez, se ven conmocionados por masivas, espontáneas e inadvertidas protestas sociales. Estas movilizaciones tienen en común un rechazo a las formas institucionales de la representación política y portan demandas reivindicativas dirigidas al cuestionamiento del orden existente y reclaman el mejoramiento colectivo. Aunque ha surgido entre otras, una interpretación que establece cierta homología con mayo del 68 por su impacto y diseminación globales, sin embargo por la configuración de múltiples redes de acción, la utilización de los recursos de Internet y notoriamente un nuevo conjunto de problemas relacionados con la crisis de la economía y la política, surgen muchas preguntas sobre el significado de estas movilizaciones. Es muy notoria la proclamada desconfianza en los partidos políticos y la reticencia a liderazgos políticos. Desde la perspectiva de su composición, parecen predominar los sectores medios entre los participantes. Claramente, el impacto de estas movilizaciones ha producido la pérdida de legitimidad de muchos regímenes políticos. En una visión general sobre este nuevo momento de protestas de Manuel Castells, se sostiene que éstas se inician en Internet, viven en red, son de índole urbano; parten de una indignación espontánea y en cuanto a sus objetivos programáticos, “tienen tantos progra-

mas que no tienen ninguno”, pero “son movimientos por la democracia”.

En este escenario y contextos, este número de *Ecuador Debate* ofrece un conjunto de reflexiones que procura situar el significado de la protesta y sus escenarios, poniendo atención a sus rasgos y características en la “primavera árabe”, las movilizaciones de los “indignados” españoles y las movilizaciones estudiantiles chilenas.

José Sánchez Parga traza una interpretación sobre el tránsito de las luchas sociales que comenzaron enfrentando las políticas y gobiernos neoliberales y como más tarde, las protestas se dirigieron contra todo gobierno y régimen político, sean dictaduras o democracias, sometidos al nuevo orden económico capitalista global, el que se impone sobre todos los Estados y en contra de todos los ciudadanos en todo el mundo. De allí que estas movilizaciones de protesta se encuentran atezadas por un dilema fundamental: desarmadas de su potencial de violencia son incapaces de cualquier cambio o transformación de la realidad y, armadas corren el riesgo de ser criminalizadas y reprimidas como terroristas.

Acerca de las movilizaciones y protestas que ocurrieron en el año 2011 tan sorprendidas por su magnitud y alcance global, Albert Ogien considera que éstas están constituidas por ciudadanos comunes opuestos a dotarse de una organicidad política, de una naturaleza no partidaria, asumiendo la voluntad de

sostener la unanimidad de la movilización, así como la opción explícita de la no violencia y la reivindicación de la democracia. Al momento si bien existe la sensación de que el orden se mantiene, algo ha cambiado en el entorno político y se puede pensar que las fuerzas de la protesta siguen trabajando al interior de las sociedades.

Las recientes revoluciones árabes, particularmente las ocurridas en Egipto y Túnez han puesto en evidencia los antiguos conflictos en torno a la modernización. Farhad Khosrokhavar explora la fuerte tensión entre quienes buscan una sociedad laica y aquellos que defienden los puntos de vista religiosos del Islam que ha estado presente en los últimos cien años. Si bien en el pasado el panarabismo tendió a fortalecer corrientes laicas en la política y el Estado, se produjo un intenso crecimiento de tendencias confesionales que han conseguido un amplio apoyo en la población. De allí que corrientes islamistas fundamentalistas controlan el poder político en detrimento de quienes buscan una sociedad laica, y esto aparece como un resultado no buscado por quienes protagonizaron las revoluciones de Egipto y Túnez.

Desde la masiva movilización de los estudiantes secundarios de 2006 que fue llamada la revolución de los pingüinos, han seguido intensas movilizaciones de estudiantes universitarios en 2011 y 2012. José Lino Contreras Véliz presenta las causas y la dinámica de la protesta estudiantil que busca la democratización de la enseñanza poniendo en evidencia las inequidades del sistema educativo chileno.

Antonio Alaminos y Clemente Penalva señalan que la bifurcación de la crisis económica en crisis social y política, y la interacción entre éstas define la movilización sociopolítica en España. Las críticas al modo de hacer política han llevado, como reflexión popular colectiva, a cuestionar el concepto de democracia como una simple expresión formal de reglas y procedimientos. Esta situación puede transformar profundamente el sistema político español. Primero como consecuencia de los movimientos de resiliencia democrática que buscan nuevas expresiones políticas. Y segundo, dada la difusión de una alienación política que enajena a los ciudadanos en el actual sistema de partidos.

La Sección Análisis contiene dos artículos. El primero dedicado a la trayectoria de Pachakutik como partido político y el segundo acerca de las ideologías indianistas e indigenistas en Bolivia.

La peculiaridad del partido Pachakutik, en gran medida brazo electoral de la CONAIE, fue su entrada en la política institucional que implicaba no pocos desafíos y peligros para el movimiento indígena en su conjunto. Con el tiempo transcurrido y a la luz de los resultados en las elecciones ecuatorianas de febrero del 2013, que confirman la debacle del Pachakutik, Ferrán Cabrero se interroga acerca de si estamos presenciando el punto y final del partido indígena como expresión de uno de los movimientos sociales más exitosos de Latinoamérica, debilitado en parte por esa misma opción electoral. H.C.F. Mansilla propone una crítica a la ideología de la descolonización sostenida por el gobierno boliviano como parte de planteamien-

tos de origen indianista e indigenista. El argumento de la descolonización sostiene que la sociedad indígena precolonial fue igualitaria y solidaria. Por otra parte, ha desarrollado una visión negativa de la modernidad. Un aspecto principal de la sociedad boliviana ha sido la tradición autoritaria que es ignorada por indianistas e indigenistas.

En la Sección Debate Agrario-Rural, Diego Martínez explora en la lógica de las cadenas productivas inclusivas, las relaciones de los pequeños productores de “La Chimba” con la agroindustria lechera; una experiencia que muestra las limitaciones derivadas de la dependencia hacia la mono producción, en detrimento de la producción diversificada. El pequeño productor se convierte en el eslabón más débil de la cadena con una economía de subsistencia. En este sentido, son necesarias políticas de desarrollo rural sustentadas en organizaciones

campesinas que promuevan el desarrollo territorial con la diversificación de la producción campesina.

El Diálogo sobre la coyuntura reunió a Jorge León, Floresmilo Simbaña, Manuel Chiriboga, y Hernán Ibarra, el eje central giró en torno a las concepciones vigentes de sujetar a la sociedad y consolidar un poder cada vez más concentrado en el Ejecutivo revelando un proyecto de modernización disciplinario. La Conflictividad sociopolítica entre Marzo-Junio de 2013 evidencia un crecimiento de la conflictividad junto a medidas de control y represión.

Se incluye finalmente una reseña de Hernán Ibarra a *El rey de la leña*, una autobiografía de Marco Restrepo que fue publicada en 1958 en Buenos Aires y ha sido reeditada hace poco en el país.

Los Editores

COYUNTURA

Diálogo sobre la coyuntura: ejes y contornos de un régimen disciplinario

Participantes: Jorge León, Investigador del CEDIME; Floresmilo Simbaña, Investigador Principal de la Fundación Kawsay; Manuel Chiriboga, Investigador Principal de RIMISP, Hernán Ibarra, Investigador Principal del CAAP.

Las concepciones de sujetar a la sociedad y consolidar un poder cada vez más concentrado en el Ejecutivo corresponden a un proyecto de modernización disciplinario. Para ello, se instauran leyes, dispositivos legales e institucionales que han ido aniquilando la acción social y política. Es así como el Estado se va tornando en el único lugar de la política ante un creciente vaciamiento del mundo social.

Hernán Ibarra. La amplia mayoría de Alianza País en la Asamblea Nacional ha dejado el camino libre para la expedición de leyes. Esto no hace sino acentuar el predominio del Ejecutivo en la formulación de las leyes. Simultáneamente prosiguen las medidas de sanción de la protesta y los casos más extremos del juzgamiento a la profesora Mary Zamora y José Acacho con la acusación de terrorismo.

Las reformas a la Ley de Minería tienen como contenido facilitar la asociación de la explotación minera con empresas estatales extranjeras y la apertura controlada al capital transnacional. Por otra parte, se busca poner límites a la minería informal y gestar un espacio para la pequeña y mediana minería como un complemento a la gran minería.

La expedición de la Ley Orgánica de Comunicación cierra un largo y dilatado proceso que empezó en 2009 y significó una confrontación de los medios privados con el gobierno en torno a la libertad de expresión. Esta ley incluye una normatividad para los medios impresos, audiovisuales y sobre todo la asignación de frecuencias a medios públicos, privados y comunitarios. El asunto más inquietante es la definición de la comunicación como un servicio público y la concepción del linchamiento mediático, una noción subjetiva transformada en concepción jurídica. La nueva institucionalidad con el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación tiene el control directo e indirecto del Ejecutivo.

Con la expedición del Decreto No. 16 acerca de las organizaciones socia-

les, se crea un marco regulatorio que limita severamente a las expresiones organizadas de la sociedad civil. Se definen requisitos excesivos para la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales y se crean mecanismos de control y supervisión que tienen una alta discrecionalidad y posibilidad de intervención. Se ha producido una ruptura con el derecho y libertad de asociación que fueron aceptados y practicados en la tradición institucional ecuatoriana.

El significado de esta normatividad que implica una consolidación de la intervención estatal, plantea la vigencia de un Estado disciplinario. ¿Qué vínculos tienen estos cambios legales con el desarrollo de un esquema autoritario? ¿La consolidación de un proyecto desarrollista requiere limitar las libertades sociales y políticas?

Jorge León. Sobre el control disciplinario de la sociedad, añadiría un hecho clave que es la ley laboral, ahora en debate, que aún con mayor énfasis implica no sólo una nueva regulación de las relaciones laborales, sino que define una lógica disciplinaria de la mano de obra, en este caso parece presentarse como condición para las ideas de desarrollo que quiere promocionar Correa. Pero ésta es una situación reciente, el disciplinamiento de la sociedad sin embargo, a un inicio no tenía este nexo con un proyecto económico, me parece.

Abordo el tema poniendo énfasis en dos aspectos, primero, no había proyecto de desarrollo por más que se encuentre elementos en los dos planes de desarrollo que ha hecho SENPLADES. Correa ha ido cambiando de ideas sobre lo que quiere hacer, recuerdo que al inicio

decía que el ejemplo tenía que ser Chile, después fue Australia, luego habló de Suiza, Noruega, y terminó en Corea, pero eso fue al tercer o cuarto año. Entonces había un déficit de definición de las ideas de desarrollo, salvo esto de promover las empresas públicas, pero eso no define gran cosa en relación a la idea de desarrollo; no había una idea clara de a qué tipo de desarrollo económico se quería llegar y, sin embargo, Correa ya tenía esta lógica disciplinaria desde el inicio.

Recordemos que al poco tiempo de su posesión sucedió el primer conflicto en la Amazonia donde hubo muertos y heridos, cuando fue puesta de modo ilegal en la cárcel la prefecta Llori, y así por el estilo se puede enumerar una serie de hechos. Insisto en esto porque no lo haría tan funcional esta lógica disciplinaria a un proyecto de desarrollo. No es como lo pensaron los militares en la década del setenta que había que tener una paz laboral para que haya implantación empresarial, la sustitución de importaciones implicaba dar ventajas a los nuevos empresarios y no atemorizarlos con las demandas laborales.

En suma, esta visión de disciplinar la sociedad, es más una concepción de la sociedad y del poder que tiene Correa, por eso yo me he permitido llamar a su gobierno como un “garcianismo-moderno del siglo XXI” porque García Moreno tenía una obsesión similar por el orden. Correa tiene una visión normativa del orden y el disciplinamiento social que promueve más bien se debe a eso que a otra cosa. Recordemos también que los primeros discursos de Correa eran contra lo que él llamaba el “corporativis-

mo" lo que de hecho ya revelaba una visión de la sociedad civil, por la cual ésta no debía tener tanta presencia ni capacidades de acción. Podríamos concluir que una visión clara de Correa, es esta del gran hermano que pone orden. Él tiene una concepción del ejercicio del poder relacionada con el orden y por eso tiene una visión reglamentista y disciplinaria en las leyes y que lo ha doblado con la coerción para llegar a lógicas de control que incluso ahora se realiza a las personas que están dentro del aparato del Estado, etcétera. Conuerdo en que estamos yendo a una sociedad de corte más autoritario, pero centrado en él, este es un punto clave.

Lo segundo que quería decir es que, fuera de los aspectos de modernización económica y del Estado, de la racionalización de políticas públicas, de la gestión pública sobre todo, lo que está construyendo políticamente un poder que es más Estado y menos sociedad civil, pero también es mas Correa como persona, más caudillo y mucho menos organización política.

De este modo Ecuador, está viviendo lo que ya ha pasado en los otros países andinos. Perú fue el primero de lo que Tanaka hizo bien en llamar un sistema político sin partidos desde la época de Fujimori, y hasta ahora Perú no tiene partidos. Colombia ha deshecho su lógica de fuerte bipartidismo. Bolivia igualmente y ahora Ecuador está en la misma vía. Entonces, algo dice de las sociedades andinas, este proceso de deshacer las organizaciones políticas. Ecuador actual, en contraste con los otros países, tiene más una lógica tecnocrática de organización y ordenamiento de las cosas.

Existe una organización llamada Alianza País que no es un partido propiamente dicho, sino ante todo una base difusa pero eficaz de organización electoral. Este sistema se alimenta con elementos clientelares, además de la aceptación personal de Correa gracias al capital político que ha logrado por haber cumplido promesas, incrementado la distribución de la riqueza a los más pobres y reforzado la idea de esperanza social para la mayoría. Sin embargo, llamo la atención que en el futuro inmediato, lo que este sistema cuenta aumentar a su funcionamiento es también tener el control de los poderes locales. Algo similar a lo que fue uno de los cimientos del sistema bipartidista de Colombia que tenía una red de caciques locales, reconocidos al nivel local, que podían captar los votos para transferirlos a los dos partidos al nivel nacional, y a su vez el gobierno central podía transferir más recursos a estos poderes locales para que tengan reconocimiento. El objetivo clave para el gobierno ya no es lo que era antes, ganar la Asamblea sino ganar los poderes locales que se elegirán en el año 2014, teniendo así el control hacia abajo de los municipios y gobiernos locales con los caciques locales que permite transferir ese apoyo hacia arriba. Se buscaría construir un sistema sólido, semejante a lo que fue Colombia, o lo que fue el PRI, es decir tener un sistema clientelar abajo que sirve de transferencia de apoyo hacia arriba; esto al poder central le permite un control gracias a esos sectores hacia abajo, igual que una lógica clientelar, transfiere recursos al cacique local, el cual distribuye y obtiene una especie de paz social y apoyo electoral ulterior. Se

estaría construyendo un sistema muy fuerte de base local electoral que le permitirá seguir teniendo el control del legislativo y la legitimidad que tiene Correa; pero también una mayor pax social reforzada con las políticas públicas, control de las organizaciones y los conflictos, así como con mayor coerción.

Floresmilo Simbaña. Lo que está presente de manera más visible, al menos para las organizaciones sociales es el modelo de Estado que está construyendo Correa, un modelo de cambios de fondo, sobre todo a nivel de sistema de la institucionalidad pública a partir de una visión casi religiosa del Estado, o sea, el Estado como único lugar de la política, porque fuera del Estado, según el criterio del gobierno, no habría la política. Donde es más evidente eso es justo en el Decreto 16, es decir ninguna organización puede hacer política y si hace política es casi un delito y es causal de disolución. Entonces la única manera de hacer política es dentro del Estado o de un partido político, fuera de esos espacios nadie más puede hacerlo, por lo tanto el Estado se fortalece mientras más se debilita a la sociedad, las estructuras sociales propiamente dichas, y se hace esto no solo con el entramado social inmanente que hay en la sociedad sino, y de manera particular, con las expresiones organizativas ya mas políticas como los movimientos sociales y las organizaciones políticas.

Es más o menos como una equivalencia, se fortalece el Estado y se desorganiza todo lo que está fuera de él. Para leer la debilidad o crisis de las organizaciones sociales políticas se debe hacerlo también a partir de esta lógica; ob-

viamente que hay que hacerlo también desde los mismos errores de sus acciones y límites programáticos que actualmente están teniendo los movimientos sociales. En ese sentido me parece que las organizaciones sociales están urgidas por un fuerte debate, que les lleva incluso a revisar algunos de sus originales puntos de vista sobre todo alrededor de definiciones sobre el carácter del proceso de la autodenominada revolución ciudadana. Aquellas definiciones sostenidas por algunos sectores que aseguran que el gobierno de Correa es tan neoliberal como los anteriores, e incluso peor, basados en temas como la criminalización de la protesta social, cada vez se sustenta menos. De su parte, las lecturas que ven la realidad como un proceso más complejo están tomando mayor peso; que si bien definen que se trata de un gobierno de modernización del capitalismo nacional, sin embargo, su dinámica es bastante profunda y el modelo que está construyendo, sobre todo en el nivel político, está transformando ciertas estructuras tradicionales, y en este contexto las respuestas que están dando las organizaciones sociales están equivocadas o tienen serios límites. Estas lecturas se hacen presentes sobre todo a partir de la tremenda derrota electoral última; éste fue el factor que más puso a las organizaciones sociales a ver qué estaba pasando. Unos vieron que la derrota se explica sola, como consecuencia de un gobierno clientelar, manipulador, por lo tanto era más o menos era lógico que perdimos. En cambio otros sectores dicen: aquí pasa algo raro, parece que estamos haciendo mal la lectura de la realidad.

Esto es lo que actualmente está en escena, y me parece a mí que esto puede resultar en un debate bastante rico y provechoso políticamente para las organizaciones sociales.

Manuel Chiriboga. El modelo que sustenta al gobierno de Correa es uno que se alimenta de un contexto externo favorable, tanto público como privado que generó extraordinarias rentas públicas como tal vez nunca antes hubo en la historia y que esas rentas fundamentalmente se dedican a dos cosas, una modernización de infraestructura y por otro lado redistribución vía políticas sociales, éste es el corazón mismo de lo que hacen. Yo veo que más allá de una discusión de modelo de desarrollo, hay un esfuerzo de utilizar estas rentas extraordinarias directas, que se originan en la explotación petrolera, e indirectamente vía impositiva, sobre las exportaciones privadas y cuya finalidad es lograr esta modernización primaria, no enteramente acabada en el Ecuador.

En términos de modelo de desarrollo creo que es importante diferenciar el discurso del Plan Nacional de Desarrollo, incluso el discurso del Presidente Correa, de la práctica misma del proceso de desarrollo. Efectivamente se ve en el Plan Nacional de Desarrollo, el primero fue el intento de pragmatizar los conceptos constitucionales como el de sociedad de derechos y el Buen Vivir, eso era el plan 2007-2009 y el 2009-2013. Pero si se analiza esos dos planes iniciales, son básicamente propuestas discursivas contradictorias en sí mismas, sin un norte claro. SENPLADES fundamentalmente intentó operacionalizar ciertos conceptos constitucionales sin mayor orden,

claro ahora se produce un cambio significativo en el último plan, 2013 – 2017, porque lo que hacen es abogar por esta transformación de la matriz productiva como *leitmotiv* de acción pública, la idea básica sería que ya se hizo la inversión de modernización en infraestructuras, ya se hizo esta expansión de cobertura estatal, ahora lo que se necesita es sentar bases para esta transformación de la matriz productiva. Ahora hay una gran discusión de qué es esta matriz y ahí me remito al último análisis de Pablo Ospina sobre los diversos conceptos en torno a esto y donde lo que predomina es esta idea de grandes empresas de industrialización básica y aquello que fue el secreto de los modelos de los años cincuenta, es decir siderurgia, petroquímica, astilleros y ahora, con el agregado de acuicultura, biocombustibles, ese es el discurso nuevo.

El tema es cómo lograr aquello y aquí creo que la concepción y si se revisa con cuidado el Plan nacional de desarrollo 2013-2017, fundamentalmente lo que están diciendo es requerimos una explotación intensiva de recursos naturales, minería y petróleo, para que el Estado tenga la capacidad de invertir en estas grandes empresas, a la que tenemos que buscar los socios extranjeros, fundamentalmente multinacionales, porque no hay los capitales internos para hacer este tipo de cosas. Entonces, hay esta búsqueda de acumulación basada en renta, en busca de maridaje con empresas transnacionales, efectivamente, con esta distinción entre empresas multinacionales públicas y privadas. Pero para eso la previsión que tenían es un fuerte afianzamiento del

modelo extractivista en este periodo para poder dar este salto.

Podemos discutir la viabilidad de este modelo con al menos tres comentarios muy brevemente dichos; uno, que aparentemente estamos llegando a un tope, esta expansión de los precios de los commodities en el mercado internacional, ya no crecen tanto. La minera Kinross se fue no solamente porque no consiguieron lo que querían con la reforma de la Ley Minera, sino también porque el precio del oro y de los minerales está bajando. Básicamente lo que quedan son empresas chinas dispuestas a invertir. Lo que pasó con Ecuacorrientes, desde que se celebró el contrato hace 3 años y no pasa nada. Creo que tiene que ver con este cambio del mercado mundial de metales, ante todo un debilitamiento de la economía china que parece estar en más problemas que lo que se cree normalmente.

El segundo comentario tiene que ver con búsqueda de capitales privados del norte. Tal como expresó Correa cuando visitó Alemania y Bruselas, basado en un acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones que yo creo que fue el tema más importante de esa visita; estamos dispuestos a llegar a un entendimiento en este tema porque necesitamos esto, estos capitales para hacer este maridaje entre recursos públicos y privados. Tercero sin embargo, me da la impresión que antes las disputas políticas que se daban en el pasado en la variedad de posiciones partidarias, se expresaban en la atomización en el Congreso, hoy esas contradicciones están dentro del gobierno entre segmentos de centro, derecha, de izquierda que se

bloquean constantemente. Todo lo que pasó con Snowden y compañía que afectó esta visión que tenían de acumulación y de maridaje, es parte de estas contradicciones internas y eso no saben cómo resolver.

Si este es el esquema, necesitan una pax extractivista que permita lograr esa expansión de la actividad petrolera y minera para consolidar o lograr esta acumulación en un contexto internacional más complejo. Si bien hay elementos que tienen que ver con el carácter del gobierno y del presidente en particular, me da la impresión que atrás de esto hay un cierto modelo de desarrollo que no se si sería inútil discutir si es más estructuralista o si es mas neoliberal, pero está la base extractivista, éste sí es el tema central. Lo que el gobierno con la mayoría abrumadora en la asamblea, logró establecer, es un mecanismo de aprobación de leyes que no requieren discusión social ni parlamentaria, lo que pasó con la Ley de comunicación y de hecho con la Ley de minería indica la forma de aprobación de leyes que se vuelve un tema central. Puede haber toda la discusión del mundo sobre comunicación, lograr acuerdos, pero finalmente hay un ponente que establece los contenidos de la ley y que es el vehículo de expresión de lo que al gobierno le interesa, de tal manera que ya no hay vetos del mismo tipo sino ya viene un paquete que está establecido por medio del ponente que tiene discreción para introducir dentro de los marcos legales cosas que no se han discutido efectivamente en el parlamento como pasó con la Ley de comunicación, sacaron del sombrero de mago, yo creo que sacaron

de esta relación del congreso-presidencia por medio del papel del relator. Ahí adicionalmente tienen un mecanismo para establecer un marco legal restrictivo eliminando la necesidad de mayor discusión parlamentaria y de discusión social sobre las leyes y en este sentido estoy de acuerdo en que lo que sostiene Floresmiló, la política se hace en el ejecutivo no en la confrontación entre los grupos, ni las organizaciones, ni el parlamento se constituye en un lugar de discusión efectiva de nada en particular.

Claro que la consolidación de este modelo disciplinario que tiene bases en el modelo de acumulación, se constituye en una suerte de camisa de fuerza que va restringiendo la acción política y ya no solamente de las organizaciones, sino en definitiva del sistema político como tal. Esto afecta no solo a las organizaciones sino a los partidos políticos y su nivel de negociación social en términos de generar consensos en torno a lo que proponen. Esa euforia de los nuevos partidos como CREO, ¿qué sabemos ahora de ellos?, ¿qué plantean? Esto terminará por cerrar el círculo con una ganancia que será abrumadora en las elecciones locales. Entonces, los márgenes de acción política autónoma al sistema se van reduciendo. Sin embargo hay signos de ralentización económica, estos datos últimos sobre empleo, desempleo, subempleo ya señalan que este año no está funcionando tan fuertemente y el Estado tiene más problemas fiscales aunque hará un esfuerzo grande para consolidar esta ganancia electoral, pero que esto le puede quitar cierto dinamismo en términos de estas transferencias sociales sobre todo que las sustenten. La gran

pregunta es cómo esto impactará en las clases medias que han sido el gran colchón, la gran base del gobierno, esa clase media que le ha ido bien, que tiene carro, tiene casa, y se expande y como que esta ralentización tendrá un efecto y como eso se manifestará en un país cada vez más urbano y menos rural.

Hernán Ibarra. La Ley orgánica de comunicación revela una conexión con ciertas ideas de tipo económico y nacionalista y otro momento diferente que evidencia un viraje en la legislación de comunicación en América Latina. La Ley de servicios de comunicación audiovisual en Argentina en el año 2009 establece una regulación estatal y abre un nuevo momento de intervención del Estado en las comunicaciones distribuyendo el espacio radioeléctrico. En esa ley, están definidas la gestión estatal, la gestión privada con fines de lucro y la gestión privada sin fines de lucro. En el caso ecuatoriano tenemos en la ley recientemente aprobada la introducción de dispositivos dirigidos a que los medios de comunicación exhiban películas nacionales y música ecuatoriana, es decir una suerte de sustitución de importaciones de productos culturales, porque la televisión ecuatoriana particularmente ha sido muy dependiente de la oferta extranjera y no ha sido capaz de crear una mayor producción nacional, pongamos el caso de las telenovelas que son básicamente originadas en otros países de América Latina. Esta ley tiene una serie de elementos que también topan otras cosas que eran propias de las industrias culturales. Pero que también al definir el peso de los medios públicos, privados y comunitarios con la redistribución de las

frecuencias va a implicar sobre todo el fortalecimiento del espacio controlado por el sector público.

El espacio mediático ecuatoriano a diferencia del argentino es extremadamente fragmentado. Cuando se aprobó en Argentina la ley, había conglomerados mediáticos de una alta concentración, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el grupo Clarín, que tiene un conjunto de periódicos, revistas, telefonía, redes televisivas y radiales; realmente un conglomerado mediático muy potente para el que trabajan más de 10.000 personas. No hay un grupo de ese tamaño en el Ecuador. Existen periódicos de propiedad familiar como *El Comercio* o *El Universo*, unos cuantos canales de televisión de cobertura nacional, aunque el espacio radial se encuentra extremadamente fragmentado junto a una prensa local dispersa. En los últimos años se ha producido el crecimiento de los medios públicos y esta es la gran novedad en el caso ecuatoriano. La Ley de comunicación adquiere un sentido muy decisivo porque fortalece controles estatales sobre los medios privados y también es la cara cultural de la sustitución de importaciones en la que está embarcado el Ecuador.

Jorge León. Yo quisiera precisar un aspecto sobre la vena nacionalista, es decir el de exigir publicidad nacional, más producción de televisión nacional, lo hicieron los militares en los años setenta, son casi las mismas exigencias que están ahora en la ley; que tiene que haber producción nacional para la televisión, reducción de la música extranjera, etcétera. Lo hicieron y no tuvo el impacto que se esperaba, no sé si ahora va

a tener el mismo impacto. En cambio, todo eso refuerza el aspecto propagandista del gobierno; la repartición de frecuencias de radio al 33% en principio para medios comunitarios, pero de hecho, la ley dice a cualquier organización social. La CONAIE apoyó la ley pensando que por fin iban a recibir las frecuencias pero no será sorprendente que finalmente vayan a otros sectores. Tanta radio comunitaria no es viable, se requiere no pocos recursos para funcionar, aún más para responder a todas las exigencias que impone la misma ley. La norma que se introdujo a último momento para justificar esta redefinición de frecuencias ventajosa para las radios comunitarias, al crear un porcentaje de recursos de publicidad para ellas, no es suficiente. Además, suponiendo que les den ese financiamiento eso significa que el gobierno va a incidir mucho más.

Las organizaciones reales locales que van a terminar teniendo incidencia real, van a ser las iglesias, la iglesia católica en particular, la cual ya demostró que tiene capacidad de alimentar estos medios y que puede estar frecuentemente alimentando con publicidad o con información. Finalmente, a través de esta distribución vamos a tener una gran parte de frecuencias con el Estado, de hecho con el gobierno, otro a las entidades como a las iglesias. Esto significa que para funcionar se crearán varias redes que tendrán pocas fuentes diferentes e inclusive que se tenderá a tener un portador de un mismo discurso y con incidencia del gobierno. Por ejemplo, el nexo iglesia católica-gobierno es muy fuerte ahora, ha crecido finalmente por más que hay disputa entre los clérigos

arriba, pero hay abajo un matrimonio muy fuerte. Me parece que se reforzará la propaganda del gobierno a la postre y no habrá la mejor distribución de información que se está diciendo.

En definitiva, se refuerza lo que yo le he llamado la modernización conservadora; ciertamente hay la modernización del aparato del Estado, la gestión pública racionalizada, la racionalización de políticas públicas, la distribución de la riqueza y realmente trata de resolver problemas sociales, eso es un hecho, todo lo cual le da un capital político al gobierno. Pero, a su vez, estamos viendo que la promoción real del gobierno es despolitizar la sociedad, despolitiza la política, refuerza esta lógica de propaganda y por eso digo lo que vamos a heredar es una sociedad conservadora donde los actores clásicos del debate público, la sociedad civil o partidos políticos no están. En cambio, esta definición que viene desde arriba en particular del gobierno, hace una sociedad cada vez más despolitizada y más conservadora, todo lo cual se va a reforzar ahora con el fin de la izquierda partidaria que está de capa caída y la que estaba con el gobierno está cada vez más desplazada de las decisiones. Los actores anteriores de la contestación en Ecuador están desapareciendo, están siendo cooptados por el gobierno, más en consecuencia crece la despolitización de la sociedad. Se legitima la represión o la coerción que están más organizadas. Ecuador parece dar fundamentos a una sociedad que va a terminar aceptando el autoritarismo, vamos a heredar una sociedad en ese sentido más conservadora, aun más si el consu-

mo persiste. Es preocupante que la emergente nueva clase media, proveniente del sector popular, va a tener referentes conservadores. He estado haciendo encuestas en Quito sobre pensamiento político y me impresionó mucho entrevistar a un joven obrero en el sur de Quito que viene de una familia que es apática a la política; él considera que el discurso del presidente es muy bueno porque está poniendo orden; para qué estamos discutiendo si él sabe a dónde queremos ir y para qué partidos si hay demasiados, para qué sindicatos si eso es lo que hace es molestar a la empresa, ¡por fin tenemos orden! Este gusto del orden que implica una aceptación de la coerción y, a la vez, de esta imposición que yo le llamo conservadora, implica que hay una fuerza social que cohesiona este régimen despolitizador y concentrador del poder. La herencia de mañana, por estos aspectos, parece muy complicada, porque la sociedad ecuatoriana ha sido una sociedad que ha vivido mucho la confrontación, el debate, el enfrentamiento inclusive con excesos digamos de palabras, entre otros y que mañana se va a tener otros momentos, cuando emerjan conflictos que están ahora retenidos. Entonces, en lugar de tener el desfogue tradicional de Ecuador que ha sido el juego político, el pluralismo político, va a surgir el enfrentamiento, por ello insisto, la herencia previsible parece que será muy complicada.

Floresmilo Simbaña. Creo que en este momento se abren espacios de fuertes contradicciones. Sobre todo para los grupos más organizados o militantes, por ejemplo, los resultados a los que hicimos referencia, indican que por un la-

do tenemos el triunfo hegemónico del gobierno, pero del lado de los sectores de la oposición de izquierda, concretamente de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, que si bien tuvieron una fuerte derrota, pero dentro de ésta, los candidatos que lograron un puesto en el legislativo fueron los que sostuvieron y sostienen el discurso más ultra opositor, esto significa algo no solo al interior de esta organización política, sino también en la sociedad, o un segmento de ella. Pero este fenómeno se extiende también a otros espacios, eso vemos también en las universidades, concretamente en las dos universidades más emblemáticas de Quito: en la Universidad Católica son los grupos anarquistas los que dirigen o dirigieron la Asociación Escuela de Sociología; y en estas últimas elecciones de la Universidad Central casi pierde el partido que está con el gobierno y el partido que perdió por muy poco, lo hace con un discurso bastante sui géneris: apelando al partidismo, ni con los opositores ni con el gobierno. Con esto quiero indicar que al parecer se están abriendo espacios no tan evidentes, es decir no son todavía posibilidades socialmente visibles pero existen, se están constituyendo. Pero estos espacios no solo están siendo ocupados por una alternativa de izquierda, también la derecha fuera del gobierno se está moviendo; es decir, se están abriendo espacios para alternativas por fuera del gobierno. A diferencia de Venezuela que esa reacción social se rompió claramente por la derecha, aquí en el Ecuador eso todavía no está definido, está como una posibilidad abierta y si a esta situación social que tenemos hasta ahora, le sumamos el

peso de esa desaceleración determinada por la crisis mundial, yo creo que esto puede tener ciertas derivaciones que nos puede sorprender como en el caso brasileño.

Dentro de esta misma línea me parece que hay algunas lógicas sociales que están también dentro de este mismo margen. Tomando algunas expresiones, es decir lo rural, el peso de la economía artesanal-agraria disminuyó bastante, sigue siendo obviamente la de mayor peso, pero en mucho ya no es la más dinámica, ahí tenemos el desarrollo de la economía comercial y financiera (Cooperativas de ahorro y crédito) no vinculada directamente a la producción agraria, pero que social y económicamente vincula lo rural y lo urbano, dándole nuevas y novedosas dinámicas que están significando transformaciones de fondo. Estas nuevas realidades estructurales están generando o pueden generar derivaciones políticas hasta ahora muy poco observadas.

En una primera lectura se puede ver que éstos nuevos sectores sociales fueron arrastrados hacia el Estado, hacia el gobierno, de ahí la fortaleza del régimen y la debilidad del movimiento indígena, también electoralmente hablando, pero me parece que este fenómeno no está consolidado, porque los elementos económicos, sociales y políticos tienden a alterarse y/o reagruparse cuando un conflicto social se hace presente, y factores de conflictividad abundan con este gobierno, como son los temas no resueltos: tierra, agua, mercado de alimentos, los proyectos mineros, etcétera. Estos conflictos movilizan a las organizaciones. En el tema del agua, se

tiene una reacción bastante fuerte, pero paradójicamente hay quienes ven en el mismo gobierno quien puede dar una solución, pero esas “esperanzas” se han ido agotando en estos últimos años. Esta conflictividad es una cuerda tan débil que puede romperse, el reto para las organizaciones sociales, para el movimiento indígena es que políticamente pueda romperse desde una oposición de izquierda y cerrar el paso a una ruptura por el lado de la derecha.

Lamentablemente el régimen de Correa y la lógica de Estado que está construyendo, y sus sistemáticos ataques a las organizaciones sociales, está creando los espacios para que sea la derecha quien la ocupe, anulando así toda posibilidad social desde la izquierda.

Manuel Chiriboga. Escuché a dos directivos de la organización nacional de juntas parroquiales por qué habían elegido a Roberto Wolgemuth, como delegado de los gobiernos autónomos descentralizados al Consejo de regulación de medios, una persona que venía del ejecutivo y el razonamiento me llamó la atención; decían, este señor desde la Secretaría Nacional de Comunicación nos ayudó muchísimo a desarrollar un sistema de medios locales en las juntas parroquiales, capacitar a los periodistas, a los operadores de radios locales, así que por eso le hemos elegido. Es decir que hay una búsqueda de establecer una capilaridad comunicacional a nivel local asociada a lo que se podría llamar aparato nacional de comunicación; un sistema más cercano a la población local, de sistemas de comunicación que lleguen, porque obviamente ahí hay periódicos, radio y televisión. Esta idea de re-

partir las frecuencias y aquí está un mecanismo concreto en donde buscan establecer esta capilaridad comunicacional que vincula los poderes locales con la comunicación pero con mensajes estructurados nacionalmente. Me parece que en parte esa es la lógica, yo veo la cuestión ésta de contenidos culturales efectivamente hay una propuesta, pero finalmente producción nacional tiene chispazos, es decir estos programas de muy baja calidad cultural en TC, en Gamavisión en casi todas las televisoras que les permitirá justificar la producción.

Obviamente esta lógica de poder suena avasalladora y sin contrapuntos, pero no sé si esto es aceptado pasivamente por los actores y los ciudadanos o si hay márgenes de quiebre ahora. Los códigos de interpretación de la acción social local, nuevos comportamientos, me parece que no los tenemos plenamente entendidos, de ahí nuevamente mi impresión de que los códigos estructuradores tradicionales de la conflictividad que eran clase, etnia y género, donde hay unos cambios en los patrones culturales generacionales y que hay tanto en las clases medias como en las zonas rurales o urbanas como en las zonas de ruralidad profunda ahí hay cambios significativos. Haciendo entrevistas a familias de migrantes, las expectativas culturales de los jóvenes eran migrar, pero en gran parte vinculados a un consumo cultural globalizado, el tema era participar de estas nuevas formas de consumo cultural generacional que son una extraña mezcla de cultura global y expresión local. Me da la impresión que hay efectivamente unas nuevas manifes-

taciones de comportamiento social que entran en tensión con esta visión nacionalista que no se cuanto apego tiene, hoy en día es mucho más importante el reggaetón y ese tipo de música, cuya nacionalidad seguramente es muy difícil de establecer.

Jorge León. Yo constato que en el mundo está creciendo la lógica conservadora. No sé si vieron la reacción en Francia cuando el gobierno de Hollande hizo reconocer el matrimonio homosexual, la extrema derecha se opuso de manera impresionante, y sigue creciendo ahora, inclusive en los sondeos tiene más aceptación, pero eso no es excepcional, en todas partes está creciendo la lógica conservadora. También se ha engendrado lo que Floresmilo indicaba para la Universidad Central y la Universidad Católica, que crezcan grupos radicales que son más contestatarios, de rechazo que con un proyecto de nueva sociedad. En Canadá crece el número de grupos anarquistas, en Italia, en Francia, en España es lo mismo y del mismo modo que está creciendo la extrema derecha, son esos otros grupos que en contrapartida también están creciendo. Yo diría es como una reacción a dos procesos anteriores. Uno, relacionado con varias lógicas y procesos de cambio culturales, muy fuertes por concernir a aspectos estructurantes de las relaciones sociales primarias, como los derechos de la mujer, los derechos sexuales que cuestionan a la familia, etcétera. Y por otro lado, es una reacción a la fase oligárquica de la política, esta mezcla de la colusión de intereses entre políticos y sectores pudientes que se vuelve visible con la corrupción, lo cual conlleva un

rechazo como con el movimiento 15-M en España, también en Estados Unidos. Me pregunto si no es algo similar que está pasando en Ecuador. Salvo que hay que verlo en relación a un contexto institucional que es diferente; que en Canadá pase este fenómeno, siendo un sistema muy institucionalizado, la contestación no le hace mucha mella sino mas bien refuerza aspectos conservadores que puede tener la sociedad. En cambio, la situación es diferente aquí, ¿qué puede pasar este movimiento en una sociedad que no tiene muy institucionalizado el juego político, aun más con la caída de los partidos? Por ahí pueden emerger todos estos sacudones que tú estás diciendo, pero que no necesariamente son portadores de propuestas o proyectos, sino un simple rechazo. Si mañana tenemos una sociedad conservadora despolitizada de la cual van a emerger los conflictos, tal vez no será imposible que lleguemos a algo similar a lo que fue Perú en el momento que llegó Fujimori, es decir, hubo la confluencia de todas las demandas sociales de rechazos y ahí se impone una persona fuerte como Fujimori. Por eso me interrogo sobre quien va a heredar ese sector conservador de la sociedad ecuatoriana, es muy posible que sea la derecha que en parte se está remozando, pero fundamentalmente que sigue siendo muy conservadora. Insisto que eso es un tema fundamental. ¿Qué va a pasar en este Ecuador con una sociedad habituada al consumo, pero que mañana va a aumentar las demandas, con conflictos retenidos y sin los actores claves que generalmente han sido los que en la sociedad ecuatoriana han construido propuestas? Bien puede darse

un sacudón o sacudones incontrolables pero sobre todo sin ruta definida, que no son necesariamente creadores de renovación social.

Manuel Chiriboga. El caso brasileño es paradigmático porque se puede decir que la economía creció, repartió, la pobreza disminuyó, la clase media creció, la desigualdad disminuyó también, pero de pronto te encuentras con elementos de radicalización rápida y de vertebración de protestas, de gente que yo diría no vive mal, la mayor parte son gente de clase media planteando la gratuidad del transporte público, rechazando el fútbol, ¿uno se pregunta qué hay atrás de eso? Puede que esté emergiendo otra sociedad muy diferente en donde los ejes de estructuración clase, género, etnia ya no funcionan tanto, que son otras formas de expresión pero que tienen una capacidad de sitiar al sistema político que no acaba de entender qué mismo pasó. Dilma Rousseff que estaba

con 70% bajó 21 puntos de popularidad a raíz de las movilizaciones y ella daba la impresión de tratar de vehicular al sistema político una respuesta vía constitucional, un pacto, pero no acaba de solucionar. Estos gobiernos bien intencionados, por un lado no comprenden estas dinámicas sociales nuevas, estos sentidos comunes de lo que es bueno y de lo que es malo, donde temas de corrupción, temas de discusión sobre prioridades de inversión pública, se vuelven ejes de contestación. Pero al mismo tiempo la economía brasilera estaba perdiendo dinamismo entonces también estos mecanismos de movilidad social que son más importantes que los temas de redistribución porque generan el sentido en la población de que mañana pueda ser mejor y que sus hijos van a poder ir a mejores colegios. El rato que ese sentido de movilidad social se pierde y se frustra, ese tipo de protestas, se evidencian.

Conflictividad socio-política Marzo-Junio 2013

Se ha producido el crecimiento de la conflictividad que tiene como particularidades el incremento de conflictos laborales y la disminución de la conflictividad agraria en el marco de medidas de control y contención de la acción colectiva.

Muchos de los conflictos registrados en cada período por el *Observatorio sobre conflictividad* suelen resultar de un efecto galáctico a partir de unos cuantos núcleos de conflictividad social o política. Aquellos hechos más generadores de conflicto durante el último período han sido la disputa sobre el juzgamiento a los estudiantes del Colegio Central Técnico; las invasiones y desalojos en Monte Sinaí (Guayaquil); los eventos de corrupción en el Municipio de Riobamba y el Ministerio del Ambiente; las controversias sobre la Ley de Comunicación, para mencionar los hechos más destacados.

Número de conflictos por mes

Después de 2 años (desde marzo-junio 2011) de continuo descenso del número de conflictos, el actual período (marzo-junio 2013) registra por primera vez un abrupto crecimiento de la conflictividad respecto del último cuatrimestre (nov. 2012 – febrero 2013), pasando de 182 conflictos a 218. Este aumento del número de conflictos se ha mantenido de manera bastante homogénea en cada uno de los cuatro meses del último período.

Número de conflictos por mes

FECHA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
MARZO / 2013	49	22.48%
ABRIL / 2013	50	22.94%
MAYO / 2013	65	29.82%
JUNIO / 2013	54	24.77%
TOTAL	218	100.00%

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo

Elaboración: -UI-CAAP-

Hay que preguntarse si se trata del inicio de un nuevo ciclo de incremento de la conflictividad o más bien estaríamos en presencia de episodios más coyunturales, en los que han convergido y se han acumulado una serie de procesos conflictivos. Será necesario comparar los actuales datos con los de los próximos 4 meses, para saber qué tipo de evolución se estaría operando.

Género del conflicto

Un extraordinario aumento del número de conflictos corresponde al sector laboral, que pasa de 79 conflictos en el período anterior a 126 en el último período: la frecuencia de conflictos en el sector laboral privado sube de 35 a 63, y en el sector laboral público de 44 a 63. El otro sector social que respecto del anterior período acusó un alza significativa en el número de conflictos fue el urbano barrial, que subió de 46 a 59.

Género del conflicto

GENERO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
CAMPESINO	3	1.38%
CIVICO REGIONAL	10	4.59%
INDIGENA	6	2.75%
LABORAL PRIVADO	63	28.90%
LABORAL PUBLICO	63	28.90%
POLITICO LEGISLATIVO	7	3.21%
POLITICO PARTIDISTA	4	1.83%
PUGNA DE PODERES	3	1.38%
URBANO BARRIAL	59	27.06%
TOTAL	218	100.00%

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo

Elaboración: UI-CAAP

Por el contrario se reducen ligeramente los conflictos campesinos (de 5 a 3), el conflicto indígena (de 10 a 6) y sobre todo el político partidista, que baja de 21 a 4. Se mantienen sin alteración el conflicto cívico regional (10), la pugna de poderes (3), mientras que el conflicto político legislativo pasa de 5 a 7 conflictos.

Sujetos del conflicto

En cuanto a los actores del conflicto, y en estrecha correspondencia con los datos relativos al género del conflicto, aumentan los conflictos relacionados con el trabajo y sectores laborales: el conflicto empresarial pasa de 14 a 29, el de los gremios de 8 a 12, el conflicto sindical de 4 a 11 y el de los trabajadores de 44 a 55.

Sujeto del conflicto

SUJETO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
CAMARAS DE LA PRODUCCION	1	0.46%
CAMPESINOS	3	1.38%
EMPRESAS	29	13.30%
ESTUDIANTES	10	4.59%
FUERZAS ARMADAS	3	1.38%
GREMIOS	12	5.50%
GRUPOS HETEROGENEOS	2	0.92%
GRUPOS LOCALES	8	3.67%
IGLESIA	4	1.83%
INDIGENAS	6	2.75%
ORGANIZACIONES BARRIALES	51	23.39%
PARTIDOS POLITICOS	14	6.42%
POLICIA	9	4.13%
SINDICATOS	11	5.05%
TRABAJADORES	55	25.23%
TOTAL	218	100.00%

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo

Elaboración: UI-CAAP

Y aumenta también la conflictividad de las organizaciones barriales. Y el conflicto con la policía también aumenta y puede ser ilustrado por uno de los hechos señalados en la introducción: los juicios y detenciones de policías relacionados con el levantamiento del 30 de septiembre.

Objeto del conflicto

Respecto a los objetos o motivos del conflicto es muy significativo el extraor-

dinario crecimiento de las denuncias por corrupción, que respecto del anterior cuatrimestre aumentaron de 46 a 60. También este hecho aparece ilustrado por casos como el del Municipio de Riobamba, o el caso Delgado. Mientras que las demandas de financiamiento crecen de 25 a 31, los rechazos a las políticas estatales aumentan en menor proporción; de 29 a 31.

Objeto del conflicto

OBJETO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
DENUNCIAS DE CORRUPCION	60	27.52%
DEMANDAS DE FINANCIAMIENTO	31	14.22%
LABORALES	46	21.10%
OTROS	41	18.81%
RECHAZO POLITICA ESTATAL	31	14.22%
SALARIALES	9	4.13%
TOTAL	218	100.00%

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo

Elaboración: UI-CAAP

Resulta interesante destacar que mientras los conflictos laborales presentan un extraordinario crecimiento, como se señalaba más arriba en referencia a los actores del conflicto, y en comparación con el período anterior, por el contrario en el mismo período se redujeron los conflictos salariales, pasando de 17 a 9. Esta ecuación de a mayor conflictividad por las condiciones y relaciones laborales, menor conflictividad salarial, y la mayor conflictividad salarial respondería a menor conflictividad laboral, tal ecuación es muy representativa de la situación laboral bajo la crisis y dominación neoliberal en el mundo del trabajo.

Finalmente hay que notar que la diversificación de los conflictos y la ampliación de su repertorio, cada vez más contaminados por las nuevas formas de lucha social, como son las movilizaciones de protesta, se traducen en un constante incremento de “otros” conflictos, que respecto del período anterior pasan de 33 a 41.

Intensidad del conflicto

Considerando todos los indicadores relativos a la intensidad de los conflictos cabe destacar que casi todos ellos arrojan un ligero incremento respecto del período anterior.

Intensidad del conflicto

INTENSIDAD	FRECUENCIA	PORCENTAJE
AMENAZAS	27	12.39%
BLOQUEOS	5	2.29%
DESALOJOS	7	3.21%
DETENCIONES	33	15.14%
ESTADO DE EMERGENCIA	3	1.38%
HERIDOS/MUERTOS	8	3.67%
INVASIONES	4	1.83%
JUICIOS	11	5.05%
MARCHAS	24	11.01%
PAROS/HUELGAS	2	0.92%
PROTESTAS	49	22.48%
SUSPENSION	40	18.35%
TOMAS	5	2.29%
TOTAL	218	100.00%

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo

Elaboración: UI-CAAP-

Sólo en el caso de las detenciones, que pasan de 16 a 33 y las marchas de 9 a 24. Y aunque las protestas es una de las formas de intensidad que más disminuye, pasando de 55 a 49, sigue siendo la más frecuente.

Intervención estatal

Muchas de las formas de intervención estatal se mantienen casi inalteradas en sus frecuencias respecto del período anterior (Corte constitucional, go-

biernos cantonales y provinciales, municipios...). Es en cambio sorprendente la mayor frecuencia de intervenciones judiciales, que pasan a la progresiva criminalización y judicialización de los conflictos sociales. De hecho este ele-

vado número de intervenciones judiciales se encuentra relacionado con el número de juicios y también las más frecuentes intervenciones de la policía, que respecto del período anterior, y que pasan de 19 a 37.

Intervención estatal

INTERVENCION	FRECUENCIA	PORCENTAJE
CORTE CONSTITUCIONAL	4	1.83%
GOBIERNO CANTONAL	4	1.83%
GOBIERNO PROVINCIAL	12	5.50%
JUDICIAL	48	22.02%
LEGISLATIVO	9	4.13%
MILITARES/POLICIA	7	3.21%
MINISTROS	39	17.89%
MUNICIPIO	8	3.67%
NO CORRESPONDE	24	11.01%
POLICIA	37	16.97%
PRESIDENTE	26	11.93%
TOTAL	218	100.00%

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo

Elaboración: UI-CAAP-

Finalmente asistimos en este último cuatrimestre a un extraordinario aumento de las intervenciones del Presidente en los conflictos en comparación con el período anterior, de 3 a 26. Sin embargo hay que tener en cuenta que esta particular forma de intervención estatal suele tener casi siempre un carácter coyuntural. De hecho en el precedente período (Julio-Octubre 2012) las intervenciones del Presidente en la conflictividad habían pasado de 19 a 3.

Desenlace del conflicto

Aunque la frecuencia de los conflictos aumenta de manera muy notable

respecto del período anterior, los índices de gobernabilidad de los conflictos parecen haber aumentado también de manera aún más notable: mientras que los dos principales criterios de la gobernabilidad del conflicto, su negociación y positiva resolución, pasaron de 53.84% a 56.88%: los conflictos negociados pasaron de 68 a 73 y los conflictos resueltos positivamente de 30 a 51. Incluso los aplazamientos en la resolución de los conflictos, que es una manera de apaciguarlos o administrarlos, pasaron de 27 a 35.

Desenlace del conflicto

DESENLAJE	FRECUENCIA	PORCENTAJE
APLAZAMIENTO RESOLUCION	35	16.06%
NEGOCIACION	73	33.49%
NO RESOLUCION	21	9.63%
POSITIVO	51	23.39%
RECHAZO	30	13.76%
REPRESION	8	3.67%
TOTAL	218	100.00%

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo

Elaboración: UI-CAAP-

Y consecuentemente se reduce el número de conflictos rechazados, de 39 a 30, y se mantiene el número de los conflictos reprimidos respecto del anterior período: 8.

Número de conflictos por regiones

Por lo que se refiere a la distribución regional de los conflictos, la novedad es

que aumentan los que tienen lugar en la Costa en comparación con el período anterior, pasando de 70 (38.46%) a 89 (40.83%), y aumentan también los de la Sierra, pasando de 102 a 119; aunque en menor porcentaje respecto del período anterior (de 56.04% a 54.59%).

Número de conflictos por regiones

REGION	FRECUENCIA	PORCENTAJE
COSTA	89	40.83%
SIERRA	119	54.59%
AMAZONIA	9	4.13%
INSULAR	1	0.46%
TOTAL	218	100.00%

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo

Elaboración: -UI-CAAP-

Tanto la Amazonía (9) como la región de Galápagos (1) mantienen el mismo número de conflictos que en el anterior período.

Número de conflictos por provincia

En cuanto a la distribución del número de conflictos por provincias, au-

mentan sensiblemente en cuatro provincias de la Sierra (Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja) y en cuatro provincias de la Costa: El Oro, Esmeraldas, Los Ríos y sobre todo en Manabí, donde pa-

san de 5 a 9. Y obviamente aumentan también los conflictos en las dos provincias principales: Guayas en la Costa (de 49 a 52) y casi en igual número en Pichincha (de 79 a 81).

Número de conflictos por provincia

PROVINCIA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
AZUAY	8	3.67%
BOLIVAR	2	0.92%
CAÑAR	0	0.00%
CARCHI	3	1.38%
CHIMBORAZO	6	2.75%
COTOPAXI	3	1.38%
EL ORO	5	2.29%
ESMERALDAS	5	2.29%
GALAPAGOS	1	0.46%
GUAYAS	57	26.15%
IMBABURA	5	2.29%
LOJA	6	2.75%
LOS RIOS	5	2.29%
MANABI	9	4.13%
MORONA SANTIAGO	0	0.00%
NAPO	0	0.00%
ORELLANA	3	1.38%
PASTAZA	1	0.46%
PICHINCHA	81	37.16%
SANTA ELENA	1	0.46%
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	6	2.75%
SUCUMBIOS	1	0.46%
TUNGURAHUA	6	2.75%
ZAMORA CHINCHIPE	4	1.83%
TOTAL	218	100.00%

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo

Elaboración: UI-CAAP-

TEMA CENTRAL

Las movilizaciones de protesta: nueva forma de lucha social

J. Sánchez Parga

Una nueva forma de lucha social comenzó enfrentando las políticas y gobiernos neoliberales, después las protestas se dirigieron contra todo gobierno y régimen político, fueran dictaduras o democracias, sometidos al nuevo orden económico capitalista global, el que se impone sobre todos los Estados y en contra de todos los ciudadanos en todo el mundo. Estas movilizaciones de protesta se encuentran atenazadas por un dilema fundamental: desarmadas de su potencial de violencia son incapaces de cualquier cambio o transformación de la realidad, y armadas corren el riesgo de ser criminalizadas y reprimidas como terroristas.

1. De las reivindicaciones a las protestas

Hace más de una década se advertía ya un cambio en las formas y contenidos del conflicto social y de las luchas sociales.¹ De manera más precisa se observaba cómo a un decline de los conflictos reivindicativos correspondía un incremento de las manifestaciones de protesta. Se trataba de un cambio fundamental, y que en América Latina presentaba una fuerza y evidencia particulares, ya que suponía una transformación de los *movimientos sociales* esencialmente reivindicativos en unas *movilizaciones de protesta* de carácter político.²

La cuestión que ya entonces se planteaba es ¿a qué nuevas lógicas y fuerzas respondió el paso de un ciclo, el de los *conflictos sociales* protagonizados por los movimientos reivindicativos, al ciclo de las *luchas políticas* de las movilizaciones protestatarias?

Tal cambio ha sido resultado de un nuevo modelo de desarrollo capitalista, basado no en la producción industrial sino en la acumulación (financiera) y concentración de riqueza (capitales), el cual se impone de manera global en todo el mundo ejerciendo su hegemonía o legítima dominación a través de los Estados democráticos.

1 Cfr. J. Sánchez Parga, "Del conflicto social al ciclo político de la protesta", *Ecuador Debate*, No. 64, abril 2005.

2 Cfr. John Wolton, "Debt and Protest and the State in Latin America", en Susan Eckstein (edit.) *Power and Popular Protest. Latin American Social Movements*, University of California Press, London, 1989. Los estudios sobre la protesta social se inician sobre todo a partir de la gran crisis en Argentina: Carrera & Cotarelo (2001), Seoane & Taddei (2001), Delamata (2002), Algranati (2004).

Hasta la década de los 70 el capitalismo productivo e industrial, para garantizar las condiciones de su reproducción, se había mostrado cada vez más *distributivo* de sus excedentes; y al mismo tiempo la “tercera ola” de democratización (Huntington, 1994) en el mundo había consolidado un *Estado de Derecho*, cuyas políticas *redistributivas* trataban de cubrir las demandas de aquellos sectores de la sociedad no directamente integrados a la producción capitalista y por ello marginales a su distribución de excedentes. En este sentido los Estados democráticos en cierto modo complementaban y compensaban el modelo de desarrollo capitalista. Fue en este contexto que surgieron y se reforzaron los *movimientos sociales* con sus reivindicaciones de mayor participación en la sociedad, su lucha (“pro-activa”) por una mayor *inclusión social* (*demand for equality*).³

Durante los años 80 el desarrollo capitalista entra en una nueva fase de valoración del capital y de aumento de su rentabilidad, generando un nuevo modelo de desarrollo basado en la acumulación y concentración de riqueza; y por consiguiente no-distributivo sino más bien empobrecedor de las mayorías sociales, a las que lejos de explotar excluye del proceso productivo (del trabajo) y despoja de sus recursos o derechos sociales. Lo que dará lugar a una nueva forma de lucha (“re-activa”) contra la *exclusión social* (*protest again inequality*).⁴

Será bajo la dominación del nuevo ordenamiento del capital financiero global, que surge en todo el mundo una nueva forma de lucha así mismo global, ya que “la política del conflicto varía siempre y se transforma en estrecha correspondencia con los cambios del poder político”.⁵

Varias características definen las nuevas formas de lucha social en todo el mundo: a diferencia de los movimientos sociales y sus conflictos reivindicativos, que eran: a) protagonizados por un determinado grupo o sector social, organizados y conducidos por una dirigencia; b) democráticos (democráticamente representables y gobernables) y productores de “un orden democrático” (J. C. Portantiero, 1988); c) no violentos, aunque en ocasiones pudieran dar lugar a prácticas y situaciones de violencia; por el contrario, las movilizaciones de protesta se conforman de una vasta heterogeneidad social, sus convocatorias y concentraciones no responden a ninguna organización social ni a la conducción de una dirigencia; son antidemocráticas y fundamentalmente violentas, aunque se declaren no-violentas y no siempre se resuelvan con violencias.

2. El actor social de la protesta

El “capitalismo salvaje” de la actual hegemonía neoliberal, en su valoración ilimitada del capital financiero en detri-

3 Cfr. Amartya Sen, *Inequality Rexamined*, Clarendon Press Oxford, London, 1992.

4 Es Alain Touraine (1987; 1988) quien caracteriza ambas formas de lucha como “pro-activas” las reivindicativas y “re-activas” las de protesta.

5 Cfr. Ch. Tilly & Sidney Tarrow, *Politique(s) du conflit. De la greve à la révolution*, Sciences Po, Paris, 2008.

mento del trabajo pasa de la explotación de los trabajadores a su exclusión del trabajo, y en definitiva los despoja de sus recursos laborales y profesionales. Por eso el trabajo no es más que el punto de partida de todos los otros despojos y exclusiones de todos los derechos y conquistas sociales, que habían permitido el desarrollo de las clases medias, su ampliación y cohesión al interior de la estructura social.

Resulta obvio que sea a costa del empobrecimiento de las clases medias, que se hace posible la concentración y acumulación de riqueza por parte del capital. Son por eso estas clases medias, que se constituyen en el núcleo social más protagonista de la protesta, su principal intérprete, contra un modelo económico y políticas gubernamentales de exclusiones y despojos. Y todo ello dominado por el imperativo neoliberal del desarrollo capitalista, según el cual “no hay crecimiento económico sin creciente inequidad”; lo que en términos más simples significa: para que las minorías sean más ricas se requiere que las mayorías se empobrezcan. A no otra cosa responde la última crisis producida por el capital y los más recientes “programas de austeridad”, que son programas de sometimiento a los imperativos del modelo capitalista.

Por esto mismo las dinámicas de movilización de las protestas hacen elásticas y porosas las fronteras de las clases medias, pudiendo extenderse a otros sectores de la sociedad. De esta manera

las protestas desatan una rápida difusión de la acción colectiva, su constante o progresiva transmisión desde los sectores más movilizados a los menos movilizados, un ritmo de innovación acelerado tanto en las formas como en los contenidos de la confrontación y finalmente una combinación de manifestaciones y concentraciones unas más espontáneas que otras más o menos organizadas.⁶

Una enorme y violenta protesta puede comenzar deflagrándose por la subida de 20 centavos del precio del transporte (Brasil), para terminar convirtiéndose en una masiva movilización por un transporte gratuito y contra el modelo de crecimiento económico; puede dispararse con el suicidio de un joven profesional sin trabajo (Túnez) para acabar convertida en una movilización de liberación nacional.

Este “movimientismo”, que la protesta imprime a los más heterogéneos sectores sociales, pone de manifiesto una paradójica politización de la sociedad civil, convirtiéndola en arena de los enfrentamientos contra las políticas gubernamentales primero, después contra los gobiernos sean de derecha o de izquierda, contra el mismo Estado democrático, y finalmente contra el orden capitalista global de todo el mundo. Este contradictorio fenómeno de “participación activa de la *sociedad civil* en la política” encubre una protesta y una confrontación más profundas: la de una sociedad civil y una sociedad política, la de “ciudadanos en cólera”, “ciudadada-

6 Cfr. Sidney Tarrow, *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Alianza, Madrid, 1997.

nos indignados”, los “forajidos” (que en Ecuador el 2005 derrocan un Presidente), contra los políticos, los partidos y las instituciones políticas.

A diferencia de los movimientos sociales, cuyas reivindicaciones diferenciaban claramente los intereses de las distintas clases, grupos o sectores sociales, la *sociología de la protesta* tiene más bien el efecto de unir y amalgamar rechazos y rebeliones particulares, compartiendo repudios e impugnaciones diversas, haciendo converger de maneras más o menos amplias toda una variada morfología de enfrentamientos. Las bases multiclasistas, que los autores atribuyen a las movilizaciones de protesta, responden más bien a su disposición o *efecto reactivo* contra la exclusión y el despojo que toda la sociedad en su conjunto expresa siempre en las concentraciones de protesta.

Un fenómeno complementario al señalado más arriba es que una protesta particular, iniciada y protagonizada por un determinado sector o grupo social no sólo puede tener un efecto de metástasis en otras clases o poblaciones, sino que simultáneamente se descubre que tras las protestas y movilizaciones de rechazo más particulares se va descubriendo un factor común y más general, que provoca todas ellas: el nuevo ordenamiento económico de un capitalismo terrorista, que despoja a todos aquellos, cuyos recursos pueden ser objeto de la acumulación y concentración capitalista, y que excluye socialmente (no de la

sociedad) a quienes son incapaces de concentrar y acumular riqueza.

No otro es el imperativo implacable del capitalismo financiero neoliberal: quienes son incapaces de concentrar y acumular riqueza se vuelven presa de la concentración y acumulación por parte de otros. En este sentido la “lucha de clases” se manifiesta de manera más encarnizada, más difusa y generalizada, en esta fase terminal del desarrollo de un capitalismo depredador.

A este nuevo actor social, heterogéneo y extremadamente móvil y dinámico, capaz de ocupar las calles tanto como las redes sociales, corresponde una nueva forma de lucha social: un “subversivismo”, que según Gramsci designa formas de rebelión privadas e inorganizadas; el que se funda sobre un fuerte resentimiento contra el Estado y el orden establecido, pero al mismo tiempo interioriza una posición de subalternidad respecto de ellos. Este subversivismo afecta a las clases populares tanto como a las clases medias, e incluso también a las elites, y expresa un pesimismo en cuanto a las posibilidades de cambiar las relaciones sociales de dominación e inequidad. Se trata en definitiva de una “rebelión a-política”, o de un “militantismo impotente”; ya que sin clase ni partido la gente o las multitudes conforman fuerzas tan centrífugas y heterogéneas como anárquicas, sin capacidad alguna para producir una forma coherente y posible de proyecto político.⁷

7 Antonio Gramsci, *Cuaderni del carcere (1948)*, Einaudi, 2007.

3. La economía política de la protesta contra la democracia

Si “sólo en las sociedades democráticas se forman los movimientos sociales” (A. Touraine, 1994:88; Samuel B. Huntington, 1991), cabe preguntarse qué democracia o condiciones democráticas hay en las sociedades, donde los movimientos sociales reivindicativos han sido sustituidos por las movilizaciones de protesta.

Aunque las protestas se inician ya en la década de los 80 en América Latina contra el pago de la *deuda externa*, y todavía bajo el *ciclo reivindicativo* de los movimientos sociales, es desde el principio de los años 90 que las movilizaciones de protesta impugnan y enfrentan las políticas y gobiernos neoliberales. Una década después las protestas se radicalizan contra las mismas instituciones democráticas (se derrocan gobiernos democráticos) y en particular contra todo el sistema de la representación política (partidos, elecciones y parlamentos) y contra la misma clase política: el grito de Buenos Aires, “todos fuera” resonará después en Ecuador y finalmente en casi toda Europa y también, con el “lárguense” (*degage*) en los países árabes.

En ningún caso hay que confundir los distintos detonantes de las movilizaciones con los objetivos y objetos de fondo de las protestas. El alcance anti-democrático de las protestas se manifes-

tará progresivamente, en la medida que se descubre que las políticas neoliberales de concentración y acumulación de riqueza, con sus efectos de empobrecimiento, despojo y exclusión, ni son propias de las políticas y gobiernos neoliberales, sino que trascienden tipos de Estado y de gobierno, y que más bien instrumentalizan las mismas democracias para garantizar su eficacia y legitimidad.

Por esta razón, la promoción de la democracia en todo el mundo “es parte de un amplio y hegemónico proyecto de dominación global” y por consiguiente del nuevo ordenamiento económico del capital en todo el mundo.⁸ Según esto, ni son las movilizaciones de protesta las que amenazan las democracias, sino más bien las políticas y los gobiernos que provocan tales protestas, ni por consiguiente tampoco son los terroristas que amenazan destruir las democracias en el mundo sino más bien las luchas anti-terroristas de los Estados democráticos ya han comenzado a minar los fundamentos, los principios y los valores de la democracia.

El nuevo ordenamiento neoliberal de todo el mundo es impuesto a los mismos Estados, gobiernos y democracias por los organismos económicos del capital: por el sistema bancario, el Banco Europeo y el Tesoro norteamericano, por las bolsas, donde se cotizan hasta las deudas de los Estados y las tasas de riesgo de los países, por el FMI y el Ban-

8 Gordon Crawford, “Promoting Democratic Governance in the South”, en *The European Journal of Development*, vol. 12, Nº 1, junio 2000:25; Abraham Lowenthal, *Exporting Democracy: The United States and Latin America*, The John Hopkins University Press, 1991; Sophia Mappa (edit.), *Développeur par la Démocratie? Injonctions occidentales et exigencies planétaires*, Karthala, Paris 1995.

co Mundial, y por todos los Mercados. Lejos de resistirse a esta *buena gobernanza* de la economía capitalista para defender a los ciudadanos, los Estados, gobiernos y democracias se convierten en instrumentos del nuevo capitalismo financiero y de los Mercados.⁹ Se trata de una radical mutación del *gobierno político de la economía por un gobierno económico de la política*.¹⁰ De una “gobernanza” que es sinónimo de un “management totalitario” (A. Denault, 2013).

Esta instrumentalización de la democracia en todo el mundo por parte de la dominación del capitalismo neoliberal, al mismo tiempo que la “devasta” y deslegitima, termina por hacer de ella el último referente de rechazo de las protestas.¹¹ Tras las demandas de una “democracia participativa”, de una “democracia de los ciudadanos”, “democracia ya!”, “democracia real”, “democracia alternativa”..., las movilizaciones de protesta impugnan las democracias realmente existentes, las que en definitiva han hecho posible la dominación, los despojos y las exclusiones del capitalismo neoliberal. Si no se llega a impugnar la sustancia o principio mismo de la democracia es porque sería el último reducto de los ciudadanos frente a la global “devastación del capital” (Marx).

Esto mismo explica por qué tras las sublevaciones populares, el derroca-

miento de gobiernos o de las dictaduras árabes resulta tan difícil la formación y consolidación de mejores regímenes democráticos. La brutal contradicción de las democracias actuales consiste en haberse convertido en el más legítimo modelo de gobierno económico de la política y del sometimiento de las instituciones políticas a la tiranía económica de los mercados.

Nada tiene de casual, que esta per-versión económica de la política en todos los gobiernos democráticos (y no democráticos) haya coincidido con una vasta ola de corrupción de los políticos y gobernantes por todo el mundo. Lo que antes se consideraba un “conflicto de intereses” entre los económicos (privados) y los políticos (públicos), hoy aparece tan tolerado y justificado como una “composición de intereses” entre poder y riqueza; como si el precio del poder fuera la riqueza y el precio de la riqueza fuera el poder. Aunque la corrupción de los políticos todavía escandaliza y todavía sea judicialmente perseguida, cada vez es ya menos políticamente sancionada; y más bien tiende a convertirse en un ejemplo a imitar dentro de la dominación y moral neoliberal.

4. Las impotencias de la protesta y su semántica escénica

La impotencia de las movilizaciones de protesta es equivalente a su excesiva

9 Para una crítica de la idea y del programa de la “gobernanza” cfr. N. Guilhot, “La Banque Mondiale réclame *bonne gouvernance*”, *Le Nouveau Capitalisme. Manière de voir*, Nº 72, 2004.

10 Cfr. J. Sánchez Parga, “El ciclo político de la economía y el gobierno económico de la política”, en *Ecuador Debate*, Nº 55, abril 2002.

11 Cfr. J. Sánchez Parga, *Devastación de democracia en la sociedad de mercado*, CAAP, Quito, 2011.

expresividad pública y mediática. Ya Touraine sostenía que tales manifestaciones de la protesta eran “una movilización social y política más ficticia que real, más teatral que eficaz” (1988:469); y protagonizada por “actores sin acción social” (p. 364), es decir, sin capacidad para cambiar la realidad y el orden social contra el cual protestan.

El otro factor estructural de impotencia de las protestas es su falta de reivindicaciones reales y concretas. Cuanto con más fuerza se rechaza el orden establecido, tanto menor parece ser la capacidad de proponer otro alternativo, ya que cualquier alternativa real pasaría por la destrucción y transformación del orden existente.

Esto explica la paradójica semántica de los *slogans* protestatarios: “exigir todo y nada al mismo tiempo” (p.184). Más aún, si no hay reales reivindicaciones posibles y “consensuadas” es porque la lógica y dinámica mismas de la protesta lo impiden, pues reivindicación y protesta se contradicen: “la falta de reivindicaciones específicas del movimiento era uno de sus puntos débiles fundamentales” (p.185). Aunque de hecho es la reivindicación, no su defecto, lo que debilitaría las protestas; cuanto más radical y total es el rechazo, menores son las condiciones para reivindicación alguna: “cualquier enfoque pragmático para conseguir las reivindicaciones tendría que pasar por el sistema político, lo que sería contradictorio...” (p.186).

Aunque a las movilizaciones de protesta no se les puede negar “la fuerza de la calle”, la capacidad de obligar a cambios y rectificaciones gubernamentales,

e incluso forzar la caída de un gobernante o un cambio de gobierno, la protesta carece de poder para afectar o alterar el orden económico global de todo el mundo y por consiguiente tampoco la imposición de este ordenamiento en cada uno de los países.

Tres serían los principales efectos de dominación del ordenamiento económico capitalista, que limitan el poder de las protestas. En primer lugar, y en razón de la misma composición social de las movilizaciones, las protestas lejos de impugnar el orden capitalista global del mundo y su hegemonía neoliberal, se limitan a cuestionar las exclusiones, los despojos y empobrecimientos, que el modelo genera, y que reduce los derechos económicos y sociales tanto como el “poder adquisitivo” y el consumo sostenido de bienes y servicios.

En segundo lugar, el modelo de dominación impide la organización de clases y sectores sociales tan heterogéneos y, haciendo que ni al interior de cada país ni al interior de un mismo continente las movilizaciones puedan llegar a unirse en una sola fuerza y lucha social organizada y sostenida. En tercer lugar, la fragmentación de los intereses y el mismo efecto de fracturación tan diversificada, que tienen las exclusiones (laborales y profesionales) y despojos (de bienes y servicios), impide que los contenidos de las protestas conduzcan a una convergencia y unificación de las movilizaciones.

La limitada eficacia de las protestas parece compensada, y en parte encubierta, por un exceso de expresividad, que se manifiesta sobre todo en su ocupación de los espacios públicos y me-

diáticos. La estadística de las movilizaciones, para estimar el número de participantes, es un factor decisivo para medir el poder de una protesta. Este indicador cuantitativo junto a la duración o frecuencia de las ocupaciones de calles y plazas, tiene siempre una repercusión mediática, y la importancia de ocupar la primera página de la prensa o la portada del telediario. Este *efecto de ampliación mediática* de las protestas en los mass-media tiende a legitimarlas ante la opinión pública y también a globalizar su alcance.

Otro componente de las movilizaciones protestatarias es la proliferación de una semántica interpelativa cifrada en *slogans* y mensajes. Sin embargo esta fuerza de los gritos, pancartas y pintadas sirven para marcar los significados presentes del hecho histórico, pero se muestran impotentes para lograr los cambios anunciados o deseados.

Asociada a esta semántica de las protestas, una sobrecarga afectiva y emocional agita las movilizaciones con un doble efecto: o bien hacen que terminen “enamoradas de sí mismas”, por una suerte de narcisismo colectivo, dispuestas y resignadas a celebrar sus aniversarios como tantos otros movimientos o foros sociales y alternativos, que no duran más que en sus conmemoraciones; o bien derivan en pasiones destructoras, que alteran y violentan el or-

den público, exponiéndose a ser criminalizadas o reprimidas como terroristas.¹² De hecho estas dosis afectivas y con frecuencia festivas tienden a encubrir en parte la incapacidad política de las movilizaciones, pero también en parte a inducirles esta impotencia para lograr los cambios. Afectos y emociones (como la indignación o la esperanza) son *pasiones políticas*, que lejos de promover la acción social y la lucha política las inhiben.¹³

Otro exponente de la debilidad política de las protestas surge de la confusión, que atribuye a las *redes sociales* una fuerza movilizadora y organizativa, cuando en realidad se limitan a informar, convocar y conectar a sus usuarios. Que *internet* haya contribuido a las movilizaciones de protesta en todo el mundo, no justifica exagerar sus efectos e influencias.¹⁴ Y tampoco es la *Web*, como sostiene Castells (p. 212), que excluye un liderazgo y una “organización vertical” de las movilizaciones de protesta, cuando de hecho es más bien la heterogeneidad social de las movilizaciones, su coyunturalidad, tanto como la dinámica de las mismas protestas, las que excluyen toda posible conducción y organización, cifrando más bien su fuerza en su centrífuga inorganicidad. Y sobre todo al ser las protestas *anti-sistema* ellas mismas no pueden ser más que *anti-sistémicas* en su interior.

12 Slavoj Žižek, *Occupy: Scenes from Occupied America*, Verso, 2011.

13 M. Castells (2012) considera que los movimientos de protesta son “movimientos emocionales” (p.30), y que “el proceso de acción colectiva (está) arraigado en la indignación, impulsado por el entusiasmo y motivado por la esperanza.

14 Una crítica de este fenómeno en el caso particular de los levantamientos árabes ofrece el libro de Yves González-Quijano, *Arabités numériques. Le printemps du Web arabe*, Simbad- Actes Sud, Arles, 2012.

5. Dilemas de la violencia (des)armada de las protestas

La violencia o no-violencia de las movilizaciones de protesta no depende ni de las intenciones de sus actores ni de las estrategias de sus movilizaciones o concentraciones. Las raíces de la violencia protestataria son esencialmente estructurales y se fundan en el carácter fundamentalmente *ingobernable* de la protesta.

A diferencia de las demandas y conflictos reivindicativos protagonizados por los movimientos sociales, que eran política y democráticamente representables (en los parlamentos) y gobernables, las protestas por el contrario son un rechazo frontal contra los gobiernos y contra la *gubernamentalidad* del mismo Estado democrático. Por eso al inicio de los años 90 ante las amenazas de un *ciclo de protestas*, de una nueva forma de lucha social, el Banco Mundial y las instituciones de NNUU, junto con los organismos internacionales, lanzan un colosal y ambicioso programa para la *gobernabilidad*. De lo que se trataba era de calmar y someter por una *buena gobernanza* las olas y ciclos de protesta, que las mismas políticas y gobiernos neoliberales comenzarían a provocar.

Por tal razón, la ingobernabilidad de las protestas no reside en su mayor o menor violencia, sino en la incapacidad de los gobiernos y de los Estados democráticos en gobernar una forma de lucha, que ellos mismos generaban con

sus políticas de empobrecimiento, despojos y exclusiones.

La violencia de las protestas posee una doble lógica, al rehusar las “alternativas” en cuanto utopías ilusorias y reaccionarias, puesto que la única alternativa real sólo puede surgir de la destrucción del ordenamiento actual del mundo realmente existente; y también a superar ese “estado de resistencias”, que evita la lucha como única condición del cambio. Y por la misma razón tampoco pueden reducirse las protestas a un estado de “*indignación y esperanza*” (Castells, 2012), cuyo carácter inerte y afectivo, subjetivo y moral parece un rechazo a la acción política y al cambio social.

Si bien la protesta puede comenzar expresándose de forma pacífica, y algunas movilizaciones de protesta terminan pacíficamente, la protesta es siempre portadora de una dinámica de resistencia y rechazo, que puede concluir con las manifestaciones más violentas y de máxima eficacia política, como el derrocamiento de un gobierno y gobernante o la subversión del orden establecido: “protest that begin in one form often evolve to another” (Walton, 1989:316). De ahí el doble *efecto de acumulación*, que una misma movilización de protesta adquiere cargándose de intensidad y violencia, y el *efecto de imprevisibilidad*, haciendo siempre inciertos e inesperados sus desenlaces.¹⁵

Algunos autores se resisten a reconocer la sustancia y estructura violenta

15 Cfr. N. Sambanis & A. Zinn, “The Escalation of Self-Determination Movements: From Protest to Violence”, *Annual Meeting of the American Political Science Association*, 2005.

de las protestas, considerándolas “mayoritariamente no violentas” (Castells, p. 186), como si la no violencia fuera un axioma de las movilizaciones (p.139), y “un principio básico de la nueva cultura de paz” (p.130). Sin embargo, negar a las movilizaciones de protesta su potencial de violencia es despojarlos de su sustancia política y sobre todo de la lógica del enemigo, ya no del adversario, a quien hay que destruir en razón de la propia supervivencia.¹⁶

A diferencia de las violencias instrumentales, la protesta es portadora de una violencia sustantiva, porque es “reactiva” a esas otras violencias del “capitalismo salvaje” o de un “neoliberalismo de guerra” (González Casanova, 2002). De hecho, nada permite pensar una lucha colectiva no-violente en un mundo convertido en un campo de batalla de todas las guerras, económicas, políticas, culturales y sobre todo anti-terroristas. No reconocer la violencia inherente a las movilizaciones de protesta, supone ignorar esas otras violencias mayúsculas, más crueles y poderosas, contra las cuales precisamente luchan las violencias ciudadanas en todo el mundo: violencias estatales, capaces de espiar y torturar, violencias policiales y militares capaces de reprimir y asesinar en defensa de un orden económico global, que sólo se impone, consolida y reproduce con extremas violencias.

Finalmente, sólo una teoría de la violencia de las luchas sociales permite

distinguir tanto como establecer las continuidades entre protestas armadas y desarmadas, entre aquellas que fueron reprimidas y sofocadas, y las que terminaron desembocando en levantamientos, revoluciones y guerras civiles (países árabes).

Las movilizaciones de protesta se encuentran atezadas por un inexorable dilema: sin reales reivindicaciones propositiva (*pro-activas*) y sin ejercer todo su potencial de violencia, terminan debilitadas sin lograr cambio alguno; si, en cambio, las protestas extreman su violencia y se vuelven más o menos armadas, corren el riesgo de ser criminalizadas y declaradas terroristas.¹⁷

No hay que dejarse confundir por la ideología política de la tergiversación: no es el terrorismo ni los terroristas, ni mucho menos las violencias protestatarias, que han convertido al nuevo orden económico global en un régimen antiterrorista, sino más bien lo contrario: es su antiterrorismo lo que mejor legitima y con más fuerza preserva ese nuevo ordenamiento capitalista del mundo.

No otros son “los efectos contradictorios de la violencia” (p. 216); por eso no se puede reducir la violencia a la represión que las protestas provocan y mucho menos a un supuesto “instinto de autodefensa” (Castells, *ibid.*). Lo que explica el potencial de violencia de las protestas es el que ejerce sobre los ciudadanos de todo el mundo el nuevo ordenamiento del capitalismo global; en otras

16 Sólo más recientemente una importante bibliografía asocia las movilizaciones de protesta con la violencia: cfr. Della Porta (1995), M. Kaldor (1999), Sambanis & Zinn (2003), Brockett (2005).

17 Raul Zibecchi (2007) muestra cómo las iniciativas para criminalizar la protesta mediante “leyes antiterroristas” han tenido lugar en varios países de América Latina, y también en Europa y países árabes durante las últimas rebeliones y protestas de los últimos años.

palabras no es la *violencia instrumental* de la represión de las movilizaciones protestatarias sino la *violencia estructural*, que articula la protesta a la violencia real y simbólica del “no hay alternativa” al orden dominante neoliberal.

Bibliografía

- ALGRANATI, Clara et al.
 2004 “Disputas sociales y procesos políticos en América Latina”, OSAL/CLACSO, n.13.
- BROKETT, Charles D.
 2005 *Political Movements and Violence in Central America*, Cambridge University Press, New York.
- CARRERA, Nicolás Iñigo & COTARELO, María
 2001 “La protesta en Argentina (enero-abril 2001)”, OSAL/CLACSO, n. 4, junio.
- CASTELLS, Manuel
 1998 *La era de la información, vol.2. El poder de la identidad*, Edit. Alianza, Madrid.
 —, 2012 *Redes de indignación y esperanza*, Alianza, Madrid.
- CRAWFORD, Gordon
 2000 “Promoting Democratic Governance in the South”, en *The European Journal of Development*, vol. 12, n. 1, june.
- DELAMATA, Gabriela
 2002 “De los estallidos provinciales a la generalización de las protestas en Argentina. Perspectiva y contexto en la significación de las nuevas protestas”, *Nueva Sociedad*, n. 182, Nov.-Dic.
- DELLA PORTA, Donatella
 1995 *Social Movements, Political Violence and State. A Comparative Analysis of Italy and Germany*, Cambridge University Press, Cambridge.
- DENAULT, Alain
 2013 *Gouvernance. Le management totalitaire*, Edt. Lux, Lettres Libres, Quebec.
- ECKSTEIN, Susan (edit.)
 1989 *Power and Popular Protest. Latin American Social Movements*, University of California Press, Berkeley.
- FRANK, Thomas
 2013 “Occuper Wall Street; un mouvement tombé amoureux de lui-même”, *Le Monde Diplomatique*, janvier.
- GONZALEZ CASANOVA, Pablo
 2002 “Democracia, liberación y socialismo: tres alternativas en una”, OSAL/CLACSO, n. 8.
- GONZÁLEZ-QUIJANO, Yves
 2012 *Arabités numériques. Le printemps du Web árabe*, Simbad- Actes Sud, Arles.
- GRAMSCI, Antonio
 2007 *Cuaderni del carcere (1948)*, Einaudi.
- GUILHOT, N.
 2004 “La Banque Mondiale réclame bonne gouvernance”, *Le Nouveau Capitalisme. Manière de voir*, n.72.
- HUNTINGTON, Samuel P.
 1994 *La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX*, Paidós, Barcelona.
- KALDOR, Mary
 1999 *New & Old Wars. Organized Violence in a Global Era*, Polity, Cambridge.
- LOWENTHAL, Abraham
 1991 *Exporting Democracy: The United States and Latin America*, The John Hopkins University Press.
- MAPPA, Sophia Mappa (edit.)
 1995 *Développer par la Démocratie? Injonctions occidentales et exigences planétaires*, Karthala, Paris.
- MARSTEINDREDET, Leiv
 2008 “Las consecuencias sobre el régimen de las interrupciones presidenciales en América Latina”, *América Latina Hoy*, vol. 49.
- MORAL SALAS, M. & PEREZ SAINZ, Juan Pablo
 2006 “De la vulnerabilidad social al riesgo de empobrecimiento de los sectores medios: un giro conceptual y metodológico”, *Estudios Sociológicos*, vol. XXIV, n. 1, enero-abril.
- PEREZ-VITORIA, Silvia
 2005 *Les paysans sont de retour*, Actes Sud, Arles.
- PORTANTIERO, Juan Carlos
 1988 *La producción de un orden. Ensayos sobre la democracia entre el estado y la sociedad*, Nueva Sociedad, Buenos Aires.
- SAMBANIS, N. & ZINN, A.
 2003 “The Escalation of Self-Determination Movements: From Protest to Violence”, *Annual Meeting of the American Political Science Association*.
- SANCHEZ PARGA, J.
 2002 “El ciclo político de la economía y el gobierno económico de la política”, en *Ecuador Debate*, n.55, abril.

- .2005 "Sin (creciente) inequidad no hay crecimiento económico", en *Socialismo y Participación*, n. 99, Lima.
- .2005 "Del conflicto social al ciclo político de la protesta", *Ecuador Debate*, n. 64, abril.
- .2011 *Devastación" de democracia en la sociedad de mercado*, CAAP, Quito.
- SEN, Amartya
1992 *Inequality Reexamined*, Clarendon Press Oxford, London.
- SEOANE, José & TADDEI, Emilio
2001 "Protesta social, ajuste y democracia: la encrucijada latinoamericana", OSAL/CLACSO, n. 4, junio.
- SOUSA SANTOS, Boaventura de
2001 "Los nuevos movimientos sociales", OSAL/CLACSO, n.5.
- TARROW, Sidney
1983 *Struggling to reform: social movements and policy during cycles of protest*, Western Societies Program Center for International Studies, Cornell University, Ithaca.
- TARROW, Sidney
1997 *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Alianza, Madrid.
- TILLY, Charles (2003), *The Political of Collective Violence*, Cambridge University Press, Cambridge.
- TILLY, Charles & TARROW, Sidney
2008 *Politique(s) du conflit*, Sciences Po, Paris.
- TOURAINÉ, Alain
1984 *Le retour de l'acteur. Essai de sociologie*, Fayard, Paris.
- .1987 *Actores sociales y sistemas políticos en América Latina*, 606 PREALC, Santiago.
- .1988 *La Parole et le Sang. Politique et Société en Amérique Latine*, Edit. Odile Jacob, Paris.
- ZIBECHI, Raul
2007 *Les mouvements sociaux entre l'autonomie et la lutte pour le changement*, ALAI, julio.
- ZIZEK, Slavoj
2011 *Occupy: Scenes from Occupied America*, Verso.

Un mundo en efervescencia política

Albert Ogien*

Las movilizaciones y protestas que ocurrieron en el año 2011 han sorprendido por su magnitud y alcance global. Constituidas por ciudadanos comunes opuestos a dotarse de una organización política, evidencian como características, una naturaleza no partidaria, la voluntad de sostener la unanimidad de la movilización, la opción explícita de la no violencia y la reivindicación de la democracia. Si bien existe la sensación de que el orden se mantiene, algo ha cambiado en el entorno político y se puede pensar que las fuerzas de la protesta siguen trabajando al interior de las sociedades.

2011 se convertirá sin duda en una fecha importante en la historia de la democracia. ¿Qué ocurrió en el mundo en el transcurso de ese año? Todo ha comenzado con la “primavera árabe: la caída de Ben Alí en Túnez el 14 de enero, seguida por la de Mubarak en Egipto el 11 de febrero. Estos dos derrocamientos consecutivos han dado vida rápidamente a una idea, que se consideraba definitivamente abandonada: el hecho que un pueblo que se reúne por su propia iniciativa y dice simplemente “no”, llega a tomar en las manos su destino

y expulsar a dirigentes tiránicos y corruptos, sin ejercer una violencia directa y organizada.

Las fuerzas que han provocado estas rebeliones actuaban desde hacía mucho tiempo, antes de que estallaran.¹ Y los acontecimientos que se produjeron en Túnez como en el Cairo han provocado numerosas víctimas.² Aunque enseguida se ha cuestionado el carácter “espontáneo” de estos movimientos de protesta política, y la tesis de la manipulación ha sido enunciada, en momentos de la victoria electoral de los partidos “islamistas”, las insurrecciones civiles de Tú-

* Director de investigaciones en el Centro Nacional de la Investigación Científica /CNRS CEMS-IMM /EHESS Paris.

1 L. Dakhli, “Une révolution trahie? Sur le soulèvement tunisien et la transition démocratique”, *La Vie des idées*, 19 février 2013.

2 S. Laacher, *Insurrections arabes*, Paris, Buchet-Chastel, 2013.

nez y de Egipto han tenido repercusiones inesperadas.³

Una ola de contestaciones contra los regímenes autoritarios ha movlizado el mundo árabe y se ha traducido, como se sabe hoy, de maneras muy diferentes en Libia, en Bahrein, en Marruecos, en Argelia, en Yemen o Siria.⁴ En unos regímenes han sido rápidamente eliminados; en otros una represión brutal ha callado a los manifestantes; mientras que, en ciertos países, se produjeron reformas han sido decididas para calmar la cólera; y algunas veces, la situación se ha transformado en guerra civil. Un aspecto puesto en relieve, de la fulgurante propagación de los movimientos de protesta política en el mundo árabe ha sido el papel que han desempeñado la comunicación por internet, el uso de las redes sociales y la difusión, en directo y de manera continua, de las rebeliones por la televisión satelital Al Jazeera desde la misma zona de emisión.⁵

De la insurrección civil a las concentraciones

El espectáculo de las multitudes tunecinas y egipcias, que se instalaron en el centro de las ciudades y rehusaron dejarlas hasta que la tiranía no haya si-

do vencida, ha dado una imagen magnífica y trucada de la realidad. Pero esta imagen ha estado confirmada por los hechos: los regímenes detestados se han “marchado”. Este acontecimiento sorprendente ha resucitado el mito de la rebelión del pueblo y haciendo renacer la creencia en la capacidad de movilización colectiva para cambiar el orden de las cosas, tanto en regímenes autoritarios como en las democracias desarrolladas. Igualmente ha dado una actualidad nueva a una forma de acción política: la concentración, es decir el hecho de ocupar una plaza para expresar una reivindicación de democracia y permitir la liberación de la palabra de los ciudadanos ordinarios.

Es así como la acción de los pueblos árabes ha sido explícitamente tomada como modelo, en los países democráticos, para organizar instalaciones en las plazas de las ciudades, de Madrid a New York, y crear espacios de libertad, en los cuales cada uno podía llegar a denunciar el desprecio a los gobernantes, hacer públicos sus duelos, debatir el destino colectivo, formular exigencias políticas y experimentar nuevas maneras de vivir juntos.

El espíritu de la rebelión, del que las insurrecciones civiles de Túnez y del Cairo han dado ejemplo, se ha extendi-

3 Naoufelbrahimi El Mili, *Le Printemps árabe. Une manipulation?*, Paris, Max Milo, 2012. Se puede introducir aquí la noción de insurrección civil para oponerla a la insurrección armada.

4 G. Achcar, *Le peuple veut*, Paris, Sinbad /Actes Sud, 2013. Los comentaristas dicen que esta ola de protesta ha comenzado con el levantamiento de Teherán contra el fraude electoral con ocasión de la elección presidencial de junio 2009. Otros incluso recuerdan que un movimiento de protesta tuvo lugar en Laayoune, en el Sahara occidental, donde un campo de tiendas de campaña se instaló en octubre 2012, para reclamar justicia social.

5 L. Ben Mhenni, *Tunisian Girl*, Montpellier, Indigène Editions, 2011.

do rápidamente a las cuatro esquinas del planeta. Desde el 20 de febrero, una llamada a manifestarse en apoyo del pueblo tunecino es lanzada en China, haciendo temer a las autoridades una nueva ola de manifestaciones a favor de la democracia, y que han querido prevenir inmediatamente, bloqueando el flujo de comunicación en las redes sociales e internet y procediendo a arrestos preventivos de militantes de los derechos humanos.

En Europa los movimientos de protesta de los ciudadanos contra quienes los gobiernan comienzan diez días después de la caída de Ben Alí en Túnez: el 23 de enero en Bélgica, de manera inesperada, cerca de 40.000 personas responden a una convocatoria lanzada en Facebook por algunos estudiantes, proponiendo desfilar en Bruselas para burlarse y denunciar la impericia de los partidos políticos, que desde hacía un año, no logran constituir un gobierno. De manera casi sorprendente y por otra razón, más de 200.000 personas se juntan en las calles de Lisboa el 12 de marzo, en respuesta a una llamada lanzada desde una red social por miembros de la asociación Generación Precaria, que proponían, al día siguiente del anuncio de un nuevo plan de ajuste, hacer escuchar la voz de una juventud desconcertada por un mundo político considerado responsable de la ausencia de porvenir,

que esta juventud resiente de manera cada vez más viva.⁶

El 15 de mayo, por idénticos motivos, una manifestación, que reúne cerca de 500.000 personas en Madrid, en la Puerta del Sol, se transforma esa misma tarde en una ocupación de la plaza. Diez días más tarde, el movimiento de ocupación llega a Grecia, donde se erige un campamento sobre la plaza Syntagma, frente al Parlamento, seguido el 15 de junio de una manifestación de unas 200.000 personas. El 17 de septiembre 2011 una serie de tiendas de campaña se instala en Zuccotti Park, en New York esta vez, tras una convocatoria lanzada en las redes sociales por un pequeño grupo de activistas: Occupy Wall Street.⁷ Las concentraciones proliferan enseguida por todo el mundo desarrollado: Londres, Frankfurt, Ginebra...

El movimiento se extiende gracias a los modernos medios de comunicación: los lugares se multiplican y las redes sociales aceleran la rapidez de circulación de las informaciones y de las llamadas. En cuanto a los medios tradicionales (que evidentemente han sido solicitados por los "ocupas"), les proporcionan con mayor o menor empatía un eco nacional e internacional. De hecho, el fenómeno *Occupy* culmina con la convocatoria a una manifestación mundial bajo la sigla "Global Revolution". El 15 de octubre de 2011, grupos de activistas y

6 *Geracao a rasca* es una asociación que se ha constituido para denunciar una situación en la cual los jóvenes diplomados no encuentran más empleos que aquellos remunerados a 500 euros por medio de "hojas verdes". Sobre este movimiento cfr. C Semblamo, "Le Portugal à l'heure de la troika oul'éléve-mod'le de la Grèce", *Lignes*, 39, 2012.

7 Consultar la descripción de este episodio propuesta por D. Graeber, "A propos du respect des règles du jeu: le singulier succès d'Occupy Wall Street" y "L'idée d'avoir une revendication unique ne parle à personne", *Mouvements*, 2012.

simpatizantes – más o menos numerosos – localizados en más de 900 ciudades de casi 90 países, anuncian su participación en el lugar de internet, en tiempo real, el conteo de fuerzas de la protesta. Las multitudes que desfilan por las calles el día mencionado tendrán una importancia muy variable; y el fervor de esta “movilización” tiende a decaer desde el día siguiente.

Esta pequeña crónica de la contestación a los poderes en 2011, no se detiene ahí: el 28 de abril, los estudiantes y colegiales chilenos están en las calles para reclamar una política de enseñanza que ponga fin a su privatización, realizada bajo el régimen de Pinochet, y que ningún gobierno electo después de su caída ha cuestionado. Una reivindicación es formulada: la gratuidad de la enseñanza a fin de instaurar un verdadero derecho a una educación de calidad para todos desde la primaria hasta la superior. El 9 de agosto, respondiendo a la llamada de los sindicatos estudiantiles y de su presidenta Camila Vallejo, 500.000 personas se reúnen en Santiago para denunciar la pasividad del gobierno: después los sindicatos de obreros toman el relevo y decretan una huelga general los días 2 y 24 de agosto siguientes. Este mismo mes, una coalición de sindicatos estudiantiles lanza en Quebec una campaña de rechazo a la elevación de los derechos de inscripción en la Universidad, decidida seis meses antes por un gobierno liberal, sobre el cual existe una fuerte sospecha de corrupción.

Este movimiento, cuyo representante rápidamente mediatizado ha sido Gabriel Nadeaau-Dubois, desembocará en una huelga general en la enseñanza su-

perior el 13 de febrero 2012, después en un movimiento de reivindicaciones, que ampliamente desborda la inicial cuestión de los derechos de inscripción: la Primavera erable. La incapacidad del gobierno de Quebec para negociar con los representantes de los estudiantes acarreará la promulgación de la “ley 78”, trataría de poner término a una contestación, que había alcanzado proporciones incontrolables, suspendiendo las libertades políticas y académicas, criminalizando las libertades de reunión y de opinión, y haciendo el derecho a la huelga prácticamente inoperante. Esta respuesta brutal suscitará un vasto movimiento de desobediencia civil, marcado por conciertos de cacerolas semanales, retomando la práctica de las poblaciones argentinas y chilenas. Finalmente, el gobierno liberal debió dimitir y la oposición, que gana las elecciones, ha anulado la elevación de los derechos de inscripción y abolido la ley 78.

En noviembre 2011, esta vez en Londres, los estudiantes reunidos en el seno de la NCAFC (Campaña nacional contra los derechos de escolaridad y las reducciones presupuestarias) llaman otra vez a manifestarse contra la triplificación de los costos de inscripción en la Universidad en el momento en que ésta entra en vigor, el anuncio de esta decisión, un año antes había dado lugar, el 9 de noviembre 2010, a impresionantes manifestaciones, cuya violencia (destrucciones, depredaciones, enfrentamientos con la policía, injurias contra la Corona) había suscitado la alarma, la reprobación y una severa represión.

En 2011, otros cuatro hechos – entre muchos otros – contribuyen a ampliar la

lista de motivos, de los que las poblaciones se han servido para expresar su rechazo a los gobernantes y a los poderosos que éstos sirven. El 12 de marzo, un reactor de la central nuclear de Fukushima explota con ocasión del tsunami y la manera como el accidente es tratado, así como la revelación de las complicidades entre los poderes y los industriales del sector nuclear, provoca una enorme corriente de protestas en Japón, seguida casi por todo el planeta y aceleran las decisiones de abandono del sector nuclear en Alemania, el control más fuerte de la seguridad de las centrales en actividad en Europa y la decisión de cerrar las menos seguras entre ellas.

Segundo hecho: el 24 de febrero, un tribunal británico autoriza la extradición a Suecia de Julián Assange, fundador y representante de Wikileaks, la organización activista que pretende poner a los ciudadanos del mundo al corriente de los negocios que les conciernen develando los pequeños y grandes secretos de Estado. Las persecuciones iniciadas contra Assange en Suecia – por agresión sexual – se instaura unos meses después de que en noviembre 2010, Wikileaks publicara, en colaboración con cuatro grandes diarios europeos miles de cables diplomáticos confidenciales del Departamento de Estado de Estados Unidos, haciendo público los arcanos muy poco honorables de las decisiones tomadas por numerosos gober-

nantes por todo el mundo.⁸ Es bastante probable que esta autorización de entregar Assange a la justicia sueca deba ser el preludio de su extradición a los EEUU, cuyas autoridades exigen el arresto, a fin de entregarlo a la justicia por robo y ocultamiento de documentos secretos, en el marco de las leyes de seguridad interior aprobadas a raíz del atentado del 11 de septiembre 2001.

Tercer hecho: el 9 de abril 2011, el 60% de los ciudadanos islandeses, por referéndum se pronuncian contra el reembolso de la enorme deuda contraída por el país a raíz de la nacionalización de sus bancos en quiebra, colocado a su gobierno en la dificultad de mantener sus compromisos internacionales. La crisis política ligada al escándalo financiero produce una iniciativa inaudita: un Consejo Constitucional se instituye y sus 25 miembros elegidos, que son ciudadanos ordinarios, tienen por misión redactar un proyecto de nueva Constitución de la República de Islandia, abriendo una vasta consulta a todos sus ciudadanos por medio de internet. El 29 de julio, este proyecto es depositado en el Parlamento, y adoptado por referéndum el 20 de octubre.

Esta “Constitución 2.0” es el primer modelo de redacción totalmente abierta y pluralista - que se inspira en la iniciativa tomada en Ecuador en 2008 para elaborar una Constitución en un proceso democrático de consulta al conjunto de ciudadanos. A diferencia de lo que

8 Algunos afirman que estas revelaciones, que han descubierto la corrupción y la duplicidad de numerosos gobernantes como los pequeños arreglos que negocian, han desempeñado por razones diferentes en cada caso, un papel considerable en el desarrollo de las rebeliones y protestas en Túnez, Egipto y en España.

pasó en Ecuador, donde la nueva Constitución ha sido adoptada en 2008 y está hoy día en aplicación, el proceso iniciado en Islandia se ha retardado a causa de las elecciones de mayo 2013, que han visto cómo el éxito de los partidos de derecha se oponen a la entrada en vigor de este texto aunque ya preparado y válido.⁹

En fin un cuarto hecho marca el año 2011: el 6 de agosto los suburbios ingleses se inflaman a raíz de la muerte de un joven delincuente negro en una comisaría de policía y dos noches de insurrecciones y pillajes se desatan en Londres y en Manchester, cuya violencia espectacular e inusual es denunciada por los medios. Siendo los participantes identificados, buscados y detenidos mucho después de los hechos, dura y ejemplarmente reprimidos por los tribunales.

Todos los acontecimientos reseñados en esta cronología incompleta han sido vistos con distintas graduaciones a través del filtro de la crisis bancaria de 2008, y de su efecto más evidente: la incapacidad de los poderes a sopesar el curso de los hechos. Pero nadie hubiera podido predecir que esta situación daría lugar a una llamarada de protestas más que a un sentimiento de impotencia, suscitando la resignación y la apatía. Por eso, el hecho que la crisis *esta vez* haya dado lugar a *esta* reacción política ha suscitado la sorpresa, la consternación y el miedo.

Los analistas han encontrado enseguida una justificación: la indignación legítima de la juventud y de las víctimas de la globalización ante el espectáculo de la injusticia y de la indecencia de un mundo, en el cual las desigualdades aumentan ilimitadamente, mientras que los poderosos afirman su poder y abandonan a las personas ordinarias a su suerte.¹⁰ Sin embargo, la cólera no habría bastado. Es raro que un movimiento de protesta nazca de manera totalmente espontánea y que dure, sin que un orden no sea instaurado y respetado. Un orden se ha constituido, y se puede intentar dar cuenta de la manera como se ha instaurado.

La democracia como reivindicación

Las concentraciones y las ocupaciones de plazas (de la Puerta del Sol en Madrid, la plaza Syntagma en Atenas, de Zuccotti Park en New York, en la catedral de San Pablo en Londres o de la avenida Rothschild en Tel Aviv), que han tenido lugar en países democráticos se han explícitamente inspirado en las insurrecciones civiles tunecinas y egipcias. Y el recurso a esta nueva forma de acción política han presentado, en todos los lugares a lo largo de todo el mundo, cuatro características: la naturaleza ostensiblemente “a-partidaria” de la concentración; la voluntad de mantener la unanimidad de la movilización;

9 Hay que notar que las elecciones han conducido al poder a partidos opuestos a las recriminaciones sostenidas por los movimientos de protesta, aunque se pueda atribuir estos resultados a un sistema electoral, que falsea la representación. Tal fue el caso en España, en Portugal, en Grecia, en Italia y en Islandia.

10 F. Bourguignon, *La mondialisation de l'inégalité*, La République des Idées / Ed. du Seuil, Paris, 2012.

la opción explícitamente deliberada de la no-violencia; la formulación de una reivindicación única: la democracia.

El hecho que estas cuatro características sean generalmente compartidas por el conjunto de estos "movimientos de protesta política extra-institucional", que se multiplican hoy es un fenómeno que merece ser analizado de cerca. Lo haré a partir de una hipótesis: las formas de acción, que se expresan fuera del juego político tradicional y al margen de las reglas que éste fija, manifiestan la voluntad empecinada de los ciudadanos ordinarios de hacer valer su deseo de ser más directamente implicados en las decisiones que les conciernen y más vigilantes respecto de aquellos que los gobiernan. En una palabra, estos movimientos trabajan la definición de una nueva relación con la política. Para confirmar esta hipótesis, es preciso examinar cada una de estas cuatro características en detalle.

Comencemos por la naturaleza "a-partidaria" de las concentraciones y de las ocupaciones. Se puede admitir que esta característica traduce simplemente el rechazo a los partidos tradicionales y de su modo de funcionamiento jerárquico y disciplinado, que ha terminado por el abandono a los más antiguos militantes y decepciona a los jóvenes afiliados. Pero esto responde también a la forma de acción política que es la concentración. Ella implica una obligación: reunir la más numerosa masa de personas en una plaza. Ya que es únicamente del número que este género de movimiento logra su fuerza y su legitimidad. Una condición de su éxito resulta pues del hecho de que aquellos que participan lo

hacen en cuanto ciudadanos ordinarios, silenciando cuando es el caso, su pertenencia a una organización establecida.

Esto es lo que atestigua el que, de manera general, los responsables de las concentraciones y de las ocupaciones hayan estado atentos para disolver la menor tentativa de manipulación o de recuperación por un partido o un gremio. Se sabe, sin embargo, que las personas que los han convocado y organizado no son neófitos: muchos de ellos eran activistas y opositores (políticos o sindicales) comprometidos en todos los combates por la justicia, la defensa de los clandestinos o contra el sector nuclear, las políticas neoliberales, los O.G.M., el consumismo; otros pertenecen al mundo profesional de los interventores sociales de base (organizadores comunitarios o trabajadores sociales). Pero en todo lugar, una misma voluntad determinada para presentar el movimiento de protesta como "a-partidario" y procedente de "simples ciudadanos en cólera" se ha mantenido con firmeza.

Esto nos conduce a la segunda característica de las concentraciones y ocupaciones: la unanimidad de la reivindicación expresada. Del "Fuera" acompañado del slogan "El pueblo quiere", que ha sido repetido en Túnez, en Egipto y por todo el mundo árabe, se han hecho eco el "Estoy harto" de Dakar, el "No nos representáis" o "Somos el 99%" escuchados en las plazas europeas y americanas; o también "El pueblo reclama justicia social" de Tel Aviv, el "Nosotros existimos" de los Rusos frente a los fraudes masivos durante las elecciones legislativas de diciembre

2011 (y los que han continuado a marcar los ciclos de manifestaciones, que han precedido y seguido la elección de Putin a la presidencia en marzo 2012).

Convocar al pueblo, al 99% de la población mundial es dirigir un mensaje en el que el mayor número de personas puede reconocerse. Tanto más que esta convocatoria ha sido siempre hecha precisando ser sin exclusión de sexo, de religión, de pertenencia étnica o de creencia. El único motivo aceptable de participación ha sido la identificación de ser un ciudadano en cólera contra la manera como los asuntos que le conciernen son conducidos por los gobernantes.

El tercer elemento común a todos estos movimientos de protesta política extra-institucional tiene que ver con la opción estratégica que los ha guiado: la no-violencia, es decir la voluntad de evitar metódicamente – sin lograrlo siempre completamente – las confrontaciones directas con la policía y la población. En lugar de ver en estas opciones la marca de la debilidad o del vacío político de estos movimientos, se puede pretender que por el contrario son plenamente coherentes. De hecho, la reivindicación de democracia, cuyo interés es preservar la unanimidad, no permitiría enunciar un programa preciso, que se trataría de realizar punto por punto para satisfacer a quienes la defienden.

Por tanto, esta expresión reivindicativa, no sirve a ningún proyecto de transición a un modelo de gobierno, dispuesto a ser aplicado e inmediatamente sustituyente del antiguo. Tal reivindicación

ha buscado sobre todo relanzar el debate público sobre una cuestión, para la cual no existe respuesta definitiva, pero sobre la cual parece necesario, en ciertos momentos de la evolución de una sociedad, ponerse a reflexionar colectivamente: ¿qué es la democracia? Lo que hay de profundamente político en estos movimientos es justamente esta voluntad de reafirmar – a costa de las exigencias de la realidad y de los abandonos necesarios - la fuerza de la doble promesa de la democracia: la instauración de una forma de organización de la vida colectiva, que favorezca la autonomía y la soberanía del ciudadano y hacer progresar la realización de un “poder del pueblo para el pueblo por el pueblo”.

La cuarta característica de estos movimientos es que están por doquier organizados en torno a una reivindicación única: la democracia. Indudablemente, es este motivo el que recubrió a todos aquellos hechos que en el curso del siglo XX han justificado las luchas y los combates políticos: contra la explotación, para denunciar las injusticias producidas por el capitalismo y el imperalismo; la opresión, para luchar contra los despojos de libertad propios de los regímenes coloniales o autoritarios; la desigualdad, para contestar las políticas de discriminación o de ostracismo respecto de las minorías; el engaño y la impunidad, para oponerse a las estrategias, que los gobernantes y los poderosos utilizan para confiscar el poder, ocultar su acción y expoliar a los pueblos.¹¹

11 Es necesario señalar también que esas son formas pacíficas de protesta política. Luchas de liberación nacional y actos de terrorismo continúan marcando la vida política internacional.

Apelar a la democracia no se limita hoy exclusivamente a exigir la instauración de un Estado de derecho – aunque sigue siendo el caso, cuando se trata de enfrentar a un régimen despótico o exigir elecciones libres y no trucadas. Esta reivindicación se ha vuelto una suerte de modalidad polivalente, que sirve para reclamar la aplicación de un orden de relaciones sociales respetuosas no sólo de la libertad, la igualdad y la justicia, sino también la dignidad de las personas, la probidad de los gobernantes, la transparencia de la acción pública, la seguridad de un nivel de vida decente, la garantía de tomar a cargo la enfermedad, el desempleo y la vejez, el acceso a la enseñanza, la independencia de la prensa y de los medios, y hasta el desarrollo individual. Y desde que los poderes establecidos son sospechosos de conculcar una de estas dimensiones de la vida colectiva o de ser culpables de una separación, de un desvío o de un atentado a la condición humana, pueden ser públicamente considerados culpables de una lesión de la democracia.

La reivindicación de democracia puede hoy cubrir una gama muy amplia de contenidos. En situaciones autoritarias, estos contenidos están directamente ligados a las manifestaciones más brutales del constreñimiento y de la represión: las arbitrariedades de una administración omnipotente; las confusiones cotidianas de un sistema de corrupción generalizado; la ausencia de instituciones garantes de la libertad de expresión y que aseguren los derechos y libertades de los individuos; la violencia de las instituciones de vigilancia y de control. En las situaciones democráticas, la protesta se ha organizado más

bien en torno al carácter demasiado formal del sistema representativo y del abismo que separa a los ciudadanos del medio confinado de quienes los gobiernan, los instruyen y los informan.

De lo que se ha podido ver y leer, las movilizaciones que se han desarrollado en el espacio público democrático han sido conducidas, alternativa o conjuntamente, por una crítica del carácter autoritario adoptado por la acción del gobierno; por una denuncia de la omnipotencia de los bancos y de los propietarios; por una acusación de los riesgos y daños causados en la biósfera y en los seres humanos; por un desarrollo económico exclusivamente dirigido por la ganancia; por una demanda de restitución al pueblo de su poder confiscado; o por el rechazo de un sistema mediático, que traiciona la misión de informar presentada como esencial a la emergencia de una opinión ilustrada. Aunque se ha hecho un uso cada vez diferente del término democracia, siempre ha servido de referencia a una idea: respetar las justas aspiraciones del “ciudadano” o del “pueblo” – y sus aspiraciones no han sido ciertamente las mismas en Túnez, en Rabat, en New York, Santiago, Quito o Moscú.

Conclusión

Las insurrecciones civiles árabes, las luchas por la justicia social, las concentraciones y ocupaciones han tenido también un efecto colateral: descalificar aquellos análisis que afirmaban visiones de una época de total despolitización, explicando esta coyuntura por el individualismo y la indiferencia, del lado de las democracias, o por la eterna sumi-

sión a la fatalidad, a la tradición o a la tiranía del lado de los regímenes autoritarios. La efervescencia política en la que el mundo está hundido desde 2011 ha recordado un hecho: nunca los individuos abandonan la idea de exigir el derecho y la libertad de ocuparse de asuntos que les conciernen, cuando juzgan que éstos no son tomados en cuenta de manera satisfactoria por quienes los gobiernan – incluso si esta exigencia no se manifiesta todas las mañanas con el mismo resplandor.

Aunque el año 2012 pareciera cerrar un corto paréntesis, abierto en el curso normal de las cosas, y promover el sentimiento de que todo ha entrado en el orden, al menos queda que algo ha cambiado en el entorno político, en el que nos movemos y podemos pensar que las fuerzas de la protesta continúan trabajando al interior de las sociedades. Y hay elementos para considerar que el poderío de la protesta por la resolución con la cual un número considerable de personas ha bajado a las calles o ha ocupado las plazas para expresar una reivindicación democrática amenaza con pesar todavía algún tiempo sobre los dirigentes del mundo. E incluso si no todos han salido victoriosos, estos movimientos han hecho desplazarse algunas posiciones.

Tiranías han sido barridas; gobiernos desacreditados han debido decidirse a abandonar la escena; arreglos y acomodos se han insertado a las políticas de ajuste y austeridad, para darles un contenido menos desigual y menos cruel. Discursos autoritarios, represivos y ul-

tra-liberales se han atenuado; reformas orientadas en el sentido de más justicia social, de mayor participación activa en la decisión pública y de menos corrupción han sido prometidas y a veces aplicadas; y, la exigencia de una vida política que respete plenamente la autonomía de los individuos, en la cual cada uno debe tener el derecho de encontrar y de hacer escuchar su voz, se ha expresado de nuevo bajo formas de acción política exteriores al sistema político instituido.

Otra consecuencia de la efervescencia política, que ha ocupado el mundo del 2011, está ligada a la irrupción imprevista e incontrolada de ciudadanos ordinarios en el terreno político. Esta toma de la palabra salvaje ha hundido igualmente a los gobernantes y sus consejeros, en un cierto desconcierto. La profundidad de la falta de legitimidad de su poder se les ha develado de golpe, en toda su crudeza, tomando en algunos sitios la forma de insurrección civil, en otros, de insurrecciones urbanas, en muchos la de un rechazo del sistema injusto, a veces redoblado por un repudio absoluto de adecuarse con las reglas de la democracia representativa. Sin que nadie pueda decir cuáles serán los desarrollos de estos movimientos de protesta política extra-institucional, en cada país donde se han manifestado, ya se sabe que esto nos sitúa ante una obligación: repensar ciertas evidencias a partir de las cuales tenemos la costumbre de concebir la democracia y trabajar por superar los límites, que imponen a nuestra imaginación política.

Obstáculos a la democracia luego de las Nuevas Revoluciones árabes*

Farhad Khosrokhavar**

Las recientes revoluciones árabes, particularmente las ocurridas en Egipto y Túnez han puesto en evidencia los antiguos conflictos y perspectivas políticas en torno a la modernización. Una fuerte tensión entre quienes buscan una sociedad laica y aquellos que defienden los puntos de vista religiosos del Islam ha estado presente en los últimos cien años. Si bien en el pasado el panarabismo tendió a fortalecer corrientes laicas en la política y el Estado, se produjo un intenso crecimiento de tendencias islamistas que han conseguido un amplio apoyo en la población. De allí que las corrientes islamistas fundamentalistas controlan el poder político en detrimento de quienes buscan una sociedad laica, un resultado no buscado por quienes protagonizaron las revoluciones de Egipto y Túnez.

Los obstáculos a la democracia luego de las revoluciones Árabes pueden dividirse en dos categorías distintas. La primera está vinculada a la propia coyuntura revolucionaria, en la que cada sociedad enfrenta una situación específica luego de una ola revolucionaria que afectó al mundo Árabe desde fines de 2010, en particular las características peculiares de los activistas, la fuerza o debilidad de la sociedad civil y las instituciones políticas, así como la capacidad de los actores de traducir sus aspiraciones y demandas al campo político. La segunda es estructural, como consecuencia de los antecedentes histó-

ricos de las sociedades Árabes en términos de estructuras étnica, religiosa, ‘tribal’, económica y geo-política.

1. La coyuntura revolucionaria y los nuevos obstáculos a la democratización

El “evento revolucionario” por sí mismo generó nuevas condiciones que a su vez se presentaron como grandes amenazas a la democratización, a pesar del hecho de que los nuevos movimientos estaban en gran parte inspirados, en sus orígenes, por el pluralismo político y la lucha en contra de gobiernos autocráticos.

* Traducción del original en inglés a cargo de Lorena Rodríguez.

** Director de Estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales e Investigador del Centro de Análisis e Intervención Sociológicas (CADIS).

Los dos períodos y los dos tipos de actores

Un nuevo problema surgió luego de las Revoluciones Árabes: la intensificación y la profundización de las tensiones existentes entre los grupos laicos y religiosos. Esta tensión ha sido prominente a partir de la modernización del mundo Árabe (y de manera más amplia, en el mundo Musulmán) desde el Siglo XIX. Pero la Primavera Árabe añadió un nuevo estímulo mediante la dicotomía entre dos tipos de actores sociales y políticos que emergieron, respectivamente, durante y luego de las revoluciones en Túnez y Egipto.

En ambos países, durante el primer período de la ola que llegó a su fin con el derrocamiento de los gobiernos autoritarios, los principales actores revolucionarios compartían una perspectiva secular, pertenecían a una generación bastante joven, y en su mayoría provenían de las clases medias, más que nada en Egipto.

En Túnez, los sindicalistas (miembros de la UGTT, *Union Générale des Travailleurs Tunisiens*), una juventud con título pero sin empleo (los "*diplômés chômeurs*"), y los denominados "*Netizens*" (la juventud experta en el uso de internet y de las redes sociales) fueron los princi-

pales promotores del movimiento revolucionario.¹

En Egipto, donde la Plaza Tahrir en el Cairo jugó un papel importante en el derrocamiento de Mubarak en febrero de 2011, las personas que allí se congregaban eran en su mayoría seculares o tolerantes en cuanto a sus creencias religiosas, los Musulmanes celebraban sus rezos al lado de los Cristianos (Coptos) y las mujeres sentían la libertad de poder participar en la vida diaria sin ser acosadas sexualmente (el ejército y los matones de Mubarak, los *baltajiya*, intentaron intimidarles, aunque en vano).²

En ambos países, sus acciones lograron terminar con los viejos regímenes autoritarios de una forma predominantemente no violenta.

Luego del derrocamiento de los regímenes autoritarios en ambos países, a partir de las elecciones se destacó un nuevo tipo de actor social. Al contrario de lo sucedido durante el primer período, en el que los manifestantes se consideraban a sí mismos anti-autoritarios y protagonistas a favor de la democracia, en el segundo período los nuevos actores se definieron a sí mismos principalmente como Musulmanes, y presentaron su identidad de dos maneras distintas, ya sea cercanos a la Hermandad Musulmana o a los Salafis. Ambos sor-

1 Ver "Soulevements populaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (IV): La voie tunisienne." *Middle East/North Africa Report* No. 106. International Crisis Group. April 28, 2011. www.crisisgroup.org/fr/regions/moyen-orient-afrique-du-nord/afrique-du-nord/Tunisia/106-popular-protests-in-north-africa-and-the-middle-east-iv-tunisia-way.aspx.

2 Ver International Crisis Group. "Popular Protest in North Africa and the Middle East (I): Egypt Victorious?" *Middle East/North Africa Report* No. 101. International Crisis Group. 24 de febrero, 2011. www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/egypt/101-popular-protest-in-north-africa-and-the-middle-east-i-egypt-victorious.aspx.

prendieron a aquellos que habían derrocado a las viejas autocracias en Túnez y Egipto y que eran en su mayoría Musulmanes laicos, para quienes la religión no era el tema principal. La Hermandad Musulmana como actor era más conocida, en el sentido de que la organización a la que pertenecía contaba con una larga historia de desafío político contra los regímenes en Egipto, desde 1928. Pero el Salafí como activista social y político fue una sorpresa, dado que bajo Mubarak el grupo se definió a sí mismo como apolítico, y promovía la Islamización desde abajo, haciendo a un lado la actividad política y caracterizando a cualquier movimiento de protesta como una disidencia ilegítima en contra del poder (*fitnah*).

En comparación con la juventud secular moderna, que se encontraba en el corazón del incipiente movimiento revolucionario, los nuevos actores Islámicos presentaron otra imagen de la revolución. Su capacidad para ganar las elecciones y para marginalizar políticamente al primer grupo, provocó no sólo descontento pero además una crisis de identidad entre los revolucionarios de la Plaza Tahrir en el Cairo, o los del UGTT, y los revolucionarios seculares en Túnez.

Mientras los primeros activistas se destacaron durante el período revolucionario que llevó al derrocamiento del viejo régimen (28 días en Túnez, 18 días en Egipto), los actores Islamistas se destacaron luego del derrocamiento de los viejos autócratas y la apertura de

una nueva era, durante la cual se debía concebir una nueva constitución, llevar a cabo elecciones parlamentarias y presidenciales, en resumen, durante la cual se debía establecer un nuevo sistema político.

Los actores del primer período argumentaban que la revolución había sido “robada” por los Islamistas, quienes habían “traicionado” a los ideales del levantamiento popular.³ Esto profundizó la división entre el estrato religioso y el popular de una forma más dramática que la situación previa a las revoluciones.

Los dos tipos de actores están motivados por la misma aspiración en algunos aspectos (justicia social, el fin de la corrupción y el nepotismo, y la lucha en contra del viejo régimen), pero sus principales diferencias se hallan en su concepción de la religión y su relación con la libertad individual y la política. Mientras los primeros demandan una sociedad tolerante y abierta en términos religiosos, los segundos pretenden alcanzar la Islamización de la sociedad a través del nuevo sistema político. Los Islamistas que tomaron las riendas del poder luego de las elecciones en Túnez y Egipto, están al mismo tiempo divididos en dos grandes grupos: aquellos a quienes les gustaría promover la Islamización a través del proceso democrático, y aquellos a quienes les gustaría crear una sociedad Islámica mediante la imposición, una vez que se apoderen del sistema político. Esto ha generado una brecha cada vez más profunda entre los Salafis, con unos que se niegan a jugar el

3 Ver Mark Le Vine, Tahrir's late night conversations, Aljazeera en inglés, 05, diciembre, 2011.

juego democrático, considerándoles como “idólatras”, mientras otros aceptan respetar las reglas electorales, y empujar gradualmente hacia un gobierno Islámico. Las situaciones son diferentes en los dos países en varios aspectos. Egipto es una sociedad cuya identidad Islámica ha sido reforzada luego de la muerte de Nasser en 1970, a través de un proceso de Islamización desde abajo, por la Hermandad Musulmana y luego por los Salafistas quienes están profundamente influenciados por el modelo de Islam Wahabita de Arabia Saudita. Túnez fue empujado hacia el tipo de secularismo francés (laïcité) por el primer Presidente Habib Bourguiba (1957-1987), y las clases medias seculares cuyos reclamos por una modernidad no religiosa fueron apoyados por el segundo Presidente Ben Ali (1987-2010) se convirtieron en la parte visible de la sociedad Tunecina luego de la “Revolución del Jazmín” que derrocó al último presidente.

Una vez que esos regímenes cayeron, la política cambió radicalmente, tanto en la realidad diaria de los dos países como en la subjetividad de los actores revolucionarios.

La naturaleza de las nuevas fuerzas revolucionarias

Las revoluciones en Túnez y Egipto fueron impulsadas por quienes no tenían la intención de tomar el poder una vez que colapsaran los viejos regímenes. La juventud que derrocó los viejos regímenes mantenía una perspectiva “no Leninista”. Contrario al modelo clásico de revolución encarnada en las revoluciones Francesa, Rusa, China e Irán, en las que la élite que derroca el vie-

jo régimen está deseoso por asumir las riendas del gobierno, luego de luchas violentas con los otros revolucionarios las dos principales revoluciones Árabes fueron dirigidas por personas que rehuieron del poder. No sólo no estaban preparados para tomar el poder, sino que estaban firmemente resueltos a no buscarlo, en parte debido a su postura moral, en parte debido a su visión del gobierno como algo turbio por naturaleza, y que por lo tanto uno no debería ensuciar sus manos con éste.

Las otras razones que impidieron al primer período de revolucionarios acceder al poder fue una mentalidad que puede ser calificada como de “alma bella” (la “*Schöne Seele*” Hegeliana), que no es capaz de afrontar la realidad política y social luego del colapso del viejo régimen. Las nuevas generaciones, en su mayoría jóvenes, educados, de clase media, que participaron en la Plaza Tahrir en el Cairo, querían desechar el gobierno autocrático, y poner fin a la corrupción y la injusticia social vinculada a éste. Una vez que el gobierno fue derrocado, los principales activistas entre estos jóvenes pensaron que su tarea había sido cumplida. En Túnez, el sindicato principal, la UGTT, estaba profundamente involucrado con la revolución a través de simpatizantes del segmento medio (los estratos altos estaban dominados por el régimen de Ben Ali). Pero los sindicalistas desconfiaban profundamente de su compromiso político y limitaron su campo de actividad a la defensa de los intereses de los trabajadores. Al hacerlo, el único grupo organizado que podría haber construido una alternativa a la Hermandad Musulmana se excluyó a sí mismo de la arena polí-

tica. La otra organización con ramificaciones políticas dentro del país era la RCD (*Rassemblement Constitutionnel Démocratique*), fundada en 1988 por Ben Ali y disuelta en marzo de 2011 por decisión de la corte. El campo político estaba así abierto al partido de la Hermandad Musulmana Ennahda, el único grupo político que disponía de una organización fuerte, incluso luego de décadas de represión por parte del régimen de Ben Ali.

Otra debilidad de los revolucionarios fue su dispersión en varios partidos políticos que nacieron ya para morir. Luego de la revolución, surgieron más de 150 partidos políticos en Túnez. Entre ellos, 115 partidos políticos fueron legalizados en vísperas de las elecciones, 97 presentaron diferentes listas de candidatos, y sólo 19 partidos obtuvieron algún asiento en el parlamento. La mayoría de los revolucionarios no estaban acostumbrados a la acción política.⁴ Además, no estaban animados por un espíritu de comunicación y compromiso político entre ellos. Su falta de experiencia política ayudó a la vieja organización de Ennahda a convertirse en el principal partido político en el país luego de la revolución.

Las clases medias seculares y su fragilidad

Otro factor que debilitó a los revolucionarios fue la historia de las clases medias laicas en el mundo Árabe.

Las clases medias habían estado supe-
 peditadas a los regímenes autoritarios anteriores en sus principales tendencias. Muchos intelectuales y grupos de oposición nacieron allí mismo pero los regímenes en Túnez y Egipto les vinculaban con Occidente debido a su perspectiva “moderna” y “secular”. En Túnez, bajo Bourguiba, habían promovido un código penal relativamente moderno en el cual muy pocos aspectos de la Sharia tradicional eran preservados (el patrimonio de las mujeres continuaba siendo la mitad del de los hombres, y el matrimonio de las mujeres con extranjeros no-Musulmanes estaba restringido). El sistema legal, muy inspirado por un espíritu francés, prohibía la poligamia y promovía que las mujeres fueran legalmente iguales a los hombres en varios aspectos. En general, ante los ojos Islamistas, las personas de clase media estaban ya sea del lado de los regímenes autoritarios o permanecían neutrales ante éstos y en contra de su deseo de Islamizar la sociedad. En realidad, muchos tunecinos y egipcios laicos se oponían a los regímenes pero compartían con los gobiernos autoritarios en Túnez y Egipto, su profunda desconfianza hacia los Islamistas, particularmente la Hermandad Musulmana. Los regímenes protegían a las clases medias y particularmente a sus mujeres, a costa de robar su representación no sólo en los partidos políticos pero también en varias asociaciones voluntarias.

A esta situación en Túnez se añadía

4 Ver Mohamed Akrimi, “La Baraka d’Ennahdha rayonne sur ses voisins”, *Alhiwar.net*, 15 novembre 2011; Mohamed-Ali Razgallah, “Partis politiques tunisiens. L’embaras du choix”, *Fhimt.com*, août 2011; Tunisie – 111 partis autorisés et 162 autres refusés !”, *Business News*, 20 septembre 2011.

la ignorancia absoluta sobre los salafistas por parte de varios tunecinos seculares. En Egipto, el régimen de Mubarak toleraba e incluso alentaba a los salafistas porque eran apolíticos y mantenían que incluso un gobernante represivo no debería ser impugnado, y así evitar correr el riesgo de *Fitna*, la discrepancia y el caos en la comunidad musulmana.

Entre los seculares, tanto en Túnez como en Egipto, había una fuerte desconfianza hacia los grupos islámicos y sospechaban de la ambivalencia de la Hermandad Musulmana, incluso de la existencia de un proyecto oculto de islamización de la sociedad en sus leyes y sistema político.

De alguna manera, las clases medias estaban atrapadas entre los islamistas y el gobierno: los regímenes políticos autocráticos los protegían al costo de su heteronomía política. Gran parte de la clase media rechazaba esta alternativa y se sublevaron en contra de los regímenes. Pero la mayoría de sus miembros se conformaron con la estructura de poder imperante a causa de una falta de alternativa. Otro daño generado por los regímenes autoritarios a las clases medias seculares era el monopolio que ejercían sobre los partidos políticos que contaban con gran cantidad de miembros seculares. Los islamistas escaparon de este monopolio en Egipto (la Hermandad Musulmana preservó su autonomía política y su estructura incluso siendo duramente reprimidos por los regímenes sucesivos en Egipto bajo Nasser, Sadat –cuya prohibición era menos severa–, y Mubarak). Por su parte, los islamistas eran prohibidos o restringidos a una posición minori-

taria: en las elecciones egipcias de 2005 se concedió a los miembros de la Hermandad Musulmana 88 escaños de un total de 454 como independientes, mucho menos de su peso electoral real; en 2010, incluso esa apertura llegó a su fin ya que mediante fraude, los miembros de ese partido fueron completamente barridos del Parlamento. La Hermandad Musulmana mantuvo su identidad islámica y su estructura política también en Túnez. Frente a su prohibición y el arresto de sus líderes, muchos de los miembros de la Hermandad Musulmana tunecina – su nombre cambió de Asociación Islámica en 1976, a Movimiento de Tendencia Islámica (MTI) en 1981, a Ennahda en 1988 – huyeron a Inglaterra y Francia en 1991, donde continuaron oponiéndose al régimen tunecino.

Los partidos políticos seculares que se oponían a los regímenes egipcio y tunecino, no actuaron continuamente fuera del país, aunque muchos eran reprimidos o prohibidos por los dos regímenes.

Asuntos relativos a la mujer

En términos de género, las mujeres seculares vivían la misma situación bajo las autocracias tunecina y egipcia. En ambos países, las famosas esposas de los Presidentes (Suzan Mubarak en Egipto, Leïla Trabelsi en Túnez) eran líderes de las organizaciones oficiales de mujeres (Leïla Trabelsi era líder de la Organización de las Mujeres Árabes, y el Consejo Nacional para las Mujeres en Egipto era dirigido por Farkhonda Hassan, amiga de Suzan Mubarak y colocada

como una “*straw woman*”⁵). El gobierno egipcio prohibió la Asociación de Mujeres egipcias, autónoma en su relación con la familia Mubarak. En las elecciones de 2010, una nueva ley garantizó 64 escaños para candidatas mujeres, un aumento importante para mujeres parlamentarias.⁶ Las mujeres particularmente de clase media y seculares, padecieron la dominación de las “Primeras Damas” sobre las organizaciones de mujeres⁷, pero a cambio de ello los Islamistas no lograron imponer un sistema patriarcal inspirado por la Sharia como sucedió en Argelia a través del “Código de la familia” en 1984.⁸ Las mujeres contaron con ciertos privilegios sociales y en varias ocasiones fueron defendidas ante las incursiones en la ley por parte de los Islamistas, particularmente en Túnez, y para ello pagaron el precio de su marginalización social y política. Les fue negada la organización autónoma y bajo el paraguas de los regímenes autoritarios se convirtieron en ciudadanas de segunda, en parte semejante a los hombres seculares. Sin embargo, mantuvieron su perspectiva secular de la vida bajo el gobierno autocrático de los déspotas.

La paradoja del lugar de las mujeres en la Primavera Árabe es que muchas de ellas alcanzaron la fama a nivel individual y mostraron una gran capacidad de liderazgo durante el movimiento de protesta, en el cual jugaron un papel significativo. En Egipto, la joven Asmaa Mahfouz (nacida en 1985) se convirtió en una dirigente del movimiento de protesta en el Cairo; en Yemen Tawakkul Karman (nacida en 1979) se convirtió en una de las principales figuras de oposición al Presidente Saleh, y ganó el Premio Nobel de la Paz en 2011. En Túnez, mujeres jóvenes periodistas se involucraron en el movimiento de protesta y su papel fue de vital importancia en el derrocamiento del régimen de Ben Ali. Las mujeres, a nivel individual, estuvieron presentes masivamente no sólo como soldados de infantería (algo que habían logrado durante la guerra de independencia de Argelia a inicios de los sesentas), pero también como figuras prominentes.⁹ Sin embargo, fueron débiles a nivel organizacional y no participaron en la toma de decisión sobre temas políticos debido a su falta de relaciones orgánicas con los partidos políticos que

5 El término en inglés hace referencia a una falacia, la falsa representación de la posición de un supuesto rival.

6 Ver Evan Hill, Women make leap in Egypt parliament, Aljazeera English, 29 November 2010 www.aljazeera.com/news/middleeast/2010/11/2010111813029420433.html

7 Las feministas percibieron el papel perverso de las Primeras Damas hacia el movimiento feminista: “Suzanne Mubarak killed the feminist movement so she could be the leader,” said the feminist Nawal el Saadawi. Ver Iman Azzi, *Suzanne Mubarak Held Women Back*, 17 de febrero, 2011 <http://womensenews.org/story/the-world/110216/cairo-leaders-suzanne-mubarak-held-women-back5>

8 Teresa Camacho de Abes, Mujeres argelinas entre la Emancipación Francesa y la Dominación Religiosa sobre el Matrimonio y el Divorcio, en una Ordenanza de 1959 No. 59-274 a 1984 *Code de la Famille*, *Journal of International Women's Studies* Vol. 12 # 3.

9 Las mujeres árabes organizaron manifestaciones y piquetes, movilizaron a otros ciudadanos y expresaron sus demandas por un cambio democrático, Aljazeera Inglés, 25 de abril, 2011.

podrían defender su causa. Fuertes a nivel individual, débiles a nivel colectivo, la nueva generación de mujeres puede decirse que fue frágil en la Primavera Árabe, aunque altamente visible en las manifestaciones callejeras.

Las divisiones entre las mujeres laicas y las Islamistas en Túnez no ayudó a encontrar un terreno común entre ellas, con las primeras sospechando que las segundas eran “retrógradas” y las segundas creyendo que las primeras eran mujeres sin alma, egoístas, occidentalizadas, y pudientes, a quienes no les preocupaba la mayoría de las mujeres Musulmanas en el nombre de su actitud “Francesa” (es decir, “colonial”) hacia los temas de género. El miedo y la ansiedad frente a la idea de retroceder en su estatus social a través del gobierno Islámico ha sido una de las principales preocupaciones de las mujeres seculares, y no imaginaron que su destino iba a empeorar luego de la revolución.¹⁰ Más allá de esta división, la fragilidad de las mujeres como actoras sociales en el mundo Árabe está vinculada a los profundos prejuicios, su propia invisibilidad y ausencia, en parte impuesta sobre ellas, de la esfera pública. Los dirigentes políticos no las consideran como activos prioritarios a defender.¹¹ En las elecciones parlamentarias luego de la Revolución Egipcia, las mujeres consi-

guieron el 2% de los puestos, una reducción del 12% desde las últimas elecciones que se mantuvieron bajo el gobierno de Mubarak.¹² A nivel institucional, las revoluciones egipcia y tunecina parecen haber empujado a las mujeres hacia un estatus político y social regresivo, mientras que ellas aumentaron su autoconciencia como ciudadanas.

Túnez, los dos mundos en conflicto

En Túnez, luego de las elecciones, la aparición de la Hermandad Musulmana como el principal actor político, y la emergencia de los Salafis como Musulmanes fundamentalistas extremos tomaron por sorpresa a las clases medias seculares. Resultó en una profunda crisis de identidad entre ellos. Mantenían no haber tenido conocimiento de la existencia de dos grupos en la sociedad tunecina, el suyo y el de los Salafis, quienes al parecer no habían pasado por el proceso de secularización inspirada por los franceses, la llamada *Laïcité*, tan apreciada por las clases medias seculares. La crisis entre los seculares, intelectuales y otros, era de tal profundidad que llegaron a cuestionarse pertenecer a la misma sociedad o país.

Durante los dos largos reinados de Bourguiba y Ben Ali, se dio por sentada la identidad laica: las mujeres laicas dis-

10 Rana S. Sweis, “Arab Spring Fails to Allay Women’s Anxieties”, NYT, 7 de marzo, 2012.

11 Why Arab women still ‘have no voice’, Amal al-Malki, una autora de Qatar afirma que la Primavera Árabe le ha fallado a las mujeres en su lucha por la igualdad. Talk to Al Jazeera 21 de abril, 2012 http://www.dailymotion.com/video/xr4898_talk-to-al-jazeera-why-arab-women-still-have-no-voice_news#.USOMmOj6Uc

12 Leila Fadel e Ingy Hassieb, Las mujeres egipcias se sienten excluidas, a pesar de las promesas de la revolución. *Washington Post*, 22 de mayo, 2012.

frutaban de las condiciones de género más igualitarias en el mundo Árabe, y la religión fue empujada a la esfera privada, de manera similar al modelo Francés. Luego de las elecciones, la intervención perturbadora de los Salafis, su despliegue de la bandera negra con la inscripción Islámica en la universidad y su actitud intimidante hacia los hombres y mujeres laicos generó malestar entre las clases seculares. Durante el período de Ben Ali, consideraron que un mundo secular estaba garantizado por el régimen y que en parte, era afín a toda la sociedad tunecina. Luego de la revolución, la identidad Islámica un tanto ostentosa se convirtió en tema de debate entre los seculares. La vida durante el período de Ben Ali había causado un efecto de anestesia a los seculares de clase media que hasta llegaban a creer que vivían en Francia pero sin un sistema democrático. Túnez era el país más secularizado de África del Norte, mucho más secular que Argelia (aunque este último había sido una colonia francesa por 130 años, al contrario del otro que era un protectorado desde hacía 75 años) y Marruecos. El estilo de vida secular francés tenía tal influencia sobre las clases medias, que no podían imaginar a los grandes grupos salafistas en Túnez afirmando públicamente su perspectiva fundamentalista sobre la ortodoxia Islámica, reclamando a las mujeres que vistieran de forma “modesta”, demandando un gobierno Islámico que aplicara la Sharia, ocupando universi-

dades para procurar que las jóvenes estudiantes ingresaran usando velo, y destruyendo las bebidas alcohólicas en los bares y restaurantes (eso sucedió en la ciudad de Sidi Bouzid en septiembre de 2012 donde la inmolación de Bouazizi en el fuego había disparado la revolución tunecina en 2010). Esta otra imagen de Túnez parecía una pesadilla, y cuando ocurrió, su angustia y disgusto de la revolución tunecina llevó a muchos de ellos a sentir nostalgia por el gobierno secular que había sido derrocado.

El asesinato de Chokri Belaïd el 6 de febrero de 2013 debido a la instigación por parte de los predicadores Salafis radicales, fue la señal que llevó a los disturbios sociales. Decenas de miles de personas salieron a las calles en protesta contra su asesino, acusando al Ennahda por haber fallado en protegerlo. Con la Constitución aún en el limbo, la economía en una fase crítica (17% de desempleo comparado con 13% al final del viejo régimen) y la política estancada, la fractura entre Islamistas y Secularistas se ha agudizado de manera peligrosa.¹³ Pero la violencia no ha alcanzado los niveles egipcios y el diálogo entre los partidos políticos puede evitar la radicalización y el retorno del autoritarismo. La política callejera parece reemplazar a la política, con el ejército nacional cada vez más visible y la crisis dentro de los partidos políticos empujando hacia la radicalización en la calle.¹⁴ La división entre los Islamistas y

13 Aida Alami, “Tunisia Sinks Back Into Turmoil”, *New York Times*, 13 de febrero, 2013.

14 Larbi Sadiki, Túnez: The return of street politics, *Aljazeera English*, 15 Febrero 2013.

secularistas nunca ha sido tan profunda, lo cual dificulta mucho el diálogo debido a la sospecha mutua y la ira.¹⁵

Egipto, la incompatibilidad entre la juventud radicalizada y el gobierno Islamista

En Egipto, quienes hicieron la revolución no fueron quienes tomaron el poder a través de las elecciones, es decir, la Hermandad Musulmana y los Salafistas. La llegada de Morsi como Presidente coincidió con la crisis económica de una economía altamente dependiente del turismo. Aunque tanto Morsi como el parlamento habían sido “democráticamente” electos, su actitud al proponer la nueva Constitución y pasarla por los legítimos organismos, parecía fuera de tono con las demandas de la oposición y las aspiraciones de la juventud revolucionaria. Estos últimos habían imaginado a la revolución como una ruptura radical con el pasado. Entre ellos, organizaciones similares a milicias como los Ultras (aficionados del fútbol) y los Black Block (juventud que viste de negro con máscaras que esconden su rostro) no se abstienen de ejercer violencia y creen que el período de “*selmiyeh* (tranquilidad) que caracterizó a la revolución en sus inicios, ya ha terminado, y que en contra del “Fascismo” (el nuevo gobierno) la violencia es legítima. La oposición política, aunque ha roto con el gobierno, se halla sin poder alguno contra estos grupos violentos que se ex-

panden por las grandes ciudades (Cairo, Alejandría) pero también en aquellas como Port Said, donde una industria turística estancada promueve la violencia en parte de una sociedad que considera a la Hermandad Musulmana como la raíz de los males sociales y políticos.

En el segundo aniversario de la revolución egipcia se produjeron protestas callejeras contra el gobierno y la nueva Constitución, al contrario de lo sucedido en el aniversario de la revolución tunecina, celebrado de manera discreta con manifestaciones callejeras pacíficas. En Egipto, se dieron fallos polémicos en el fútbol en Port Said que coincidió con el aniversario de la revolución que encendieron a la ciudad. El Presidente impuso el toque de queda en tres ciudades, ignorado por los manifestantes que se volvieron violentos.

La ruptura no es sólo entre la juventud radical y el gobierno, sino también entre los seculares descontentos y la Hermandad Musulmana, que se encuentran en desacuerdo sobre el futuro de Egipto y su vida social, cultural y política. Las personas de clase media que habían jugado un papel central en los inicios de la revolución, son cada vez menos proclives a aceptar su marginalización en nombre de la Hermandad Musulmana que se ha apoderado del Estado. Para ellos, el gobierno de Morsi no sólo es ilegal pero más que nada ilegítimo, debido a su dominio de la vida política y a su desprecio por los ideales revolucionarios. Una vez rota la pared del

15 Hashem Ahelbarra, Tunisia's Islamist-secularist rift, 11 de febrero, 2013. <http://blogs.aljazeera.com/blog/africa/tunisia-islamist-secularist-rift12>

miedo luego de la Revolución, esta parte de la sociedad busca la confrontación con el Poder, mientras la policía y las fuerzas de seguridad, que aún recuerdan haber sido acusados de reprimir a los manifestantes bajo el gobierno de Mubarak, no están para nada dispuestos a contener las violentas protestas callejeras.

La violencia se convierte en cada vez menos política y cada vez más auto-sostenible¹⁶, como una forma de identidad de aquellos que mantienen que su papel es el de perpetuar los levantamientos revolucionarios en venganza contra un gobierno que ha traicionado a los ideales revolucionarios. Esta violencia que se perpetúa a sí misma se cristaliza en un lugar bastante simbólico: la Plaza Tahrir en el Cairo. Este lugar, donde nació la revolución, es considerado por muchos de manera simbólica, como intocable. Aquellos que de vez en cuando la ocupan, creen revivir y mantener viva la ética revolucionaria, al celebrar la resistencia al Presidente Morsi, a quien consideran un contra-revolucionario debido a la manera despectiva en que hizo que la asamblea constituyente adoptara la Constitución, a pesar del rechazo de la oposición legal en Egipto. Este tipo de violencia que se perpetúa a sí misma, va olvidando su causa original e impide la institucionalización de la democracia.

La falta de capacidad de los revolucionarios de la “juventud Tahrir” para involucrarse en política luego del derrocamiento del régimen de Mubarak, para

construir fuerza política y para comprometerse con las otras fuerzas seculares y construir una coalición política en contra de la Hermandad Musulmana, o de manera más general, la dispersión en numerosos partidos políticos por parte de los actores que no forman parte de la Hermandad, resultó en olas de violencia en las calles entre aquellos grupos que están cada vez más convencidos de que en Egipto la política no es la respuesta al problema de la dominación de la Hermandad Musulmana, y que la violencia es el medio principal para alcanzar sus objetivos revolucionarios.

La división cada vez mayor entre los primeros actores revolucionarios (clases medias seculares que demandaban una “democracia total”) y los segundos actores (con mentalidad religiosa y la exigencia del Islam como piedra angular de la política, menos preocupados por la democracia que por la identidad Islámica como el principio de la vida política y social), y la falta de habilidad de la oposición para unificar y así limitar la influencia de la Hermandad Musulmana, profundiza la crisis en una sociedad en que la principal preocupación es afrontar la crisis económica. Muchos jóvenes, desilusionados con los resultados de la revolución en términos económicos y políticos, buscan refugio en la violencia anárquica, lo que resulta en disturbios entrelazados con la regresión de la economía, y termina con la espiral de la inestabilidad política.¹⁷

16 Sherine Tadros, Egypt: More violent, less political, 29 de enero, 2013. <http://blogs.aljazeera.com/blog/middle-east/egypt-more-violent-less-political>

17 Egypt Conflict Alert, Brussels/Cairo, 4 de febrero, 2013, International Crisis Group. <http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/alerts/2013/egypt-conflict-alert.aspx>

En comparación con la violencia en Egipto, en Túnez la institucionalización de la democracia parece ser menos tortuosa.¹⁸ El segundo aniversario de la revolución fue celebrado sin violencia, mientras que en Egipto la semana de celebración fue testigo de más de sesenta muertes.

2. Los profundos obstáculos estructurales a la democracia: el papel del gobierno y la milicia étnica y religiosa

Entre los profundos obstáculos estructurales, puede mencionarse la relevancia de las estructuras tribales en muchos países Árabes (en particular Libia y Yemen), la división religiosa (en Siria entre los Alauís y los Sunitas, en Yemen entre los Hutis, una minoría Shiíta, y los Sunitas, Shiítas versus Sunitas en Bahrein, o entre Islamistas y Cristianos –los Coptos- en Egipto), y las divisiones geográficas (en Yemen entre Norte y Sur, en Libia entre Este, Oeste y Sur). Los factores geopolíticos también juegan su papel: Arabia Saudita no tolera que la mayoría Shiíta se convierta en el principal actor político en Bahrein, la cuestión Palestina todavía está ensombrecida por la hegemonía militar y económica de Israel respaldada por los Estados Unidos, las relaciones Sirio-Libanesas están influenciadas por Irán (partidario de Jz-bola en el Líbano) y los otros actores regionales e internacionales.

La Primavera Árabe comenzó con movimientos que tuvieron la intención de superar las divisiones étnicas y religiosas dentro de cada sociedad. En Bahrein, el principal '*leitmotiv*' era "Ni Shiíta, ni Sunita, sólo Bahreiníes". En Siria, el mismo tipo de eslogan fue usado para hacer hincapié en la identidad siria por encima de las líneas sectario-religiosas Alauitas/Sunitas/Kurdos (su eslogan era: "Alá, Siria, Libertad y nada más" (*Allah, Suriya, Hurriya va bass*).¹⁹ En Egipto, los Coptos y Musulmanes oraban en la Plaza Tahrir para mostrar su solidaridad más allá de las diferencias religiosas. En Yemen, la juventud de la Plaza Tahrir en Manama, cerca de la universidad, defendían la idea de una nación Yemení en lugar de una identidad tribal. Los movimientos de la Primavera Árabe eran movimientos de la "sociedad civil." Los conflictos étnico-religiosos fueron disparados nuevamente en varios países mediante un complot del Estado con el fin de debilitar a estos movimientos.²⁰ En Yemen, Libia, Bahrein y Siria, los gobiernos pusieron en primera línea a las tensiones étnicas para poder luchar contra la ola revolucionaria. Al ser ellos mismos resultado del control y equilibrio étnico, a su vez manipularon las relaciones étnicas que ellos habían reconfigurado durante las últimas décadas, con el fin de dividir a los movimientos civiles que tenían la intención de superar la etnicidad en nom-

18 Mike Hanna, A tale of two anniversaries, Aljazeera Inglés, 28 de enero, 2013. <http://blogs.aljazeera.com/blog/middle-east/tale-two-anniversaries11>

19 Samar Yazek, *Feux Croisés: journal de la révolution syrienne*, Paris, Buchet-Chastel, 2012.

20 Para el caso de Egipto en relación al movimiento en la esfera civil, ver Jeffrey Alexander, *Performative Revolution in Egypt*, Bloomsbury Academic, Londres, 2011.

bre de una ciudadanía democrática. Su éxito se debió a la debilidad de los movimientos de la sociedad civil que pretendían cuestionar la supremacía de la etnicidad en el campo político.

En Siria, el gobierno logró que el movimiento ciudadano se reconfigurara y surgieran conflictos religiosos entre Sunitas, Kurdos y Alauitas, con la jerarquía del ejército y las organizaciones paramilitares dominadas por los Alauitas, con el apoyo financiero y político de Rusia e Irán al régimen de Assad, mientras Turquía, Arabia Saudita, Qatar y los países occidentales dotaban de los medios financieros a las fuerzas de oposición. Luego de casi dos años de lucha, 70 mil sirios fueron asesinados por el “Gobierno de la Barbarie” con una oposición que se había tornado violenta en un contexto en el que la acción no violenta se enfrentaba al asesinato en masa.²¹

Debido al debilitamiento de los movimientos de sociedad civil y el gobierno, los grupos yihadistas que estaban a la defensiva durante el período de floración de la Primavera Árabe, fueron revitalizados, y en el vacío entre Estados debilitados y movimientos sociales desarraigados, encontraron nuevas oportunidades para organizarse, ya sea en Siria (en los distritos en Aleppo) o en Yemen (los movimientos tipo Al Qaeda se esparcieron en áreas con una limitada presencia gubernamental).

En Libia, con la asistencia de las Fuerzas Aéreas de la OTAN, los libios expulsaron al dictador Gadafi en febrero de 2011, pero la escasez de población (alrededor de seis millones) en un país enorme, la falta de un “Estado profundo” (la “nación” Libia era el resultado de la ocupación de Italia hasta 1947), y la tensión entre las regiones, dificultó el establecimiento de un poder centralizado, y el país está cerca de convertirse en un “estado fallido”, con grupos tribales, grupos guerreros e Islamistas que recurrieron a las armas durante el levantamiento que llevó a esporádicos brotes de violencia en el país. Los grupos rivales anarquistas, grupos “revolucionarios” (*thuwwar*), ven a sus opositores como quintas columnas contra-revolucionarias, peleándose entre ellos y desafiando así cualquier estructura centralizada del ejército.²² La gran variedad de milicias autónomas con ideologías abigarradas y origen geográfico dificulta enormemente su integración a un ejército y policía nacionales, dentro de un Estado central.²³

En Yemen, la división entre el Norte y el Sur, la presencia de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP), las milicias tribales que pelean contra estos últimos (denominados *Ansar al Sharia*), los cabecillas de guerra que ocupan importantes posiciones en el ejército y entre las tribus, y la rebelión de los Hutis en

21 Michel Seurat caracterizó al Estado de Siria como el “Estado de la Barbarie” (Etat de Barbarie). Ver: Michel Seurat, *Syrie, L'Etat de Barbarie*, Puf, 2012, basado en artículos publicados primero en la década de los ochentas (fue asesinado en 1986 en el Líbano, como rehén).

22 Ver Nicolas Pelham, “Libya’s Restive Revolutionaries”, *Merip*, 1 de junio, 2012.

23 Ver Dario Cristiani, *The Zintan Militia and the Fragmented Libyan State*, Jamestown Foundation, 19 de enero, 2012.

contra del gobierno Sunita en el Norte, configuran una violencia estructural en un país gobernado por un estado débil. Los grupos locales cada vez más son quienes realmente gobiernan varias regiones en el país.²⁴ La estructura tribal de Yemen se combina con el gobierno de las milicias locales fuera de la capital, realizando compromisos con los grupos Islamistas radicales, para desembocar en una violencia esporádica que se convierte en endémica.

En Bahréin, la geopolítica juega un papel importantísimo en retener al movimiento de la sociedad civil que comenzó en la Primavera Árabe reclamando la construcción de una identidad Bahreiní más allá de la división Shiíta/Sunita. En marzo de 2011 Arabia Saudita movilizó sus tropas bajo el título de “Consejo de Cooperación del Golfo” e invadió Bahréin, contribuyendo a la represión de los disturbios civiles. Desde entonces, el movimiento se ha acercado al esquema que el gobierno de Bahréin propagó, es decir, a la línea étnico-religiosa, enfrentando a Shiítas con Sunitas en un país donde los primeros son una mayoría dominada por el reino Sunita. La violencia esporádica y la represión severa por parte de las fuerzas de seguridad, continúan, con Bahréin siendo un ejemplo de la influencia de la habilidad de la geopolítica regional para distorsionar los movimientos de la esfera civil y empujarlos hacia líneas sectarias.²⁵

¿Islam como un nuevo elemento de discordia?

Egipto, luego de Nasser, comenzó su mutación con un cuestionamiento al secularismo promovido por el panarabismo de Nasser. El fracaso de este último en la Guerra de los Seis Días contra Israel y el período de posguerra, puso en duda al panarabismo secular como tal. Los gobiernos de Sadat y Mubarak estuvieron marcados por una Islamización gradual desde abajo, primero a través de las caridades y organizaciones de la Hermandad Musulmana en los distritos de clase media, y luego a través de los Salafís quienes evitaron la política pero promovieron las costumbres islámicas en las áreas rurales y en los sectores más pobres de las ciudades. La paradoja es que la Islamización desde debajo de la sociedad egipcia en gran parte ya se había logrado cuando la Revolución irrumpió en enero de 2011. Aquellos que participaron en ella eran seculares, pero en términos de costumbres eran una minoría en la sociedad. En el Cairo, la gran mayoría de las mujeres usan el *hijab* (velo islámico) y el Islam está mucho más presente y generalizado en la vida pública que en la época de Nasser. La secularización puede ocurrir a través del rechazo del Islam y en ruptura con éste, o por medio del Islam y adoptándolo como una fuerza que conduzca al cambio. En Egipto, la Islamización des-

24 Ver “Tribal Militias in Yemen: Al Bayda and Shabwah”, 02/07/2013, *Critical Threats*. <http://www.criticalthreats.org>

25 Justin Gengler “Bahrain’s Sunni Awakening”, 17 de enero, 2012, Merip.

de abajo significó la liberación inmediata de la capacidad de asumir una actitud secularizada con la política y, entre los Salafis, demandar la Sharia como la nueva constitución para el país. Al respecto, la Islamización tomó dos rumbos opuestos. Entre los Hermanos Musulmanes, la aceptación del voto popular y la actitud ambigua hacia los temas de género fueron de la mano del respeto al proceso electoral. Entre los Salafis, la constitución de los partidos políticos (*Al-Nour*, y luego, *Al-Sha'ab*) está vinculada a su disidencia en términos de generación y proyecto social (*Al-Nour* es conservador en lo que refiere a la economía, mientras *Al-Sha'ab* tiende a tomar en consideración a las necesidades de los marginalizados, la clase trabajadora de bajos recursos y los ciudadanos rurales). Los partidos políticos Salafistas además, marcan una separación entre sus líderes religiosos y políticos. Mientras los primeros tienden a ser ultra-ortodoxos en sus creencias religiosas, los últimos tienden a hacer compromisos políticos y la disociación entre el liderazgo político y el religioso debe ser beneficioso para la secularización.²⁶ Aún así, los Salafis muestran intolerancia hacia los Coptos (Cristianos egipcios que constituyen el 10% de la población) y los seculares, y se proponen imponer la Sharia dentro de la constitución y en la vida cotidiana.

Las relaciones entre los Salafis y la Hermandad Musulmana son bastante complejas (aunque en el voto por la

Constitución egipcia, iban codo a codo), pero son los seculares quienes están en contra de ellos en relación a temas culturales y religiosos (en temas políticos, se han generado alianzas ad hoc con los partidos seculares contra la Hermandad Musulmana para debilitar su control sobre el campo político). La sospecha entre ambos grupos (seculares versus religiosos) trasciende la lealtad política y es perjudicial para la democratización, en tanto sus expectativas en conflicto se convierten en profecías auto-realizadas. Los seculares rechazan rotundamente a los grupos religiosos (la Hermandad Musulmana y los Salafis), acusándoles de intentar establecer un sistema político teocrático. En Túnez, las clases medias seculares creen que Ennahda está promoviendo un sistema político Islamista donde los derechos de las mujeres serán definidos de acuerdo con la Sharia y los seculares se verán en peligro a través de la jurisprudencia Islámica. Esta lectura les lleva a actuar de manera antagónica hacia la Hermandad Musulmana, lo cual a su vez debilita la habilidad del gobierno para resolver los severos problemas sociales y económicos. Ennahda a su vez, se encuentra dividida entre aquellos que demandan más Islamización y las demandas absolutamente seculares de las clases medias occidentalizadas.

En términos generales, la Islamización de numerosos grupos dentro de los dos países ha provocado una actitud de sospecha mutua entre las dos principa-

26 Ver Mai Shams El-Din, "New Salafi party has curious policy mix" 23/10/2012 <http://www.egyptindependent.com/node/1196166>

les tendencias, la secular versus los grupos Islámicos. Ello perjudica los esfuerzos de reconciliación a nivel político, en tanto los Islamistas creen que los seculares quieren restablecer el viejo orden político mediante la vieja guardia del Antiguo Régimen (llamado el *folul* en Egipto, y los RCD-istas en Túnez, miembros del partido de simpatizantes de Ben Ali durante su gobierno, *Rassemblement Constitutionnel Democratique*, RCD). La propia noción de *folul* es merecedora de atención: para los Islamistas, aquellos que se oponen a ellos son sospechosos de trabajar con los remanentes de las viejas guardias (los *folul*) del régimen de Mubarak. En cambio, para los seculares, cualquier cosa que hagan los Islamistas tiene como agenda escondida la teocracia Islámica, el disenso interno (entre los Salafis y la Hermandad Musulmana) es exagerado, y su intención real es la marginalización de los grupos no Islámicos. Estos dos tipos de sospecha debilitan la capacidad de diálogo en un sistema político marcado por la desconfianza mutua y la falta de capacidad de cooperación mediante un sistema político más consensuado. Al asignarse unos a otros el papel del malo, cortan los puentes para trabajar de manera conjunta dentro del nuevo sistema político y contribuyen así a debilitar la alternativa democrática al autoritarismo.

El proceso conflictivo de secularización

Desde el siglo XIX, el proceso de modernización dio a luz a una profunda oposición entre las personas cuya visión del mundo había sido transformada por la secularización, y aquellos que se

mantenían adheridos al principio fundamental del Islam. Esta situación cambió enormemente cuando el frente Islámico se dividió en reformistas (llamados Salafistas a fines del Siglo XIX y comienzos del Siglo XX) y los tradicionalistas o fundamentalistas. Del lado de los seculares además, estaban aquellos que demandaban una ruptura profunda con la visión del mundo Islámico, y aquellos que abogaban por un cambio gradual hacia la modernidad secular. De esta manera, la tensión entre los "secularistas" y los "islamistas" ha venido estructurando los debates políticos y la naturaleza de los movimientos sociales en el mundo Musulmán por más de cien años.

Esta tensión es la que encuadra al mundo Árabe luego de las revoluciones desde fines del año 2010. Al comienzo, los actores revolucionarios eran en su mayoría seculares, en contraste con los Islamistas que fueron quienes tomaron el poder. La reacción a esta situación ha sido la violencia en los dos principales países que iniciaron la revolución (Túnez, y en mayor medida, Egipto) y el fracaso en construir alianzas políticas para obtener una mayor cuota de poder por parte de los seculares.

Los nuevos tipos de tensión son: entre los Islamistas y los seculares por un lado, entre los propios Islamistas (principalmente la Hermandad Musulmana y los Salafistas y sus respectivos partidos) así como entre los propios grupos seculares (el papel de los restos del viejo régimen, con un debate álgido sobre si los *Folul* seculares deberían o no ser candidatos en las elecciones, siendo muchos de estos tecnócratas cuya contribución al nuevo orden político podría ser valiosa, aunque temida y rechazada por los

revolucionarios más intransigentes, Islamistas y Seculares por igual).

El proceso de secularización ha dividido extremadamente a las sociedades Musulmanas desde más de un siglo, combinado con su estructura de clases. El comienzo de la secularización en el Siglo XIX afectó principalmente a las clases altas y las incipientes nuevas clases medias que estaban naciendo en el mundo Musulmán. Eran acusadas de ser egoístas, de no tener un dios, de ser desleales y estar afiliadas al Occidente dominante, y de buscar “des-islamizar” al mundo Musulmán. Surgió una nueva categoría de individuos que imitaba a los “intelectuales” en Europa, particularmente en Francia. Bajo la influencia de la Revolución Francesa y las ideas de la Ilustración, y más tarde bajo la influencia Marxista, muchos se convirtieron en defensores incondicionales del cambio secular dentro del mundo Musulmán. El éxito de Atatürk en Turquía en la década de 1920, y la imitación de su modelo por Reza Shah en Irán en el mismo período, hizo que el mundo musulmán se mantuviera firme acerca del tipo de cambio que allí se estaba llevando a cabo. En los cincuenta y sesenta, la ideología panárabe practicada por Nasser empujó a los Islamistas hacia los márgenes. El fracaso de los panárabes seculares y el éxito de la Revolución Islámica en Irán en 1979 renovó la cuestión del Secularismo versus Islamismo de una manera nueva. Esta vez en términos radicales, irreconciliables, caracte-

rizada por los ataques del Islam radical en contra de no sólo los Seculares (calificados como no creyentes, herejes, alabadores de ídolos –alabando las visiones y votos de las personas), pero además, en contra de los Musulmanes no-activistas, quienes se negaban a declarar *jihad* contra los poderes seculares (o de cruzada) Occidentales.

Las Revoluciones Árabes comenzaron un nuevo capítulo en su proceso tormentoso de secularización en el mundo Árabe, al menos en su primer período cuando la clase media, secular y joven, o aspirantes a clase media (quienes “llegarían a ser clase media” como yo les llamo²⁷) enviaron un mensaje nuevo basado en la dignidad de la ciudadanía (*karamah*), evitar la violencia (*selmiyah*), y con una visión de la política centrada en lo social (visión que justificaba todos los problemas de la sociedad en su relación con la dominación extranjera y el imperialismo, y por lo tanto cuestionándolos). El primer período de las revoluciones terminó con la llegada de los Hermanos Musulmanes y los Salafistas, junto a la falta de organización y la completa incapacidad de los actores de la “juventud Tahriri” de organizarse a sí mismos y fusionarse para influir en la política de la sociedad. Surgió un nuevo tipo de ruptura entre los Seculares y los Islamistas, en el que la violencia predominó en la política callejera. Este tipo de violencia ha resultado en la incapacidad para resolver los problemas sociales a través de organismos electos y el

27 Ver Farhad Khosrokhavar, *The New Arab Revolutions that Shook the world*, Paradigm Publishers, Boulder and London, 2012.

recurso constante a la “política callejera” para expresar su rabia frente al hecho de que “la revolución ha sido robada”. La manera de salir de la violencia callejera es mediante la organización de las fuerzas seculares en partidos, y mediante la construcción de alianzas para poder así destacarse en el escenario político y llevar gradualmente a la sociedad hacia una democracia secular.

Conclusión

Los obstáculos a la democratización en el mundo Árabe, siguiendo las revoluciones que lo sacudieron desde fines del año 2010, pueden ser entendidas primera y principalmente en relación a la naturaleza de las fuerzas sociales y políticas que se desataron con los levantamientos. En ellas, los activistas “no-Leninistas” que sacudieron los cimientos de los regímenes en Túnez y Egipto se tornaron un problema luego del derrocamiento de esos regímenes, debido a que no estaban dispuestos a, eran incapaces de y carecían de experiencia para construir fuerzas sociales eficientes en la arena política. Los Islamistas que se beneficiaron de las organizaciones fuertes (la Hermandad Musulmana en Egipto data de la década de 1920 y Ennahda en Túnez había preservado su organización en parte en el exilio y en parte en el propio país, de manera clandestina), eran aún menos propensos al diálogo y al compromiso. Como resultado, las organizaciones Islamistas (principalmente la Hermandad Musulmana) triunfaron en ambos países. Esto profundizó la frustración y el enojo de las fuerzas revolucionarias que mantenían haber sido traicionadas y que la revolu-

ción estaba siendo profundamente amenazada por los Islamistas. Como consecuencia de la polarización de los dos tipos de activistas, aquellos secularizados y aquellos que se expresaban a través de una agenda Islamista reexaminada (los Islamistas). Estos dos grupos secularizados de distinta manera, son el resultado de la modernización del mundo Musulmán desde el Siglo XIX, grupos “Seculares” que se oponen a los “Islamistas”, quienes a su vez los rechazan (siendo la única gran excepción los casos en Turquía e Indonesia, ambos no-árabes). Las revoluciones árabes aumentaron las aspiraciones de ambos grupos de maneras antagónicas, con una falta de capacidad para comprometerse y negociar desde ambos lados (en Egipto el no querer comprometerse ha sido incluso más firme que en Túnez).

Las profundas diferencias étnicas, religiosas y regionales también se han convertido en un obstáculo importante a la democratización, sobre todo debido a que los gobiernos autoritarios (en Siria, Yemen y Libia) han profundizado la división entre los grupos étnicos y religiosos para poder dominar a la sociedad de acuerdo al principio de divide y reinará. Las consideraciones geoestratégicas también se convierten en un obstáculo. Arabia Saudita defiende a los regímenes autoritarios (en Bahreín, pero también los regímenes menos autoritarios en Jordania y en Marruecos) para que no se conviertan en el objetivo del disturbio, e Irán defiende a Siria por temor a perder su único aliado en la región con un estatus de estado soberano. Los gobiernos autocráticos fueron parcialmente exitosos en transformar a los movimientos de sociedad civil en Ye-

men y Bahrein en movimientos sectarios. En Libia, la carencia de un Estado debido al gobierno clientelar y personal de Gadafi, transformó al país en una milicia dominada étnica y geográficamente, con la posibilidad de que el gobierno se convierta en un estado fallido, con señores de la guerra gobernando en sus distritos y con la violencia esporádica convirtiéndose en endémica luego del derrocamiento del dictador.

El destino de Túnez y Egipto será simbólico para el futuro de todas estas sociedades. Los dos países están atravesando un período de transición en el que la violencia callejera por el momento prevalece sobre la política insti-

tucional. Su fracaso o éxito ejercerá un impacto tremendo sobre el futuro de los movimientos por la democratización del mundo Árabe. Aún así, Egipto parece hallarse en un estado de crisis mayor que Túnez, con una gran población de más de 80 millones, con extensas áreas rurales donde la pobreza es estructural, y con un “estado profundo” de enorme capacidad represiva. Mientras Túnez, con una población de 11 millones y una clase media secular y educada, parece haber elegido una vía más pacífica a la democratización, siendo el partido Ennahda menos propenso al autoritarismo, en comparación con la Hermandad musulmana en Egipto.

Movilizaciones y protestas estudiantiles y sociales en Chile

José Lino Contreras Véliz*

Desde la masiva movilización de los estudiantes secundarios de 2006 que fue llamada la revolución de los pingüinos, han seguido intensas movilizaciones de estudiantes universitarios en 2011 y 2012. La protesta estudiantil que busca la democratización de la enseñanza ha puesto en evidencia las inequidades del sistema educativo chileno.

I. Introducción

En los últimos años la comunidad internacional ha sido testigo de manifestaciones populares acontecidas en Chile, lideradas principalmente por estudiantes de enseñanza media y universitaria, a las que se han plegado organizaciones de trabajadores, familiares de los estudiantes, y personas de la sociedad civil en general. Muchas preguntas surgen al constatar el descontento que expresa la ciudadanía chilena hacia sus gobernantes y legisladores, y hacia la institucionalidad vigente. ¿Cuál es la razón del descontento popular en un país al que muchos organismos y actores políticos y económicos internacionales alaban y sitúan como ejemplo de desarrollo económico y social? ¿Por qué los gobernantes no han dado soluciones a problemas evidentes y que se arrastran por décadas, en un país con el más alto ingreso per cápita

y el más alto índice de desarrollo humano de América Latina?

La “*revolución de los pingüinos*” del año 2006 fue el primer gran movimiento estudiantil que remeció transversalmente al país y fue el punto de partida para una serie de acciones ciudadanas que han expresado el descontento con el sistema educacional chileno, y para proponer y pedir soluciones a las autoridades políticas. Como era de esperar las demandas se extendieron a otros ámbitos de la vida social que tienen agobiados a gran parte de los chilenos, como los sistemas de salud, de pensiones, de transporte, de energía, de agua potable, las condiciones laborales, la explotación de recursos mineros y acuíferos, entre muchos otros.

Un sentimiento presente en todas las manifestaciones es la esperanza de terminar con una sociedad que fue estructurada y organizada para funcionar bajo los principios de la ideología capitalista

* Profesor-investigador de la Universidad Santa María de Chile.

neoliberal, que opera con la lógica de mercado desregulado, entregada al poder financiero.

Los chilenos de clase media y baja están cansados de las condiciones de abuso que ha instalado la lógica de mercado aplicada en todos los ámbitos de la vida social, donde los detentores del poder financiero lucran excesivamente con la educación, la salud, el transporte, la energía, los fondos para pensiones, etcétera, ofreciendo productos y servicios cuya cantidad y calidad dependen del dinero que se tiene para pagarlos. Por otro lado, con un Estado divorciado de la ciudadanía, aparecen invariablemente en actores políticos hechos de corrupción y desvío de dineros públicos para beneficios individuales y grupales. Por su parte en el sector privado crecen los monopolios y se concentra la riqueza en un grupo reducido de personas.

En este artículo se presenta en forma resumida los principales acontecimientos de los últimos años en el contexto de las manifestaciones estudiantiles en Chile. Luego se describen algunos hechos que estarían en la génesis de los cambios sociales, políticos y económicos experimentados por la sociedad chilena en las últimas décadas, y que son el motivo del descontento popular. Finalmente se plantean preguntas que grafican el lado oscuro de realidad chilena, aquella que se intenta ocultar para no “dañar la imagen del país”.

II. Grandes manifestaciones recientes

2006: La revolución de los pingüinos

“La educación del pueblo no se vende... se defiende!”

En el año 2006 en Chile, a 16 años del fin de la dictadura militar, un número importante de alumnos de enseñanza media de colegios públicos, con edades que fluctuaban entre 13 y 17 años, se volcó a las calles para expresar su descontento con las políticas de educación impulsadas por los gobernantes, las que por años estaban perjudicando la calidad y cobertura de la educación pública, debido principalmente a la lógica de mercado instaurada en el sistema educacional chileno en época de dictadura. El movimiento fue llamado “*la revolución de los pingüinos*”, o “*la revolución pingüina*”, por el tipo de uniformes que usan los escolares chilenos, que se asemeja a los colores y formas de los pingüinos.

Los estudiantes pedían que el Estado se hiciera responsable de la educación pública, garantizando que ésta fuera de buena calidad y gratuita para todos. Pedían al gobierno terminar con un sistema de educación que diferenciaba la calidad y el acceso a la educación según el nivel socio económico de los estudiantes, lo que no daba a todos la preparación necesaria para seguir estudios superiores y/o afrontar adecuadamente sus vidas de adultos.

Represión de las fuerzas especiales de la policía

El gobierno respondió a las manifestaciones estudiantiles y sociales con mucha violencia y brutalidad, ejercida por la policía de fuerzas especiales, entidad creada para reprimir manifestaciones populares. Los alumnos se replegaron y se instalaron en sus establecimientos educacionales y pararon las actividades académicas durante varios meses. En el

lapso de pocos días, más de 100 establecimientos públicos y algunos particulares estaban en paro o en toma.

La sociedad civil, afectada por las escenas de violencia inhumana y el maltrato ejercido contra niños y niñas que luchaban por un derecho básico de tener una buena educación, se solidarizó masivamente con ellos y con sus demandas. La determinación y capacidad organizativa, sumados a la claridad conceptual y la lucidez argumentativa que expresaban los alumnos en las discusiones con las autoridades políticas, terminó por despertar en gran parte de la ciudadanía y en los actores políticos la conciencia de los graves problemas que hay en la educación chilena y sobre la necesidad de darles soluciones. Por los excesos de violencia cometidos, algunos policías fueron despedidos de sus instituciones.

El cambio que no llegó: Nueva Ley de Educación

“El gobierno y la clase política nos traicionaron”

Como forma de dar una salida al problema, la presidenta Bachelet propuso crear un Consejo Asesor presidencial que propusiera cambios a la Ley de Educación. El Consejo estuvo formado por un grupo grande de personas (81), donde participaron algunos dirigentes estudiantiles, y muchas personas de diversos contextos, académicos, profesores, economistas y políticos, entre los cuales algunos que habían promovido el cuestionado sistema educativo. Como parte del acuerdo con el gobierno, los estudiantes terminaron con las marchas, tomas y paros en sus colegios.

Desde un comienzo el Consejo Asesor tuvo dificultades de coordinación y de claridad de visiones con relación a los objetivos y temas de su trabajo. Luego de varias reuniones y viendo que las propuestas del Consejo no apuntaban a las demandas principales de los estudiantes, los representantes estudiantiles se retiraron de las reuniones y reactivaron las movilizaciones. El Consejo propuso una nueva Ley de Educación que fue llevada por el gobierno al Congreso Nacional donde luego de algunos ajustes fue aprobada. La nueva ley conservó los aspectos fundamentales de la ley anterior, sin incluir ninguno de los cambios estructurales que esperaban los estudiantes, y gran parte de la ciudadanía. El Estado siguió desvinculado de la educación pública, y la lógica de mercado siguió imperando en ella. Los estudiantes y la ciudadanía que los apoyó constataron una vez más como el sector político y las autoridades gobernantes mantenían las políticas educacionales de lógica mercantil, y tomaron el proceso convocado por el gobierno como una forma de terminar con los paros y tomas, y la “nueva” ley como una burla a la esperanza de la mayoría ciudadana.

Año 2011: estudiantes universitarios en movimiento

“La educación no es una mercancía”

Cinco años después de la revolución pingüina, los estudiantes de universidades estatales lideraron una nueva ola de manifestaciones estudiantiles y sociales, a las que se sumaron estudiantes de enseñanza media, llevando a paralizar por muchos meses gran parte de las activi-

dades académicas del país. En el lapso de pocos días, cientos de establecimientos fueron tomados y muchos otros hicieron paro de actividades. Nuevamente los estudiantes pedían al gobierno cambios profundos al sistema educacional chileno, donde el Estado debía hacerse responsable de la educación, mejorar y asegurar su calidad, y ofrecer la gratuidad de los estudios en las universidades estatales. En estas movilizaciones se hicieron conocidos mundialmente Camila Vallejo y Georgio Jackson, presidentes de las federaciones de estudiantes de las universidades de Chile y Católica, respectivamente.

Los estudiantes también pedían cambios al sistema de selección para el ingreso a las universidades que financia el Estado, pues el mecanismo existente privilegia a quienes tienen más dinero, los que en su mayoría estudiaron en colegios privados y logran los mayores puntajes en el sistema de selección. De esta forma las universidades más prestigiosas financiadas por el Estado educan mayoritariamente a estudiantes de familias pudientes, pues los que provienen de familias pobres no logran los puntajes necesarios para ingresar a ellas, y terminan en el campo laboral o estudiando en universidades privadas.

Las universidades son Instituciones sin fines de lucro

“Haced cumplir la Ley: no al lucro en Educación”

En sus discusiones con las autoridades políticas y de gobierno los estudiantes plantearon un aspecto de tipo legal muy importante: el lucro en el sistema

de Educación Superior es inaceptable, pues la Ley de Educación indica que las instituciones de Educación Superior deben ser entidades sin fines de lucro. Por más de 20 años este tema no había sido tocado por las autoridades de gobierno ni legislativas aun cuando había evidencias claras sobre cómo se estaba lucrando con la Educación Superior, como pagos de arriendo de infraestructura a empresas inmobiliarias vinculadas a los mismos dueños de las universidades, altas remuneraciones pagadas al directorio y a altos administrativos de las universidades, altos pagos por servicios a empresas asociadas, entre otros.

Los altos precios de las carreras en todas las universidades chilenas, tanto públicas como privadas, y las políticas de financiamiento de la Educación Superior, obliga a muchos estudiantes y a sus familias, a asumir un alto nivel de endeudamiento para financiar sus estudios. Esto ha servido para enriquecer a las instituciones que proveen los créditos financieros y a los dueños de las universidades, entre otros actores del mercado educacional. El año 2005, bajo el gobierno del presidente Lagos, se creó el Crédito con Aval del Estado (CAE), para asegurar el acceso al crédito a estudiantes que no podían obtenerlos por falta de “respaldo financiero” de sus familias. La tasa de interés inicial de este instrumento era casi 6% anual sobre la inflación, y los estudiantes debían pagar sus deudas al término de sus estudios, en 10, 15 ó 20 años. La inflación en Chile ha promediado el 2.4% en los últimos 4 años, pero hubo años en que fue de 4, 3, y hasta 9.5 por ciento anual, lo que elevó enormemente las deudas de los estudiantes, pues sus créditos au-

mentaron en 10, 9, y 15.5 % en los años respectivos. Los estudiantes plantearon que estos intereses enriquecían a las entidades financieras a costa del dinero del Estado y de los estudiantes y sus familias. En respuesta a ello el gobierno de Piñera, el año 2012, bajó la tasa de interés del CAE a 2% para los estudiantes. El Estado pagaría a las entidades financieras la diferencia del 4%. Esta solución no gustó a los estudiantes, pues no resolvía el tema principal de terminar con el lucro en Educación Superior, y además con ello aumentaba la transferencia de fondos estatales al sector privado financiero. Además las universidades seguían subiendo los precios de las carreras, que ya a esa época eran excesivamente altos.

Con respecto a los costos de la educación para las familias, un rector de una universidad estatal de alto prestigio comentó el 2011 que *“Las familias están pagando los aranceles más caros que existen en el mundo. La opción es contar con un crédito que es más caro que un hipotecario. Hoy a una familia le conviene vender su casa, pagar la universidad de sus hijos, y tomar un crédito hipotecario para comprar de nuevo la casa. Eso es mucho más barato que el préstamo bancario (destinado a los estudios universitarios)”*.

“Una causa noble, hermosa y legítima”

En septiembre del 2011, el presidente chileno en su discurso ante la asamblea general de las Naciones Unidas reconocía el valor del movimiento estudiantil chileno expresando: *“En las últimas semanas han sido miles los jóvenes chilenos que han salido a las calles a*

manifestarse en favor de una causa noble, hermosa y legítima como es una educación de calidad para todos, que les permita ser protagonistas y no meros espectadores de esta sociedad del conocimiento y la información”. Al mismo tiempo en Chile, la policía de fuerzas especiales reprimía brutalmente a los estudiantes con gases lacrimógenos, agua a presión, golpes con bastones, etcétera.

Ese año hubo mayor participación de la sociedad civil en las marchas, y el movimiento estudiantil tuvo el apoyo abierto de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Chile, y otras agrupaciones sociales y políticas. Un estudio público indicó que el 85% de la población chilena apoyaba las demandas estudiantiles.

Universidades privadas en el movimiento estudiantil

Un hecho importante en el año 2011 fue la apertura e inclusión de universidades privadas en las demandas del movimiento estudiantil, pues hasta el momento éstas se referían sólo a estudiantes de universidades que reciben dineros del Estado. Hubo un reconocimiento por parte de los estudiantes movilizados que las políticas en educación no sólo perjudicaban a quienes estudian en universidades tradicionales y estatales, sino también a los estudiantes de universidades privadas, las que hasta ese momento eran vistas como símbolos de la perversidad de la lógica de mercado en la Educación Superior. Los estudiantes también tomaron conciencia que muchas universidades privadas acogían a estudiantes de escasos recursos, quienes

por su formación deficiente en la enseñanza media, no podían ingresar a universidades estatales.

Los estudiantes y la ciudadanía comprendieron que el lucro y la baja calidad en la Educación Superior chilena eran transversales a todo el sistema, en instituciones estatales y privadas, con muy pocas excepciones.

Internacionalización del movimiento estudiantil

“Latinoamérica unida por una educación pública gratuita y de calidad”

El modelo capitalista neoliberal que funciona con lógica de mercado ha avanzado en muchos países latinoamericanos, impulsado principalmente por recomendaciones de instituciones financieras internacionales, y por presiones que ejercen a los gobernantes los grupos de poder político y financiero. En este contexto, defender la educación pública gratuita y de buena calidad es una necesidad creciente en Latinoamérica, y los estudiantes han iniciado protestas en muchos países en defensa de la educación pública, solidarizándose también con los estudiantes chilenos. El caso de los estudiantes colombianos es uno de los más notorios, pues con sus movilizaciones lograron rechazar los cambios políticos que proponía el gobierno, tendientes a fortalecer la participación del sector privado en la educación pública.

Al mes de noviembre de 2011 estaban movilizadas estudiantes de Colombia, Chile, República Dominicana y Puerto Rico, destacándose la masiva movilización del 10 de noviembre en

Colombia. Para el 24 de noviembre 2011 se coordinaron marchas en 14 países latinoamericanos para reclamar contra las políticas neoliberales y privatizadoras de la educación. En esa misma fecha grupos estudiantiles de Canadá, España, Francia y Alemania realizaron protestas solidarias con los estudiantes latinoamericanos.

Para financiar reformas: recuperar para Chile sus recursos naturales

Un aspecto muy importante que fue adquiriendo fuerza en los estudiantes y conciencia en la ciudadanía en general, es la posibilidad y necesidad de recuperar para Chile la explotación de los recursos naturales estratégicos que en su mayoría están en manos de empresas extranjeras, particularmente en la minería del cobre, donde aproximadamente el 70% es explotado por empresas multinacionales extranjeras. Por la legislación heredada de la dictadura y fortalecida por los gobiernos que le sucedieron, las empresas multinacionales explotan la minería con privilegios que prácticamente las liberan del pago de impuestos en Chile. Por 3 décadas estas empresas han obtenido decenas de miles de millones de dólares en utilidades cada año, dejando prácticamente nada a las arcas fiscales chilenas.

Chile es el mayor productor de cobre del mundo y las grandes explotaciones mineras fueron nacionalizadas el año 1971 en el gobierno de Allende. Hoy las empresas estatales chilenas controlan solo el 30% del patrimonio cuprífero total que se explota en Chile. La mayoría de los chilenos se dan cuenta que con un porcentaje pequeño del di-

nero que ganan las empresas mineras extranjeras se podrían financiar reformas no sólo en el sistema educacional completo sino también los de salud, de pensiones, de transporte público, de energía, y otros que en manos del sector privado, exprimen y agobian permanentemente a los chilenos.

El piso se mueve: cambios de ministros de educación

En sus discusiones con la autoridad y actores políticos, los estudiantes cuestionaron al Ministro de Educación, señor Joaquín Lavín, por sus vínculos con una universidad privada. Ante las presiones al gobierno a las que se sumaron actores políticos y autoridades universitarias, el presidente Piñera decidió nombrar al ministro de educación al señor Felipe Bulnes, quien cinco meses después fue cambiado por el señor Harald Beyer. Con esto, en el año 2011, hubo 3 ministros de Educación.

Año 2012: denuncias de lucro y corrupción en Educación Superior

Casos de lucro en Educación Superior

En mayo de 2012 el ministro de Educación inició una investigación contra una universidad privada, por denuncias de los estudiantes a malas prácticas administrativas, lucro y baja calidad de los servicios educacionales que prestaba. Se trataba de la Universidad del Mar, que contaba con quince sedes en diversas ciudades de Chile y alrededor de 14.000 estudiantes. El año 2012 la Universidad del Mar tenía la mayor cantidad de reclamos por parte de estudian-

tes ante el Servicio Nacional del Consumidor. Luego de concluida la investigación el Consejo Nacional de Educación revocó la personalidad jurídica de la Universidad del Mar, y el Ministro decretó su cierre. Esto provocó una gran agitación de parte de los estudiantes y de diversos actores sociales, pues los estudiantes no podrían continuar ni terminar sus estudios, y muchos estaban altamente endeudados con entidades financieras. Las soluciones que propuso el Ministerio no resolvieron los problemas generados por el cierre de la Universidad, y los estudiantes iniciaron movilizaciones y se tomaron la Universidad del Mar, esperando que la universidad no fuese cerrada y que las clases continuaran. En este asunto el Estado tenía responsabilidades, pues por 23 años había mantenido su derecho a funcionar y en diciembre de 2010 la había acreditado favorablemente. Algunos estudiantes pudieron continuar a otras universidades que les reconocieron parte de las materias ya cursadas, pero los cambios aumentaron los costos a los estudiantes y la duración de sus carreras.

El caso de la Universidad del Mar llevó a la cámara de diputados a crear una comisión para investigar el lucro en Educación Superior. En su informe final, la comisión menciona otras universidades que también estarían lucrando, y describió las formas de lucro más comunes como el traspaso de dineros a entidades vinculadas a los dueños, altas remuneraciones a directivos y gerentes, entre otros. Aun cuando el informe de la comisión reveló el lucro en otras universidades, el ministro de Educación comentó que *"El informe no aporta antecedentes nuevos que nos permitan lle-*

gar realmente a la conclusión que se violó la ley”.

Corrupción en la Comisión Nacional de Acreditación

El año 2011 ya se había cuestionado la composición de los integrantes y el proceder de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), entidad responsable de acreditar instituciones de Educación Superior, por el vínculo de algunos miembros de la CNA con universidades en procesos de acreditación. Se sabía de asesorías que habían realizado algunos miembros de la CNA. El hecho era importante de aclarar pues para recibir dineros indirectos del Estado (aporte fiscal indirecto), y para que sus estudiantes puedan acceder a los créditos financieros con aval del Estado (CAE) las universidades deben estar acreditadas.

El presidente de la CNA de la época, señor Eugenio Díaz, había realizado servicios de asesoría en el período en que la Universidad del Mar entraría en proceso de acreditación, la que luego le resultó favorable. Se inició una acción penal respecto a estos hechos y los antecedentes recolectados revelaron una red de influencias y de corrupción en el ámbito de la acreditación de instituciones y de carreras. El señor Díaz suspendió su participación en la CNA y posteriormente fue puesto en prisión por acusaciones de soborno, cohecho, revelación de secreto y negociación incompatible en el proceso de acreditación de la Universidad del Mar.

En agosto del 2012, el nuevo presidente de la CNA, reconoció que *“los conflictos de interés están presentes al interior de este organismo y en todas las*

instituciones de Educación Superior”, y llamó a realizar cambios que en el futuro garanticen procesos de acreditaciones transparentes y objetivos. En diciembre del 2012, ante los graves hechos de corrupción que involucraron al presidente de la CNA y a varios rectores de universidades, la cámara de diputados constituyó una comisión para investigar irregularidades en los procesos de acreditación.

2013: se amplían las demandas sociales

“cuando ya abriste los ojos no puedes volver a cerrarlos”

El año 2013 se inició con importantes acontecimientos políticos ocurridos antes del inicio de las manifestaciones estudiantiles, siendo la destitución por el Senado del ministro de Educación una de las de mayor impacto nacional. Por otro lado este año habrá una nueva elección presidencial lo que crea un nuevo escenario para que la ciudadanía exprese las demandas por reivindicaciones que ha estado esperando por años. Es el tiempo también cuando los candidatos exponen sus proyectos y promesas de gobierno si son elegidos.

El Senado de la República destituye al Ministro de Educación

“graves faltas al cumplimiento de sus deberes”

El 17 de abril fue destituido de su cargo el ministro de Educación, señor Beyer, por decisión del Senado de la República, luego de una investigación derivada de una acusación constitucional contra el ministro por incumplimiento

de sus deberes, quedando inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años. Tres fueron los cargos principales contra el ministro: infracción al principio de probidad (por faltar a la verdad con relación a sus facultades para investigar casos de lucro en las universidades); falta de control jerárquico (por disponer de información de flujos financieros de las universidades que deben ser sin fines de lucro, y no actuar en consecuencia), y negativa de fiscalizar el lucro pese a las denuncias (por omisión de obligaciones ministeriales). Luego de la destitución, el 22 de abril asumió como ministra de Educación la señora Carolina Schmidt.

Este acontecimiento fue bastante paradójico y cuestionado por el mundo político y la ciudadanía, pues el ministro depuesto fue el único que en 22 años investigó y castigó el lucro a una universidad. Los 13 ministros anteriores, desde 1990, nunca hicieron algo con este tema.

Suspensión de la Comisión Nacional de Acreditación

La comisión creada el 2012 por la cámara de diputados para investigar los hechos de corrupción en los procesos de acreditación, concluyó en julio del 2013 que se debía suspender el funcionamiento de la CNA, mientras se tramita en el congreso el proyecto que crea el organismo que la reemplazará. La comisión también propuso la revisión de las acreditaciones otorgadas a universidades por períodos menores a cuatro años, y aumentar las exigencias para que las instituciones de Educación Superior sean autorizadas para funcionar, ade-

más de impedir el exceso de la oferta académica.

Se amplían las demandas de la ciudadanía: Educación, Salud, Pensiones, Energía, ...

“vivan los estudiantes y trabajadores de mi Chile que van a cambiar este país lleno de injusticias, abusos y desigualdades”

En abril 2013 estudiantes universitarios y de enseñanza media nuevamente iniciaron movilizaciones con marchas y paros de actividades académicas, volviendo a plantear las demandas postergadas y no resueltas por años. A ellas se sumaron nuevas necesidades como mejorar el sistema de salud pública en calidad y sin lucro, el fin del sistema privado de pensiones que está demostrando un verdadero fracaso para los trabajadores que se pensionan, la recuperación para Chile de los recursos naturales estratégicos en manos extranjeras, fin a los abusos de empresas monopólicas que se coluden para aumentar precios de productos como medicinas y otros, cambio a las leyes laborales que privilegian al empleador, entre otras.

De esta forma, está aumentando la conciencia ciudadana que la sociedad chilena requiere cambios profundos y transversales, los que no se agotan con mejoras en educación, pues las políticas neoliberales están presentes en todos los aspectos de la vida social. Es por esto que en el año 2013 la necesidad de una reforma a la constitución política ha adquirido mucha fuerza para “*terminar con la Constitución de Pinochet*”. Los candidatos a la presidencia han prome-

tido cambios a la constitución, y algunos proponen realizar una “*asamblea constituyente*” que defina una nueva institucionalidad para Chile.

Toma de la Casa Central de la Universidad de Chile

A comienzos de junio estudiantes de la Universidad de Chile se tomaron la casa central de la universidad ubicada en la avenida más importante y central de la capital. Rápidamente otras universidades estatales y privadas fueron tomadas o declaradas en paro de actividades académicas, por sus estudiantes, y en las principales ciudades del país se produjeron movilizaciones estudiantiles, para manifestar el repudio a los grupos políticos de gobierno y de oposición, que gobernaron por 20 años, por continuar ignorando las demandas estudiantiles y sociales, y seguir amparando un sistema educacional de alto costo y de baja calidad para los estudiantes y sus familias, y de baja calidad, donde el lucro con la educación seguía presente, violando la legislación y la Constitución política del Estado.

El 13 de junio 2013, un grupo de policías de fuerzas especiales ingresó con mucha violencia a la casa central de la Universidad de Chile a detener a algunos manifestantes. El rector de la Universidad de Chile y otras autoridades criticaron enérgicamente la acción policial, y pidieron al gobierno investigar los hechos, pues los policías ingresaron a la universidad sin autorización. La situación fue bastante grave pues la Casa Central es un recinto declarado monumento nacional.

Por su parte las autoridades de gobierno justificaron la acción policial expresando que los policías sólo cumplían con su deber de restaurar el orden público, y que el ingreso a la Universidad de Chile tenía por propósito detener a estudiantes que lanzaron artefactos y objetos incendiarios a los policías, lo que daba derecho a la policía a detenerlos.

Seguramente van a continuar movilizaciones sociales, pidiendo con mayor énfasis al Estado hacerse responsable de los sistemas de salud, de pensiones, de educación, de transporte, de energía, de agua potable, de viviendas sociales, y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, y el salario mínimo legal. Se insistirá y aumentará la presión por tener una nueva Constitución que limite el alcance del sistema capitalista neoliberal, o lo elimine. Se visualiza también mayor participación ciudadana, y de organizaciones civiles y de trabajadores en general, en las manifestaciones sociales.

Temas comunes a todas las marchas

Brutalidad excesiva de la represión policial

“Perdí mi ojo por un balín de fuerzas especiales, sólo por el derecho a manifestar”

La policía de fuerzas especiales, como lo había hecho durante todos los actos de manifestación ciudadana, respondía con violencia exagerada a través de sistemas represivos cada vez más sofisticados y tecnificados, amparados en el respaldo que le brinda el gobierno de turno. En la manifestación del 11 de

abril, además de los usuales gases lacrimógenos y carros lanza agua, los policías dispararon balines de goma llenos de pintura a los manifestantes. Entre las personas malheridas, un señor perdió la visión total de uno de sus ojos, al recibir un balín que le disparó la policía.

Policías golpean a estudiante de enseñanza media hasta dejarlo inconsciente

Durante las manifestaciones del 13 de junio la policía de fuerzas especiales aplicó extrema violencia a los manifestantes, incluidos reporteros y personas que no participaban de las manifestaciones. En un acto altamente reprochable un grupo de policías golpeó con bastones, puños y patadas a un dirigente estudiantil de enseñanza media indefenso, dejándolo inconsciente y muy malherido en la vía pública. El estudiante fue llevado en estado inconsciente por sus compañeros a un centro de atención de urgencia, que constató los daños y heridas ocasionados por la policía. Los videos tomados por testigos muestran la brutalidad extrema a que fue sometido el estudiante.¹

La violencia no es sólo policial: desmanes y violencia de los manifestantes

En todas las marchas se han producido acciones violentas con enfrentamientos entre manifestantes y policías, gatillados muchas veces por la presencia policial y la agresividad que ésta expresa antes, durante y después de las

manifestaciones, creando un escenario propicio para despertar respuestas de rechazo en muchos estudiantes que los policías toman como agresión e iniciar detenciones, uso de gases lacrimógenos, carros lanza agua, ataques a caballo, y todas las tecnologías que disponen destinadas a reducir y dispersar a los manifestantes.

Hay que mencionar también que algunos estudiantes asisten a las marchas con elementos para lanzar a las fuerzas policiales como piedras, bastones y artefactos incendiarios (“bombas molotov”). Estos estudiantes son un muy pequeño porcentaje con relación al total de manifestantes; y los dirigentes estudiantiles han hecho esfuerzos para identificarlos y anular sus acciones violentas. Los esfuerzos no han sido suficientes ni los estudiantes tienen las capacidades para organizar grupos que pudieran controlar a personas violentas que participan en las marchas.

Lumpen y delincuentes en las marchas

En todas las marchas participan personas jóvenes y adultas, que no se interesan en las demandas sociales y políticas que motivan a manifestarse, y que se integran a la muchedumbre para provocar disturbios y desórdenes, que luego aprovechan para asaltar y robar establecimientos comerciales ubicados en las vías cercanas a la marcha. También llegan a las marchas jóvenes y niños que aprovechan el anonimato que provee la muchedumbre para realizar actos

1 <http://www.eldinamo.cl/tumblr/video-imapactante-carabineros-golpea-a-joven-estudiante-hasta-dejarlo-inconsciente/>

vandálicos para provocar la reacción policial a modo de “diversión”. Por ello destruyen bienes de la vía pública como luces y señales de tránsito, tachos para la basura, incendian ruedas de vehículos, y lanzan piedras u objetos incendiarios a la policía. A estas personas se les conoce como “lumpen” y los manifestantes han intentado vanamente anular y/o evitar su presencia y actos de violencia. Muchos policías también han sufrido golpes y han sido heridos por los enfrentamientos con estos sujetos.

Policías infiltrados

En muchas marchas se han descubierto policías infiltrados participando en ellas haciéndose pasar por estudiantes, o simpatizantes de las manifestaciones. Las autoridades policiales y políticas han justificado estas infiltraciones explicando que tienen como objetivo identificar a quienes provocan desórdenes y violencia, o ataques a la policía o a los bienes públicos y privados. Los estudiantes por otro lado, han pensado que se infiltran para provocar desórdenes y violencia a fin de justificar la represión policial, y por otro lado generar una mala imagen de las manifestaciones ante la ciudadanía.

Actos de violencia y vandalismo son las principales imágenes que proyectan los noticieros, y son los temas centrales en las entrevistas a los dirigentes estudiantiles. Las noticias sobre manifestaciones sociales se focalizan en los aspectos violentos de las marchas, lo que ha sido explotado por autoridades políticas y policiales para mostrar lo dañinas e inútiles que éstas resultan al país, y para llamar a los estudiantes a “dialo-

gar” y “terminar con las marchas y manifestaciones públicas, que sólo conducen a la violencia y destrucción de bienes públicos y privados”. Las autoridades y los medios de comunicación expresan que “la ciudadanía está cansada de marchas, de tomas y paros, que sólo provocan desmanes y violencia en la vía pública”. Los dirigentes estudiantiles afirman que la falta de diálogo y de voluntad para afrontar y resolver con seriedad los problemas de la educación, por parte de los gobernantes y del sector político en general, obliga a la ciudadanía a salir a las calles a expresar sus demandas y descontento con las políticas en temas sociales.

Ausencia del cuerpo académico universitario

Los académicos y el profesorado universitario son los grandes ausentes en las movilizaciones. Muy pocos profesores universitarios van a las marchas y movilizaciones, y algunos se limitan a hacer declaraciones públicas individuales o grupales, donde expresan sus puntos de vista, generalmente solidarizándose con los estudiantes y sus demandas. Los profesores también llaman al diálogo entre estudiantes y autoridades para encontrar soluciones consensuadas, evitando actos violentos. Esta ausencia de los profesores en las movilizaciones muestra el claro distanciamiento del cuerpo académico con los problemas que les afectan directamente, y que afectan a la sociedad toda. Incluso profesores que en sus épocas de estudiantes fueron activos dirigentes estudiantiles que lucharon con marchas y tomas prolongadas de sus universidades, por las

grandes reformas universitarias de los años 67 y 70 en Chile hoy se muestran insensibles y apáticos con el movimiento estudiantil, que lucha por motivos semejantes a los que ellos persiguieron en su juventud.

Al inicio de los movimientos estudiantiles algunos rectores y académicos, marcharon junto a sus estudiantes, expresando descontento con las políticas de financiamiento en educación y mostrando solidaridad con el movimiento estudiantil. Luego que el Ministro de Educación acordara con los rectores de universidades estatales un aumento sustancial en los aportes financieros, los rectores llamaron a los estudiantes a “deponer las movilizaciones y volver a la normalidad”. Los acuerdos entre los rectores y el ministerio no incluían las demandas principales de los estudiantiles.

III. Razones del descontento ciudadano

Esta sección presenta resumidamente hechos que habrían tenido gran incidencia en la génesis de los cambios sociales, políticos y económicos que experimentó Chile para llegar a la sociedad que hoy la mayoría de los chilenos quieren cambiar, especialmente los jóvenes estudiantes. La presentación no es exhaustiva, y sólo pretende situar al lector en acontecimientos que no han sido del todo difundidos ni conocidos en profundidad.

Orígenes

“hay que salvar a Chile de los tontos chilenos”

En septiembre del año 1973 el presidente Allende sucumbía ante un golpe

militar promovido por grupos políticos y financieros internacionales y nacionales. Allende tuvo muchas dificultades en su gobierno por la desestabilización social y económica provocada principalmente por la intervención logística, operativa y financiera de la CIA en Chile. Con el golpe militar asumió la conducción del país una Junta de Gobierno formada por los jefes de las fuerzas aérea, naval y del ejército, más el jefe de la policía. Posteriormente la junta designó como presidente de Chile al general Augusto Pinochet, quien gobernó por 16 años, hasta marzo del año 1990.

Salvador Allende había logrado la mayoría relativa de los votos en la elección presidencial del 4 de septiembre del año 1970. Al mes siguiente el Congreso Nacional debía elegir al presidente, entre Allende y el candidato del segundo lugar en la votación. A mediados de septiembre, Nixon y Kissinger decidieron “*salvar a Chile de los tontos chilenos*”, impidiendo que Allende llegase a la presidencia. Las razones principales eran el pésimo precedente que daría al mundo la elección democrática de un gobernante marxista, y el peligro que correrían las inversiones norteamericanas en Chile. El plan contra Allende (Proyecto Fulbert), consistía en actuar antes que el Congreso eligiera al nuevo presidente, con un golpe militar de un general de ejército apoyado por la CIA. Previo al golpe había que secuestrar al general René Schneider, comandante en jefe del ejército. El plan fracasó cuando Schneider enfrentó y rechazó a los secuestradores, quedando gravemente herido en la balacera. Días después el general Schneider moría en el Hospital Militar.

El Congreso eligió a Allende como presidente de Chile, y con ello resultó ser el primer presidente de tendencia socialista en el mundo elegido democráticamente. Para hacer fracasar a Allende, Nixon propuso destruir la economía chilena hasta “*hacerla gemir*”, desestabilizando el orden público con operaciones encubiertas, y apoyando a la oposición hasta que la situación se tornase tan inestable que las fuerzas armadas tuvieran que intervenir. Poco antes del golpe militar algunos dirigentes políticos de partidos de la oposición, como Patricio Aylwin y otros, pidieron a las fuerzas armadas tomar el control del país.

Se instaura la ideología neoliberal

“Los Chicago Boys llegan al gobierno”

Durante el gobierno de Pinochet los civiles que le asesoraron y ayudaron a gobernar lograron instaurar en Chile un modelo de sociedad basado en la economía de corte neoliberal que en ese tiempo promovía Friedman en la Universidad de Chicago. En términos simples, se postulaba que el principal motor del progreso social, material y cultural es el impulso emprendedor del sector privado, en un sistema que debe funcionar y regularse con la lógica de libre mercado, donde el Estado debe minimizar su participación en las actividades económicas.

Desde el año 1974 el Estado inició la transferencia de la mayoría de sus empresas al sector privado nacional e internacional quien pagó por ellas precios muy subvalorados. Se privatizaron empresas estatales en las áreas de ener-

gía y de agua potable, la explotación de recursos mineros, forestales y marítimos, los sistemas de comunicación y de transporte vial, aéreo y marítimo, entre muchas otras. Los sistemas de salud, de educación y de pensiones fueron abiertos a la participación del sector privado, al mismo tiempo que el Estado reducía en ellos su injerencia, financiamiento y supervisión. La nueva Constitución política del Estado promulgada el año 1981 en el gobierno de Pinochet, estableció el marco legal que consolidó las ideas neoliberales en Chile.

Pinochet, persona “non grata”

“Yo soy el que manda en Chile, señores!”

Luego de unos años en el poder, Pinochet pasó a ser un gobernante “non grato” para los grupos financieros y políticos internacionales dominantes, pues se negaba a seguir sus “consejos” y expresaba reiteradamente que era “*el que mandaba en Chile*”. Tampoco gustó a las instituciones prestamistas internacionales que Pinochet redujera casi totalmente la deuda externa, liberando a Chile de las influencias políticas y económicas que ellos ejercen. Otro problema lo tuvo Pinochet con quienes controlaban el negocio de las armas en el mundo, pues sin el consentimiento ni la participación de ellos, promovió la fabricación de armas en Chile e hizo ventas a otros países.

En la década de los 80 se intensificó la presión a Pinochet a nivel nacional e internacional. Muchas organizaciones de defensa de los derechos humanos hacían denuncias de los secuestros, tor-

turas, muerte y desaparición de personas opositoras al régimen de Pinochet. En Estados Unidos se intensificó la investigación por la muerte de una ciudadana norteamericana, secretaria de un ex ministro de Allende, luego que ambos fueran asesinados el año 1976 con un atentado explosivo en Washington. El gobierno norteamericano acusó de ese acto terrorista a organismos de inteligencia chilenos, y pidió la extradición de los supuestos responsables. Por su parte el gobierno chileno culpó del atentado a terroristas organizados y financiados por la CIA, existiendo serios indicios que éstos estaban involucrados. A nivel interno se intensificaron las protestas y campañas ciudadanas que exigían el retorno a la democracia, y el fin a las violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo empezaron a regresar políticos que estaban exiliados y que contaban con el apoyo de organizaciones políticas extranjeras, y que potenciaron los esfuerzos por terminar con la dictadura.

Retorno a la democracia

“Chile, la alegría ya viene”

La presión se hizo insostenible para el gobierno y finalmente en octubre del año 1988, Pinochet realizó una consulta ciudadana para decidir si él seguía como presidente o no. La ciudadanía decidió por el “retorno a la democracia”, y el año 1989 en elección democrática se eligió como presidente al señor Patricio Aylwin, candidato de la “Concertación de Partidos por la Democracia”, cuyo slogan de campaña fue *“Chile, la alegría ya viene”*. Desde 1990

este grupo gobernó por 20 años con 4 presidentes. El 2009 fue elegido Sebastián Piñera, candidato de la coalición “Alianza por Chile”, de partidos de centro derecha. Piñera asumió el año 2010 y gobernará hasta marzo del 2014. En noviembre del 2013 habrá nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile.

La alegría que nunca llegó

Los gobiernos democráticos continuaron, profundizaron y extremaron las políticas neoliberales instaladas en tiempos de dictadura. Para quienes se posicionaron en el gobierno, en el congreso y en empresas públicas, la alegría llegó y sigue llegando muy generosamente. Pero nunca llegó para la mayoría de los chilenos, la gente común y corriente que debe luchar día a día para subsistir en escenarios de injusticia, abuso y desigualdad, amparados por la institucionalidad y la clase política dominante.

IV. Privatización de la educación pública

Los antecedentes que se presentan a continuación ilustran parte del proceso sistemático de destrucción de la educación pública impulsado por los gobiernos desde épocas de la dictadura.

Municipalización de la educación pública primaria y secundaria

Durante el gobierno de Pinochet la administración de la educación pública básica y media fue transferida a las municipalidades comunales, las que debían competir con colegios privados pa-

ra captar estudiantes, pues el financiamiento que les otorgaba el Estado era proporcional al número de estudiantes que atendían. Al cabo de unos años, la calidad y cobertura de la educación pública se deterioró profundamente, y muchos establecimientos municipalizados fueron cerrados, entre otros motivos, por la falta de estudiantes, por reducción de costos municipales, y en algunos casos por el interés en la venta de sus terrenos que resultaba mejor negocio para las municipalidades.

Por otro lado muchas municipalidades no contaban con las capacidades humanas, organizacionales y financieras, y muchas veces tampoco con el interés ni el compromiso con la educación pública, que les permitiera gestionar adecuadamente los establecimientos educacionales que fueron puestos a sus cargos. En muchas ocasiones los dineros para la educación eran destinados a resolver otras necesidades, y muchos profesores fueron contratados sólo por las horas de clases que impartían, debiendo correr de un colegio a otro durante las jornadas escolares para formar su salario. Todo ello resultó en una pérdida importante de la calidad de la educación en los establecimientos municipalizados, en los cuales fueron quedando, paulatinamente, niños y niñas de hogares de bajos recursos financieros.

Colegios particulares subvencionados: traspaso de la educación pública al sector privado

Con la municipalización de los establecimientos públicos se abrió la posibilidad para que el sector privado partici- pase activamente en la educación pú-

blica primaria y media creando colegios que fueron conocidos como “*particulares subvencionados*”. Éstos también reciben dineros estatales proporcionales al número de estudiantes que atienden, y además cobran a las familias una matrícula que en muchos casos llega a triplicar, o más, el monto aportado por el Estado. Se esperaba que los dueños de los colegios subvencionados invirtieran los dineros que recibían en mejorar la infraestructura y la calidad de la educación de sus colegios, pero muchos de ellos tenían por objetivo principal ganar dinero con ellos, sin interés en la calidad o resultados educativos.

En este escenario los colegios particulares subvencionados son los que han tenido mayor crecimiento y los que han absorbido la mayor parte de los estudiantes que abandonaron los colegios municipalizados. Como dato que refleja esta tendencia, el año 1990, al término de la dictadura, el 70% de los estudiantes asistía a colegios públicos. El año 2010 sólo lo hacía el 35%.

Hay que mencionar también que hay parlamentarios y funcionarios que han trabajado en los gobiernos, que tienen intereses creados en colegios particulares subvencionados, y muchas veces se ven favorecidos por el debilitamiento de la educación pública, y el aumento de subvenciones en inyecciones de dineros estatales al sistema de colegios subvencionados.

Baja calidad de la educación primaria y secundaria

Por muchos años Chile se destacó a nivel latinoamericano por la buena educación primaria y secundaria que brin-

daba a su gente. Junto a Argentina y Uruguay, se consideraba a Chile como uno de “los países europeos de Latinoamérica”. Sin embargo las pruebas internacionales recientes (PISA) han demostrado el bajo nivel que logran hoy los estudiantes chilenos, a pesar del alto costo que pagan las familias en los colegios privados y privados subvencionados. Los alumnos de colegios municipalizados son los que logran los peores resultados. El movimiento de los pingüinos del año 2006, hacía notar este punto y demandaba a las autoridades que el Estado volviera a hacerse cargo de la educación primaria y secundaria, asegurando gratuidad y buena calidad a todos.

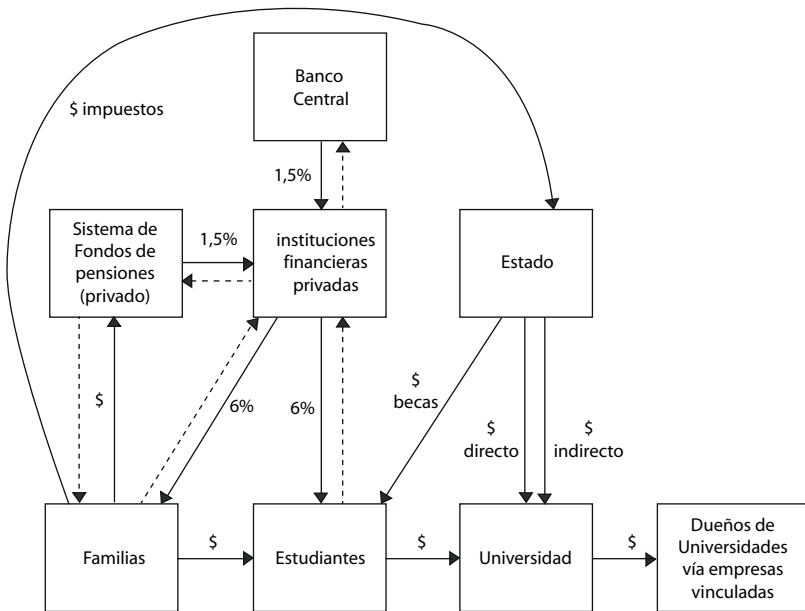
La Educación Superior en Chile: un negocio muy lucrativo

El Sistema de Educación Superior chileno lo forman universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, y escuelas de las fuerzas armadas. El año 2011 había 16 universidades estatales y 44 privadas. El Estado aporta fondos directos a las 16 universidades estatales y a 9 privadas, que juntas forman el grupo de 25 universidades “tradicionales”. Los estudios son pagados en todas las universidades y carreras, y su costo varía según tipo de carrera e institución, situándose entre US\$ 1.500 y US\$ 10.000 anuales (2011), movilizándose alrededor de 3.000 millones de US\$ anuales, sólo en el pago de matrículas. Las becas y ayudas estatales y pri-

vadas para estudiantes con bajos recursos financieros, no cubren los costos de las carreras, y muchos deben trabajar y/o acceder al sistema de créditos bancarios para estudiar.

Un estudio publicado en junio 2013, indica que para el 72% de los estudiantes chilenos la carrera cuesta casi el 50% de los ingresos que tiene su hogar. El drama para los estudiantes de bajos recursos no termina en el alto costo de sus estudios, pues también incluye sus limitaciones personales como la deficiente formación que obtuvieron en la enseñanza media, y otros factores como la baja autoestima, el entorno familiar y cultural en que viven, muchas veces el peso de ser los primeros de la familia que acceden a la Educación Superior, etcétera. Datos sobre deserción en estudios superiores indica que un 52% de los estudiantes más pobres que ingresa a la Educación Superior la abandona sin completarla, quedando con altas deudas financieras y sin un título universitario.

El siguiente diagrama presenta la relación entre los principales actores y los flujos de dinero que participan en el sistema de financiamiento de los estudios superiores (año 2011). Tanto los bancos como los dueños de universidades obtienen beneficios de los dineros que otorga el Estado, y de las tasas de interés de los créditos a los estudiantes. La tasa del interés que tenían las entidades financieras para los préstamos para estudios superiores era del 5.8% anual sobre el valor de la inflación.



Como ejemplo de los costos de carreras, el año 2011 el precio de las matrículas en carreras de ingeniería de nivel civil, se situó entre los US\$ 2.590 y US\$ 10.639 anuales. El menor precio lo tenía una universidad privada que no recibe aportes estatales directos, y el mayor una privada que sí los recibe. El mayor precio de una universidad estatal fue de US\$ 8.718 anuales.

Deuda de los estudiantes universitarios

Supongamos que un joven ingresó el año 2011 a la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de Chile (estatal) cuyo costo anual de la matrícula equivalía a US\$ 8.900 aprox., y financia el pago de sus matrículas con el crédito CAE. Con una inflación anual de 2% en

los años que realiza sus estudios, el estudiante tendrá una deuda de US\$ 66.000 aprox. cuando finalice su carrera de 6 años de duración. Si la completa en 7 años, la deuda crecerá a US\$ 80.500 aprox.

Para el caso de los estudios en Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica de Chile, universidad privada que recibe fondos directos del Estado, el estudiante tendrá una deuda de US\$ 81.000 aprox. al completar la carrera de 6 años, y de US\$ 98.300 si la termina en 7 años. En todos los casos no se ha tomado en cuenta el aumento del costo de la matrícula cada año, que puede alcanzar sobre 3% y más, ni tampoco los beneficios como becas o descuentos en matrículas.

Los estudiantes deben pagar su deuda cuando estén trabajando, en un plazo que acuerde cada uno con las instituciones financieras. Por ejemplo, si el estudiante de la Universidad de Chile programa el pago a 30 años, el monto mensual a pagar será de US\$ 490, y de US\$ 590 si lo hizo en la Pontificia Universidad Católica. Los montos subirán a US\$ 590 y a US\$ 720 mensuales, respectivamente, si la carrera se completó en 7 años. Los salarios promedio que tendrán los titulados serán de unos US\$ 2.000 mensuales los primeros 3 años, pudiendo subir a US\$ 3.000 el 3er año, y hasta US\$ 4.000 a los 5 años de experiencia, dependiendo de su especialidad en ingeniería.

Gracias a las presiones estudiantiles del año 2011 el gobierno bajó a 2% la tasa de los créditos avalados por el Estado, que se suman a la inflación, y asumió el costo del 4% de diferencia.

OCDE: la educación superior chilena es la más cara del mundo para las familias

El informe "Education at a Glance" del año 2009, de la OCDE, organismo que reúne a los países más ricos y económicamente más desarrollados del mundo, mostraba que, comparativamente en base al ingreso per cápita, la Educación Superior en Chile es la más cara del mundo para las familias. Además es la que recibe menos fondos del Estado, aquella con excesiva duración de carreras, y que tiene serios problemas de calidad. Esto explica por qué algunos estudiantes chilenos han optado por realizar estudios en universidades estatales de países vecinos.

V. Epílogo

Luego de casi 4 décadas de un modelo de sociedad con economía capitalista neoliberal de libre mercado, Chile luce buenos indicadores macroeconómicos, como un alto PIB, las altas inversiones extranjeras, los tratados de libre comercio, la baja tasa de desempleo, el nivel de exportaciones mineras y agrícolas, la estabilidad del precio del dólar, entre muchos otros. Instituciones internacionales como el FMI, y el Banco Mundial, han alabado y puesto como ejemplo a seguir el caso de desarrollo chileno. También hay algunos buenos indicadores sociales, como la amplia cobertura del acceso a la educación, el aumento de la esperanza de vida, la reducción de la pobreza extrema, mayor equidad de género, programas de subsidio a la vivienda, programas para la tercera edad, entre otras.

Por otro lado, Chile luce también indicadores que reflejan la mala situación que vive y agobia a un gran porcentaje de la población. Entre los países de la OCDE Chile es el país con el mayor índice de segregación escolar, y con la mayor brecha entre los ingresos del 10% más rico y el 10% más pobre de la población, donde el costo de los estudios es el más alto del mundo para las familias y los estudios son de baja calidad. Por otro lado en Chile el sistema de salud pública es muy deficiente y tiene financiamiento insuficiente, las administradoras de fondos de pensiones se enriquecen dejando a los pensionados con pensiones miserables, donde la delincuencia juvenil y adolescente ha alcanzado niveles alarmantes, y también la drogadicción y el alcoholismo juve-

nil, donde muchas jóvenes consiguen dinero con servicios sexuales para pagar los altos costos de sus estudios, y otros venden droga por el mismo motivo, donde el porcentaje de chilenos con depresión está entre los más altos del mundo, donde los robos y delincuencia han seguido aumentando cada año, donde muchos trabajadores no cuentan con condiciones laborales dignas, donde el salario mínimo legal que ganan un número grande de trabajadores alcanza el 22% del ingreso per cápita nacional, donde en una misma empresa los sueldos gerenciales llegan a ser 70 a 100 veces, o más, que el sueldo de otros trabajadores, donde la cantidad de familias que viven de limosnas es enorme, donde es común ver a adolescentes y jóvenes estudiantes trabajando por propinas a falta de dinero. También Chile tiene un alto grado de corrupción velada, donde las autoridades políticas y administrativas privilegian a quienes tienen más dinero, como el director de Impuestos Internos que condonó una deuda en impuestos de US\$ 120 millones a una empresa de Retail que a los pocos días fue comprada por el señor más rico de Chile, donde una presidenta usa su poder para permitir la instalación de industrias contaminantes, cuyo permiso había sido negado por la Corte Suprema, donde los casos de corrupción y abusos de poder abundan en el mundo político de todas las tendencias, donde un presidente indulta a un narcotraficante que fue sorprendido internando 500 kilos de cocaína, donde cadenas de retail y el Banco estatal cambian los contratos aumentando cargos y comisiones a sus servicios sin la aceptación

explícita de sus clientes, donde cadenas de farmacias se coluden para aumentar en 200% y más los precios de fármacos caros obligados, donde... donde... donde... etcétera. La lista de abusos, injusticias y desigualdades, es interminable...

La institucionalidad chilena debe cambiar

“la actual institucionalidad no es capaz de contener las demandas del movimiento estudiantil”

A fines del año 2011 en una entrevista en televisión el nuevo presidente de la Federación de estudiantes de la Universidad de Chile, Gabriel Boric, comentó sobre las barreras que impiden los avances en las demandas del movimiento estudiantil.

“Nosotros nos hemos dado cuenta de que la actual institucionalidad no es capaz de contener las demandas que tiene el movimiento estudiantil”. “Y, por lo tanto, creemos que es necesario apuntar hacia la institucionalidad. Nos dimos cuenta que con la discusión del Presupuesto, así como está el Parlamento, de que es imposible que las demandas estudiantiles se materialicen por voluntad de los parlamentarios”. “Los problemas que tiene la sociedad civil chilena no son de carácter sectorial, el problema que tiene salud no está aislado de vivienda, tampoco está aislado del problema que se viven en educación, todo está cruzado por una transversal que es un modelo político, económico que excluye a las grandes mayorías de la toma de decisiones y favorece a una pequeña minoría (...) sabemos que no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Una de

las grandes novedades del próximo año va a ser poder aliarse con otros sectores sociales que están en formación”.

De esta forma los estudiantes hacían ver que para efectuar los cambios que requiere la sociedad chilena se necesitan reformas profundas a su institucionalidad, y que los principales opositores a ellas era el “establishment” político, económico y financiero.

La esperanza sigue viva

“Aún tenemos sueños”

La movilización del 11 de julio de 2013 fue convocada por la Confederación Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) para realizar un paro nacional en demanda de mejoras en las leyes laborales, y en protesta por las políticas neoliberales impulsadas por los actores políticos. En ella participaron también estudiantes y profesores de enseñanza pri-

maria y media, y algunos universitarios. Dos mensajes que portaban estudiantes en la marcha en Valparaíso, decían: *“aún tenemos sueños”* y *“cuando ya abriste los ojos no puedes volver a cerrarlos”*. Un señor de avanzada edad vestido de traje y corbata portaba un mensaje que decía *“vivan los estudiantes y trabajadores de mi Chile que van a cambiar a este país de mierda lleno de injusticias, abusos y desigualdades”*.

Estos mensajes reflejan la esperanza que aún tienen gran parte de los chilenos, desde jóvenes adolescentes hasta ancianos pensionados, por el fin de una sociedad que sistemáticamente destruye sus sueños y alegrías, que no brinda a todos los niños y niñas las condiciones adecuadas para tener una educación de buena calidad que les permitan desarrollar plenamente sus potencialidades y puedan construir un mejor futuro para sí mismos, sus familias, y su país.

España: de los impactos de la crisis a las movilizaciones de protesta

Antonio Alaminos y Clemente Penalva*

El sur de Europa está experimentando una crisis económica de una intensidad y duración desconocida en la memoria de muchas generaciones. El impacto se agrava al producirse tras un breve período de bonanza económica y expansión del consumo, cuyo efecto a medio plazo fue endeudar fuertemente a las clases medias y populares. La destrucción acelerada del empleo ha cambiado el panorama social, al producir una emergente contestación social, consecuencia, entre otros motivos, de los abusos normativos que protegen al sistema financiero. Estas tensiones se producen en un contexto donde las instituciones políticas experimentan una crisis de credibilidad como fruto de la corrupción, la financiación ilegal de partidos y los lucros y privilegios personales de los políticos. Por efecto de la crisis económica la sensibilidad social a estos casos se ha incrementado. La bifurcación de la crisis económica en crisis social y política, y la interacción entre éstas define la movilización sociopolítica en España. Movilización en las calles, pero también cambios en las posiciones adoptadas ante el sistema de partidos y la práctica democrática en conjunto. Las críticas al modo de hacer política en España han llevado, como reflexión popular colectiva, a cuestionar el concepto de democracia como una simple expresión formal de reglas y procedimientos. En la actualidad esta situación puede transformar profundamente el sistema político español. Primero como consecuencia de los movimientos de resiliencia democrática que buscan nuevas expresiones políticas. Y segundo, dada la difusión de una alienación política que enajena a los ciudadanos del actual sistema de partidos.

Introducción

España ha vivido, en apenas una década, un período de expansión económica sin precedentes, seguido de otro de crisis y profunda depresión. Las consecuencias han sido inmediatas dada la intensidad de la crisis. Así, se pasa de experimentar unos procesos de inmigración muy intensos a, en ape-

nas un año, convertirse nuevamente en país de emigración. Los inmigrantes inician de nuevo otro ciclo migratorio o de retorno, al mismo tiempo que los trabajadores españoles, especialmente los más jóvenes y los más cualificados, se marchan al extranjero. Este es un indicador evidente de la convulsión experimentada por la sociedad española: en pocos años deja de ser una economía que atrae inmi-

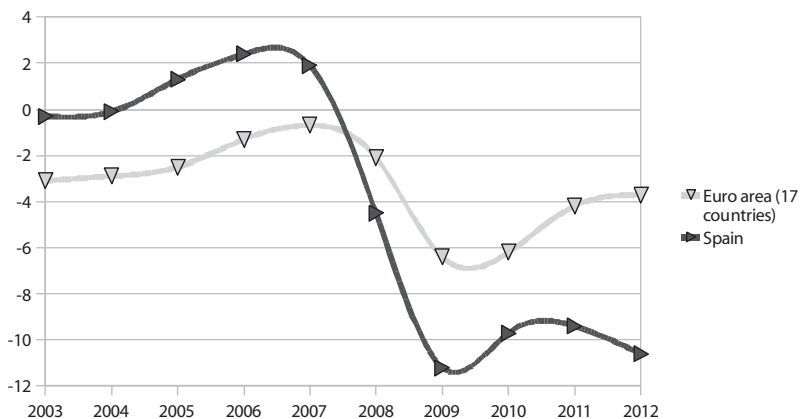
* Catedrático de Sociología, Matemática. Director del Departamento de Sociología. Investigador del Instituto de Desarrollo Social y Paz. Universidad de Alicante.

gración y pasa a ser una economía que expulsa trabajadores. La emigración es una respuesta social a la crisis económica sobrevenida, pero evidentemente no es la única. Son muchas las reacciones, incluyendo la movilización social o la alienación política, las que se han activado en la sociedad. Con carácter contextual, es importante apreciar la magnitud del impacto y para ello se expresará de forma simplificada en términos cuantitativos.

En primer lugar, y para una mejor comprensión del reproche social que experimentan los políticos, destacar que esa evidente discontinuidad y su radicalidad sólo han sido posibles gracias a la imprevisión de los gobiernos que alentarón y protegieron la burbuja inmobiliaria y financiera. Ha sido la incompetencia de gestión, así como la corrup-

ción del sistema político, especialmente en el ámbito local y autonómico, la que alimenta la intensidad de la crisis. Baste como ejemplo el emprendimiento de obras públicas faraónicas cuyo único interés era la cascada de comisiones y beneficios personales que reportaba a determinados políticos. Esa mezcla de incompetencia y avaricia, protegida por el corporativismo exacerbado existente dentro de algunos partidos políticos, es la que se hace pública de forma simultánea con los estragos sociales de la crisis económica. Para apreciar esa ausencia de gestión y previsión basta observar la evolución de la deuda pública española. Como puede apreciarse en el gráfico 1, España pasa en cuestión de pocos años de tener superávit a tener un endeudamiento muy elevado.

Gráfico 1
Déficit en España y en la Unión Europea (2003-2012)



Fuente: Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_dd_edpt1&lang=en

Durante un corto período de tiempo, España tuvo superávit en la deuda

pública. La gestión política del superávit puede dar contenido fácilmente a un

“manual del despropósito”. Tanto en la dimensión de ingresos como en el de gastos. En un contexto de falta de control de la administración pública sobre las transacciones hipotecarias o financieras y de una permisividad realmente pasmosa con la existencia de trabajadores sin regularizar o con el dinero B. Todos esos flujos de riqueza escaparon al control impositivo del Estado y dieron forma a la salida masiva de riqueza a los paraísos fiscales. Los efectos colaterales del enriquecimiento privado fueron elevados. Por otro lado, es verdaderamente difícil calcular en qué grado la deficiente gestión de lo público ha endeudado el presente y el futuro a los ciudadanos españoles. En ese sentido, los recortes drásticos que sufre el sistema de bienestar social son consecuencia de la mala praxis política en tanto o mayor medida que la crisis económica en sí misma. Es algo importante a destacar del panorama actual de las protestas en España: la crisis económica es internacional pero la intensidad de las penalidades que se padecen son consecuencia de la mala gestión nacional. La corrupción y las obras megalómanas realizadas con dinero público en los años de crecimiento lo recuerdan continuamente. Para una parte de la opinión pública española, la responsabilidad de la crisis está en los políticos y su actuación como casta endogámica, donde la protección del *status quo* y del poder económico es su *ultima ratio*.

Precisamente, es la presión de la coyuntura, especialmente sobre las emisiones de deuda y potenciada por la crisis del sistema financiero -dañado por los activos tóxicos, así como por la pésima gestión política de sistema de cajas

de ahorros (directamente imputable a los partidos políticos que las controlaban)- la que lleva a unas elites políticas caracterizadas por la imprevisión a actuar, bajo supervisión evidente de la troika (FMI, Banco Central y Eurogrupo), directamente sobre el Estado de Bienestar. La crisis ha provocado un deterioro patente de los derechos sociales de la población española. Las duras condiciones impuestas por las instituciones internacionales se han sustanciado en medidas que atentan contra derechos sociales que han llegado a ser considerados consustanciales a un Estado democrático y social de derecho. Independientemente de la dudosa efectividad en términos macroeconómicos de las políticas de austeridad, se da el hecho irónico de que cuando más se necesita la protección del Estado, más se reduce su vertiente social.

Todo el conjunto de iniciativas políticas legislativas han conducido a un estado de malestar con los gobiernos que han gestionado la crisis (PSOE y PP) que no sólo son acusados de falta de anticipación, sino también como connivente con los sectores más poderosos; e incluso como causantes directos de la crisis. Estas iniciativas van desde un cambio en la Constitución del Estado (la única reforma, salvo la introducida en 1992 para permitir el voto pasivo de los ciudadanos europeos residentes en España) que introduce en 2010 el concepto de “estabilidad presupuestaria” para impedir un incremento del déficit superior al valor indicado por la Unión Europea; hasta la reforma laboral para incrementar la flexibilidad del mercado de trabajo. En la actualidad la desregulación del mercado laboral (desaparición en la

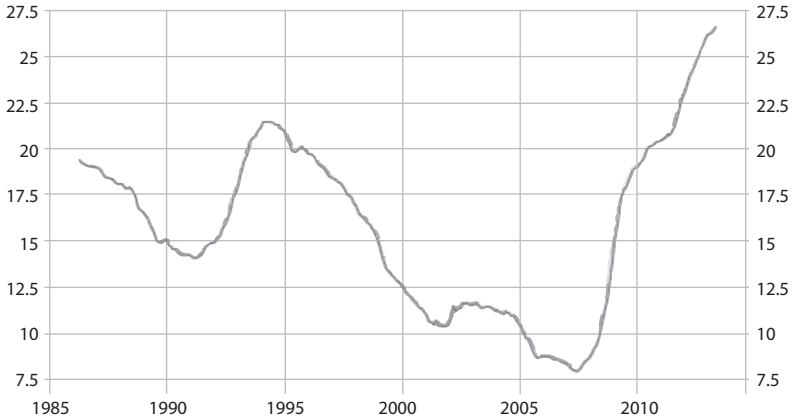
práctica de convenios colectivos y cálculo de indemnización por despido) está produciendo un efecto retorno en empresas españolas que previamente habían deslocalizado su producción. Es un indicador evidente de la depreciación del mercado de trabajo en España. También, de la depreciación de la calidad de vida y del consumo. Forman parte de esa dinámica diferentes decretos y decisiones ministeriales orientadas a la reducción de la protección al desempleo, la disminución de la cantidad y calidad de los servicios públicos y el deterioro de las condiciones salariales y laborales de los empleados públicos. Por otro lado, merece destacar la importante indignación que han producido las ayudas estatales dirigidas a paliar los problemas del sector causante directo de la crisis: el financiero. La crisis económica en España, y en general en el sur de Europa, aparece asociada a la política (corrupción e incompetencia) y a lo social (desmantelamiento del Estado de Bienestar). Es importante destacar estos elementos, en la medida que dan forma y expresión a las protestas sociales.

El impacto social de la crisis económica

La crisis económica es un concepto general. La vía con la que ésta penetra y transforma la realidad social de un modo concreto es, sobre todo, el empleo. El empleo conforma en las sociedades desarrolladas el estilo de vida de los individuos. Da la expresión de lo cotidiano. Y da respuesta a sus compromisos económicos. La crisis económica ha producido efectos, que en el caso del sur de Europa, destacan por la intensidad y, sobre todo, por la rapidez con

que han impactado en la sociedad. Un indicador relevante de este hecho es la revolución que experimentan las cifras del desempleo y sus consecuencias en el hundimiento de la estructura de estatus en España. Las tasas de desempleo alcanzan niveles máximos tanto en términos absolutos (más de 6 millones de parados) como relativos, superando el 25% de la población activa. Como se puede observar en el gráfico 2, el incremento del desempleo -tras las cifras del período de crecimiento económico anterior- ha sido tan espectacular que supera con creces los niveles de anteriores períodos de recesión, como fueron las crisis de la primera mitad de los años 90 o la de los años 80. Los datos de finales de 2012 indican que un 10,5% de los hogares tienen todos sus activos en paro. Para la población más joven (menores de 25 años) las tasas alcanzan niveles dramáticos, por encima del 56%. Otros indicadores sobre la situación social en España, recogidos en el Informe de 2013 sobre Desigualdad y Derechos Sociales de la fundación FOESSA (2013), destacan el incremento de la pobreza hasta alcanzar el 21,1% y de la desigualdad (el índice Gini ha pasado del 0,31 en 2006 al 0,34 en 2012). Los datos del mismo informe indican que el 26,8% de población está en riesgo de exclusión social. Las desigualdades y la precariedad de los proyectos vitales se han extendido con gran rapidez en la sociedad española actual. Una sociedad que se siente en gran parte completamente huérfana de expresión política formal. Abandonada por el Estado y que busca cauces alternativos de expresión y presión.

Gráfico 2
Tasa de desempleo en España (1985-2012)



Fuente: BCE http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=132.STS.M.ES.S.UNEH.RTT000.4.000

Como podemos apreciar, es abrumador tanto por la magnitud de la destrucción de empleo como por el brevísimo período de tiempo en que se concentra. Ese impacto ha producido un hundimiento acelerado en la estructura de estatus de la sociedad española, como muestra el análisis de varianza sobre la media de estatus en España entre 2009 y 2012. Para el análisis em-

pleamos los datos procedentes de seis Eurobarómetros.¹ Tal y como se observa en los datos, el salto cualitativo en la percepción subjetiva de estatus puede situarse en el año 2010. El test muestra dos momentos en la secuencia de años. Por una parte 2009, con una media de status de 5,9 y, por otra, la secuencia de 2010 (5,1), 2011 (5,08) y 2012 (5,01).

1 Se trata de los Eurobarómetros EB 71.2 y EB 71.3 de 2009, EB 74.3 de 2010, EB 75.3 de 2011 y EB 77.2 y EB 77.4 de 2012. Es una escala Cantril consistente en el autopercepcionamiento del entrevistado en términos de posición social: 1 la posición social más baja y 10 la posición social más alta. El análisis de posición media de estatus para cada año (análisis de varianza) permite observar cómo existen diferencias significativas para cada año 2009, 2010, 2011, 2012. Ofrece un coeficiente F de 168.491 con una significación de .000. El hundimiento es continuo, cayendo la posición media cada año considerado. Efectuando un análisis algo más refinado, mediante una prueba post hoc (Scheffé), podemos considerar si, aún siendo diferente la media de estatus para cada año (t-test), existen diferencias entre ellas, en términos de intensidad.

Tabla 1
Percepción subjetiva del estatus en España
Media (escala 1-10)

2009	2010	2011	2012
5.9	5.1	5.08	5.01

La percepción que los españoles tienen de su posición social se deteriora año tras año. El salto cualitativo se produce en el 2010, en el que a la intensidad de la destrucción de empleo se suma el reconocimiento pleno del gobierno socialista de estar superado por la crisis y la adopción de medidas drásticas que afectaban directamente al Estado de Bienestar. En ese sentido, cabe destacar que el descenso social viene dado tanto por las modificaciones en el estilo de vida que produce el desempleo, como por el desmantelamiento de la protección social que permitía a sectores sociales desfavorecidos una vida digna. Es el caso de la Ley de Dependencia (ley aprobada en 2006 que pretendía financiar los servicios que necesitan las personas dependientes) que

queda vacía de contenido real. En ese sentido, el desempleo deteriora la calidad de vida de los ciudadanos, pero también y simultáneamente, el abandono de la administración pública de sus obligaciones sociales.

Esta dinámica de desigualdad se desarrolla en el sentido opuesto de los deseos de la sociedad española. La reducción de las desigualdades es uno de los objetivos políticos con mayor apoyo social. Un 83% de los españoles apoyan las políticas de reducción de la desigualdad. En esta encuesta está expresada como reducción de las diferencias de ingresos, pero idénticos resultados aparecen en otros estudios con frases referidos a desigualdad social o a diferencias de clases (Encuestas GETS, Eurobarómetros, ISSP, ESS, etcétera).

Tabla 2
Demanda de políticas de reducción de la desigualdad en España (2013)

‘El Gobierno debería tomar medidas para reducir las diferencias en los niveles de ingresos’	
Muy de acuerdo	39.7
De acuerdo	43.5
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	6.2
En desacuerdo	5.6
Muy en desacuerdo	1.3
N.S.	2.9
N.C.	0.8
TOTAL	100

Fuente: CIS. Estudio 2930. Enero 2013.

La tolerancia a la desigualdad, uno de los parámetros estructurales considerados por Inkeles y Levinson (1997), y posteriormente por Hofstede (2001), no es elevada en la cultura cívica española. Especialmente, como consecuencia de la percepción subjetiva de movilidad social ascendente que, gracias a la expansión del consumo y del ocio, habían asumido las clases medias. El desclasamiento es uno de los tabúes más extendidos para amplias capas de la sociedad española. La ampliación de la brecha social no es aceptable. Sin embargo, la actuación de los políticos, la gestión de la crisis, orienta en ese sentido de forma inexorable. Como tendremos ocasión de comprobar nuevamente, la contradicción entre el “ser” de la política y el “deber ser” en la opinión pública española es una constante de la situación actual.

El impacto político de la crisis social

La ineptitud y la corrupción de algunos responsables políticos, así como la reducción de los derechos sociales conseguidos durante décadas de lucha obrera ha provocado, obviamente, la respuesta social por parte de numerosos colectivos afectados. Independientemente de la capacidad de movilización de estos grupos, en ningún caso despreciable; el efecto cualitativo más importante es que consiguen ser altavoces de un sentir generalizado en la sociedad española. Los políticos y la corrupción política se han convertido en el segundo problema más importante de los ciudadanos (Barómetro CIS de junio 2013). Después del desempleo y de los proble-

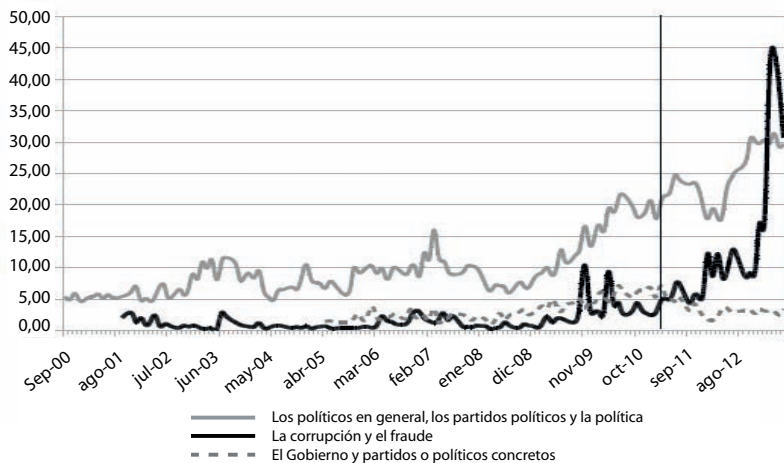
mas económicos, la política y los políticos se perciben como un problema de España. En este país siempre ha existido un malestar de fondo con la actuación de los políticos, tal y como se refleja en su consideración como problema por parte de la opinión pública española en los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas. Este malestar de fondo se expresaba mediante una situación estacionaria que comienza a crecer de forma muy notable a partir de la gestión política de la crisis económica. Esta desazón con los políticos se ve especialmente asociada al conocimiento de casos de corrupción, cada vez con más relieve mediático en un contexto de depresión social y económica. Según publicaba el diario *El País* el 17 de junio de 2013 (Gómez, 2013), entre 2000 y 2010 se han producido más de 800 casos de corrupción, vinculando políticos y urbanismo, con más de 2000 detenidos. El número de casos ha sido más elevado a partir del 2008. Muy posiblemente, en la medida que la crisis económica ha quebrado muchas complicidades, los casos denunciados públicamente han crecido de forma casi exponencial en los últimos cinco años.

En el gráfico 3 podemos apreciar la evolución de los tres problemas: “la corrupción”, “los políticos” y “el partido que gobierna o su oposición”. Son problemas que los ciudadanos expresan en forma de respuesta abierta. Un primer aspecto interesante es apreciar cómo la referencia al sistema “gobierno/oposición” se debilita tras el 15 de mayo de 2011 (fecha que da nombre a un importante movimiento de contestación), y los políticos pasan a ser (como concepto genérico y no sólo en el gobierno) el

problema que le sustituye. Es importante esta generalización, que incluye a todos los partidos como problema y no solamente a los mayoritarios. Los partidos políticos empiezan a ser dibujados con trazo grueso para una parte de la opinión pública. En segundo lugar, es importante hacer notar que los conceptos de corrupción y política se contagian uno del otro, convirtiéndose en sinónimos. La política y la corrupción forman parte de la misma definición para

un segmento cada vez más amplio de la opinión española. Y el nexo entre ambos es el de crisis económica. No son escándalos sexuales o de privilegios o de abusos de poder. El pegamento entre corrupción y política es la economía: comisiones, sobrecostes, financiación ilegal de partidos o campañas y un largo etcétera. La percepción social de la crisis está íntimamente asociada, casi genéticamente mediante la corrupción, con la crisis política.

Gráfico 3
Porcentaje de españoles que opinan espontáneamente que los políticos y la política, la corrupción política o el partido en el gobierno, son un problema para España (2000-2013)
(La línea vertical señala mayo de 2011)



Fuente: Elaboración propia a partir de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, varios años) (http://www.cis.es/cis/open/cm/ES/11_barometros/index.jsp)

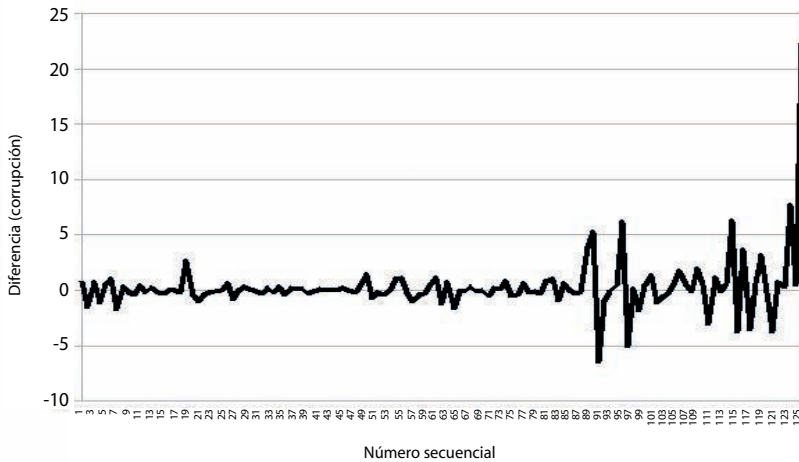
La importancia de la percepción de la corrupción y de los políticos se incrementa de forma extremadamente accele-

rada en los últimos tres años. En términos técnicos definen modelos de serie temporal multiplicativos. El gráfico 4

muestra la serie sobre la corrupción diferenciada a un lag, donde se puede apreciar directamente ese carácter multiplicativo. Su interés, análisis más detallado aparte, es que permite ilustrar (metafóricamente) cómo se acelera el pulso de la sociedad conforme avanza el tiempo, la crisis y la sucesión de escán-

dalos. Esa tensión social, medida mediante su indicador “sensibilidad a la corrupción de los políticos” permite comprender el proceso de intensificación de la protesta social. En ese sentido, la crisis política y social ha trascendido, y se ha superpuesto, como lectura crítica, a la crisis económica.

Grafico 4
Percepción de la corrupción como problema en España
 (Noviembre de 2001 a febrero de 2013 - serie diferenciada a 1 lag)



Fuente: Elaboración propia a partir de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, varios años) (http://www.cis.es/cis/opencm/ES/11_barometros/index.jsp)

Existe una crisis política que se refleja igualmente en la pésima valoración de los políticos y la política. Así, en la tabla 3 se aprecia como el 90% de los españoles afirma tener poca o ninguna confianza en la política. Y el principal

motivo de esta desconfianza es nuevamente la identificación de la misma con el fenómeno de la corrupción. Para un 60% de los que desconfían de la política la causa principal es la corrupción (tabla 4).

Tabla 3
Confianza en la política en España

<i>Podría decirme si Ud. cree que a los/as ciudadanos/as en general la política les inspira mucha, bastante, poca o ninguna confianza?</i>	
Mucha	0.7
Bastante	5.6
Poca	57.6
Ninguna	33.5
NS	2.1
NC	0.4
TOTAL	100

Fuente: CIS (2012). Estudio 2930. Enero-febrero 2012

Tabla 4
Motivos para desconfiar de la política en España (2013)

<i>Pensando en aquellas personas que tienen poca o ninguna confianza en la política, ¿cuál de los siguientes motivos cree Ud. que es el principal por el que desconfían?</i>	
La corrupción de algunos/as políticos/as	60.6
La falta de preparación de quienes ocupan puestos políticos	9.4
La prioridad que los/as políticos/as dan a sus intereses personales	8.7
La escasa preocupación de los/as políticos/as por los problemas reales de la ciudadanía	8.6
El mal funcionamiento de las instituciones políticas	4.9
La imagen de enfrentamiento entre diferentes líderes políticos	4.2
La imagen crítica que dan los medios de comunicación	0.8
Otro motivo	0.6
NS	1.7
NC	0.6
TOTAL	100.0

Fuente: CIS (2012). Estudio 2930. Enero-febrero 2012

La idea generalizada de corrupción de los políticos se combina con la economía, y especialmente en los ámbitos en los cuales ejercen su labor como "autoridades". Es decir, desde dentro del sistema legal en el que están insertos y donde disfrutan de una posición de poder para intervenir en la actividad económica. Esta ligación es la que da cuenta de ese carácter genéticamente económico que tiene la crisis política. Difícilmente es asumible por parte de la población la desvinculación de la clase

política de los efectos de la crisis. No es compatible la propaganda que refiere la crisis al contexto internacional, y fuera del control y responsabilidad real de los políticos. La corrupción da relieve a su papel real en la gestión de la economía, bajo la forma de despilfarro, abuso y descuido de lo público. La tabla 5 da cuenta de dicha realidad en la opinión pública y hasta qué grado la forma corrupta de hacer política ha contaminado la administración del Estado.

Tabla 5
Percepción pública de la corrupción política

<i>Me gustaría que me dijera si cree que la corrupción está muy extendida, bastante, poco o nada extendida en/entre...</i>	Muy extendida	Bastante extendida	Algo extendida	Poco extendida	Nada extendida	No hay corrupción	NS	NC	Total
Los/as políticos/as	47.1	39.5	7.2	3.5	0.5	0.0	1,9	0,2	100
Las autoridades que otorgan contratos públicos/subvenciones	35.6	40.3	11	5.8	1.3	0.1	5,9	0,1	100
Las autoridades que conceden permisos y licencias de obras	35.8	40,7	10.3	6	1	0.0	6.2	0.2	100

Fuente: CIS (2012). Estudio 2930. Enero-febrero 2012

La evidente desconfianza hacia los políticos que muestran los datos del CIS expuestos más arriba, lleva a la percepción de que son motivaciones poco relacionadas con el bien público las que impulsan las trayectorias de los políticos. En la tabla 6, donde se mues-

tra el porcentaje de encuestados que está de acuerdo con diferentes motivos para presentarse a unas elecciones por parte de los candidatos, la ciudadanía observa una contradicción reiterada entre el “ser” de los políticos y el “deber ser”.

Tabla 6
Percepción sobre las principales motivaciones de los candidatos a elecciones políticas en España (2012)

<i>¿Cuál cree Ud. que es el principal motivo que lleva a la mayoría de los/as candidatos/as, a presentarse en unas elecciones? Y desde su punto de vista, ¿cuál debería ser el motivo principal?</i>	Es el principal motivo	Debería ser el principal motivo
	% en primer lugar	% en primer lugar
El poder y la influencia que se obtiene a través del cargo	69.6	3.2
La posibilidad de luchar por sus ideales y los de su partido	13.6	22.7
La posibilidad de intervenir en la resolución de los problemas del país	7.3	48.6
La posibilidad de defender los intereses de su municipio, provincia o comunidad autónoma	6.1	23.7
N.S.	3.0	1.5
N.C.	0.4	0.3
TOTAL	100.0	100.0

Fuente: CIS (2012). Estudio 2930. Enero-febrero 2012

Casi un 70% cree que el principal motivo de los políticos para estar en política es el poder y la influencia. Por el contrario, la opinión pública más generalizada es que la motivación fundamental de los políticos debería ser resolver los problemas del país y defender los intereses de los ciudadanos en los diferentes niveles de gobierno. La crisis de la política en España responde en mayor grado del fracaso de la elite política actual (el modo en que hace política), que al sistema democrático o la política como actividad. Esta distinción es la que se aprecia perfectamente en la tabla 6. La política debería ser algo diferente a lo que están haciendo en la actualidad los políticos. Por ello, los actores políticos actuales son parte del problema, en la medida en que sus motivaciones son torcidas y no responden a la motivación socialmente correcta.

Interacciones: Las consecuencias de la crisis sociopolítica

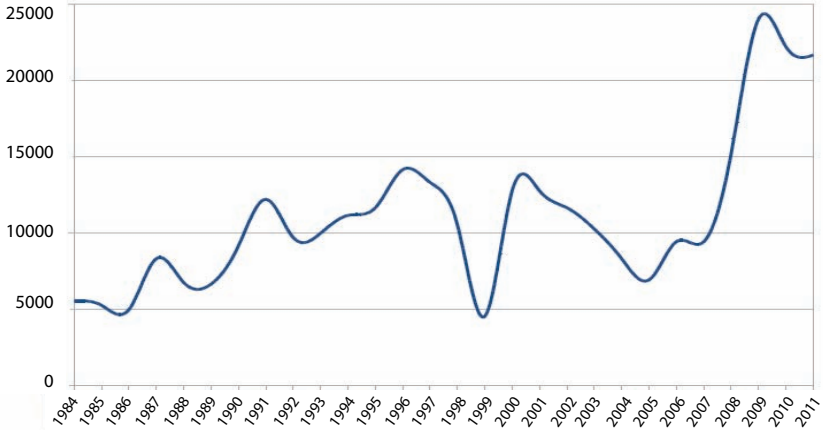
España es posiblemente un excelente ejemplo de los movimientos sociales y políticos que se han desarrollado en el sur de Europa como respuesta a la gestión de la crisis. No es un caso único y original. Posee antecedentes (las primaveras árabes que llevaron a cambios políticos en algunos estados del Norte de África), concurrentes (Portugal) y consecuentes (Estados Unidos y Reino Unido). Sin embargo, por su repercusión internacional el caso español (bautizado mediáticamente como *Spanish Revolution*) ha constituido un ejemplo inspira-

dor de muchos movimientos de regeneración política en las democracias de países occidentales. Los antecedentes presentados en anteriores apartados muestran la coincidencia en el tiempo de diferentes factores que explican el origen económico y político del desencanto social que ha desencadenado las movilizaciones más importantes de los últimos 20 años en España. Son protestas que cuestionan la legitimidad democrática de las decisiones políticas. Por ello consideramos importante, en este esfuerzo analítico, distinguir entre las formas que adoptan las protestas y los contenidos sustantivos de éstas. Vamos a considerar especialmente el contenido en la medida que la crisis económica se ha convertido de forma sustancial y profunda, en una crisis del sistema político y de su legitimidad social. En la expresión de estos movimientos se observan prácticas de resiliencia política que apuntan a un rescate de los verdaderos principios y valores del ejercicio de la democracia.

a) Las formas de movilización y protesta

La reacción social en España se ha producido de forma intensa y acumulada, conforme se derruía el Estado de Bienestar. Podemos observar cómo a partir del inicio de la crisis el número de manifestaciones y protestas registradas por el Ministerio del Interior se han incrementado notablemente. Un número de protestas que al igual que las cifras de desempleo duplican las celebradas en anteriores períodos de crisis económica.

Gráfico 5
Manifestaciones en España (1984-2011)



Fuente: Elaboración propia a partir de Jiménez Sánchez (2011) y Ministerio de interior (varios años)

Como hemos planteado, los movimientos sociales que experimenta España son, en su inicio, la reacción social a las reformas y recortes que se efectúan para dismantelar el Estado de Bienestar. Las reformas afectan no sólo a derechos, sino también a las libertades (criminalización de la protesta, represión de las movilizaciones e incremento de la población reclusa en un país con un índice de criminalidad más bajos de Europa). Destaca la gran diversidad de estos movimientos tanto en sus reivindicaciones como en sus formas de protesta. Algunas reivindicaciones van orientadas a detener reformas sectoriales como son las diferentes “mareas” (“*marea roja*” de desempleados, “*marea blanca*” de defensa de la Sanidad Pública, “*marea verde*” de protección de la Educación Pú-

blica, “*marea negra*” defensa de la Función Pública) o centradas en denunciar abusos financieros (Plataformas Antidesahucios, de Afectados por las Hipotecas, o de afectados por las “preferentes”-ahorradores tradicionales que han invertido en productos financieros de transparencia dudosa); y otras, más bien globales, que apuntan a una profunda transformación del sistema en sus vertientes política, medioambiental o económica, como es el movimiento DRY (Democracia Real Ya). Una característica importante de las protestas en España es su sectorización. Se generan protestas asociadas a políticas o problemas concretos. En ese proceso fragmentario, el 15M, ocupando la puerta del Sol en Madrid, fue posiblemente uno de los pocos momentos de convergencia de

reivindicaciones, donde mediante un proceso de deliberación colectiva, identificaron en la política y los políticos una de las claves esenciales del problema. No obstante, tras ese momento importante de convergencia y reflexión, los desarrollos posteriores de las protestas se han mantenido fragmentados, con excepción de las plataformas relacionadas con las hipotecas. La expresión de las protestas ha variado, según los sectores implicados: las "mareas", como reacción al desmantelamiento del estado de bienestar, efectúan concentraciones regulares frente a hospitales, centros educativos, así como encierros y marchas. Las movilizaciones contra los desahucios hipotecarios, así como las de carácter más próximo a la situación económica, son más "intensas": ocupando edificios vacíos -producto precisamente de la burbuja inmobiliaria-, encadenándose para evitar desahucios, efectuando recogida de firmas para modificar leyes y realizando protestas ante las instituciones públicas o privadas (denominados "escraches") de fuerte carga simbólica (Parlamento y otras instituciones del Estado, bancos o domicilios de los políticos). Las protestas de carácter más político, pidiendo regeneración democrática o denunciando la corrupción, tienden a la ocupación de lugares públicos (como indica el nombre del movimiento "Toma la plaza") recuperando la imagen democrática del ágora griega y el debate ciudadano. Las ONGs tienen un papel lateral en estas protestas. No obstante, cada vez es mayor la

actividad organizada para el suministro de bienes básicos, como la FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos). El conjunto es una panoplia muy variada de protestas y movilizaciones donde, hasta cierto punto, las formas anticipan los contenidos.

Así, si consideramos los contenidos de las protestas, destaca especialmente ese momento especial de convergencia y reconocimiento mutuo que supuso el 15M iniciado en Madrid. Actúo como catalizador, apoyado por unos medios de comunicación que buscaban la noticia del "estallido social" y que, por lo tanto, le dieron una difusión excepcional. El 15M actúo como espejo de lo que una sociedad sentía de forma difusa. Y ese momento de reconocimiento colectivo representó un antes y un después evidente. Si estudiamos mediante análisis de contenido las reivindicaciones expresadas en el 15M, podemos observar como en su heterogeneidad, están presentes todos los malestares: "hipotecas", "sanidad", "bancos", lo "público", "marea"... Sin embargo en el centro, y con un tamaño de letra que refleja su importancia (como frecuencia de aparición) aparece el resultado de la deliberación social que se estaba llevando a cabo: "Democracia". Lo que estaba sucediendo en España, y continúa aún, lleva necesariamente a la expresión presente en gran número de movilizaciones: "le llaman democracia y no lo es". La actuación de los políticos está, más que nunca, alejada de la voluntad popular.

ciudadanos conduce a la reflexión de articular algún tipo de oposición política que constituya una oposición institucional eficaz. Capaz de cambiar cosas; la evidencia de la necesidad de ese paso de lo social a lo político, es evidente hasta para la política tradicional. Así, Dolores de Cospedal, Secretaria General del PP, desafía a los movimientos sociales a presentarse en las elecciones si quieren cambiar algo. No es sin embargo un paso fácil, cuando en la base está la desconfianza hacia los políticos. Se aprecia, en cualquier caso, que las mismas circunstancias obligan a los movimientos sociales en esa dirección institucional. Institucionalización que pasaría por la creación de a) partidos políticos (causa de disensión dentro de la plataforma 15M: unos a favor y otros en contra), b) de presentar propuestas legislativas mediante firmas (como la de reforma de la ley hipotecaria), o c) como opción descentralizada y espontánea, de apoyar a partidos que desde dentro del sistema se oponen a la gestión política de la crisis. Uno de ellos, IU, desde la izquierda tradicional. Otros, como UPyD, desde un populismo centralista, sin estructura real como organización política, se ofrece como opción a los “antisistema” de derechas. Estos dos partidos aparecerían

como opciones políticas para los participantes en los movimientos de protesta.

Todo apunta a que las protestas sociales tendrán un fuerte impacto en la dimensión política, cambiando muy posiblemente de forma radical el sistema de apoyo electoral a los partidos.

b) Los contenidos de la protesta en España: la definición de política y democracia

Como hemos indicado, una fecha concreta, el 15 de mayo de 2011, marca el inicio y el nombre de un movimiento en desarrollo (el 15M). En esta fecha se efectuaron concentraciones de protesta en un gran número de ciudades españolas. Una protesta pacífica que mantuvo ocupadas durante días multitud de plazas (la más emblemática la madrileña Sol) en todo el país y que concentró a un gran número de ciudadanos convocados principalmente a partir de las redes sociales de internet. Los principales eslóganes y propuestas emitidos por este movimiento señalan los siguientes problemas percibidos y agentes causantes: banqueros y bancos, bipartidismo, corrupción, crisis, falsa democracia, servicios públicos y Estado del Bienestar (ver <http://ideas2021.blogspot.com.es/2011/06/esloganes-del-15-m.html>)

blación. Existe un notable grado de identificación con estos movimientos. Podemos ver cómo la simpatía hacia los

mismos no se ha reducido en los dos años que han transcurrido tras su irrupción en 2011.

Tabla 7
Respaldo social a las protestas sociales en España
y simpatía/rechazo al movimiento 15M (%)

	Respaldo social a los motivos de protesta					Simpatía/rechazo				
	Tienen razón	No tienen razón	No sé por qué protestan	NS/NC	Total	Más bien simpatía	Más bien rechazo	Ni una cosa ni otra	NS/NC	Total
<i>En general quienes participan en el movimiento 15M ¿tienen o no razón en las cosas que dicen y por las que protestan?</i>										
1 junio 2011	81	9	6	4	100	66	21	9	4	100
21 de junio de 2011	79	10	5	6	100	64	17	15	4	100
21 octubre de 2011	73	17	4	6	100	54	27	17	3	100
10 mayo 2012	68	20	3	9	100	51	33	11	5	100
17 mayo 2012	78	14	2	6	100	68	22	9	1	100
Mayo 2013	78	-	-	-	100	63	.	-	-	100

Fuente: Diario El País 18 de mayo de 2013 (sondeo de Metroscopia)

El apoyo medio durante este período se encuentra en torno al 80%. Es este porcentaje el que opina que los movimientos de protesta tienen razón en lo que reclaman. Como media, dos de cada tres españoles muestran simpatía hacia estos movimientos. En conjunto, los movimientos sociales dan visibilidad a un estado de ánimo bastante generalizado en la sociedad española. Hasta tal extremo que es un indicador de la polarización ideológica de los electorados. Desde el punto de vista ideológico se observa que es un sector del voto a la derecha, el más radicalizado, el que muestra rechazo hacia estos movimientos sociales. La simpatía o rechazo hacia el movimiento se estructura sobre

los segmentos electorales: un 42% del recuerdo de voto de 2011 al PP le muestra simpatía; siendo del 82% en el recuerdo de voto al PSOE. La imagen fractal del 15M, en la cual se mezclan todos los sectores que están protestando, le proporciona una notable capacidad aglutinadora y simbólica del malestar social generalizado con todas las políticas gubernamentales y las instituciones que la ciudadanía ha diagnosticado como responsables de la crisis y de sus consecuencias. Las encuestas de Metroscopia muestran como la imagen social del movimiento mejora tras cada movilización llevada a cabo para la celebración anual (en la tabla 8 se muestra el grado de apoyo y rechazo en dos

momentos –apenas unos días anterior y posterior- muy próximos al 15M de 2012). Esta mejora de valoración en la opinión pública adquiere sentido en la medida que las movilizaciones rechazan la situación actual, recuerdan las razones de movilización y mantienen unos principios de actuación pacíficos a

pesar del enorme esfuerzo gubernamental y de algún sector mediático de presentarlo como violento. Desde esta perspectiva, la opinión pública mantiene y alienta, con estas evaluaciones positivas, la llama del cambio; ampliando la motivación para seguir con sus movilizaciones.

Tabla 8
Evaluación antes y después de la protesta (15M de 2012)

	10 mayo 2012	17 mayo 2012
Movimiento que pretende regenerar la democracia	55	65
Movimiento radical y antisistema	29	20
Ni una cosa ni otra	7	8
NS/NC	9	8
TOTAL	100.0	100.0

Fuente: Diario El País 18 de mayo de 2013 (Metroscopia)

El movimiento 15M es percibido como un movimiento de regeneración democrática. Es así porque en el centro de la crítica está la percepción de un secuestro de la democracia perpetrada por la acción de los políticos. Responsables de la generación de la crisis, de la mala gestión de la misma y de la corrupción generalizada. Una clase política que se aferra a ritos y formalidades que les protegen del control social. Un eslogan muy repetido es “le llaman democracia y no lo es”. En la manifestación de las protestas se expresa una nueva definición de la política o una redefinición de la democracia que reclama una vuelta a los orígenes, en sus prácticas (asambleas públicas en las calles y plazas, libre expresión, inclusión -interclasismo, intergeneracional e intercultural) y en sus principios:

servicio al bien común, participación en las decisiones, responsabilidad de los representantes. Una democracia en sentido inverso al actual: de abajo a arriba, en la cual los representados controlen la acción de los representantes. Es evidente que las movilizaciones sociales y asamblearias expresan una visión algo utópica y extrema, reivindicando una nueva fundamentación de la política. No obstante, reflejan de forma destilada la principal reclamación de la sociedad: el restablecimiento de los vínculos de confianza entre representantes políticos y sociedad. En la actualidad, la lógica de la política no es la lógica del bien común. Es la lógica de los intereses creados en torno a un neocorporativismo que solapa grandes corporaciones económicas y familias políticas.

La crisis económica, en su expresión política, ha generado fuertes reacciones de resiliencia. Podemos considerar la resiliencia política como un conjunto de prácticas de resistencia que emergen a partir de los conflictos existentes entre los Estados y sus sociedades civiles. En ese sentido, las movilizaciones efectuadas en el Sur de Europa, más específicamente en España, constituyen elementos esenciales dentro de un proceso dinámico de adaptación positiva en un contexto de gran adversidad. La tesis que aquí se presenta sostiene que la crisis económico-financiera constituye una fuente de *stress* al que el sistema político no sólo ha sido incapaz de dar respuesta sino que lo ha acentuado, creando las condiciones para una revitalización de la sociedad civil. Desde esta perspectiva, se observa una sociedad civil que intenta recuperar algunos aspectos esenciales de la democracia, en el sentido de conservación o recuperación de aquellos elementos esenciales de la política que se perciben degradados. Estos movimientos sociales intentan recuperar las prácticas y valores de una verdadera democracia: participación en debates públicos abiertos entre iguales y poder de decisión en las decisiones sobre aspectos que afectan a toda la sociedad.

A grandes rasgos se pueden observar estas prácticas resilientes bajo las siguientes características: 1) la organización es siempre democrática y asamblearia, incluso cuando actúan de forma sectorizada como reacción a las políticas del gobierno; 2) se manifiestan en contra de una forma de hacer política que olvida a los ciudadanos y les impone, des-

preciando incluso las promesas electorales, reformas contra su voluntad; que actúa de una forma opaca primando el acuerdo entre elites y articulada en torno a unos partidos políticos que funcionan oligárquicamente, en muchos casos al margen de la ley y controlando el gobierno del sistema judicial. El ejemplo de inmunidad se encuentra ilustrado por la concesión de indultos por parte del gobierno, gran parte de ellos destinados a políticos y banqueros corruptos. Se trata de una forma de hacer política que es especialmente denostada por favorecer la corrupción, especialmente la que se manifiesta en la apropiación de fondos públicos tanto por políticos individuales como por los mismos partidos políticos (Casos Barcenás, Gurtel, etcétera). Estos dos aspectos forman los ejes organizativos y discursivos del movimiento 15M y de aquellos que le han sucedido.

Todas estas dinámicas convergen y se formalizan en la vertiente más políticamente orientada de los diferentes movimientos sociales: la centrada en la corrupción y la necesidad de regeneración política. Democracia Real Ya, es como hemos visto, un ejemplo muy relevante de la conciencia política de los movimientos sociales en España. Como consecuencia de las tensiones anteriores, la crisis económica, mediada por la crisis social, se expresa en la potenciación de dos dinámicas muy diferentes dentro de la crisis política. Por un lado el abandono y rechazo de la política en su expresión actual y, por otro, la resiliencia democrática que produce movilizaciones críticas y alternativas al actual sistema de partidos.

El trastorno bipolar de la democracia española: Resiliencia y alienación

Hasta ahora, la enorme diversidad de temas reivindicativos y de movimientos señala un doble carácter de la movilización: la descentralización organizativa y la ausencia de una voz única. Por otro lado, no han faltado diferencias en cuanto a las estrategias, patentes en cuanto al seguimiento de las convocatorias multitudinarias. Contradicciones entre estos movimientos sociales surgen especialmente en su oposición a la política actual. Un ejemplo fue la propuesta en septiembre de 2012 de asedio al Congreso de los Diputados, que no fue secundado por la mayoría de los movimientos. Éstos intentan por todos los medios evitar actos que les pongan fuera de la ley. No es fácil articular una nueva política frente a la vieja política. Especialmente, dado el carácter radicalmente democrático de un sector importante de los descontentos. Estos movimientos de rechazo, se mantienen fragmentados, pero poco a poco van innovando en sus actuaciones dada la no respuesta de la política tradicional y las medidas de desactivación y deslegitimación de la protesta que lleva a cabo el gobierno y los políticos; consistente en la criminalización (vinculándolos con organizaciones terroristas, calificando sus acciones como violentas) y en las legislativas, como la anunciada reforma del código penal. Por lo tanto, lejos de dar respuesta a las demandas sociales y paliar los efectos de la crisis, la reacción del gobierno ha sido el desarrollo de su vertiente más autoritaria. La persistencia de la crisis económica, el goteo constante de casos de corrup-

ción, el incremento de la represión de la protesta y la mala gestión de la crisis ofrecen un panorama de desconcierto para la sociedad española y debilita a los partidos con mayor representación parlamentaria.

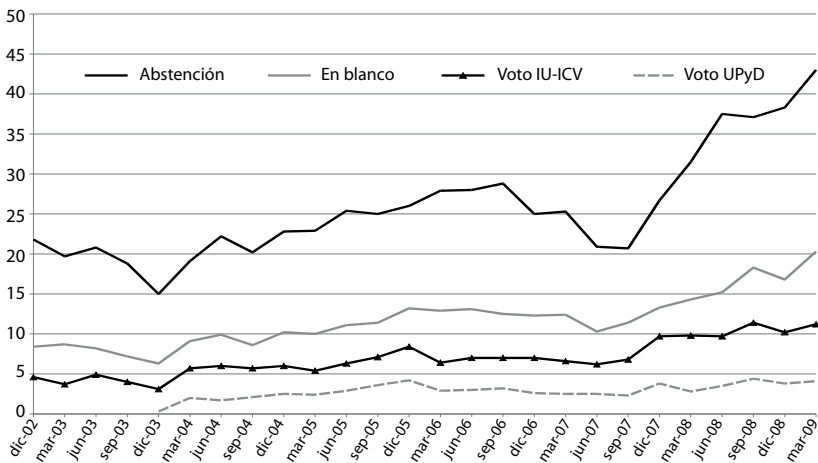
La crisis económica provoca un efecto multiplicador sobre los efectos de la crisis política. El principal impulso de las protestas ha sido la confirmación de que la gestión política de la economía se ha desviado totalmente de la voluntad popular. Encima de esa situación se ha sobreescrito, como acelerante, la corrupción de los políticos y partidos como el Partido Popular. La corrupción se presenta como elemento de síntesis entre política y economía, ambas ejercidas torcidamente. En términos sociopolíticos, el momento actual de la democracia española presentaría dos aspectos aparentemente contradictorios: por un lado, una efervescencia participativa en la vertiente no convencional (manifestaciones, protestas, firmas, ocupaciones, asambleas) que, como hemos señalado anteriormente, corresponde al fenómeno de resiliencia política en tiempos de crisis; y, por otro, a la desmovilización electoral consecuencia de la percepción social de que el sistema político es algo extraño, ajeno a los ciudadanos. Esta percepción se corresponde con el fenómeno de alienación política. En estos últimos términos el voto se considera cuanto menos inútil. Es más, los movimientos sociales han hecho altavoz de la percepción general de que el ejercicio del voto contribuye únicamente al mantenimiento de la crisis en todas sus dimensiones. Una crisis mal gestionada e incluso provocada por parte de unos representantes que siempre que pueden hacen ostenta-

ción de su legitimidad precisamente por los millones de votos obtenidos en los comicios electorales. El recurso a la legitimidad de los votos que el Gobierno recibió con falsas promesas es el mejor incentivo para expulsar de la participación a muchos electores arrepentidos.

Si observamos los datos que nos ofrecen los barómetros del CIS, pode-

mos apreciar cómo las tendencias en la intención de voto son de crecimiento en la intención de “voto en blanco” y de “abstención”, especialmente tras las últimas elecciones (2011) y los incumplimientos del PP. El PP quemó en unos meses las expectativas de cambio de una gran proporción del electorado que les votó en medio de la crisis.

Gráfico 8
Alienación y resiliencia
Evolución del % de abstención, voto en blanco e intención de voto a IU-ICV y UPyD (2007-2013)



Fuente: Elaboración propia a partir de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, varios años) (http://www.cis.es/cis/opencm/ES/11_barometros/index.jsp)

Considerando los datos anteriores, hay que destacar que existe una correlación cruzada importante entre ambas dimensiones: crisis de la política (corrupción y políticos como problema) y la intención de abstención y voto en blanco. El voto en blanco tiene un significado es-

pecial en un sistema como el español donde no hay obligación legal de participar. Son indicadores de alienación política: los individuos creen que han perdido su capacidad de influir efectivamente en los procesos políticos y de incidir en sus resultados. Los incumpli-

mientos de los programas electorales que de forma sucesiva han efectuado el gobierno socialista y el gobierno conservador han dejado una huella profunda entre sus electorados. La cadena causa y efecto (voto y políticas) se ha diluido hasta prácticamente desaparecer.

Para otros, emerge una práctica alternativa de la democracia que incrementa la competencia política del ciudadano. Les preocupa la política y la democracia. Han reconocido su valor y su necesidad para alcanzar los objetivos por los que se manifiestan y protestan. Éstos son los que han transferido su voto a los partidos, hasta ahora minoritarios o de nueva creación, que se ofrecen en un discurso paradójicamente antisistema. Ante la incerteza de una oferta propia, generada desde el interior de los movimientos sociales y que recoja un programa electoral con lo que actualmente son reivindicaciones callejeras, la intención de voto se orienta hacia partidos de izquierda tradicional, como Izquierda Unida, o hacia partidos populistas de nuevo cuño, como es UPyD. Los dos tienen su eje discursivo en la crítica a las prácticas políticas actuales, pero divergen sensiblemente en las políticas que están dispuestos a efectuar. Respecto a UPyD existe una gran incertidumbre sobre su comportamiento político futuro, dada su proximidad a una retórica populista y españolista. En algunos países de Europa, los partidos políticos de corte populista están en ascenso, y dentro de su heterogeneidad pre-

sentan rasgos antidemocráticos evidentes como son la xenofobia y el autoritarismo.

Los ensayos para transferir un movimiento social directamente a la esfera política institucional encuentran problemas casi insuperables. Un ejemplo de ello ha sido el movimiento “cinco estrellas” de Grillo en Italia. Su éxito electoral se ha concretado en una tremenda incapacidad real de hacer política. En ese sentido, la actuación de los movimientos sociales en actores políticos exige de una fase de transformación organizativa y de institucionalización de la que carecen y que además rechazan. En términos de estructura y articulación, únicamente la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que coordina Ada Colau, posee hoy por hoy la suficiente organización, coordinación territorial y motivación para poder efectuar esa transformación en fuerza política. No obstante, en el segundo aniversario del 15M la coordinadora de este movimiento declaró en la Cadena Ser (2013) de radio que “un movimiento ciudadano no tiene por qué convertirse en partido político”. En el caso español existe una tensión no resuelta entre lo social y lo político. En el conjunto de movimientos de protesta se observa una resistencia a su institucionalización dentro del sistema. Actitud que es respaldada en bastante medida por una sociedad que ve reflejados su descontento e indignación en los mismos.

Tabla 9
Cómo debe evolucionar en el futuro el movimiento 15M

	17 mayo 2012
Debería convertirse en un partido político	36
Debería integrarse como corriente en un partido ya existente	15
Debería convertirse en asociación	16
Debería seguir como hasta ahora	17
Otras	8
NS/NC	8
TOTAL	100.0

Fuente: Diario El País 18 de mayo de 2013 (Metroscoopia)

No existe un apoyo mayoritario a que el movimiento social 15M se transforme institucionalmente en partido político. Un 36% de la sociedad española opina que es el paso lógico a seguir dentro de su intento de regenerar la política española. Un 15% opina que debería integrarse como corriente política dentro de alguno de los existentes. Un 41% considera que su actividad debe desarrollarse al margen de la política, como hasta ahora o bajo la forma de una asociación no política. En ese sentido, la sociedad española se mueve entre la protesta de los movimientos sociales (apoyados y reconocidos socialmente) y la incapacidad de formalizar e institucionalizar estos movimientos como actores políticos de pleno derecho. La experiencia malograda de la iniciativa popular para modificar la Ley Hipotecaria, que fue admitida a trámite parlamentario y pervertida por el Partido Popular hasta el extremo de ser retirada por los solicitantes, ha sido una clara prueba de la imposibilidad de reformar el sistema desde fuera. Es, sin embargo, una situación dinámica que encontrará su momento decisivo en las próximas

elecciones generales. Especialmente en la medida que los partidos hasta ahora minoritarios sean capaces de definirse como opciones de gobierno reales.

Bibliografía

- Alaminos, A. y C. Penalva
2008 "La vida cotidiana en la España del Siglo XXI". en *La España del Siglo XXI: La Sociedad*, vol. 1, editado por S. del Campo y J. F. Tezanos. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 759-809.
- Alaminos, A.; Penalva, C.
2010 "Los medios de comunicación y el cambio político en España. (1991-2000)", *Revista Sistema* num. 217, julio 2010. pp. 19-40.
- Cadena Ser
2013 [http://www.cadenaser.com/espana/articulo/ada-colau-movimiento-ciudadano-tiene-convertirse-partido-politico/csrsrpor/20130515csrsrsmac_5/Tes]
- CIS
2012 *Congruencia ideológica entre electores y representantes políticos*. Estudio 2930 de enero-febrero de 2012. Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas. [http://www.cis.es/cis/opencm/ES/2_bancondatos/estudios/ver.jsp?estudio=13624]
- CIS
s/f *Barómetros*. Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas. [http://www.cis.es/cis/opencm/ES/11_barometros/index.jsp]

El País

- 2013 "El 15-M mantiene la simpatía ciudadana dos años después", *El País*, 18 de mayo de 2013. [http://politica.elpais.com/politica/2013/05/18/actualidad/1368894896_892384.html]

Fundación FOESSA

- 2013 *Análisis y perspectivas 2013: Desigualdad y Derechos Sociales*, Madrid, FOESSA. [http://www.foessa.es/publicaciones_compra.aspx?Id=4556&Idioma=1&Dio-cesis=42]

Gómez, L.

- 2013 "La corrupción sumó 800 casos y casi 2.000 detenidos en una década", *El País*, 17 de junio de 2013. [http://politica.elpais.com/politica/2013/06/16/actualidad/1371400129_702560.html]

Hofstede, G.

- 2001 *Culture's consequences*. London. Sage.

Inkeles, A. y Levinson, D.J.

- 1997 National Character: the study of modal personality and sociocultural systems. En A. Inkeles, *National Character: A psycho-social perspective*. New Brunswick. Transaction.

Jiménez Sánchez, M.

- 2011 *La normalización de la protesta. El caso de las manifestaciones en España (1980-2008)*, Opiniones y Actitudes num. 70, Madrid, CIS.

Laguna, A.

- 2013 "La percepción de la corrupción, factor mediatizante de la democracia". *OBETS. Revista de Ciencias Sociales*. Vol. 8, Nº 1, pp. 79-98.

Ministerio del Interior

Anuario estadístico del Ministerio del Interior, Madrid. Ministerio del Interior, Gobierno de España (<http://www.interior.gob.es/publicaciones-descarga-17/publicaciones-periodicas-anuarios-y-revistas-979/anuario-estadistico-del-ministerio-del-interior-985?locale=es>).

Piqueras, J. A., Martínez, F. A., Laguna, A. y Alaminos, A.

- 2011 *El secuestro de la democracia. Corrupción y dominación política en la España actual*, Madrid, Akal.

DEBATE AGRARIO-RURAL

La asociación lechera, ¿Desarrollo local o subordinación productiva? El caso de la comunidad La Chimba, Cayambe Diego Martínez G.¹

Las relaciones de los pequeños productores de “La Chimba” asociadas con la agroindustria lechera constituyen una experiencia que muestra las limitaciones derivadas de la dependencia hacia la monoproducción, en detrimento de la producción diversificada. El pequeño productor se convierte en el eslabón más débil de la cadena con una economía de subsistencia. En este sentido, son necesarias políticas de desarrollo rural sustentadas en organizaciones campesinas que promuevan el desarrollo territorial con la diversificación de la producción campesina.

Introducción

Desde el siglo XIX se ha considerado la idea de Asociación, como la solución para distribuir el poder económico concentrado en pocas manos, y para alcanzar un objetivo colectivo. Para Desroche (1976)², se trata de un contrato donde el capital común será su instrumento de trabajo, inalienable e indivisible y donde los miembros unen fuerzas para proteger a este capital.

En la perspectiva de Laville (2010), la institución asociativa, es un convenio colectivo entre personas privadas que persiguen finalidades comunes, donde el objetivo principal no consiste en la

distribución de beneficios materiales, pero si en la búsqueda de condiciones de justicia e integridad personal. Por esta razón, las relaciones asociativas no pueden ser analizadas únicamente bajo una perspectiva utilitarista, sino que también se debe considerar el aspecto solidario y recíproco.

Para el desarrollo agrario, los lazos de cooperación y asociación entre actores identificados en un territorio, son vitales ya que permiten, según Hernández y Phelinas (2012), la revalorización de recursos específicos y el desarrollo de productos propios de una localidad, superando así la lógica de la producción standard sometida a una fuerte competencia. En esta misma línea de análisis

1 Master en Economía Social, Candidato al Doctorado en Ciencias Sociales con especialización en Economía Territorial por la Universidad de Grenoble 2 - Pierre Mendes France.

2 Citado por Martín, 2008:29

varios trabajos de investigación, han llegado a mostrar el papel central que pueden jugar las asociaciones en la dinamización del territorio, gracias a la oferta de nuevos recursos, pero sobre todo recursos sociales, capaces de reconstruir y fortalecer el capital social entre actores de una economía local (Epagneul, 2000, citado por Chiffolleau, 2012: 91)

De esta manera, el beneficio económico sería insuficiente para comprender la dinámica asociativa y la movilización de actores en un territorio, ya que existen otros aspectos de mayor importancia que deben ser analizados, como el uso de redes informales, los lazos de solidaridad y reciprocidad, la democracia interna y las diferentes formas de capital común indivisible. Bajo esta misma tendencia, para evidenciar las especificidades de la producción agrícola, también se insiste en que para explicar la *“permanencia y resistencia de las formas campesinas”* se debe sobrepasar la lógica del análisis económico. (Chayanov (1924) citado en Sourisseau et al, 2012: 161).

Partimos de la idea que las asociaciones productivas campesinas son actores centrales en una economía social y solidaria. Para el logro de un acertado desarrollo territorial se requieren instituciones capaces de recuperar y recrear lazos e interacciones entre diversos actores, convirtiéndose de esta manera en ejes de fortalecimiento del capital social. Por ejemplo el refuerzo y autonomía del modelo asociativo depende del grado de capacidad de coordinación y fuertes niveles de confianza entre actores, así como también de la combinación de nuevos modos de organización y lógicas productivas alternativas, adap-

tadas a las especificidades y problemas propios de un territorio. El adecuado desarrollo de un modelo asociativo sostenible en el tiempo, se caracteriza por poseer prácticas diferenciadas y no estándares como las sugeridas por las reglas del capitalismo actual.

Específicamente en Cayambe desde hace quince años se ha venido constatando un auge de la producción lechera en diferentes comunidades de la zona, así como también un número creciente de asociaciones de pequeños productores en el mismo sector. Actualmente varias industrias capitalistas lecheras cercanas a la zona y gremios empresariales a nivel regional han visto interesante establecer contratos a largo plazo bajo distintas modalidades con estas Asociaciones, generando de esta manera, diversos efectos en el desarrollo local.

En un contexto de globalización económica, varios actores externos a las problemáticas locales en territorios rurales, sostienen la idea de que la simple productividad agrícola puede ser asociada al crecimiento económico y a una gran reducción de la pobreza (Hernández y Phelinas, 2012). Bajo esta tendencia, grandes firmas multinacionales, así como también grandes empresas agroindustriales, se han convertido en actores principales de la economía ecuatoriana de los últimos diez años. Algunos de los factores fundamentales que han permitido el desarrollo de estos mercados, han sido por ejemplo, el crecimiento demográfico, las mejoras de niveles de vida de la población, o simplemente, como lo mencionan Hernández y Phelinas (2012), al cambio de patrones de consumo de alimentos transformados, de ma-

nera creciente en las ciudades. Es así que la demanda de materia prima por parte de estas empresas tiende a incrementarse constantemente y requiere nuevos “socios” con contratos flexibles, así como también varias fuentes o “centros de acopio”, capaces de cumplir exigencias mínimas en términos de calidad y volúmenes requeridos.

La organización de pequeños productores campesinos bajo la forma asociativa se perfila como la solución inmediata frente a esta demanda por parte de las empresas agro industriales. Los encadenamientos productivos, utilizando la modalidad de negocios “inclusivos”³, constituyen una aparente solución estratégica-acertada para incluir, a pequeños productores asociados en las primeras etapas y procesos de producción. El caso de los pequeños productores lecheros de la comunidad “La Chimba”, quienes abastecen en grandes cantidades, actualmente a la empresa Floralp y a la AGSO⁴, ilustra bien esta tendencia. La eliminación de intermediarios, así como el incremento de ingresos y mejoramiento de las economías familiares a corto plazo, constituyen los principales logros de la Asociación creada en el año 2003.

El presente artículo constituye la síntesis de un trabajo de investigación realizado en la comunidad de la Chimba, cantón Cayambe⁵, donde se pretende plantear respuestas claras y concisas a ciertas dudas que giran en torno a dificultades, limitaciones, impactos y alternativas a las prácticas asociativas utilizadas por los pequeños productores lecheros para integrar el mundo del agrogocio. Para esto revisaremos brevemente los efectos a corto plazo generados por el asociativismo, en la economía campesina y en los niveles de vida de los pequeños productores lecheros. Pero así mismo, analizaremos los problemas y dificultades que atraviesan estas asociaciones al integrar un modelo de negocio inclusivo. Y finalmente trataremos de evidenciar los principales riesgos e impactos negativos en el territorio para plantear algunas de las nuevas alternativas existentes, capaces de recrear el rol de los actores locales y fortalecer los niveles organizativos de las asociaciones con el objetivo de lograr una coordinación articulada de esfuerzos colectivos en un mismo proyecto de desarrollo territorial sostenible.

-
- 3 Según la red iberoamericana de negocios inclusivos, esta práctica se refiere a una iniciativa empresarial económicamente rentable, y ambiental/socialmente responsable, que incluye en su cadena de valor a comunidades de bajos ingresos (proveedores de materia prima), y mejoran su calidad de vida a partir de lógicas de mutuo beneficio. www.negociosinclusivos.org
 - 4 Asociación de ganaderos de la Sierra y el Oriente. (Posee cerca del 20% de acciones de la Empresa “El Ordeño”, encargada de la elaboración de los productos para el programa social de “Desayuno Escolar”).
 - 5 Martínez, Diego (2011), *El asociacionismo, un instrumento de sostenibilidad socio – económica de los pequeños productores lecheros, El caso de la comunidad La Chimba, Cayambe – Ecuador* - Tesis para la obtención del título de Master en Economía Social, Universidad de Barcelona, España.

La integración económica de los pequeños productores lecheros ¿Una garantía para la integración social? (Los impactos inmediatos del asociacionismo lechero)

La concepción, diseño y creación de las asociaciones de pequeños productores lecheros en Cayambe se debe a las diferentes formas de acompañamiento técnico y organizativo que existieron en la zona. Entre los actores que incentivaron estos procesos se encuentran, la “Casa Campesina de Cayambe”⁶ así como también la Asociación de ganaderos de la Sierra y el Oriente (AGSO). De esta manera bajo una modalidad “top down”⁷, se replanteó una frágil cooperación existente entre productores, que se había perdido con la caída del modelo de cooperativas.⁸ La vulnerabilidad económica, que amenazaba a los pequeños productores para entonces desorganizados, favoreció la movilización de campesinos dando como resultado la idea de establecer una producción homogénea y aceptaron el modelo asociativo, motivados por el alcance de objetivos productivos y económicos, entre los cuales se encontraban un mayor po-

der de negociación con empresas externas al territorio, el acopio de fuertes volúmenes de leche, seguridad en la venta a pocos compradores y no a múltiples intermediarios y finalmente el incremento del precio de litro de leche.

La instalación de centros de acopio de leche llegó a consolidar este movimiento. Con fuertes influencias y directrices sobre los pequeños productores, la AGSO y la Casa Campesina de Cayambe apoyaron y financiaron, en la comunidad de “La Chimba”, el establecimiento de uno de los ocho centros de acopio existentes en la zona de Cayambe, que dispone en la actualidad de cuatro tanques de enfriamiento de leche de última tecnología, así como también de la capacitación para su uso, e insumos agrícolas, como fertilizantes, y balanceados para mejorar la producción (Chiriboga, 2008: 171).

Actualmente la Asociación “El Ordeño” en la comunidad La Chimba posee 2 contratos a largo plazo, en un tipo de relación “Win-Win”.⁹ La producción se encuentra dividida en dos partes como lo podemos observar en el gráfico siguiente:

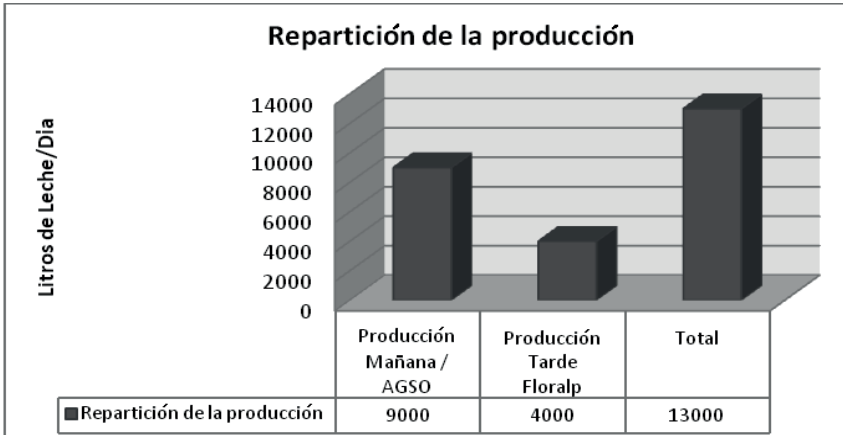
6 ONG Religiosa, perteneciente a la Misión Salesiana.

7 Término tomado de las ciencias informáticas y utilizado en ciencias sociales para referirse a un modelo de desarrollo implementado de “arriba hacia abajo”, o de igual forma en la construcción e implementación de políticas públicas.

8 Modelo implementado con la reforma agraria de 1964, el cual fracasó entre otros motivos, por su verticalidad dominante. Martínez Luciano, (2010), Ponencia presentada en el Congreso “Reformas Agrarias y Gestión de los Recursos Naturales en África y América Latina”, Lleida- España, 25-27 de noviembre de 2010.

9 En economía el **Win-Win** es un término utilizado para expresar la relación de beneficios mutuos que se obtienen por la realización de determinada actividad, sin que implique sacrificio de algún recurso por ninguna de las partes envueltas en esta relación, pueden ser dos empresas, empresa y proveedor, empresa y cliente o bien, empresa y sociedad.” Según: <http://www.suite101.net/content/empresas-socialmente-responsables>

Gráfico 1

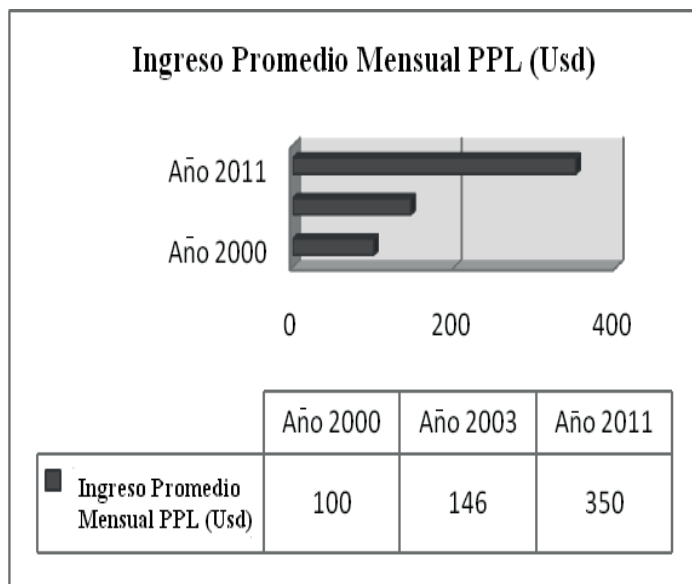


Fuente: Investigación Propia, 2011

Los resultados productivos del año 2011 son alentadores. Sin lugar a dudas las mejoras productivas son visibles. Según diversos analistas (Ferraro, 2004; Cazares, 2011; Herrán, 2011) estas formas organizativas y el acopio de la leche, han permitido importantes logros productivos. Cuando empezó a funcionar la Asociación a inicios del mes de septiembre de 2003 la producción global promedio fue de 3.600 litros de leche por día, mientras que en el año 2011, la producción diaria promedio se ubicó en 13.000 litros de leche. Existe un incremento notable del 74% en la producción entre el 2003 y el 2011, lo que a su vez les ha permitido tener un mejor poder de negociación ante las grandes empresas de lácteos.

Por otro lado, la asociatividad ha sido determinante en el incremento de ingresos de los pequeños productores (Chiriboga 2008). En el año 2000 el ingreso promedio de un pequeño productor lechero se ubicaba cerca de los 100 dólares mensuales, mientras que en el año 2003 (año de creación de la Asociación), se registró un aumento del 31,5%, ubicándose el ingreso promedio en los 146 dólares. En el año 2011 el ingreso promedio de un PPL en la comunidad “La Chimba”, se ubicó cerca de los 350 dólares, lo cual representó un incremento del 71,4% con respecto al año 2000. Cabe mencionar que estos pequeños productores reciben el pago cada quince días, es decir en el año 2011, un ingreso promedio de 175 dólares quincenal.

Gráfico 2



Fuente: Investigación Propia, 2011

Fundamentalmente este incremento de ingresos les ha permitido mejorar las condiciones de la vivienda y el acceso al consumo, lo cual significa según ellos una mejora de la calidad de vida. Actualmente las casas son de ladrillo, bloque y cemento, con estructuras de hormigón armado, y la mayoría ha ampliado el espacio habitable. También en lo que se refiere a servicios básicos, la mayoría de estas viviendas cuenta con servicio eléctrico, canalización y casi la to-

talidad de los socios accede a servicios de telefonía celular.

En el ámbito del consumo, hoy en día según como lo describe la administradora de la asociación agropecuaria “El Ordeño”,¹⁰ en La Chimba, “cada quince días, todos salen a la ciudad de Cayambe con el dinero recibido por la venta de leche, a comprar alimentos en los supermercados, así como también ropa, pagar servicios básicos, e incluso, cuotas de electrodomésticos y bienes de

10 Entrevista realizada a Diana Neppas, Administradora de la Asociación “El Ordeño”, jueves 28 de julio del 2011.

consumo no básicos, adquiridos a crédito". Efectivamente en la actualidad todas las familias disponen de un televisor en casa, al igual que refrigeradores, bicicletas, motos, y en algunos casos hasta camionetas de doble cabina útiles para el transporte de leche. Sin lugar a dudas podemos ver que ha ocurrido una fuerte evolución en los patrones de consumo de los campesinos, que optan en la actualidad por bienes suntuarios bajo efectos de la globalización, transformando de esta manera como lo señalan Hernández y Phelinas (2012), las relaciones intra-familiares y la construcción de nuevas lógicas de identidad individual.

Por el contrario la utilización del ingreso proveniente de la leche, por ejemplo, en materia de reinversión productiva, educación o salud ha sido clasificada en un segundo plano por los campesinos de "La Chimba". Según investigaciones realizadas por CILEC¹¹, en la zona de Cayambe, aproximadamente solo una tercera parte de los pequeños productores lecheros utiliza su ingreso para gastos educativos. Como lo explica el presidente de la junta parroquial de Olmedo, *"los productores no ven necesaria la educación para seguir produciendo leche. Actualmente están bien así y piensan que este auge se mantendrá"*.¹²

Como se mencionó, la reinversión productiva no constituye una prioridad para los pequeños productores y más

bien es vista como un gasto. Si bien algunos campesinos se han interesado en adquirir insumos básicos para lograr mantener una producción diaria constante o mejorar relativamente su producción, se trata todavía de prácticas minoritarias y marginales. Según podemos evidenciar en las investigaciones realizadas por CILEC¹³, la mayoría de los campesinos asociados están satisfechos con su remuneración quincenal, ellos llegan a gastar la totalidad de sus ingresos dejando un porcentaje mínimo o nulo para el mantenimiento de la asociación o la reinversión en sus propias parcelas.

El contrato "win-win", una articulación poco sustentable y con fuertes limitaciones

Tal como lo acabamos de ver en el primer apartado, la integración económica de los productores lecheros, caracterizada por incrementos de ingresos y acceso al consumo, no se traduce automáticamente en una integración social. El impacto a largo plazo en el desarrollo territorial sería más bien negativo, si tomamos en cuenta que el uso de los ingresos en campos como la salud, educación, reinversión productiva, creación de actividad y diversificación de la economía campesina ha sido mínimo. A continuación detallaremos otros factores que vendrían a poner en duda la soste-

11 Entrevista realizada a representantes del Centro de Investigación de la Leche en Cayambe (Universidad Politécnica Salesiana), jueves 4 de agosto 2011.

12 Entrevista realizada a Vinicio Quilo, presidente de la junta parroquial de Olmedo, Jueves 28 de julio del 2011.

13 Entrevista realizada a la Doctora Nancy Bonifaz, Veterinaria, y representante de CILEC, Jueves 4 de agosto 2011.

nibilidad de este modelo “inclusivo” “top-down”.

La mala utilización del ingreso representa una de las tantas dificultades que poseen los pequeños productores lecheros a nivel socio organizativo, en un modelo de gestión asociativo incentivado por la agro-industria. Estas dificultades se suman a todo un paquete de malas prácticas asociativas, como carencia de prácticas solidarias, problemas de coordinación y confianza entre campesinos al frente de un mismo proyecto colectivo, lo cual fragiliza notablemente, tanto al capital humano como al capital social. En este punto ya se vuelven evidentes las intenciones y límites que los contratos establecidos con la agro-industria esconden.

Tal como lo señala Hernández y Phelinas (2012), el riesgo de este tipo de negocios inclusivos consiste en el desarrollo de una estructura agraria dual, que favorece la concentración productiva industrial y excluye a los pequeños productores campesinos frágiles, de los eslabones más rentables de la cadena. El caso de la comunidad “La Chimba” encaja perfectamente en esta línea de análisis de “polarización productiva”, ya que sin duda por un lado existe un puñado de campesinos “asociados” que mal o bien aseguran el ingreso que les permite cubrir sus necesidades alimenticias básicas, y del otro lado tenemos a

la empresa o industria agro-alimenticia, “acaparando progresivamente la producción de las mejores tierras agrícolas” a excelentes precios, enmarcados en la lógica del “híper-productivismo”.

Si analizamos nuestro caso bajo este enfoque, es notorio que el fomento e incentivo a la creación de asociaciones únicamente corresponde a estrategias de las grandes empresas agro industriales. Las principales motivaciones para los pequeños campesinos son sin duda, de orden económico y obedecen a sistemas de acumulación bien estructurados, basados en la lógica de ganancia individual y satisfacción de necesidades materiales. Este proceso se construye en detrimento de otras formas de organización e integración, como aquellos articulados según principios y prácticas de reciprocidad, como por ejemplo la economía doméstica (Le Velly, 2012: 16)¹⁴, la que como lo detallaremos más adelante, ha disminuido su peso e importancia de manera notable durante este proceso, e incluso el simple desarrollo de proyectos viables con enfoque de territorio.¹⁵

Del “negocio inclusivo” hacia la subordinación productiva

Según varios autores la imposición de un modelo favorable al capital y al desarrollo de la gran empresa, puede ge-

14 Utilizaremos el término de Economía doméstica, haciendo referencia a Karl Polanyi (1944) para referirnos principalmente a la economía de auto consumo en el seno de la familia o comunidad.

15 Para este análisis utilizaremos la definición de Territorio de la Escuela de Economía geográfica francesa. Bernard Pecqueur (2002), define al Territorio como una construcción de entidades socio económicas por parte de actores locales en búsqueda de problemas comunes a la producción y planteamientos de soluciones colectivas inéditas y viables. (Pecqueur, 2002: 15)

nerar nefastas consecuencias en la economía campesina que se evidenciarán a mediano y largo plazo, conforme el mercado vaya controlando, cantidades, precios, prácticas y disminuyendo interacciones entre actores de la economía local. Como ya lo ha señalado Chiffolleau, “el simple acceso a los mercados o al capital económico por parte de los excluidos, no garantiza en nada su integración” (2012:91). La economía campesina debe también ser pensada como un sistema en el cual interactúen 3 tipos de capitales: el económico, el social, y el cultural. Efectivamente según Amartya Sen (1992), la única lucha válida contra la exclusión es aquella que se concentra en el desarrollo de capacidades de los individuos vulnerables.

Como ya lo mencionamos, el principal interés de la empresa agro industrial, es sin lugar a dudas el abastecimiento de materia prima de acuerdo a sus intereses y como bien lo señala el presidente de la junta parroquial de Olmedo¹⁶, en los demás aspectos “*nos dejaron solos*” (haciendo referencia a la organización del colectivo campesino y a las formas óptimas de gestión asociativa), según el dirigente esta forma de apadrinamiento por parte de la AGSO, no les ha ayudado a desarrollar una visión clara a futuro, y carece de estrategia colectiva para salir adelante.

Queda claro que en el marco de este contrato, no se realizó un trabajo coherente de construcción de un “proyecto de desarrollo local” en el cual la par-

ticipación y formación de las bases campesinas para recuperar niveles de confianza y reforzar el capital social debían perfilarse como prioridad. La única formación y capacitación impartida fue de orden técnico ya que el interés nunca fue la creación de un modelo sólido y sostenible capaz de integrar socialmente a los comuneros, sino más bien una simple central de acopio de “commodities”.

Esto nos obliga a tomar en cuenta el rol del capital social y la confianza durante los procesos de innovación y proyectos de desarrollo local. Según Bourdieu (1980), el capital social es “el conjunto de recursos [...] relacionados a la posesión sostenible de relaciones [...] de inter -conocimiento e inter-reconocimiento”. Este tipo de capital, según el autor, está altamente correlacionado e interactúa con otras especies de capital, como el capital económico o cultural. Sin la existencia de correlaciones de estos tres tipos de capitales, el desarrollo del interés de captación y renta de la agro-industria puede llegar a limitar fácilmente la capacidad de los pequeños productores para identificar problemáticas específicas y comunes, plantear soluciones, construir y controlar su propio desarrollo.

A continuación analizaremos brevemente en qué medida la carencia de procesos formativos y organizativos, devinientes de estas formas de proyecto “inclusivo” que conllevan los bajos niveles de confianza y capital social, pue-

16 Entrevista realizada a Vinicio Quilo, presidente de la junta parroquial de Olmedo, Jueves 28 de Julio del 2011.

den provocar la desconfiguración de un territorio, desarticulando todo tipo de proceso colectivo, y fomentando malas prácticas en varios aspectos referentes a la participación y construcción de diálogo entre actores, afirmaciones de posturas frente a la agro industria, coordinación y toma de decisiones, creación de proyectos colectivos de innovación, transformación y reconversión productiva, etcétera.

Imposición de cupos y mala coordinación de actores...

La estabilidad en la venta de la leche, era una garantía no negociable, que dominaba el discurso manejado por las empresas, lo cual motivó en gran medida a la firma del contrato por parte de la asociación campesina. Sin embargo en nuestra investigación de campo, se pudo constatar a través de quejas y descontento de los campesinos, la gran brecha existente entre discurso y realidad.

Existen directrices y posiciones impositivas provenientes de la agro-industria por ejemplo la fijación y determinación de cupos de manera aleatoria, lo que constituyen un denominador común a todas las relaciones del tipo "negocio Inclusivo". En efecto, la AGSO ya ha disminuido en varias ocasiones la cantidad solicitada durante épocas de baja demanda, como es el caso de los meses correspondientes a las vacaciones escolares.

Los campesinos de "La Chimba", al carecer de buenos niveles de organización y coordinación no han podido hacer frente, ni negociar de manera sólida

estas medidas impuestas. La impotencia del asociado se hace notoria al tener que buscar soluciones improvisadas. Algunos optan por la transformación artesanal de quesos con difíciles opciones de venta en un mercado saturado como el de Cayambe. Otros distribuyen el excedente a los animales o en el seno familiar. Este hecho en sí, los excluye de su posición de "socios" en la cadena agro-alimenticia y los margina en la cadena, exponiéndolos ante una situación de "subordinación productiva".

La lógica hiper-productivista y sus amenazas sociales y medio ambientales...

Otro hecho que demuestra la imposición unilateral de directrices hace referencia a las claras intenciones con lógicas obedientes al hiper productivismo existentes en este tipo de contratos. Se trata esta vez de directrices técnicas, desfavorables al desarrollo territorial, en relación a prácticas agrícolas y al uso del suelo. Efectivamente, el "monocultivo" se ha convertido en una práctica común en la zona.

Muy pocos pequeños productores están conscientes de las consecuencias directas a corto plazo sobre sus economías familiares y a largo plazo sobre la sostenibilidad de sus tierras y del negocio lechero. El panorama no es alentador ya que las prácticas tradicionales andinas de cultivos para el auto consumo que garantizaban una buena alimentación para las familias hoy prácticamente han desaparecido, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria. Únicamente 20 familias de las 360, es decir

apenas un 5.5% de las familias dispone de un huerto para el autoconsumo.¹⁷

A largo plazo, las preocupaciones, son aún mayores ya que las consecuencias del monocultivo también afectarán directamente a la sostenibilidad del negocio lechero. Según recientes investigaciones realizadas por CILEC¹⁸, el monocultivo es posiblemente la peor estrategia de las asociaciones lecheras de este estudio. La práctica no es para nada recomendable, ya que un suelo fértil, demanda de varios nutrientes y al practicar el monocultivo de pastos, la calidad de los suelos disminuye progresivamente hasta llegar a agotarse y convertirse en tierra infértil y contaminante para el medio ambiente.

Se ha comprobado que la recuperación de cultivos andinos como por ejemplo el de la papa, llegaría a devolver poco a poco varios nutrientes perdidos. Pero en caso de continuar con el monocultivo de pastos, la producción lechera disminuiría en un futuro. Bajo este modelo no se están produciendo nuevas alternativas ni se está garantizando un adecuado desarrollo socio-económico para las futuras generaciones. De acuerdo a la opinión de algunos técnicos que trabajan en la zona¹⁹, resulta totalmente viable y rentable mantener a la vez, huertos para el autoconsumo y siembras forrajeras para la alimentación del ganado. Lo que permitiría por un lado promover una buena alimentación en las comunidades y por otro mantener

un fuerte ahorro de algunos productos básicos. Sin embargo nuevamente la falta de estrategia colectiva clara, el individualismo y la desestructuración de redes informales de actores, no ha permitido la suficiente transmisión de información para analizar ni tratar el problema. La falta de visión a largo plazo se hace evidente y una vez más da cuenta de los límites en un proyecto asociativo construido desde arriba con consignas obedientes al capital económico.

¿Abastecedores de materia prima o actores de una economía local, plural e incluyente?

En nuestra investigación de campo, al plantear ciertas preguntas básicas, relativas al funcionamiento del “negocio inclusivo” y las alternativas paralelas a desarrollarse, las reacciones de los entrevistados daban cuenta de un colectivo desorganizado, más bien conformista y resignado ante su situación de abastecedores de materia prima.

Las alternativas de salida son diversas, sin embargo, al estar bajo una relación de subordinación productiva, la subsistencia parecería ser el único camino al que pueden recurrir los pequeños productores lecheros de la Chimba. En efecto, parte del desarrollo pasa primeramente por la identificación colectiva de problemas comunes para enseguida plantear soluciones, no obstante esto únicamente es posible en un escenario

17 Entrevista realizada a Diana Neppas, Administradora de Asociación “El Ordeño”, Jueves 28 de julio de 2011.

18 Entrevista realizada a la Doctora Nancy Bonifaz, Veterinaria, y representante de CILEC.

19 Janss Beltran, Ingeniero Agropecuario de la Casa campesina y el grupo de técnicos de CILEC.

donde la articulación y coordinación de esfuerzos tiendan hacia la construcción de lo que llamamos un “diálogo territorial” entre actores. Esto supone aceptables niveles de confianza construidos a partir de prácticas recíprocas, conjugados a la formación de capital humano y buenas prácticas de participación colectiva. Se trata de elementos claves al momento de replantear y discutir los términos de un modelo desfavorable para construir desarrollo territorial.

Construir escenarios de confianza favorables a la cooperación....

Partimos de la idea que la construcción de escenarios de confianza favorece y se encuentra en la base de experiencias exitosas de agrupaciones locales de productores o proyectos colectivos sostenibles de desarrollo territorial. Sin embargo, la complejidad no solo radica en la voluntad para la construcción de escenarios de confianza sino en la recuperación de una suma de factores como prácticas de reciprocidad y solidaridad entre los actores que generen confianza. Pecqueur (2004) califica bien a la confianza como el producto de relaciones entre actores de un mismo grupo o en el seno de un colectivo. Efectivamente, bajo este contexto, la confianza puede ser calificada de manera general como el “ingrediente esencial de la acción colectiva y de la constitución de colectivos a nivel local”. (Pecqueur et Zimmerman, 2004: 65). Por el contrario, al no existir prácticas favorables a la construcción de escenarios de confianza, la consecuencia directa sería la aparición de un “territorio discapacitado” social y económicamente donde la destrucción

de lazos sociales es inevitable. (Laurent, 2012:70).

La confianza entonces contribuiría a la creación de dinámicas colectivas, a la toma de riesgos, creación de actividades y favorecería al mantenimiento de un diálogo territorial entre actores capaces de **cooperar** e involucrarse de manera “cívica y política” en un proyecto donde las motivaciones vayan más allá del simple imperativo económico. (Uslaner, 2002, citado por Laurent (2012: 70).

Sin embargo, en el caso de “La Chimba” la supremacía de las relaciones mercantiles en la gestión asociativa, bloquea la generación de prácticas recíprocas y solidarias, favorables a los lazos de confianza sólidos. Este hecho constituye sin lugar a dudas el mayor obstáculo a la cooperación y coordinación entre individuos. Para Orlean (1995), la confianza y cooperación únicamente son posibles con la incorporación de elementos que no obedezcan “al cálculo racional del interés” (Orlean, 1995: 322).

Al hacer un breve análisis de la asociación lechera en la comunidad de la Chimba, caemos en cuenta que nunca existió ni se fomentó tal estrategia colectiva construida para favorecer cooperación entre productores. Por ejemplo, por un lado, la falta de coordinación entre actores no les ha permitido buscar soluciones comunes a problemas básicos como el uso de un transporte común para la leche, lo cual impactaría de manera positiva tanto en la calidad de la leche como en el ahorro de cada familia. Actualmente la AGSO señala de manera prepotente que cada productor debe transportar su leche hacia el centro de acopio, como bien pueda, a lomo de animal, en bicicleta, o en moto.

Por otro lado, para varios autores, la cooperación de proximidad, es capaz de crear redes informales de transmisión de información lo cual constituye un factor de ventaja competitiva, para el desarrollo de procesos de innovación (Asselineau y Cromarias, 2011: 153). En el caso de la Chimba, debido a los bajos niveles de capital social y cultural evidenciados anteriormente, tanto la transmisión de información a partir de redes informales, como la construcción de proyectos de innovación o reconversión productiva no han sido posibles.

Así mismo notamos que, la falta de escenarios de confianza, no les ha permitido pensar en la creación de una estructura económica común a los asociados como el “Fondo Común no repartible”, a partir del cual se podrían financiar nuevos proyectos de mejora productiva sin necesidad de recurrir en un 100% al crédito. Para los miembros de la asociación, “dar el salto”, es decir, la transformación de alimentos de manera sostenible así como su respectiva comercialización formal, constituyen un futuro difícil y muy lejano.

Conclusión

La investigación presentada en este artículo nos permitió preguntarnos, en primer lugar, cuáles han sido las dificultades encontradas por los pequeños productores al ser “socios” de grandes empresas, de igual manera, si el modelo de negocio inclusivo beneficia al desarrollo local, para finalmente identificar el rol y la importancia del capital social en la construcción de un modelo viable de desarrollo rural.

Sin embargo, al no existir un trabajo claro en la coordinación y equilibrio entre los tres tipos de capital señalados por Bourdieu (1980), no existe alternativa viable para los pequeños productores lecheros. Su condición de subordinación productiva solo les lleva hacia el camino de la “discapacidad territorial”. Para limitar este impacto y entrar en procesos de transición, queda claro que es esencial el trabajo en la recuperación de prácticas recíprocas y solidarias que generen confianza en el colectivo, para luego identificar problemas y plantear soluciones. La revalorización de su actividad, basada en la recuperación de tradiciones y especificidades locales, dependerá únicamente de la toma de decisiones que tiendan hacia una lógica de diversificación de la economía campesina.

También hemos visto que la integración social de pequeños productores en los mal llamados negocios “inclusivos”, no es automática. Para que los eslabones menos favorecidos de la cadena, puedan convertirse en actores de su propia economía, se requiere redefinir el territorio y plantear proyectos sustentables capaces de garantizar espacios agrícolas viables y bienestar no solo a las actuales generaciones de productores sino también a las futuras.

El fomento de este tipo de articulación entre la gran empresa agro industrial y el pequeño productor, les subordina en tanto eslabón más débil de la cadena y lo sumerge en una simple condición de abastecedor de materia prima. En este escenario, la exclusión del pequeño productor campesino se vuelve más evidente, en una economía de sub-

sistencia incapaz de garantizar el anhelado “Buen Vivir Rural”.

Por tal razón, si bien la construcción de iniciativas propias por parte de los actores en torno a una estrategia colectiva territorial es vital, la incorporación paralela de políticas de fomento también es indispensable. Para esto se debe repensar y re-direccionar las actuales políticas de desarrollo rural, puesto que las políticas de fomento hacia un verdadero “desarrollo territorial”, deben prestar un fuerte respaldo hacia las organizaciones campesinas, bajo la construcción de modelos horizontales, incluyentes y participativos que tengan como principal prioridad la formación no solo técnica sino también integral del pequeño productor.

El debate en torno a la integración de los pequeños productores al mundo del agro negocio, quedaría inconcluso si no se buscan nuevas soluciones. Algunas de éstas ya generan discusión y constituyen un tema de actualidad. Las alternativas de desarrollo rural que buscan recuperar prácticas participativas y fortalecer los niveles de capital social entre los actores plantean la construcción de sólidos proyectos de territorio y se sustentan en lógicas de intercambios de proximidad. En efecto se trata de repensar el territorio desde la proximidad y la nueva economía de confianza como lo señala André Torre (Torre et Beuret, 2012: 45).

Estas iniciativas no tratan de aplicar modelos estándares de producción únicamente dominados por la búsqueda de rentabilidad económica. Por el contrario, la finalidad es preservar el empleo local del pequeño productor, así como

su integración social, para lo cual se incorporan amplios estudios de diagnóstico territorial para construir procesos innovadores a nivel de las organizaciones productivas y en los modos de comercialización colectiva. Se trata de procesos que agrupan un sistema de soluciones inéditas frente a problemáticas propias del territorio que pasan tanto por la revalorización de productos locales y su respectiva comercialización en circuitos cortos, así como también por la búsqueda de producciones específicas, capaces de facilitar la integración, de manera sólida y no improvisada, los mercados locales, nacionales, e internacionales.

Bibliografía

- ASSELINEAU, A et CROMARIAS, A.
2011 «Construire la proximité, l'exemple d'une stratégie entrepreneuriale menée en milieu rurale», *Revue française de gestion*, 2011/4 no 213, pp: 141-156
- BARRERA M, Víctor y LEON V, Vicente
1991 “Diagnóstico agro-socio-económico de la actividad lechera en Cayambe”, Boletín C.R, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP): Quito.
- BOURDIEU, Pierre
1980 *Le capital Social, notes provisoires*, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Volume 31.
- SANZ C, Javier et Muchnik J.
2013 «Ancrage et Identité territoriale des systèmes agroalimentaires localisés», *Economie rural*, 322, Mars – Avril, pp : 4-10
- CAZARES, Luis
2011 “Producción y comercialización asociativa de leche en la zona de Intag-Imbabura”, en TORRES, Víctor (Editor), *Alternativas de vida, trece experiencias de desarrollo endógeno en Ecuador*, Abya Yala: Quito, pp: 47-68.
- CHIFFOLEAU, Yuna
2012 «Circuits courts alimentaires, dynamiques relationnelles et lutte contre l'exclusion en

- agriculture», *Economie rurale*, 322, Novembre-Décembre.
- CHIRIBOGA V, Manuel
2008 "El papel de las instituciones en territorios rurales sujetos a acciones de reforma agraria", en MARTINEZ V, Luciano (Comp), *Territorios en mutación: Repensando el desarrollo desde lo local*, FLACSO, Quito, pp: 157-196.
- CLERC, Denis
2009 «Coopérative», en *L'économie sociale de A a Z, Alternatives Economiques*, Hors-Série No. 38bis, Mars.
- DRAPERI, Jean François
2009 «Mouvement Coopératif», en *L'économie sociale de A a Z, Alternatives Economiques*, Hors-Série No. 38bis, Mars.
- LAURENT, Eloi
2012 *L'économie de la confiance*, Editions la découverte, Paris.
- FERRARO, Emilia
2004 *Reciprocidad, Don y deuda, Formas y relaciones de intercambios en los Andes de Ecuador: la comunidad de Pesillo*, Abya Yala: Quito.
- Fondo Ecuatoriano Canadiense de Desarrollo
1996 *La Casa Campesina Cayambe: Experiencias Comunitarias de desarrollo*, en Cuadernos del FECD No.2, pp: 13-26, Fondo Ecuatoriano Canadiense de Desarrollo: Quito.
- HERNANDEZ Valeria y PHELINAS Pascale
2012 "*Débats et controverses sur l'avenir de la petite agriculture*", *Autrepart*, 2012/3 No. 62, pp.3-16.
- HERRAN, Javier
2011 "El microcrédito como gestión compartida: La experiencia de la Casa Campesina de Cayambe", en TORRES, Víctor (Editor), *Alternativas de vida, trece experiencias de desarrollo endógeno en Ecuador*, Abya Yala: Quito, pp: 47-68.
- LAVILLE, Jean-Louis
2002 «L'Association comme lien sociale», *Connexions*, 1 No.77, pp: 43-54.
- LAVILLE, Jean-Louis
2010 *Politique de l'association*, Editions du seuil: Paris.
- LE VELLY, Ronan
2012 *Sociologie du Marché*, Collection Repères, Editions La découverte: Paris.
- MARTIN, André
2008 «Le paradigme coopératif inscrit dans l'histoire», en *Cahiers de l'Irecus*, 04-08, Université de Sherbrooke.
- MARTINEZ V., Luciano
2010 "Reforma agraria y territorios campesinos: El caso de las cooperativas indígenas de la sierra ecuatoriana." Ponencia presentada al congreso "Reformas agrarias y gestión de los recursos naturales en África y América Latina", Universitat de Lleida, 25 – 27 de noviembre del 2010.
- MARTINEZ G, Diego
2011 *El asociacionismo, un instrumento de sostenibilidad socio – económica de los pequeños productores lecheros, El caso de la comunidad La Chimba, Cayambe – Ecuador* - Tesis para la obtención del título de Master en Economía Social, Universidad de Barcelona - España. Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'agriculture (FAO), *Développement des coopératives agricoles, Manuel*. www.fao.org
- PAUGMAN, Serge
2008 *Le lien social*, Presses Universitaires de France: Paris.
- PECQUEUR, Bernard
2000 *Le développement local*, Editions La Découverte & Syros: Paris.
- PECQUEUR, Bernard, et ZIMMERMAN, Jean Benoit
2004 *Economies de proximités*, Lavoisier: Paris.
- POLANYI, Karl
1983 *La Grande transformation*, Editions Gallimard: Paris.
- SABOURIN, Eric
2012 *Organisations et sociétés paysannes, Une lecture par la réciprocité*, Editions Quae : Paris.
- SOURISSEAU, Jean Michel, et al.
2012 «Les modelés familiaux de productions agricole en question, comprendre leur diversité et leur fonctionnement», *Autrepart*, No. 62, pp: 159-181.
- TORRE, André et BEURET, Jean
2012 *Proximités territoriales*, Editions Economica: Paris.

ANÁLISIS

¿Punto y final del partido indígena? Análisis desde las elecciones ecuatorianas del 2013

Ferran Cabrero¹

La peculiaridad de no contar con partidos indígenas en América Latina y el Caribe termina en la década de los noventa del siglo XX. En varios países, las organizaciones indígenas deciden saltar a la arena política electoral, como en el Ecuador con el partido Pachakutik, en gran medida brazo electoral de la CONAIE. Sin embargo, la entrada en la política institucional conlleva no pocos desafíos y peligros para el movimiento indígena en su conjunto, como en un principio tenían parte de sus bases y dirigentes. Con el tiempo transcurrido y a la luz de los resultados en las elecciones ecuatorianas de febrero del 2013, que confirman la debacle del Pachakutik, cabe revisar la literatura académica al respecto y preguntarse si, hoy, estamos presenciando el punto y final del partido indígena como expresión de uno de los movimientos sociales más exitosos de Latinoamérica, debilitado en parte por esa misma opción electoral.

Introducción

A la vuelta del siglo, el mundo académico se empezó a interesar por un hecho insólito en América Latina y el Caribe: la eclosión de partidos indígenas. Más insólito cuanto que provenía de un hecho sorprendente. Con todo y su elevada diversidad cultural y población indígena, la región no contaba hasta entonces con este tipo de organizaciones. Esta peculiaridad termina en la década de los noventa del siglo XX cuando en varios países las orga-

nizaciones indígenas deciden saltar a la arena política electoral, como se analiza desde la literatura de aquellos años (Albó, 2002; Van Cott, 2005; y más adelante Martí i Puig, 2008).

De acuerdo con Van Cott (2005: 3), el “partido étnico” (tal y como lo nombra desde coordenadas anglosajonas) es aquella “organización autorizada para competir en las elecciones, la mayoría de cuyos líderes y miembros se identifican como pertenecientes a un grupo étnico no dominante, y cuya plataforma electoral incluye entre sus demandas

1 Profesor-investigador asociado a FLACSO-Sede Ecuador. Experto regional del PNUD en cuestiones interculturales. Se agradece a Ángel Medina, Víctor Hugo Ajila, Ampam Karakras, y Silverio Chisaguano las conversaciones y acotaciones en la elaboración de este informe, si bien las responsabilidades que se deriven del mismo son enteramente personales.

centrales programas de naturaleza étnica o cultural". Partiendo de esta definición, en el mismo trabajo académico la autora norteamericana se plantea dos preguntas principales: ¿Por qué, en medio del deterioro generalizado de los partidos políticos y sus lazos con la sociedad los pueblos indígenas están formando en los años noventa partidos viables que se encuentran firmemente fundamentados en movimientos sociales vibrantes? Y lo que interesa especialmente aquí: ¿Por qué son exitosos en unos países y no en otros?

En referencia a la última pregunta, Van Cott incide en el tiempo consolidado como movimiento social (catorce años de movilización previa como promedio); la unidad del movimiento (que no esté fragmentado en distintas organizaciones, siendo la CONAIE el ejemplo más claro entonces); el acceso mejorado para competir en elecciones (pudiéndose incluso participar como "movimiento" político, con menos requisitos, como en Ecuador); el mayor número de distritos electorales con mayoría indígena o minorías significativas (más del 25% indígena), así como un sistema de partidos fragmentado. Además, con partidos de izquierda débiles luego de la caída del Muro de Berlín (y sus organizaciones asociadas, como los sindicatos), los movimientos indígenas consiguen agrupar a una serie de intelectuales y profesionales, náufragos de esos partidos, en un nuevo proyecto dinámico, ilusionante. Analizando todas estas variables, Van Cott ejemplifica por qué Ecuador, Bolivia, e incluso Colombia y Venezuela, han desarrollado partidos indígenas exitosos, y por qué Perú y Ar-

gentina no lo han hecho.

Más tarde, en un análisis multivariable Martí i Puig incluirá a otros países, concluyendo que, a diferencia de Nicaragua, Ecuador, y Bolivia, Guatemala y Perú no consiguen tener un movimiento y partido indígenas exitosos debido a su poca capacidad contenciosa y solidez organizativa, básicamente a causa del impacto de la violencia política contra las comunidades. De forma añadida, México estaría en una posición intermedia entre el éxito de los tres primeros países y el fracaso de los dos segundos.

Retomando a Van Cott, los beneficios para la sociedad latinoamericana de contar con partidos indígenas son varios: i) mejoran el nivel de representación; ii) ofrecen un modelo de relaciones saludables entre sociedad y política (por su vínculo con los movimientos sociales y sus demandas directas); iii) ponen en la agenda política temas antes inéditos (respeto a la diversidad cultural, el problema de la discriminación por razón étnica, autonomía de la sociedad civil...); iv) introducen modelos más transparentes y democráticos de hacer política (utilizando métodos tradicionales como la participación y el consenso) y, finalmente v) incrementan la inclusión de líderes y demandas indígenas en los partidos tradicionales.

¿Pero y los efectos negativos de la participación política electoral? Básicamente cinco: i) desunión y faccionalismo; ii) "contaminación" por otros valores y prácticas (rompiendo tiempos y prácticas como el consenso, así como el equilibrio de autoridad al priorizarse líderes jóvenes con educación formal); iii) pueden reducir la efectividad de los

movimientos y sus prioridades; iv) pérdida de fondos exteriores hacia los movimientos (no serían tan “puros” y transparentes), y finalmente v) falta de experiencia política y técnica de los cargos electos (que dependen de técnicos no siempre sensibles a las demandas de las comunidades); sin obviar la dificultad añadida de asumir demandas no sólo de la población indígena.

Aunque la entrada en política electoral por parte de los indígenas es positiva para la democracia, según el balance de Van Cott (2005: 235),² ha tenido resultados muy desiguales en sus demandas directas. Ya podemos añadir que, si bien se ha avanzado en declaraciones retóricas y en la institucionalidad intercultural del Estado, queda pendiente el impacto de la política pública en la redistribución de la riqueza a través, por ejemplo, de efectivas reformas agrarias y de una consulta previa de buena fe ante leyes y megaproyectos extractivistas que afectan a las comunidades. ¿Estas limitantes compensan hoy los riesgos de la política institucional, y más en un momento donde ya no hay la ilusión del principio?

Tras las elecciones ecuatorianas de febrero de 2013 y los pobres resultados del partido indígena Pachakutik, en gran medida brazo electoral de la mayor organización social indígena del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), se multiplican las voces que ponen sobre el tapete la antigua discusión de principios de los noventa de si el poder político del

movimiento indígena debe traducirse en un vehículo electoral con todo y sus riesgos. En Ecuador hay textos valiosos sobre la crisis del movimiento indígena (Ramírez, 2009; Ospina, 2009), así como sobre el Pachakutik (García, s.f.), sobre el voto indígena en las elecciones de 1996 (Ibarra, 1996), en las de 2002 (Beck y Mijeski, 2006), y sobre el “enigmático” voto indígena en la primera vuelta de 2006 en las provincias de la Sierra (Báez y Bretón, 2006). Sin embargo, se carece de un texto actualizado sobre lo que hoy podría llamarse la debacle confirmada del partido indígena por excelencia en el Ecuador, el Pachakutik, a tenerse en cuenta por los partidos similares de la región. Con un giro a la izquierda a través de las urnas en no pocos países de Latinoamérica, no cabe duda que el escenario actual es muy distinto del que surgieron este tipo de partidos, en plena época neoliberal. ¿Es el punto y final del partido indígena?

Desde el presente texto se intenta responder a esta pregunta a partir de la revisión de la literatura académica sobre la temática, el análisis socio-político contextual, los datos de las elecciones de febrero de 2013 proporcionados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) del Ecuador, así como los datos sobre cantones con mayoría indígena con que cuenta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Se ha escogido el análisis del voto indígena en el binomio presidencial por ser el más significativo en cuanto a quien se quiere que dirija el gobierno y represente al país.

2 Ver igualmente su última obra de 2008, en que incide en los requisitos para hacer avanzar la “democracia radical” indígena.

Contexto social

A pesar de la diversidad y riqueza cultural que representan los pueblos indígenas en el Ecuador,³ como sucede en el resto del Continente, tienen en común altos índices de pobreza, del todo desproporcionado respecto a la media nacional. A todas luces, estos índices reflejan la discriminación histórica que sufren por condición cultural, lo que a su vez incide en un acceso limitado a los servicios sociales y, en general, a las políticas de redistribución del Estado, puesto que restringen sus oportunidades para participar en la toma de decisiones sobre su propio destino. Aún con la deficiencia y limitación de los datos desagregados disponibles, todas las estadísticas nacionales muestran estas disparidades, tanto entre el sector urbano y rural (mayoritariamente indígena) como directamente por razón étnica.⁴

Una de las cifras más concluyentes es el porcentaje de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI), donde la población indígena alcanzaría un porcentaje de pobreza del 89,9% en el 2001 pero, en contraste, la blanca ten-

dría un 45%.⁵ Ponce y Acosta, en un artículo reciente (2010), aportan datos más actualizados: la pobreza indígena por NBI de 2009 baja hasta los 70,3% siguiendo la recuperación económica luego de la larga noche neoliberal, pero sigue teniendo una diferencia de más de treinta puntos con otros grupos poblacionales (31.3% para el caso de los blancos; 37.9% en los mestizos). Además, se subraya el incremento en los últimos años de la indigencia dentro de la pobreza por ingreso en el caso de los indígenas (de 36,8% en 2006 a 45,8% en 2009), siendo el único grupo poblacional que sube en esta franja.⁶

Aunque la llegada a la presidencia en el 2006 de Rafael Correa con Alianza País no ha incidido por el momento de forma considerable en las marcadas diferencias por pertenencia cultural de estos índices socioeconómicos, también es cierto que se requiere usualmente de mayor tiempo para evidenciar un impacto más estructural de la política pública en las estadísticas. Una primera hipótesis podría ser que la pobreza por NBI baja por la inversión estatal en los servicios, y/o por la migración interna cam-

3 Las cifras varían entre el 7% del último Censo (INEC, 2010) y el 40% de acuerdo con el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) (Busso, Cicowiez, y Gasparini 2005).

4 Puede verse el Censo de población y vivienda (2010), la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos (ENIGHU), y la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano y Rural (ENEMDUR), del INEC; así como la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN), del CEPAR, la última de las cuales data de 2004.

5 Censo 2001, de acuerdo con el SIISE 2004 (ONU, 2009).

6 En consonancia con estudios comparativos del Banco Mundial, la pobreza de los pueblos indígenas es más severa y prácticamente no cambia con las políticas estatales de reducción de la misma: la población blanco-mestiza se beneficia, más no los indígenas, como si estuvieran en un mundo estanco (Hall y Patrinos, 2006). El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, ya subrayó las condiciones de discriminación y exclusión en que vive la población indígena en su informe de visita al país en el 2006.

po-ciudad, sin obviar el impacto de las remesas de los migrantes; y sube la pobreza por ingreso porque para los y las indígenas no hay una política sostenida que cubra sus derechos laborales en el campo, donde se encuentra su principal fuente de trabajo. En todo caso, hay avances y cambios importantes del contexto político que conviene repasar.

Contexto político

Con el regreso del Estado y el incremento exponencial del gasto público, la llamada “Revolución ciudadana” ha significado un parteaguas en la política ecuatoriana. Con todo, por el momento poca duda cabe que el cambio político más importante ha sido la aprobación de la nueva Constitución de 2008, basada en derechos tanto de los ciudadanos como, de forma innovadora, de la naturaleza; así como en sus respectivos mecanismos para procurar asegurarlos. Esto se debe a que la Carta magna es fruto del diálogo entre los distintos actores sociales y políticos del país, lo que significa que ésta, a menudo, ha ido por delante de las políticas públicas del actual gobierno.

En resumen, sobre el accionar del gobierno caben dos palabras: ambivalencia y contradicción; crecientes conforme avanza el proyecto político de Alianza País. Por una parte, están los avances indudables. En primer lugar, hay una mejora y ampliación de las in-

fraestructuras públicas, especialmente de la red vial, pero también de centrales hidroeléctricas (ocho nuevas, incluida la histórica Coca Codo Sinclair), o de accesibilidad aérea con el nuevo aeropuerto de Quito. En segundo, hay que subrayar el incremento del presupuesto en salud y educación, así como del funcionariado público, dándole mayor peso al Estado y eficiencia a sus servicios.

Pero por otra, están los retrocesos, especialmente percibidos por los pueblos indígenas y las organizaciones populares, como la cooptación y “quema” de varios dirigentes dentro del Estado, con el consiguiente debilitamiento de las demandas de cambio más radical. La entrada de profesionales indígenas en la función pública, en principio positiva, se complejiza en los “cargos políticos” de ex dirigentes indígenas reconocidos. El caso más mediático es el de Ricardo Ulcuango, designado Embajador en Bolivia en 2011, al que siguió el nombramiento de Segundo Andrango como Embajador en El Salvador. Para el caso institucional, véase especialmente la creación y el rol de la Secretaría de Pueblos y del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE), que son percibidas como un intento de dividir aún más al movimiento indígena, el desmantelamiento progresivo o aborto de las instituciones indígenas Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), Dirección de Salud Intercultural, el mismo CODENPE,⁷ y un

7 Véase el veto parcial a la Ley de Instituciones Públicas de Pueblos Indígenas, el Decreto Ejecutivo n° 1585 (febrero de 2009), luego parcialmente rectificado con el Decreto n° 196 (diciembre del mismo año); el Decreto n° 1780 (junio de 2009) por el cual se delega la administración de la educación, la salud, y la infraestructura en la Amazonia a las misiones católicas con el apoyo económico y militar del Estado; y el proyecto de Ley de Consejos Nacionales para la Igualdad.

aplazamiento inexcusable del derecho a la consulta previa (que consta en la nueva Constitución) hasta 2012.⁸ Además, se da la judicialización de la protesta popular, incluyendo represión y enjuiciamientos.⁹

Las contradicciones de un modelo de “desarrollo” hoy neodesarrollista (de cariz extractivista) se hacen si acaso más evidentes con la aprobación de la Ley de Minería (2009) a gran escala y cielo abierto, demandada por inconstitucional por la mayor organización indígena del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), tanto en la forma (no hubo consulta previa) como en el fondo (afectan directamente a sus derechos);¹⁰ así como en la llamada “XI Ronda Petrolera” (Suroriental) de noviembre de 2012, que lanza a licitación 13 bloques petroleros de la Amazonía ecuatoriana (provincias de Pastaza y Morona Santiago). Esta licitación se da en el contexto de fallo de ju-

lio de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Sarayaku (que obliga al Estado a indemnizar a la comunidad por no haber sido consultada en prospecciones petroleras en sus territorios entre 2002 y 2003), y la creciente tensión alrededor del derecho a la consulta previa por parte de los pueblos indígenas, no sólo en las acciones y megaproyectos que les afectan, sino también en los proyectos de ley, tres hoy en discusión: Ley de Culturas, Ley de Recursos Hídricos, y Ley de Tierras.

El trámite por ahora abortado de la Ley de Recursos Hídricos, con el precedente premonitorio de la Ley de Minería, generó un conflicto social entre octubre de 2009 y abril de 2010, con varias movilizaciones y el paro de la CONAIE, donde murió un ciudadano indígena, Bosco Wisuma. En marzo de 2012 vendría la “Marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos”, desde el

-
- 8 A partir de la Sentencia de la Corte Constitucional No. 001-10-SIN-CC, en junio de 2012 el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) del poder legislativo elaboró el instructivo para la aplicación de la consulta previa en temas que pudieran afectar los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. Por otra parte, en julio de 2012 se emite el Decreto Ejecutivo 1247 (“Reglamento para la ejecución de la consulta previa libre e informada en los procesos de licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarburíferos”); fuertemente criticado por la CONAIE.
- 9 Al respecto, se pueden citar los casos de la ex Secretaria de Comunicación del gobierno, la indígena kichwa Mónica Chuji, enjuiciada por “injurias calumniosas” contra el Secretario de la Administración del gobierno; del dirigente amazónico Pepe Aacho (hoy asambleísta), detenido por sabotaje y terrorismo; de Carlos Pérez Guartambel, dirigente de la consulta popular de Kimsakocha contra la minería a gran escala, encarcelado, y hoy dirigente de la regional ECUARUNARI; o de “los jóvenes de Luluncoto”, pertenecientes a organizaciones populares y detenidos bajo la acusación de terrorismo, entre otros casos.
- 10 A partir de cuya demanda, la Corte Constitucional emitiría la Sentencia 001-10-SIN-CC, polémica en el sentido de que a pesar de reconocer la existencia del derecho a la consulta pre legislativa y previa a actividades mineras, subrayó su condición no vinculante, y no declaró inconstitucional la Ley de Minería. De hecho, la aprobación de leyes sin consulta previa continuó. Véase los casos de las reformas a la Ley de Hidrocarburos, el Código de Ordenamiento Territorial, el Código de la Producción, y la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

Sur del país (zona minera) hasta la capital en la Sierra norte, que contó con más de dos mil participantes, pero que se encontraría a su llegada a Quito con la imagen más clara de un gobierno considerado de izquierdas por la prensa internacional y las élites económicas locales (por la importancia que le da al Estado y la inversión pública), pero visto como de derechas por la mayoría de organizaciones populares y por el grueso del movimiento indígena (por los valores conservadores que lo fundamentan y su actitud represiva). En la plaza grande, en la contra manifestación de apoyo organizada por el mismo gobierno, junto al grupo musical Pueblo Nuevo, el presidente Correa entonaba “Comandante Che Guevara”.

Contexto electoral

Caben ser subrayados aquí un organismo y un instrumento jurídico, respectivamente el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Código de la Democracia. De acuerdo a la nueva Constitución de 2008, que rompe la estructura tradicional del Estado liberal “burgués”, el CNE es uno de los organismos que supera la tripartición de poderes clásica (legislativo, ejecutivo, y judicial) para buscar un mejor equilibrio entre la soberanía popular (el ciudadano) y el poder del gobierno. Además de los tres poderes tradicionales, aparecen, en el título IV “Participación y organización del poder” de la nueva Constitución, el Po-

der o Función de Transparencia y Control Social (capítulo quinto), y el Poder o Función Electoral (capítulo sexto). Si el órgano principal del primero es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); el órgano principal del segundo es el CNE, al que igualmente se ha de añadir el Tribunal Contencioso Electoral. Los cinco integrantes del CNE deben ser elegidos por concurso de méritos y oposición a través del CPCCS. Una vez elegidos por seis años (debiéndose renovar parcialmente cada tres), los consejeros escogen al presidente y vicepresidente.¹¹

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, conocida comúnmente como Código de la Democracia y promulgada el 27 de abril de 2009 (Registro Oficial No. 578), agrupa en un único cuerpo la dispersión anterior de cuatro normas jurídicas relativas a la función electoral. A pesar de su novedad, ya ha tenido tres reformas: i) 10 de diciembre de 2010, en la cual se habilita a la entrega de financiamiento público a las organizaciones políticas en campañas electorales; ii) 11 de mayo de 2011, a partir de la cual se regula la figura de la revocatoria de mandato (con un freno de esta figura de democracia directa), y iii) 6 de febrero de 2012, a través de la cual se reducen los plazos para resolver las causas a los organismos electorales, se añade el método de d’Hont para escaños provinciales y del Parlamento Andino y de Webster para los nacionales;

11 Para el período 2011-2014, el CNE está conformado de la siguiente forma: Presidente: Domingo Paredes Castillo; Vicepresidente: Paúl Salazar Vargas; Consejera: Roxana Silva; Consejera: Magdala Villacís; Consejero: Juan Pablo Pozo Bahamonde.

se otorga al CNE competencias para juzgar infracciones menores en sede administrativa; se regula la publicidad en los medios; y se decide la elección de asambleístas en primera vuelta.

De entre todos estos cambios, los que han generado mayor discusión (con cinco recursos de anticonstitucionalidad incluidos y con la comprensible alarma social a las puertas de las elecciones),¹² han sido tres: i) modificación del método de asignación de escaños puesto que la incorporación del método d'Hont, que beneficia a los partidos mayoritarios ya había sido declarado inconstitucional en 2004 por el Tribunal Constitucional de entonces; ii) las limitaciones a los medios de comunicación social en cuanto a la propaganda electoral (con un férreo control del CNE), conforme con los Art. 203 y 207, y iii) la autorización a todos los funcionarios de elección popular para que sigan en sus cargos mientras participan en campaña electoral (pues crea confusión entre lo privado y lo público), de acuerdo con el Art. 93.

Por medio de la sentencia de la Corte No. 028-12-SIN-CC (17 de octubre de 2012), se corroboró el método d'Hont como constitucional, y se reconoció "la facultad discrecional" de los funcionarios públicos que se postulen a las elecciones, para que puedan solicitar o no una licencia en sus cargos durante la campaña. No obstante, la Corte declaró inconstitucional parte del Art. 203 del Código de la Democracia que restringía

el trabajo de los medios de comunicación durante la campaña electoral, aunque de forma muy tenue, lo que implicó que la sensación de control comunicacional siguiese, así como una posible auto censura para evitar sanciones por parte del CNE. Además, aunque en el mismo artículo se "prohíbe la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado" hay cuatro excepciones que abrieron la puerta a lo que los adversarios en la contienda electoral temían: que durante la campaña no hubiera suficiente diferenciación entre la propaganda de gobierno y la del Estado.

El escándalo de las firmas

En julio de 2012 el CNE denunció ante la Fiscalía General del Estado la existencia de firmas falsificadas en apoyo a la inscripción de partidos y movimientos políticos para las elecciones de 2013: personas que salían en listas de partidos donde jamás se habían afiliado, casillas de huella dactilar, por ejemplo, con huellas del dedo gordo del pie, etcétera. Ante el escándalo desatado y la cantidad de firmas y afiliaciones falsas, el CNE instaló un centro de verificación manual, llegando a verificar los aproximadamente 3 millones de firmas presentadas. Es de subrayar que todos los partidos sin excepción salieron con firmas falsas, incluyendo el partido gubernamental (con un 17.6% de este tipo de firmas). Se especuló que había empresas

12 Los recursos fueron presentados en febrero de 2012 por la Unión Nacional de Periodistas (UNP), el Movimiento Alianza Libertad; Fundamedios en conjunto con la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), profesores y estudiantes de la Universidad San Francisco y periodistas; el PRIAN y la Coordinadora Nacional de las Izquierdas.

especializadas en vender las afiliaciones y firmas a los partidos por medio de una trama de corrupción dentro del mismo CNE. Al final no se llegó a clarificar el origen de este grave caso de corrupción de los mecanismos legales para acreditarse como partido político en el CNE. Tampoco hubo imputados o dimisiones por asunción de responsabilidades políticas.

Desde la tesis más conspirativa se apunta a que el partido en el gobierno orquestó todo el escándalo supuestamente para beneficiarse. Aunque Alianza País también tuvo firmas falsas, su posición de partido gobernante le posibilitaría equilibrar la confianza ciudadana con su maquinaria propagandística, en contraposición a todos los demás partidos, que aparecerían de forma indiferenciada como parte de la antigua “partidocracia”, corrupta y oportunista en la lid electoral.¹³

Las elecciones

En las elecciones ecuatorianas del 17 de febrero de 2013 se eligieron las siguientes responsabilidades políticas: presidente, vicepresidente, 137 representantes a la Asamblea Nacional (conformada por 15 asambleístas nacionales, dos asambleístas por cada provincia, más uno añadido por cada doscientos mil habitantes o fracción que supere los ciento cincuenta mil, y seis asambleístas por la circunscripción especial del exterior: dos por Europa, Oceanía, y Asia;

dos por Canadá y Estados Unidos; y dos por Latinoamérica, El Caribe y África); más cinco representantes al Parlamento Andino. Si bien la distribución usual de asambleístas provinciales es entre dos y cuatro, cabe añadir los cinco que tienen tanto Azuay como El Oro, los seis de Los Ríos, siempre de acuerdo con el peso poblacional, pero muy especialmente el número decisivo que tienen tres provincias: Guayas, Pichincha, y Manabí (con 20, 16, y nueve asambleístas respectivamente).

Resuelto el escándalo de las firmas con la aprobación final de todos los partidos y movimientos, empezó la primera gran campaña electoral donde entraba en ejercicio el Código de la Democracia. Tuvo como protagonistas a 47 organizaciones políticas (7 partidos políticos, 5 movimientos políticos nacionales, y 35 movimientos políticos provinciales). La campaña giró principalmente en torno a tres temas: seguridad, economía (pro Estado o pro mercado), y Estado de derecho y división de poderes, pero faltó una discusión más amplia de los distintos programas políticos. Además, temas importantes como la minería, o el cambio de matriz energética y el Ecuador post petrolero, no fueron tratados o tuvieron muy poca resonancia mediática. Se apuntó que esta situación provenía de las limitaciones establecidas por el CNE y el mismo Código. En todo caso, a lo largo de los 42 días de campaña electoral (del 4 de enero al 14 de febrero, con dos días de silencio

13 Sobre todo desde las elecciones de 2002, en el Ecuador se suele utilizar el concepto de “partidocracia” para referirse a prácticas corruptas del pasado por parte de todos los partidos anteriores al partido de gobierno.

electoral hasta el domingo 17) se acabó evidenciando que no había contendiente a la altura del actual presidente ni propuesta alternativa al proyecto de Revolución ciudadana. De hecho, fue como si la discusión de fondo se hubiera acabado a las puertas de la campaña cuando Rafael Correa subió el Bono de Desarrollo Humano de 30 a 50 US\$ (con el incremento de los impuestos a los bancos) a partir de una declaración del candidato conservador Guillermo Lasso (CREO) de que si fuera presidente subiría el bono a esa misma cifra.

Participación electoral indígena

La participación electoral indígena viene condicionada de antemano por la concentración indígena en el campo, con un acceso geográfico limitado, así como por el alto porcentaje de población indígena aun no cedulada (23,9%), que se correlaciona con altos índices de analfabetismo en la población rural.¹⁴ Además, no cabe obviar las dificultades del migrante ciudadano (en buena parte indígena) en acudir a la junta receptora de voto en la cual está originalmente registrado.

En las pasadas elecciones, cuatro partidos se disputaron el voto indígena a nivel nacional: el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik bajo la coalición de diez organizaciones llamada "Unidad Plurinacional de las Izquierdas"; incluido el Movimiento Popular Democrático (MPD), asociado al sindicato Unión Nacional de Educadores; el

Partido Sociedad Patriótica (PSP), de tendencia populista; Alianza País, el partido del actual gobierno de centro izquierda; y el Movimiento Nacional CREO, conservador. Aunque de forma limitada y local, también se podría añadir el caso del Movimiento Político Amauta Yuyay (lista 66 de acuerdo al CNE), vinculado al Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (FEINE) y con un bastión histórico en el cantón Colta de la provincia de Chimborazo (en las pasadas elecciones obtuvo un escaño con Marco Murillo como asambleísta provincial). Amauta Yuyay también puede destacar por ser el partido indígena que postuló por primera vez a un indígena a la presidencia: Antonio Vargas en las elecciones de 2002, cuando el movimiento se denominaba Amauta Jatari (El sabio se levanta), articulado desde 1996.

El partido Pachakutik suele considerarse como el partido indígena por excelencia, tanto por su importante éxito electoral hacia fines de la década de los noventa y principios del siglo XXI, como por su programa político y su composición. Ahora bien, junto con contar con un movimiento social sólido, su primer éxito se basó en aglutinar el descontento de la clase popular y la clase media empobrecida durante la década perdida y el período neoliberal, en un partido con componentes de frente amplio: con candidatos blanco-mestizos, programa de izquierdas, anti imperialista y anti neoliberal. No obstante, el éxito fue efímero.

14 No obstante, se debe matizar que el 52% de las personas no ceduladas corresponden a niños/as, que no están obligados a votar.

Cabe recordar que luego de la participación fugaz y traumática en el gobierno de Gutiérrez en 2003, el voto fue periclitando del 20,43% en primera vuelta en 2002¹⁵ (que se aproxima al techo electoral del partido de 20,61% en las presidenciales de 1996), a la debacle del 2,19% de los votos en 2006, cuando Pachakutik optaba por primera vez a la presidencia con un candidato propio e indígena (Luis Macas). Báez y Bretón (2006: 7) citando a Beck y Mijeski (2006: 180) inciden en la continuidad del descenso del voto indígena de Pachakutik desde las elecciones de 2002. Aunque hay cierta correlación entre el voto indígena y el porcentaje de población indígena parroquial, acotan, Pachakutik pierde el voto indígena en sus antiguos bastiones de la Sierra: Cañar, Chimborazo, Bolívar, y Cotopaxi, que van a parar al Partido Sociedad Patriótica (de Lucio y Gilmar Gutiérrez), pero también a Alianza País (Rafael Correa), el cual además gana en Loja, Azuay, Pichincha, e Imbabura.

En 2013, Pachakutik continúa fragmentado y debilitado; en parte por su accionar errático; en parte por la crisis del movimiento indígena al que está vinculado y que a su vez profundiza. Pero a los errores propios, y a los factores estructurales vinculados de debilitamiento del movimiento indígena, ampliamente estudiados (iglesias evangélicas, proyectismo, diversificación social, crisis de la comuna), también se añaden otros factores coyunturales relacionados

con intereses gubernamentales y personales. Deben verse en detalle.

En Chimborazo, la directiva provincial del partido se alió con Alianza País a partir de una interpretación jurídica dudosa del CNE que, por el contrario, no dejó inscribir a los candidatos respaldados por la directiva nacional de Pachakutik (por lo que el MPD tuvo que inscribirse solo en esa provincia). En Cotopaxi, la situación no era menos compleja: En mayo de 2012, la Contraloría General del Estado había destituido al prefecto César Umajinga condenado a pagar 5.280 dólares por supuesto nepotismo y presuntas desviaciones administrativas, como el cobro excesivo de su sueldo. El prefecto, militante de Pachakutik, negó las acusaciones denunciando una retaliación política del gobierno. Asumió funciones de prefecta la hasta entonces viceprefecta también por Pachakutik, Blanca Guamangate, pero ya con votos de siete alcaldes pertenecientes a Alianza País.

En Imbabura, Pachakutik recibió un balde de agua fría desde su propia dirigencia y le sirvió en bandeja de plata el voto de izquierdas a Alianza País y a un partido nuevo asociado: Avanza.¹⁶ En diciembre de 2012, el dirigente histórico de Pachakutik, Auki Tituaña, anunciaba que se presentaría como candidato a la vicepresidencia junto con Guillermo Lasso, del conservador CREO. De acuerdo con Tituaña (por otra parte admirador del Che Guevara y de la Re-

15 La candidatura de Lucio Gutiérrez en las elecciones de 2002 fue sustentada por la alianza entre Pachakutik, Sociedad Patriótica y el MPD.

16 Tuvo una importante baza con Antonio Posso Salgado (cuarto escaño de Imbabura luego de los tres primeros de Alianza País).

volución Cubana): *“El movimiento indígena tiene libertad y eso es lo bueno. Hay libertad de pensamiento y de elección. Hay muchos que han votado por Mahuad, Lucio y hasta por Correa”*.¹⁷ Por si fuera poco, el ex presidente de la CONAIE y originario de la provincia de Cotopaxi, Leónidas Iza, parecía dar el apoyo a CREO a partir de la supuesta entrada de Auki Tituaña como candidato a la vicepresidencia. Aunque el binomio Lasso-Tituaña finalmente no prosperó por razones formales de inscripción ante el CNE, el Pachakutik quedó en una situación comprometida y debilitada ante sus electores históricos.

Además, el gobierno había nombrado anteriormente como embajador en Bolivia a Ricardo Ulcuango, perteneciente a una familia indígena de la provincia de Imbabura muy influyente, pues no cabe olvidar que Alianza País mantiene una coalición con la FENOCIN (Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras), muy fuerte en la Sierra norte; lo que también explicaría sus buenos resultados en los Andes.

Por su parte, CONAIE y Pachakutik acusaron al partido de gobierno de ofrecer tenencias políticas a cuadros indígenas locales, entre otras prácticas de cooptación y fragmentación del movimiento, como los programas Socio Bosque y Socio Siembra o la entrega de urea y borregos. Sin embargo, Alianza País no es el único partido que ha disputado con éxito el voto indígena a Pachakutik desde la posición de poder que

da el gobierno. En su fugaz paso por el gobierno, el PSP del ex presidente Lucio Gutiérrez aplicó una política sistemática y muy eficaz de cooptación de la dirigencia indígena, división organizativa, y captación de las bases (política de “picos y palas” en las comunidades), todo ello combinado con algunas grandes obras, en especial la vía Troncal Amazónica, que difícilmente se olvida por los votantes indígenas (y no indígenas) de aquella zona históricamente olvidada por la inversión pública. Así, en las anteriores elecciones presidenciales (2009) el PSP alcanzó la segunda posición (con un 28,24%, casi dos millones de votos), obteniendo la victoria en parte de la Sierra y la mayor parte de la Amazonia con el voto indígena.

Resultados

Contra la mayor parte de pronósticos en las elecciones de 2013 no hubo segunda vuelta, y Alianza País incrementó de forma inédita todos sus diputados; un éxito. Desde un proyecto estatista y neo-desarrollista extractivista, el candidato presidencial de Alianza País, Rafael Correa, obtuvo el 57,79% de los votos, con una diferencia de más del 30% de los votos de su inmediato contrincante político, Guillermo Lasso de CREO, en una línea conservadora, con una mayor confianza en el mercado y libre comercio, y quien obtuvo el 22,26% de los votos. A mayor distancia quedó la tercera fuerza política, el PSP de Lucio Gutiérrez, populista. Nada desdeñable es el resultado

17 Véase “Cuatro partidos van a la caza del voto indígena” (El Comercio, 6 de noviembre de 2012).

del novísimo Movimiento SUMA de Mauricio Rodas, de línea conservadora, con el 4,37% de los votos.

El movimiento político propiamente indianista, Pachakutik, bajo el paraguas de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, apenas obtuvo el 3,26% de los votos para presidente y vicepresidente, su segundo peor resultado en toda su historia (con una diferencia de casi 20 puntos de su máximo de 1996), a pesar

de contar con el ex presidente de la Asamblea Constituyente e intelectual Alberto Acosta como presidenciable (véase Tabla 1). Con todo, pudo mantener los cinco asambleístas de la anterior legislatura.¹⁸ Finalmente, Amauta Yuyay, asociado a la organización evangélica de indígenas FEINE, no pudo revalidar su escaño en la provincia de Chimborazo, de alto porcentaje indígena y donde concentraba su voto de forma histórica.

Tabla 1
Resultados de Pachakutik en elecciones presidenciales (1996-2013)

Años	Porcentaje	Posición de la candidatura
1996	20,61%	Tercera
1998	14,74%	Cuarta
2002	20,43% ¹ 54,79% (segunda vuelta)	Primera Primera
2006	2,19%	Sexta
2009	<i>Sin candidatura</i>	<i>Sin candidatura</i>
2013	3,26%	Sexta

Fuente: Van Cott (2005); García (s.f.); y CNE (2013). Elaboración: Autor.

¹ En alianza con el Partido Sociedad Patriótica y el MPD.

Sin embargo, para afinar el análisis del voto indígena, estos resultados se han de cotejar a nivel provincial y, sobre todo, en los cantones con mayoría indígena (véase Tabla 2). Aunque un partido indígena no depende únicamente de los votos indígenas, puesto que suele aliarse con otros partidos y organizaciones no indígenas y tiene vínculo con el movimiento social amplio, no se

puede obviar la correlación entre partido indígena y voto indígena, que suele darse aún más en los gobiernos locales.

A primera vista se destaca que Correa reina en la Sierra, la segunda zona del país con más cantones con mayoría indígena de acuerdo al Censo de 2010, y donde el movimiento indígena había tenido sus bastiones históricos. Acosta sólo le sigue a corta distancia en el cantón

¹⁸ En esta ocasión (2013-2017): Lourdes Tibán (nacional), Magali Orellana (Orellana), César Umajinga (Cotopaxi), Pepe Acacho (Morona Santiago), y Clever Jiménez (Zamora Chinchipe).

Suscal, en la provincia de Sierra Sur de Cañar. Luego no sólo no aparece el partido indígena en segundos puestos (que son ocupados mayormente por el candidato conservador Lasso), sino que hay que ir hasta el cuarto lugar de los porcentajes para encontrar al Pachakutik.

En la Amazonia, los resultados cambian de forma radical. De los nueve cantones con mayoría de población indígena, Correa sólo gana en uno, Aguarico (provincia de Orellana). En cambio, se destaca el color rojo y verde del PSP (que

gana en cinco de los nueve cantones con mayoría indígena); siendo Acosta ganador sólo en tres, incluyendo su mejor porcentaje al nivel local, el cantón Taisha (Morona Santiago) con el 73,20% de los votos (seguido de PSP con el 10,94%; y sólo en un tercer lugar, Alianza País con el 6,96%). Salvo en el cantón Logroño (Morona Santiago), donde se disputa la victoria con Gutiérrez, cuando la candidatura de Acosta no gana queda relegada a la cuarta posición, como en la Sierra, por detrás incluso del neófito Lasso.

Tabla 2
Porcentaje en elección presidencial conforme a cantones con mayoría poblacional indígena

Provincia	Cantón	50 % o más indígena	1er candidato	%votos	2o candidato	%votos	3er candidato	%votos	4o candidato	%votos
Sierra										
Cañar	Suscal	76,70%	Correa	38,13	Acosta	34,06	Lasso	14	Gutiérrez	7,56
Cotopaxi	Pujilí	51,80%	Correa	50,68	Lasso	16,82	Gutiérrez	11,07	Acosta	10,7
Chimborazo	Alausí	59%	Correa	52,35	Lasso	16,7	Gutiérrez	15,94	Rodas	4,76
	Colta	87,40%	Correa	42,73	Gutiérrez	19,8	Lasso	19,43	Acosta	6,97
	Guamote	94,50%	Correa	48,77	Lasso	14,09	Gutiérrez	13,84	Acosta	10,53
Imbabura	Otavaló	57,20%	Correa	57,09	Lasso	25,53	Noboa	4,44	Acosta	4,19
Amazonia										
Morona Santiago	Huamboya	82,80%	Acosta	36,34	Gutiérrez	29,5	Correa	24,59	Lasso	7,03
	Taisha	95,80%	Acosta	73,2	Gutiérrez	10,94	Correa	6,96	Lasso	5,04
	Logroño	71,90%	Gutiérrez	33,19	Acosta	32,11	Correa	21,79	Lasso	10,97
Napo	Tena	58,70%	Gutiérrez	53,86	Correa	22,06	Lasso	16,86	Acosta	2,98
	Archidona	80,30%	Gutiérrez	49,21	Correa	22,48	Lasso	15,57	Acosta	8,87
Pastaza	Arajuno	94,70%	Gutiérrez	26,86	Correa	25,29	Lasso	24,21	Acosta	21,5
Zamora Chinchipe	Yacuambí	71,70%	Acosta	46,41	Lasso	24,12	Correa	22,17	Rodas	3,02
Orellana	Aguarico	77,40%	Correa	39,45	Gutiérrez	28,79	Lasso	17,85	Acosta	7,73
	Loreto	67,40%	Gutiérrez	47,52	Correa	24,54	Lasso	12,42	Acosta	11,13

Fuente: INEC (2010) y CNE (2013). Elaboración: Autor.

En resumen, aunque con menos apoyo que en las últimas elecciones, Correa vence cómodamente en la Sierra indígena. Por su parte, Gutiérrez sigue ganando en la mayor parte de los cantones amazónicos con mayoría indígena. Es decir, Gutiérrez, aunque a nivel nacional consigue un magro resultado, a nivel local le sigue restando votos a Pachakutik, especialmente en la Amazonia, donde éste apenas logra conservar la victoria en tres cantones (de los nueve con mayoría indígena en la zona). En este sentido, Gutiérrez continúa haciendo mella en el descalabro electoral desde el año 2006 del Pachakutik. No sólo que las clases media y popular descontentas con la “partidocracia” y el sistema neoliberal, no han votado por Pachakutik; tampoco lo han hecho los indígenas. Sólo el 20% de los cantones con mayoría de población indígena votaron por Pachakutik, mientras que el 33,33% votaron por PSP, y el 46,67% por Alianza País.

Conclusiones

A pesar del escándalo de las firmas en el CNE y la innecesaria alarma social a partir de los cambios en el reciente Código de la Democracia a las mismas puertas de las elecciones (incluyendo demandas de anticonstitucionalidad desde la sociedad civil y el subsiguiente pronunciamiento de la Corte), las elec-

ciones de febrero de 2013 en el Ecuador se desarrollaron de forma relativamente tranquila. En este marco, en el análisis sobre la debacle del Pachakutik en las elecciones del Ecuador de febrero de 2013, caben conclusiones tanto generales como concretas. En cuanto a las primeras:

1. Desigualdad en los medios de comunicación. De acuerdo con el Código de la Democracia, el Estado financia las campañas de forma equitativa, pero: i) faltan procedimientos sencillos y transparentes para que puedan beneficiarse todas las organizaciones políticas; ii) hay temor de censura de las organizaciones políticas y medios de comunicación por parte del CNE, y iii) no hay control de la propaganda pública/estatal, que invade el espacio público (en la campaña debería haber silenciamiento total de este tipo de propaganda). De acuerdo con estudios, durante la campaña electoral el gobierno y el candidato Correa aparecieron en más ocasiones que el resto de candidatos y en la mayoría de medios de comunicación, en concreto en la televisión y en la prensa escrita.¹⁹ Sin embargo, también es cierto que:
2. A diferencia del partido de gobierno, los otros partidos políticos mostraron grandes deficiencias de comunicación política (a menudo ma-

19 Véase especialmente el “Reporte final de participación de candidatos presidenciales en espacios informativos en medios de comunicación durante la campaña electoral 2013 (del 04 de enero al 14 de febrero de 2013)”, y que no incluye las franjas de publicidad concedidas por el CNE, de la ONG de ámbito nacional Corporación Participación Ciudadana, accesible en: <http://www.participacionciudadana.org>

nejada de forma familiar o artesanal), no consiguieron alejarse de la imagen percibida por la ciudadanía de ellos como espectros corruptos del pasado, parte de “partidocracia”, a la vez que siguieron apareciendo para la mayoría de electores como meras “empresas electorales” (que sólo se activan en las elecciones y ven el espacio electoral como el único en el cual posicionarse). El escándalo de las firmas pudo contribuir a esta apreciación. Finalmente:

3. Con todo y ser legal y constitucional, el nuevo método de conteo tiende favorecer a los partidos mayoritarios y por, ende, penaliza ligeramente a las minorías. La nueva división de circunscripciones electorales en las tres provincias que deciden la mayoría de escaños en la Asamblea (Guayas, Pichincha, Manabí), y la utilización del método d’Hont de conteo de votos y asignación de escaños, que suplanta en estas elecciones al método Webster para asambleístas provinciales y al Parlamento Andino, pudo hacer variar ligeramente el resultado a favor del partido gubernamental.

En cuanto a las conclusiones más concretas sobre los últimos resultados de Pachakutik, cabe resaltar que viene condicionado por factores tanto externos como internos del partido. Sobre los primeros:

1. Dificultad de acceso para ejercer el derecho al voto; ya sea por distancia geográfica, aun considerables en el mundo rural, cuanto por no contar con cédula de identidad, o bien por el alto porcentaje de analfabetismo (y su relación a menudo con el voto nulo), o por problemas de actualización del padrón electoral debido a la migración indígena interna e internacional.
2. Poca participación indígena en las Juntas Receptoras de Votos. De acuerdo con el Código de la Democracia, los miembros de las Juntas Receptoras de Votos serán constituidos por ciudadanas y ciudadanos “que consten en el registro electoral y que sepan leer y escribir” (Art. 44), lo que incide en la poca participación indígena en ellas (por ser una población especialmente rural y con elevados índices de analfabetismo, especialmente en las mujeres indígenas).
3. Inexistencia de campaña estatal a través del CNE para promover el voto indígena en sus propios idiomas a través de los medios; con todo y considerarse en la Agenda de Compromisos y Acciones por la Interculturalidad (28 de febrero de 2012).²⁰ Véase igualmente la no conformación del Consejo Consultivo Intercultural del CNE, también considerado en el mismo documento.

20 La agenda fue el principal producto del “I Encuentro Internacional: Retos para una Democracia Intercultural”, organizado por el CNE y con la participación de PNUD (programa GPECS) entre otras instituciones internacionales y nacionales (Quito, 27 y 28 de febrero de 2012); accesible en: <http://www.cne.gob.ec/files/DECLARATORIA%20INTERCULTURALIDAD%2028-02-2012.pdf>

4. Aprobación de la política gubernamental. Aunque algunos autores señalan que el Bono de Desarrollo Humano no incide en el apoyo al presidente y su gobierno,²¹ el incremento de éste en 20 US\$ (pasando de 30 a 50 US\$) a las puertas de las elecciones y su incidencia en comunidades rurales puede haber condicionado el voto indígena hacia Alianza País, así como evidentemente la mejora de infraestructuras (especialmente la red vial, pero también la construcción de escuelas y subcentros médicos), y políticas asistenciales como la entrega de urea, borregos, o los programas Socio Bosque y Socio Siembra, o directamente clientelares (entrega de tenencias políticas).

5. Aumento de la división del Pachakutik y del movimiento indígena, en parte por la acción directa del Estado: La decisión del CNE en la provincia de Chimborazo (con una interpretación peculiar del Código de la Democracia), y lo acontecido en 2012 en la provincia de Cotopaxi, han dividido al Pachakutik en la Sierra y las bases del movimiento.

Aunque sea evidente que los primeros tres puntos tienen poca relación con la debacle del Pachakutik, inciden en la participación electoral indígena y, por tanto, en potenciales electores. Respecto a los factores internos del partido, cabe diferenciarlos a su vez entre estructurales y coyunturales:

1. Estructurales: i) incapacidad de convocar y aglutinar a grandes sectores

de la sociedad descontentos con la política tradicional (“partidocracia”) y las políticas neoliberales de los noventa y principios del siglo XXI y, en especial, a los sectores populares y la recuperada clase media, ganadas por Alianza País; ii) incapacidad de restablecer el vínculo con las bases locales del movimiento indígena, fragmentadas por el PSP desde 2003, especialmente en la Amazonia pero también en la Sierra, ya sea por el mismo debilitamiento de la CONAIE como por la falta de compromiso y poca capacidad de liderazgo de los cargos públicos (acusados a menudo de “ponchos dorados”, alejados de los problemas cotidianos de la gente, cuando no de clientelismo y prácticas poco transparentes).

2. Coyunturales: i) incapacidad de evitar la división en las candidaturas locales (véase sobre todo Chimborazo y Cotopaxi a partir de incidencia del partido de gobierno y del Estado); ii) dudoso beneficio de la alianza con el MPD (que la ciudadanía asocia a la “partidocracia” del pasado y lo percibe con prácticas clientelares cuando no mafiosas), sin asegurar la alianza con otro partido afín y nuevo, “Ruptura de los 25”; iii) deficiente estrategia de comunicación política (cada movimiento local asociado a la lista hacía campaña con su consigna y colores); iv) caos organizativo que incluye la contratación tardía de la empresa de propaganda electoral, y v)

21 Véase Thomson, Enríquez, y Juan Ponce (2013). *Hacia una reforma del Bono de Desarrollo Humano: Algunas reflexiones*. Quito: Abya Yala.

posible sensación de falta de liderazgo político de Alberto Acosta, por otra parte reconocido intelectual (y ex presidente de la Asamblea Constituyente).

Finalmente, en el descalabro persistente de Pachakutik se puede apuntar la tesis más culturalista que viene cuajándose en el seno del movimiento indígena, en el sentido que el ámbito electoral y político occidental moderno no es propio de los pueblos indígenas, por lo que hay una desventaja enorme ante unas reglas de juego y procedimientos totalmente ajenos al mundo indígena. Aunque esta tesis, defendida por ejemplo por el secretario nacional ejecutivo del CODENPE Ángel Medina, pueda tener sus fortalezas, y visibiliza la dificultad añadida de la población indígena en un sistema político en parte ajeno, es de escasa utilidad para explicar el declive del partido indígena en las últimas elecciones presidenciales, así como el voto indígena trasvasado a PSP y a Alianza País.

Pero en los anteriores factores hay que incidir en los errores estratégicos coyunturales de la dirigencia en distintos períodos: haber entrado en el gobierno de Gutiérrez en el 2003 no sólo significó cooptación, fragmentación y, finalmente, debilitamiento del movimiento indígena, sino una imagen externa que ancla al Pachakutik en la “partidocracia” y, por tanto, en la corrupción “del pasado”. Además, el comprensible “cierre étnico” a partir de esa experiencia traumática jugó en su contra en las elecciones de 2006, en lo que es otro error de calado, el que más pesa hoy: rechazar la invitación de Correa de entrar en el binomio presidencial y, por tanto, no estar en

el actual gobierno para avanzar con convicción en políticas públicas interculturales, plurinacionales, y de equidad en general. Por el momento, el gran espacio del centro-izquierda ha sido ganado por Alianza País, que también se lleva la mayor parte del voto indígena en los cantones donde esta población es mayoría (46,67%), seguido de PSP (33,33%), dejando a Pachakutik con un magro porcentaje (20%).

La situación no es fácil para Pachakutik dados los últimos resultados electorales que, además, corroboran las conclusiones de la literatura académica respecto a los riesgos para el movimiento indígena de entrar en la lid electoral con partidos propios o vinculados a él, básicamente tres a recordar aquí: desunión y faccionalismo (sobre todo por la atracción de los cargos pagados); “contaminación” por otros valores y prácticas (clientelismo, corrupción, populismo, personalismo), y pérdida de fondos externos por considerar que los cargos públicos ya pueden aportar financiación al movimiento social. Efectivamente, junto con los factores estructurales de debilitamiento del movimiento indígena (iglesias evangélicas, proyectismo, diversificación social, crisis de la comuna), en el Ecuador se da una retroalimentación fatídica: entrar en la política institucional deslegitima y debilita aún más al movimiento y, como éste representa el voto duro del Pachakutik y la base orgánica del partido, éste profundiza su declive electoral; lo que no obvia la incidencia de los propios errores del partido o la influencia de la política gubernamental y estatal en ese mismo declive.

¿Serán las elecciones ecuatorianas de 2013 el punto y final del Pachakutik y del partido indígena en el país? ¿Se puede extrapolar esta situación al resto de partidos indígenas del Subcontinente? Con todo y las dificultades, y a pesar de que las voces más culturalistas del movimiento indígena piden una retirada de las lides electorales, hoy es difícil imaginar un Ecuador sin el partido Pachakutik: ya sea por los intereses creados, por las ambiciones personales, por las bases que aun preserva y la fidelidad de un voto duro, como sobre todo por la oportunidad de participación e impacto que significa. Además, una cosa son las elecciones presidenciales y de asambleístas y otra muy distinta son las elecciones a los gobiernos locales: juntas parroquiales, municipios cantonales, y prefecturas, donde Pachakutik aún conserva fortaleza y esperanza. Con todo, es difícil obviar la crisis orgánica y de incidencia nacional del partido. Para vislumbrar una posible salida al atolladero presente conviene contar con la perspectiva regional latinoamericana, pues la pérdida de centralidad del Pachakutik contrasta con la fortaleza de los partidos indígenas en otros países con gobiernos de la nueva izquierda que igualmente trabajan por un regreso del Estado y el gasto público desde una realidad plurinacional.

En Bolivia, a pesar de los crecientes conflictos en su seno (como en el caso del Tipnis), gran parte del movimiento indígena está en el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). En Nicaragua, el partido indígena de la Costa Atlántica Yatama tiene desde 2006 un acuerdo de gobernabilidad con su otro-

ra enemigo armado, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En ambos casos, la participación o el acuerdo con un gobierno de izquierdas han mantenido a los indígenas con cierta influencia política institucional. El caso de Yatama es de especial interés para el Pachakutik: La entrada electoral va debilitando al movimiento y los resultados electorales se resienten, pero una buena base social y la política acertada de pactos de su dirigencia ayudan a volver a situarse al centro del debate político en el país y a recuperar su incidencia.

En Ecuador, si se entiende que Pachakutik es aun de utilidad para profundizar los cambios en vista a un Estado plurinacional, intercultural, justo y equitativo, una primera salida a la crisis pasa por regresar al "trabajo de hormiga" con las bases y por la renovación de liderazgos, tanto en la política electoral como en las organizaciones de las nacionalidades y pueblos, hoy fragmentadas y desgastadas. La acumulación de fuerzas es indispensable. Pero en perspectiva regional habría otra salida añadida por la que ya han optado algunas organizaciones indígenas ecuatorianas (incluyendo filiales de la CONAIE): establecer acuerdos estratégicos con el gobierno para implementar el programa indianista (y de izquierdas) de forma más radical, o siquiera parte de él. Como se evidencia en los contextos social y político, el gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido muy hábil en tomar las banderas del movimiento indígena y popular y empezar a implementarlas tenuemente, sin convicción, con retrocesos incluidos. El Pachakutik y el movimiento social en su conjunto deben vol-

ver a reconocerse en esas mismas banderas que posicionaron en la centralidad de la política ecuatoriana. Banderas que no son sino sus derechos, como el de autonomía, la salvaguardia del medio ambiente, o una verdadera reforma agraria, que han de ser concretados para así poder avanzar en su ejercicio en toda su extensión y profundidad.

Bibliografía

- Albó, Xavier
2002 "Bolivia: From Indian and Campesino Leaders to Councillors and Parliamentary Deputies". En Rachel Sieder (editor). *Multiculturalism in Latin America. Indigenous Rights, Diversity and Democracy*. New York: Palgrave Macmillan, pp. 74-102.
- Báez, Sara y Víctor Bretón Solo de Zaldívar
2006 "El enigma del voto étnico o las tribulaciones del movimiento indígena: reflexiones sobre los resultados de la primera vuelta electoral (2006) en las provincias de la Sierra". En *Ecuador Debate*. No. 69. Quito: Centro Andino de Acción Popular – CAAP, pp. 19-36.
- Becker, Marc
2012 "Building a Plurinational Ecuador: Complications and Contradictions". En *Socialism and Democracy*. Volumen 26, No. 3. Routledge, pp. 72-92.
- Beck, Scott H. y Kenneth J. Mijeski
2006 "The Indigenous Vote in Ecuador's 2002 Presidential Election". En *Latin American and Caribbean Ethnic Studies*. Volumen 1, No. 2. Routledge, pp. 165-184.
- Busso, Matías; Cicowicz, Martín y Leonardo Gasparini
2005 *Ethnicity and the Millennium Development Goals*. Bogotá: CEPAL/BID/PNUD - /Banco Mundial.
- Cabrero, Ferran
2013 "Ejercer derechos, refundar el Estado. Cómo los indígenas amplían la ciudadanía". En Ferran Cabrero (coordinador). *Ciudadanía intercultural. Aportes desde la participación política de los pueblos indígenas de Latinoamérica*, Nueva York: PNUD, pp. 11-101.
- CNE
2012 *Candidatos y candidatas. Elecciones 2013*. Quito: CNE.
- Constitución de la República del Ecuador*
2008 Quito: Asamblea Nacional.
- "Cuatro partidos van a la caza del voto indígena"
2012 (*El Comercio*, 6 de noviembre).
- "Fundamedios contabiliza 36 incidentes electorales durante la campaña". Visita el 16 de mayo de 2013 en: <http://www.fundamedios.org.ec/defensa-y-promocion/articulos-fundamedios-contabiliza-36-incidentes-electorales-durante-la-campana>
- García, Fernando
s.f. "Balance de la participación electoral indígena en Ecuador: 1996-2009". Visita el 20 de junio de 2013 en: <http://www.flacsoandes.org/antropologia1/images/investigaciones/balanceelectoralindigena.pdf>
- Hall, Gillette y Harry Anthony Patrinos
2006 *Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo en América Latina 1994-2004*. Bogotá: Banco Mundial.
- Ibarra, Hernán
1996 "Las elecciones de 1996 o la costeñiza -ción de la política ecuatoriana". En *Ecuador Debate*. No. 38. Quito: Centro Andino de Acción Popular – CAAP, pp. 23-31.
- ICCI ARY-RIMAY
2005 "Los dilemas de la CONAIE". En *Boletín ICICI ARY-RIMAY*. Año 7, No. 70. Visita el 20 de junio en: <http://icci.nativeweb.org-/boletin/70/editorial.html>
- INEC
2010 *Censo de Población y Vivienda*. Quito: INEC.
- Martí i Puig, Salvador
2008 "Las razones de presencia y éxito de los partidos étnicos en América Latina. Los casos de Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú (1990-2005)". En *Revista Mexicana de Sociología*. No. 4, pp. 675-724.
- ONU
2009 *Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estado de situación 2008*. Quito: ONU.
- Ospina, Pablo
2009 "Nos vino un huracán político: la crisis de la CONAIE". En Pablo Ospina, Olaf Kaltmeier y Christian Büschges (editores). *Los Andes en movimiento. Identidad y poder en el nuevo paisaje político*. Quito: CEN / UASB / Universitat Bielefeld, pp. 123-146.

Ponce, Juan y Acosta, Alberto

"La pobreza en la "revolución ciudadana" o ¿pobreza de revolución?". En *Ecuador Debate*, No. 81. Quito: Centro Andino de Acción Popular CAAP, pp. 7-19.

Ramírez, Franklin

2009 "El movimiento indígena y la reconstrucción de la izquierda en Ecuador: el caso del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (PK)". En Pablo Ospina, Olaf Kaltmeier, y Christian Buschges (editores). *Los Andes en movimiento. Identidad y poder en el nuevo paisaje político*. Quito: CEN/UASB / Universitat Bielefeld, pp. 65-94.

"Reporte final de participación de candidatos presidenciales en espacios informativos en me-

dios de comunicación durante la campaña electoral 2013 (del 04 de enero al 14 de febrero de 2013)". Visita el 16 de mayo de 2013 en: <http://www.participacionciudadana.org>

Sánchez-Parga, José

2010 *El movimiento indígena ecuatoriano. La larga ruta de la comunidad al partido*. Quito: Abya Yala.

Van Cott, Donna Lee

2005 *From Movements to Parties in Latin America. The Evolution of Ethnic Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Zamora, Paúl

2013 "La Ecuarunari preocupada por próximos comicios seccionales", en *El Comercio*, Domingo 28 de abril.

La indiferencia ante los derechos humanos y la educación moderna en un régimen populista. La ideología de la descolonización en Bolivia

H. C. F. Mansilla

La ideología de la descolonización es sostenida por el gobierno boliviano como parte de planteamientos de origen indianista e indigenista. El argumento de la descolonización sostiene que la sociedad indígena precolonial fue igualitaria y solidaria. Por otra parte, ha desarrollado una visión negativa de la modernidad. Un aspecto principal de la sociedad boliviana ha sido la tradición autoritaria que es ignorada por indianistas e indigenistas.

1. El contexto actual y sus paradojas

La instauración de un régimen populista en Bolivia (a partir de enero de 2006) ha fomentado, entre otras consecuencias, el florecimiento de una amplia gama de ideologías indigenistas e indianistas¹, que se han fusionado con fragmentos de teorías revolucionarias y nacionalistas. Uno de los frutos de esta constelación es la doctrina de la *descolonización*, que con muchas variantes ocupa ahora un considerable espacio en la vida política y académica del país.² Al mismo

tiempo es imprescindible, sin embargo, relativizar esta aseveración, pues el modelo populista boliviano se ha destacado de manera particular por una incongruencia notable entre sus productos programáticos, ideológicos y propagandísticos, por un lado, y la robusta continuidad de rutinas y convenciones en la vida social, por otro. La existencia cotidiana de la inmensa mayoría de la población no se ha visto afectada por los esfuerzos estatales en favor de una descolonización política y cultural, y más bien prosigue lozana dentro de la tendencia de antigua data que imita la mo-

1 Entre la literatura reciente que rechaza el indigenismo y enaltece el indianismo cf. Ayar Quispe, *India nismo*, La Paz: Awqa / Pachakutik 2011.

2 Cf. [sin compilador], *Ha llegado la hora de descolonizar el Estado desde el mismo Estado... Memoria política del Viceministerio de Descolonización 2010-2011*, La Paz: Ministerio de Culturas / Viceministerio de Descolonización / Fundación Friedrich Ebert 2011; [sin compilador], *Visiones del desconocimiento entre bolivianos*, La Paz: Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria 2009; Fernando Untoja Choque, *El katarismo, indianismo e indigenismo. Movimiento Ayra*, en: *Kas-investigaciones. Análisis y reflexión política* (La Paz), Vol. 2012, Nº 1, agosto de 2012, pp. 69-115 (número monográfico dedicado al tema: "Reflexiones sobre la temática indígena en la Bolivia de hoy").

derna civilización occidental en los campos de la economía, el consumo y la técnica.³

En realidad el análisis crítico de la corriente descolonizadora nos hace ver algunos aspectos en los campos educativo, universitario y político que esta misma doctrina deja premeditadamente de lado. En el fondo se trata de pautas de comportamiento que se arrastran desde hace siglos.⁴ Algunos ejemplos: se puede observar que desde 2006 las universidades públicas persisten en sus prácticas de politización intensa pero superficial, las que encubren de este modo su esterilidad intelectual y su baja calidad en la formación de profesionales. Así como la propaganda en favor de la Madre Tierra coexiste con la expansión de la frontera agrícola y la destrucción acelerada de los bosques tropicales, del mismo modo la presunta revalorización de lo propio y auténtico no afecta la implantación del consumismo capitalista. El gobierno populista promueve una “venta de sueños” y una “prédica del consuelo”⁵, que dejan incólume las tradiciones autoritarias y antipluralistas compartidas todavía por una gran parte de la población. La propaganda oficial

difunde una imagen del primer mandatario como la conciencia moral de la humanidad, pero al mismo tiempo se han desatado una tendencia proclive a la vulneración de derechos humanos y una ola imparable de corrupción en el aparato estatal. En este sentido el régimen populista prolonga las herencias culturales menos recomendables que prevalecen en el país, tal como lo han hecho los gobiernos autoritarios bolivianos, que han sido la mayoría en la historia de la nación.

Por otra parte, la corriente descolonizadora nos muestra – paradójicamente – la *indiferencia*⁶ que el gobierno populista, el propio Viceministerio de Descolonización y los movimientos sociales partidarios del actual régimen exhiben ante algunos logros de la modernidad, como los derechos humanos, el libre acceso a la información, la formación de una consciencia autónoma y la educación basada en principios racionales. En el presente texto estos fenómenos han sido incluidos bajo el término *modernidad* porque recibieron su primera fundamentación y experimentaron una difusión paradigmática a fines del siglo XVIII, cuando se inició un proceso

3 Sobre estos fenómenos de continuidad cf. dos opiniones divergentes: Fernando Molina, *El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales*, La Paz: Fundación Pazos Kanki 2011; J. Fernando Galindo, *La diversidad cultural en Bolivia: del interculturalismo liberal a la modernidad indígena*, en: *Estudios Políticos* (Cochabamba), vol. III, Nº 4, julio de 2012, pp. 7-26.

4 En el terreno sociopolítico de los valores de orientación cf. Daniel E. Moreno Morales (comp.), *Cultura política de la democracia en Bolivia, 2012: hacia la igualdad de oportunidades*, Cochabamba: Ciudadanía / LAPOP 2012.

5 Franco Gamboa Rocabado, *Teorías de la democracia en pugna: una evaluación crítica del sistema político en Bolivia*, en: *Kas-contribuciones. Revista cuatrimestral de análisis y reflexión política* (La Paz), Vol. I, Nº 1, septiembre de 2011, pp. 13-168, aquí p. 39, 43.

6 En este sentido es muy ilustrativo el volumen: Maristella Svampa / Pablo Stefanoni / Bruno Fornillo (comps.), *Balance y perspectivas. Intelectuales en el primer gobierno de Evo Morales*, La Paz: Fundación Friedrich Ebert / Le Monde Diplomatique 2010.

sistemático de modernización bajo la Revolución Francesa. Paralelamente – y para simplificar el vocabulario – lo *pre-moderno* alude aquí a actitudes autoritarias, prerracionales, convencional-conservadoras y tradicionalistas, las cuales persisten en Bolivia simultáneamente con la adopción de normativas occidentales modernas en la esfera económica y en los campos técnicos. Para una porción considerable de la población boliviana lo positivo sigue aun encarnado en la homogeneidad social y la unanimidad política, y lo negativo en la diversidad de intereses, la división de poderes, la competencia abierta de todo tipo y el pluralismo ideológico. El gobierno populista no ha modificado esta constelación. No coarta (todavía) de modo sistemático las libertades públicas ni la educación racional, pero fomenta las herencias civilizatorias contrapuestas a la modernidad política y cultural e impulsa una ideología de la descolonización que, en medio de una nebulosa conceptual, está contrapuesta al pensamiento liberal-democrático.⁷

Los enfoques teóricos de la descolonización y la praxis del gobierno populista boliviano refuerzan un legado cultural propicio al caudillismo: en tiempos de “cambio” el líder providencial aparece como la solución adecuada, por ser fácilmente comprensible para los secto-

res con niveles educativos menores. Como asevera *Fernando Molina*, el caudillo está por encima de la laboriosa construcción de consensos, del debate pluralista y de las minucias de la vida institucional. La sociedad convencional confía más en el líder providencial que en el trabajo continuado y complejo de las instituciones.⁸ Lo problemático reside en el hecho de que el caudillo, el iluminado, el señalado por la historia, no conoce limitaciones a su actuación y perpetúa las rutinas de arbitrariedad e imprevisibilidad en la esfera pública. Aunque la retórica puede adquirir aspectos progresistas y un tinte socialista de acuerdo a las necesidades de la época, en la realidad cotidiana los regímenes populistas retornan a lo más habitual de la tradición latinoamericana, y esto es lo que los teóricos de la descolonización pasan generosamente por alto. Los caudillos desatienden el Estado de derecho, dificultan el control racional y público de las actuaciones gubernamentales y entorpecen el debate abierto y pluralista de opciones políticas. Al mismo tiempo patrocinan el surgimiento de una élite dirigente convencional y poco razonable: el reino de los más fuertes y más astutos. La consecuencia ineludible es la constitución de un estrato elitario que, en el fondo, preserva el extendido ámbito de la inmovilidad, la intransparencia y

7 Cf. entre otros: Rafael Loayza Bueno, *Halajtayata. Racismo y etnicidad en Bolivia*, La Paz: Fundación Konrad Adenauer 2010.- Para un enfoque que combina la nebulosa conceptual, el esoterismo y la temática de la descolonización cf. Javier Medina, *Cosmovisión occidental y caos-cosmo-con-vivencia indígena*, en: [sin compilador], *Visiones del des-conocimiento...*, op. cit. (nota 2), pp. 71-216.

8 Fernando Molina, *La institución de la personalidad*, en: *Pulso* (La Paz) del 19 de diciembre de 2009, Vol. 10, Nº 532, p. 5; Fernando Molina, *Sin orden no hay justicia*, en: *Página Siete* (La Paz) del 11 de mayo de 2012, p. 17.

la arbitrariedad. Bajo el manto de la reforma radical se reproducen así las convenciones más enraizadas y difundidas del orden social anterior.

2. Breve recapitulación de los legados autoritarios

El analizar los orígenes históricos de la relativa indiferencia actual ante los derechos humanos es una tarea incómoda. No digo esto por coquetería literaria. El examinar los elementos de la identidad nacional que pueden ser calificados como deplorables – o, por lo menos, como ambivalentes – es casi siempre una labor irritante y embarazosa que no gusta a amplios sectores de cualquier sociedad. Las raíces de todo modelo civilizatorio están envueltas en complejas capas de materiales desagradables y hasta sordidos que normalmente no son expuestos a la luz pública.

Lo más adecuado es empezar por las conclusiones. La defensa de la libertad de expresión y la educación racional *no* es una preocupación importante para la mayoría de la población boliviana o una prioridad *seria* para los grupos sociales mejor organizados. En todos los partidos políticos y en las representaciones de los intereses colectivos prevalece, por supuesto, la inclinación a poner muy en alto los derechos humanos, especialmente la libertad de prensa, pero esta actividad tiene, en el fondo, el carácter de una retórica estridente, pero inofensiva. El prestigio mundial de los derechos humanos, los convenios internacionales suscritos en esta materia y los cálculos de la astucia práctica aconsejan proceder con sumo cuidado y discreción. Nadie en el gobierno populista

está abiertamente en contra de los derechos humanos, pero su vigencia en la vida cotidiana está sujeta a curiosas restricciones. O dicho en forma más clara: los derechos humanos son respetados si no perjudican los intereses particulares de partidos o movimientos influyentes.

La libertad de expresión, el derecho a la información, la educación racional-moderna y la formación de una conciencia autónoma *no* configuran una inquietud existencial para una porción mayoritaria de la sociedad boliviana a causa de la pervivencia de legados culturales autoritarios, como (a) los provenientes de las civilizaciones precolombinas, por un lado, y (b) de la era colonial española, por otro. A esto hay que añadir (c) la recepción meramente instrumental y tecnicista de la modernidad.

(a) No hay duda de los notables logros del Imperio Incaico (y de las culturas que lo antecedieron) en muchos terrenos de la actividad humana, logros que se extendían desde la arquitectura y la infraestructura de comunicaciones hasta prácticas de solidaridad inmediata y un sentimiento estable de seguridad, certidumbre e identidad, lo cual no es poco, ciertamente. La dignidad superior atribuida a lo supra-individual fomentó valores de orientación y modelos organizativos de índole colectivista. Los padrones ejemplares de comportamiento social eran la predisposición a la abnegación y el sacrificio, la confianza en las autoridades y el sometimiento de los individuos bajo los requerimientos del Estado. Esto condujo a una actitud básica que percibía en la tuición gubernamental algo natural y bienvenido y que consideraba todo cambio socio-cultural como algo sospechoso.

Las civilizaciones precolombinas no conocieron ningún sistema para diluir el centralismo político, para atenuar gobiernos despóticos o para representar en forma permanente e institucionalizada los intereses de los diversos grupos sociales y de las minorías étnicas. La homogeneidad era su principio rector, como puede detectarse parcialmente aun hoy en amplios sectores de la población andina. Esta constelación histórico-cultural no ha fomentado el surgimiento de pautas normativas de comportamiento y de instituciones estatales que resultasen a la larga favorables al individuo como persona autónoma, a los derechos humanos como los concebimos hoy en día y a una pluralidad de intereses y opiniones que compitieran entre sí. No ha podido florecer, por consiguiente, una mentalidad que valorase positivamente el acceso libre a informaciones de todo tipo.

Las comunidades indígenas del presente conservan a menudo rasgos autoritarios en la estructuración social, en la mentalidad público-política y también en la vida cotidiana y familiar. Estos fenómenos no concitan el interés de los círculos académicos e intelectuales, la mayoría de los cuales fomenta una autovisión de los aborígenes basada en un panorama idealizado y hasta falso del

pasado y del presente. No sólo en el campo universitario, sino en lo que podemos llamar la cultura popular se ha conformado una amplia convicción acerca del núcleo identificatorio del propio pasado histórico, que tiene las siguientes características. Se supone que las grandes tradiciones solidarias del pasado precolonial están aun vigentes en las comunidades campesinas y en la vida rural; asimismo se cree que las culturas precolombinas habrían sido profundamente democráticas y no habrían conocido relaciones de explotación y subordinación.⁹ Un ex-Ministro de Educación del gobierno populista afirma que “hay que excluir el concepto de dominación y explotación; está ausente en todas las sociedades indígenas, no hay”.¹⁰ El “equilibrio basado en la reciprocidad y complementariedad” no permite procesos de explotación, “tanto hacia la naturaleza o hacia el propio ser humano”.¹¹ Paralelamente está muy extendida la convicción de que el machismo en el mundo campesino-indígena y la posición subordinada de la mujer son resultados exclusivos de la era colonial española.¹²

Es comprensible que en el ámbito andino se haya conformado un memorial de agravios contra la larga soberanía española; las doctrinas de la descoloni-

9 El testimonio más conocido e ilustre de esta corriente: Guillermo Bonfil Batalla, *Aculturación e indigenismo: la respuesta india*, en: José Alcina Franch (comp.), *Indianismo e indigenismo en América*, Madrid: Alianza 1990, pp. 189-209, aquí p. 194, 197, 199; Guillermo Bonfil Batalla (comp.), *Utopía y revolución. El pensamiento político contemporáneo de los indios en América Latina*, México: Nueva Imagen 1981.

10 Félix Patzi Paco, *Sistema comunal y lógica del capital*, en: Maristella Svampa / Pablo Stefanoni / Bruno Fornillo (comps.), op. cit. (nota 6), pp. 147-166, aquí p. 154.

11 *Ibid.*, p. 154.

12 *Ha llegado la hora...*, op. cit. (nota 2), p. 59.

zación constituyen un mecanismo para expresar y mitigar el dolor de las víctimas de la era colonial.¹³ Pero los resultados prácticos de estos esfuerzos son ambivalentes y muchas veces se entremezclan con anhelos de dominación de nuevas élites que hablan en nombre de las víctimas. Se ha generado, en todo caso, la necesidad de un mecanismo de compensación¹⁴, que se halla habitualmente en manos de intelectuales que poseen también ansias de poder. La compensación se manifiesta en el impulso de restaurar la propia dignidad, considerada como vulnerada por la historia de los últimos siglos. No hay duda de que el llamado “colonialismo interno”¹⁵ ha motivado un descenso de la auto-estima en muchas áreas culturales y geográficas de América Latina. Éste ha originado, a su vez, un anhelo de indemnización, la “sed de alivio de las duras cargas derivadas de su lugar social secundario, despreciado”¹⁶, que muchos latinoamericanos creen percibir también en el horizonte globalizado del presente.

(b) Por su parte, la época colonial española imprimió un carácter paternalista, dogmático e iliberal a las sociedades del Nuevo Mundo, del cual los países andinos no se han exonerado totalmente. El resultado puede ser calificado como una dilatada cultura política del autoritarismo y también como la consolidación de normas a menudo anacrónicas e irracionales. Para algunos ideólogos de la descolonización, la estructura y los valores normativos del Estado boliviano actual siguen inmersos en una cultura “colonial, colonizante y colonizada”.¹⁷

La era colonial fue responsable parcialmente por la esterilidad de las actividades universitarias y académicas, por la propagación de una religiosidad santurrón y superficial y por la falta de elementos innovadores en el terreno de la organización social. La Iglesia católica respetó de modo irreprochable el *modus vivendi* con la Corona española; toleró sabiamente rituales y creencias sincretistas; sus tribunales inquisitoriales procedieron, en contra de lo que ocurría en España, con una tibieza enco-

-
- 13 Sobre el lema: “La descolonización como necesidad de transformar el país”, cf. Félix Patzi Paco, *La forma liberal y [la] comunitaria como posiciones ideológicas y políticas contemporáneas*, en: [sin compilador], *Visiones del desconocimiento entre bolivianos*, op. cit. (nota 2), pp. 35-68, aquí p. 38.
 - 14 Sobre la descolonización como “deconstrucción de la herencia colonial” cf. Yuri F. Tórez, *La descolonización en tiempos de construcción estatal*, en: *Ha llegado la hora...*, op. cit. (nota 2), pp. 16-40, especialmente p. 39.
 - 15 La concepción proviene de Pablo González Casanova, *Sociología de la explotación*, México: Siglo XXI 1969, pp. 221-250, 260-263; cf. también Verónica Lucía Cáceres, *Subdesarrollo y colonialidad en América Latina. ¿Un debate olvidado?*, en: *Kairós. Revista de Temas Sociales* (San Luis), Vol. 16, Nº 30, noviembre de 2012, pp. 1-27; Carmen Soliz, *El otro rostro de América Latina*, en: *Nueva Sociedad* (Buenos Aires), Nº 238, marzo-abril de 2012, pp. 126-137.
 - 16 Gonzalo Mendieta Romero, *Extractos de un informe apócrifo de una burócrata internacional*, en: *Página Siete* (La Paz) del 24 de marzo de 2012, p. 17.- Cf. un testimonio temprano: Aníbal Quijano, *Modernidad, identidad y utopía en América Latina*, Lima: Ediciones Sociedad y Política 1988.
 - 17 Félix Cárdenas [Viceministro de Descolonización], *La esencia del Estado es colonial*, en: *Ha llegado la hora...*, op. cit. (nota 2), pp. 75-79, aquí p. 76.

miable. Pero esta Iglesia no produjo ningún movimiento cismático; le faltaron la experiencia del disenso interno y la enriquecedora controversia teórica en torno a las últimas certidumbres de la fe. (Me detengo en esta somera explicitación de la religiosidad popular como factor formativo de la cultura política, porque durante siglos la religión y fenómenos similares han representado la manifestación cultural más importante de la era colonial española y aun hoy conforman la memoria de larga duración y la base del imaginario popular de las sociedades andinas).¹⁸

Algunos males del presente (por ejemplo el mal funcionamiento del organismo judicial y su instrumentalización por el Poder Ejecutivo) tienen que ver con aquella tradición socio-histórica. La época colonial conllevó en la región andina una acentuada propensión al centralismo, una clara inclinación al estatismo y al burocratismo y una marcada subestimación de las labores intelectuales y creativas. En el ámbito universitario de esa época no existía la inclinación a cuestionar las certidumbres dogmáticas y los conocimientos considerados como verdaderos. Predominaba en cambio una enseñanza de naturaleza receptiva, basada en la memorización de textos y en la adquisición de destrezas retóricas. Y muy pocos protestaron durante la era colonial a causa del funcionamiento corrupto e ineficiente del sistema de tribunales. Algunos fenómenos de la actuali-

dad boliviana pueden ser descritos en los mismos términos.

(c) Bolivia ha conocido una recepción instrumental de la modernidad occidental. Desde las últimas décadas del siglo XIX se ha dado una proliferación de espacios sometidos a la racionalidad de los medios, como se manifiesta de modo patente en la acogida favorable que le ha sido deparada a la tecnología en todas sus manifestaciones. Los avances técnicos son percibidos como hechos de validez universal, dignos de ser incorporados inmediatamente a las actividades productivas, distributivas y organizativas. Esta concepción está complementada por un manifiesto desdén hacia los aspectos culturales y políticos de la modernidad. Nacionalistas, izquierdistas e indigenistas propician la adopción – a veces candorosa – de novedades tecnológicas, pero se oponen, a menudo de manera vehemente, a lo que ellos suponen que son los aspectos superfluos o perniciosos de la modernidad, como el espíritu crítico-científico, el genuino individualismo, los derechos humanos de origen liberal-democrático, el pluralismo ideológico y por ende la educación racional. De forma tácita la sociedad boliviana, incluyendo el estamento universitario, produce una separación entre los resultados utilizables de la tecnología y el contexto cultural-científico que hace posible las innovaciones técnicas.

18 De ahí proviene seguramente el renovado interés de intelectuales progresistas por la temática religiosa y el redescubrimiento de lo positivo en el accionar cotidiano de la Iglesia Católica durante la época colonial. Cf. por ejemplo: Bolívar Echeverría, *La modernidad de lo barroco*, México: Era 1998.

3. La ubicuidad de la tecnofilia y la falta de curiosidad

Toda esta constelación de fondo sirve para fundamentar la tesis siguiente. A causa de las herencias civilizatorias mencionadas, que se hallan todavía con buena salud, la mayoría de la población boliviana no puede percibir como propia la tradición cultural de los derechos humanos ni puede apasionarse en la defensa de valores que provienen del legado occidental. La relativa indiferencia con respecto a la libertad de prensa y la educación moderna puede coexistir con una clara *tecnofilia* en otros terrenos.

Esta problemática de la desidia frente a los derechos humanos y a la educación moderna se manifiesta en el funcionamiento fáctico de las universidades bolivianas, aunque las declaraciones retóricas de sus autoridades vayan en otro sentido. El ámbito universitario no es, evidentemente, una abreviatura simbólica de toda la sociedad, pero el análisis del mismo nos permite sacar algunas conclusiones provisionales acerca de la mentalidad colectiva de la nación. La representación corporativa de estas instituciones, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), encargó un extenso estudio llevado a cabo bajo la dirección de un conocido sociólogo español, *Emilio Lamo de Espinosa*, que fue publicado (1998) por el Convenio Andrés Bello con el título *La reforma de la universidad pública boliviana*.¹⁹ Uno de los motivos principales para emprender

este análisis era la notable desproporción entre la magnitud del número de estudiantes y profesores, por un lado, y la escasa participación de docentes y alumnos en labores de investigación, en publicaciones científicas internacionales y en el registro de patentes, por otro. Como agravante se debe mencionar el hecho de que las universidades estatales no sufrían entonces ni sufren ahora por falta de recursos financieros.

Siempre se pueden constatar excepciones, por supuesto, pero en general el sistema universitario boliviano no hace honor a dos elementos centrales que deberían caracterizar a esta institución: la universalidad del conocimiento y la investigación científica. Y para ello hacen falta dos factores muy conectados con la libertad de expresión, el derecho a la información y la educación racional: (1) el propósito de cuestionar las verdades del momento y (2) el anhelo de comprender el mundo más allá del entorno inmediato. El estudio mencionado detectó que la población universitaria mostraba muy poco interés por poner en duda las modas ideológicas que predominaban en aquel entonces y que sentía escasa curiosidad por aprender algo de otros espacios civilizatorios. Los estudiantes preferían dogmas sencillos que confirmasen sus propios prejuicios; lo desconocido no poseía ningún atractivo intelectual.

Por ello afirmo que frente a este contexto la libertad de expresión no posee un valor relevante; tiene un sentido

19 Emilio Lamo de Espinosa (comp.), *La reforma de la universidad pública boliviana* (con la colaboración de Enrique Ibáñez Rojo y J. A. Fernández), Bogotá: Convenio Andrés Bello / Instituto Universitario Ortega y Gasset 1998.

profundo si uno dice cosas que no corresponden necesariamente a la opinión común y mayoritaria del tiempo. La mejor justificación de la libertad de prensa reside precisamente en expresar concepciones *incómodas* con respecto al gobierno de turno y *críticas* frente a la cultura generalizada del país. Reiterar los prejuicios colectivos y amparar las consignas oficiales, por más fundamentadas que éstas sean, no constituye una actitud que enriquezca el saber intelectual y el conocimiento científico. A su vez el derecho a la información – es decir: el derecho a saber lo que todavía no se sabe – tiene sentido si una sociedad atribuye un valor positivo al examen de lo extraño y desconocido. No sólo engloba el aprender algo acerca de tierras exóticas, sino ante todo exponernos a teorías que pueden significar una crítica de nuestras convicciones más profundas. Esta actitud es la que nos permite comprender los límites y las carencias de lo que apreciamos entrañablemente.

La hiperpolitización de las universidades bolivianas a partir de 1952 no significa que los estudiantes comprendan mejor la esfera de los intereses públicos. Es un fenómeno recurrente en toda América Latina que encubre “una tupida red de intereses” particulares, como dice Lamo de Espinosa, manejada por funcionarios “celosos de su parcela de poder”.²⁰ Esta aseveración vale para los docentes y empleados administrativos de universidades públicas y privadas, independientemente de su ideología política. La radicalidad del discurso,

a menudo izquierdista o indigenista, oculta el control corporativo de la burocracia enquistada en estas instituciones sobre contenidos, programas, cursos, organización interna, uso de fondos y designación de docentes. Todo esto no fomenta la universalidad del saber ni promueve una auténtica investigación científica.

El estudio mencionado indica que los estudiantes abrazan por comodidad las modas ideológicas del momento, sin pensar mucho en su pertinencia histórica y su calidad conceptual. En esto hay notables paralelismos con el resto de la sociedad. Así como el marxismo ortodoxo simplificado constituía el dogma insuperable en décadas pasadas, el pensamiento postmodernista y relativista, complementado por aspectos indigenistas e indianistas, representa hoy el horizonte teórico obligatorio.

Aquí parece conveniente intercalar una experiencia propia. Desde la restauración de la democracia en 1982 he participado en innumerables foros, debates, mesas redondas y formas similares de discusión en el seno de los estratos universitarios y académicos en Bolivia y en muchos cursos de las facultades de ciencias políticas, sociales e históricas. Para provocar al público asistente, pero con el debido cuidado, he mencionado con frecuencia asuntos tangenciales (en estos contextos), por ejemplo en los últimos tiempos: la Primavera Árabe, el informe Lamo de Espinosa sobre las universidades, las tendencias de la investigación en el ámbito europeo, el al-

20 Emilio Lamo de Espinosa, *Proceso a las ideas*, en: <http://www2.uca.es/HEURESIS> [consultado el 7 de diciembre de 2012].

cance de la tecnofilia y las causas del apoyo del gobierno boliviano a los regímenes de Libia y Siria. Docentes y estudiantes suelen escucharme cortésmente, pero jamás han preguntado algo sobre estas cuestiones (o parecidas) y nunca han iniciado una pequeña controversia en torno a estos temas. Ellos retornan inmediatamente a los problemas del día, a la coyuntura política del momento y a las teorías que les brindan seguridad doctrinaria, como las difundidas por Eduardo Galeano. Profesores y alumnos parecen ser indiferentes al decurso del ancho mundo.

Por ello me acordé de un breve y brillante artículo de *Miguel de Unamuno* sobre la imaginación en Cochabamba, en el que este pensador impugna la extendida opinión que atribuye una considerable fantasía, un “desborde imaginativo, fecundo en ilusiones”, a los habitantes de aquella ciudad, incluyendo en su refutación a los bolivianos, a los hispanoamericanos en general y a los españoles. Unamuno asevera que hay que diferenciar entre la retórica ampulosa y la reiteración de certidumbres tranquilizantes – firmemente arraigadas –, por un lado, y la genuina imaginación creativa, por otro.²¹ Unamuno va más allá y afirma que los pueblos del Nuevo Mundo y de la España premoderna no exhiben habitualmente una fantasía inteligente, sino un apego ruti-

nario a unos cuantos principios invariables que brindan seguridad. Son dogmáticos, sentencia Unamuno, a causa de la pobreza imaginativa, y no por tener una auténtica fantasía soñadora. Y esta inclinación, dice Unamuno, está estrechamente vinculada a la picardía cotidiana, a la malicia sistemática, que, disimulada por la oratoria frondosa y celebratoria, refuerza los prejuicios de vieja data y sosiega al espíritu convencional.²² Hasta hoy en Bolivia la astucia es considerada como una forma superior y hasta sublime de la inteligencia, y no sólo en el imaginario popular.

La actitud reseñada aquí favorece una integración fácil al modo de vida prevaleciente (incluyendo el uso masivo de computadoras, teléfonos celulares y cuanto cachivache técnico aparece en el mercado) y rechaza al disidente, al que piensa y obra de modo autónomo, al que se desvía del grupo y, por consiguiente, al que exhibe espíritu crítico. Estos valores conformistas de orientación están muy difundidos en todas las clases sociales, las regiones geográficas y las comunidades étnicas del país. Y por ello se puede aseverar que la indiferencia frente a la libertad de prensa y al derecho a la información conforma hoy una predisposición social muy expandida, que precisamente a causa de ello pasa desapercibida y resulta difícil de ser modificada.

21 Miguel de Unamuno, *La imaginación en Cochabamba* [1910], en: Mariano Baptista Gumucio (comp.), *Cochabamba. Vista por viajeros y autores nacionales, siglos XVI al XXI*, Cochabamba: Kipus 2012, pp. 92-95, especialmente pp. 92-93.

22 *Ibid.*, p. 95.

4. Las insuficiencias de las doctrinas de la descolonización

Aquí es conveniente referirse a un texto de *Adolfo Gilly*, quien capta lo esencial de las doctrinas descolonizadoras y logra reconstruir el sentimiento generalizado de la población indígena de los Andes que no ha sido favorecida por el desarrollo de las últimas décadas.²³ Este autor describe el conflicto entre el anhelo por la dignidad y el reconocimiento, que ciertamente prevalece todavía en el seno de las comunidades indígenas bolivianas, y las dificultades de su satisfacción en un medio que se moderniza aceleradamente, es decir que evoluciona según los parámetros de los *Otros*, de la civilización occidental.

Al mismo tiempo Adolfo Gilly nos muestra la poderosa creencia – ahora ampliamente difundida mediante la labor de los intelectuales indianistas e indigenistas – acerca de las *esencias colectivas*, inmutables al paso del tiempo, que determinan lo más íntimo y valioso de las comunidades indígenas, esencias que no son explicitadas racionalmente, sino evocadas con mucho sentimiento, como si ello bastara para intuir las correctamente y fijarlas en la memoria colectiva de la población andina. Estas esencias se manifiestan en los elementos de sociabilidad, folklore y misticismo (la música, la comida, la estructura familiar, los vínculos con el paisaje, los mitos acerca de los nexos entre el Hombre y el universo), que conforman, según Gilly y muchos

autores actuales, el núcleo de la identidad colectiva andina y de su dignidad ontológica superior. Se trata de una evocación que hace renacer un tiempo y un mundo, y para ello hay que tener una empatía elemental *a priori* con ese universo, que no puede ser comprendido mediante un análisis racional *a posteriori*. Para entenderlo hay que tomar partido por él, por sus habitantes, sus anhelos y sus penas. Únicamente los revolucionarios, mediante su ética de la solidaridad y fraternidad inmediatas, pueden adentrarse en esa mentalidad popular.²⁴ Este principio doctrinario conlleva, empero, el peligro de que comprender abarque también las funciones de perdonar y justificar.

Adolfo Gilly ha incursionado en uno de los grandes temas de las ciencias sociales latinoamericanas. Los indígenas constituyen un dilatado sector de la población, y son las víctimas del odio y la violencia de los mestizos y blancos, pero asimismo han sido humillados – o se sienten así – en los últimos siglos por ser los perdedores de una evolución histórica, la que, como es sabido, se basa ahora en la ciencia y la tecnología occidentales. Los indígenas en Bolivia quieren ser reconocidos en igualdad de condiciones y dignidad por los otros, los modernizados, pero estos últimos, apoyados anteriormente en el poder político y hoy en día en los avances científicos y técnicos de la modernidad, están inmersos en valores normativos y en preocupaciones sociopolíticas que los hacen

23 Adolfo Gilly, *José María Arguedas, Mario Vargas Llosa y el Papacha Oblitas*, en: *Nueva Sociedad*, N° 238, marzo-abril de 2012, pp. 60-75.

24 *Ibid.*, pp. 70-73.

relativamente indiferentes a los grandes temas indígenas.

El meollo del asunto es complejo a causa de un elemento adicional: a las culturas indígenas del ámbito andino les falta en general la capacidad de autocrítica, el impulso de cuestionar su propia historia, sus tradiciones y su mentalidad. Se percibe aquí la resistencia a todo proceso de desilusionamiento – la base del genuino aprendizaje –, el rechazo a un propósito de desencantamiento con respecto a lo propio, la oposición a considerar otros puntos de vista que no sean los prevaecientes, es decir: los convencionales y rutinarios, los que cuentan con el afecto y hasta con el amor de la población. Los ideólogos de la descolonización, por ejemplo, no están dispuestos a ver los aspectos problemáticos en los sistemas civilizatorios que desplegaron los indígenas en el Nuevo Mundo y que perviven en las comunidades campesinas de la región andina, sistemas que no han generado los derechos humanos, la modernidad y sus evidentes ventajas en la vida cotidiana. En cambio estos ideólogos promueven la concepción de que las formas ancestrales comunitarias de organización y la llamada ahora democracia directa representarían formas superiores de vida social.²⁵

Y entonces, como ya se mencionó, esta corriente de pensamiento recurre a

una visión simplificada del desarrollo histórico: los indígenas harían bien al iniciar un odio profundo a los representantes del colonialismo interno, a los terratenientes, al Estado manejado por los blancos y mestizos, a los extranjeros, pues ese odio, dice Gilly, sería sagrado, vivificante, una manera de propia fortaleza, de auto-afirmación ante uno mismo. La voluntad de sacrificio que nace de ese odio constituiría una especie de sacrificio histórico, que se convertiría en amor al pueblo, a los pobres y marginados.²⁶ La compensación por la dignidad perdida se revela, empero, como la consecución de actos simbólicos y gestos casi esotéricos de muy poca relevancia práctica, aunque se puede argumentar que los ajenos a esta cultura ofendida no pueden comprender el alcance y la verdadera significación de esos actos y gestos. De todas maneras: llama la atención la desproporción entre la intensidad del sentimiento colectivo de reivindicación y compensación históricas, por un lado, y la modestia de los bienes simbólicos que crearían esa satisfacción, por otro. Adolfo Gilly concluye que el odio y la voluntad de sacrificio de los humillados “se nutren de la imagen de los antepasados oprimidos y no del ideal de los descendientes libres”.²⁷ Esta concepción propugna al fin y al cabo la restauración del orden social anterior a la llegada de los espa-

25 Cf. una amplia revisión de la literatura existente sobre la temática: Edwin Cruz Rodríguez, *Movimientos indígenas y nación en Bolivia y Ecuador: la lucha por el Estado plurinacional en perspectiva histórica*, en: *Encuentros Latinoamericanos* (Montevideo), Vol. III, N° 9, diciembre de 2009, pp. 16-54.

26 Adolfo Gilly, op. cit. (nota 23), p. 73.

27 *Ibid.*, p. 75 (siguiendo una intuición de *Walter Benjamín*). Hay que mencionar aquí que numerosos intelectuales bolivianos combinan sin problema un marxismo tercamente ortodoxo con un arcaísmo ruralista, doctrinas esotéricas y elementos folklóricos de dudoso origen.

ñoles, orden considerado como óptimo y ejemplar, pues correspondería a una primigenia Edad de Oro de la abundancia material y de la fraternidad permanente, como en numerosas utopías clásicas. Este retorno significaría *in praxi* reescribir la historia universal y negar sus resultados tangibles. Además: esta glorificación de épocas pretéritas encubre la tecnofilia contemporánea de una buena parte de la población boliviana y especialmente de sus dirigentes populistas, quienes jamás renunciarían a las comodidades derivadas de la tecnología occidental.

Estos legados culturales han contribuido a conformar una mentalidad colectiva antipluralista y antiliberal que, a su vez, fomenta el surgimiento y la pervivencia de regímenes populistas con claros resabios autoritarios. En Bolivia el régimen actual resulta ser básicamente conservador, pese a la doctrina del cambio radical, lo que explica en parte su fuerte arraigo en sectores poblacionales con bajo nivel educativo y de ingresos. Estos estratos sociales se orientan aun hoy por valores convencionales y rutinarios que vienen de muy atrás y que favorecen jerarquías rígidas y élites privilegiadas con respecto al ámbito organizativo, líderes carismáticos y autoritarios destinados a las jefaturas²⁸ y sistemas relativamente simples para la comprensión del mundo circundante.

En Bolivia la pervivencia de mentalidades premodernas sucede en medio de un proceso de modernización acelerada, pero de carácter tecnicista e instrumental. Por estos motivos el fenómeno del burocratismo, el embrollo de los trámites (muchos innecesarios, todos mal diseñados y llenos de pasos superfluos), la mala voluntad de los funcionarios en atender al público o el deplorable funcionamiento del Poder Judicial no son temas que preocupen a la mayoría de los ciudadanos bolivianos y a los grupos políticamente organizados. La gente soporta estos fenómenos más o menos estoicamente, es decir, los considera como algo natural, como una tormenta que pasará, pero que no puede ser esquivada por designio humano. Hasta hoy ningún partido izquierdista o pensador socialista, ninguna asociación de maestros, ninguna corriente indigenista o indianista había protestado contra ello. Lo paradójico del caso estriba en que los pobres y humildes de la nación conforman la inmensa mayoría de las víctimas del burocratismo, la corrupción y del mal funcionamiento de todos los poderes del Estado. Los partidos de izquierda, los populistas e indigenistas y los pensadores revolucionarios, que dicen ser los voceros de los intereses populares, jamás se han apiadado de la pérdida de tiempo, dinero y dignidad que significa casi todo roce con la buro-

28 El relativo apoyo colectivo en favor de Sendero Luminoso en Perú a partir de 1980, sobre todo en los sectores sociales con menor nivel educativo, tenía que ver probablemente con la estructura altamente jerárquica y piramidal de esta organización guerrillera y con su dirigencia elitaria y paternalista. Cf. Sebastian Chávez Wurm, *Der Leuchtende Pfad in Peru (1970-1993). Erfolgsbedingungen eines revolutionären Projekts* (Sendero Luminoso en el Perú [1970-1993]). Condiciones del éxito de un proyecto revolucionario), Colonia / Weimar: Böhlau 2011, pp. 184-193.

cracia y el aparato judicial para la gente sufrida y modesta de esta tierra.

5. La educación como estrategia

No existe una receta clara para mejorar esta situación. Desde fines del siglo XIX se ha advertido en Bolivia la falta de una *pedagogía crítica* con respecto a la propia realidad e historia, y desde entonces han surgido intentos de remodelar la sociedad mediante reformas educativas.²⁹ La estrategia relativamente más exitosa ha sido la empleada en el área escandinava y consiste en esfuerzos educativos durante largas generaciones, complementados con el desarrollo de una ética de la responsabilidad, en sentido individual y colectivo. Esto ayudaría, por ejemplo, a mitigar el dogmatismo y a desarmar el fanatismo, con lo cual ya se habrían dado pasos importantes para superar las herencias culturales autoritarias que vienen de muy atrás.

Bolivia ha experimentado tres grandes proyectos de reforma educativa: la

reforma liberal clásica (1905-1920), la nacionalista (1952-1956) y la neoliberal-tecnocrática (1993-1997).³⁰ Estos esfuerzos han sido relativamente decepcionantes, aunque es necesario matizar este juicio.³¹ La reforma liberal del primer período defendía la libertad de conciencia, la enseñanza laica, la coeducación mixta, la autonomía de los contenidos y la afición por el arte; se esperaba dotar a los docentes de un espíritu crítico y científico, contrapuesto a la memorística tradicional.³² Todo ello no fue aceptado a comienzos del siglo XX por las fuerzas conservadoras y sobre todo por la Iglesia católica. Estas mismas normativas pedagógicas son ahora rechazadas por los sectores izquierdistas, populistas e indigenistas.³³

Es cierto que las masas, en todas las sociedades, no quieren ser desilusionadas mediante el conocimiento y no pierden fácilmente su ímpetu entusiasta en pro de recetas sociopolíticas simplistas que les ofrecen una recuperación de la dignidad perdida y una vida mejor en el corto plazo y sin gran esfuerzo indivi-

29 Franco Gamboa Rocabado, "Modernización conflictiva. Reforma educativa y movimientos indígenas en Bolivia", en: *Ciencia y Cultura* (La Paz), Nº 26, junio de 2011, pp. 93-127.

30 Sobre la visión reduccionista de los pensadores izquierdistas con respecto a la reforma educativa liberal, cf. Weimar Giovanni Iño Daza, "La reforma educativa liberal (1899-1920): modernización de la educación pública en Bolivia", en: *Estudios Bolivianos* (La Paz), Nº 16, 2012, pp. 159-205; Pamela Catari Arión, *Surgimiento de la pedagogía especial en Bolivia en el gobierno liberal (1900-1920)*, en: *ibid.*, pp. 207-238.

31 Para una visión equilibrada cf. Huascar Rodríguez García, "Indigenismo y mestizaje en las políticas educativas bolivianas (1905-1955)", en: *Estudios Políticos*, Vol. III, Nº 3, febrero de 2012, pp. 25-59, especialmente pp. 42-44. El autor menciona el indeclinable apoyo de los gobiernos liberales a la autonomía de gestión y a la promoción financiera de las escuelas indígenas.

32 Blithz Lozada Pereira, "Tamayo, el bovarismo y la formación docente", en: *Anuario* (La Paz), Nº 26, 2011, pp. 59-79, especialmente p. 63, 65.

33 Cf. entre muchos otros testimonios: Ignacio Apaza Apaza, "La descolonización cultural, lingüística y educativa en Bolivia", en: *Estudios Bolivianos* (La Paz), 2012, Nº 17, pp. 155-186; Víctor Hugo Quintanilla Coro, *La perspectiva de descolonización educativa intracultural e intercultural*, en: *ibid.*, pp. 187-219.

dual. Pero no debemos perder la esperanza en los efectos de reformas educativas concebidas para el largo plazo, pues la cultura política autoritaria *no* constituye una esencia indeleble y perenne de una presunta identidad colectiva, inmune al paso del tiempo, a las influencias foráneas y a los esfuerzos de

los propios habitantes de la nación. La tradición autoritaria es un fenómeno histórico, es decir transitorio, pero que durante ciertos períodos, que pueden ser muy largos, determina la atmósfera cultural e intelectual de la sociedad. También la Bolivia profunda es pasajera.

RESEÑAS

EL REY DE LA LEÑA

Marco Antonio Restrepo Jaramillo
Eskeletra, Quito, 2010, 391 pp.

Hernán Ibarra

La autobiografía es un género narrativo que tiene como finalidad ofrecer una mirada al pasado en una perspectiva que proviene de alguien con una edad suficiente cuando ya se ha producido una relativa trayectoria de vida que puede ser recordada y contada en un sentido cronológico. *El Rey de la leña* es la autobiografía de Marco Antonio Restrepo (1889-1964), una narración en primera persona sobre su vida transcurrida en gran parte en el Ecuador y asociada a la tormentosa historia de la hacienda Leito de Patate en Tungurahua. El libro fue publicado originalmente en Buenos Aires en 1958, pero casi no circuló en el Ecuador. En esta edición se incluye un comentario de Raúl Andrade al libro publicado en *El Comercio* (18/11/1981) que exalta a Restrepo y alude a una historia macondiana.

Nacido en La Palmera, una finca de la zona rural de Antioquía, vivió su infancia y juventud en el pueblo de Yarmal. Perteneciente a una familia de me-

dianos propietarios y comerciantes, llegó al Ecuador a fines de 1915 como consecuencia de una confrontación donde falleció un campesino. Aunque quiso dedicarse inicialmente al arrendamiento de tierras en la provincia de Chimborazo donde residían algunos terratenientes de origen colombiano, encontró una oportunidad de hacer negocios con la provisión de leña para las locomotoras del ferrocarril, puesto que por la coyuntura de la Primera Guerra Mundial, se requería reemplazar el carbón de piedra como combustible. Dedicado a comprar bosques y transformarlos en leña, recorría la sierra ecuatoriana con un pequeño ejército de trabajadores, bueyes y camiones. Este próspero negocio funcionó desde 1917 hasta 1926 cuando en la prensa se empezó a llamarlo "El Rey de la leña". Otros negocios fueron la cría de mulas, e incluso el traslado a Colombia de monedas de plata recogidas de la circulación. Sin que dejara de mantener propiedades e intereses mercantiles en Antio-

guía, la primera hacienda que adquirió fue “Los Alpes” en la zona de Machachi.

En 1928 compró la hacienda “Leito” que se había puesto en venta en ese año a raíz del asesinato del cajero, cuando imperaba una fuerte crisis de autoridad. Además estaba todavía cercana la conocida masacre de septiembre de 1923 a campesinos arrendatarios definidos como “chagras”. Según Luis Fernández Salvador, el anterior propietario de Leito, cuando ocurrió la intervención represiva del ejército en 1923 que dejó 39 muertos, la hacienda tenía entre 80 a 100 arrendatarios que pagaban un canon de arrendamiento en dinero y la obligación de trabajar dos días al mes para la hacienda. Al tomar posesión de la hacienda, Marco Restrepo solo encontró 40 campesinos residentes, a los que llamó indistintamente como arrendatarios o huasipungueros que “vegetaban y pagaban al dueño pequeños arriendos, pagos que hacían mediante trabajo, a jornal (...)” (p.134). Una parte de los sobrevivientes de la masacre de 1923, se trasladó al valle de Río Verde Chico y formó el caserío Vizcaya en la zona de la cordillera oriental donde Restrepo expandió la hacienda desde 1928.

El acto final de liquidación de las relaciones de renta se produjo cuando Restrepo les exigió obediencia y disciplina, con una indicación muy clara de lo que les esperaba a los que no acaten el nuevo orden: “tomando el revólver de mi cintura, para disparar sobre un blanco que había colocado al extremo opuesto de donde estaba y que al momento se veía sobre la cabeza de los oyentes, les dije: ‘Así como le daré a ese

círculo que tienen a la espalda, en esa pared, le daré a quien me falte o a quienes en grupo intenten hacerme mal’” (p. 137). Esa misma noche después de la “explicación” que les hizo Restrepo, 16 familias abandonaron la hacienda. Luego suprimió la costumbre de challir papas en la cosecha, alterando las normas tradicionales de trabajo para establecer un sistema de trabajo asalariado.

Pero más importante que ese conflicto reciente era un largo litigio con las comunidades de Poatug y Patate-Urcu que se convertiría en un motivo de constantes enfrentamientos.

Al comprar la hacienda, Restrepo deseaba originalmente establecer los dominios de la propiedad, fuera de las definiciones e interpretaciones de límites que históricamente habían presentado las comunidades de Poatug y Patate-Urcu, u otros propietarios. De este modo, Restrepo adquirió las haciendas, Choyata que colindaba con tierras comunales, Río Verde y Vizcaya que estaban en los declives de la cordillera oriental, más allá del pueblo de Baños. De acuerdo a un croquis de la Hacienda “Leito” fechado en 1934, sus límites encerraban prácticamente toda la extensa zona de los Llanganates, e incluso un punto del límite indicado en el croquis, pasa nada menos que por la cumbre del Cerro Hermoso. Obviamente, una pretensión de control tan exagerada, solo era comprensible en tanto Restrepo, aspiraba bloquear el secular acceso de comunidades campesinas a extensos y ricos bosques naturales. Restrepo quiso así dejar perfectamente establecido que desde cuando llegó a Leito no habría en lo sucesivo acceso a la explotación de los bosques, in-

tención que le llevó a constantes confrontaciones con comunidades campesinas externas a la hacienda y, a ser la imagen viva de la concentración de la tierra en la provincia de Tungurahua donde existían otras zonas con amplios segmentos de pequeños propietarios rurales. La hacienda no disponía de caña de azúcar, pero en cambio sus extensos bosques naturales en los declives de la cordillera oriental y la posibilidad de expandir áreas de pastos, dan una idea de su potencial.

Se conoce que en 1934 se produjo la intervención del Ministerio de Previsión Social que reconoció la posesión de las comunidades de Poatug y Patate Urcu junto a la ampliación del territorio de la hacienda. Pero esta decisión estatal no hizo más que diferir el conflicto. Al parecer, el espacio controlado por las comunidades, podría haber sido de 3.000 has. de terrenos comunales en la década de 1930. La comunidad de Poatug se legalizó en 1938.

Los procesos de modernización que Restrepo llevó adelante requerían de trabajadores disciplinados, aunque no abandonó del todo la dotación de lotes de tierra. Era una mano de obra traída de otras regiones debido a su desconfianza hacia los trabajadores de la localidad. Según su propia narración, se procedió a una inmensa innovación de cultivos de trigo, implantación de ganadería extensiva y explotación de los bosques para extracción de madera. Esto había requerido extender y mejorar las vías de comunicación internas, el uso de maquinaria agrícola y mejores medios de transporte. Esta modernización capitalista se encontraba sin em-

bargo condicionada por la existencia de comunidades campesinas que habían sostenido una prolongada confrontación con las haciendas de la zona de Patate a lo largo del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Los litigios que sostenían las comunidades campesinas evidenciaban un uso de recursos legales y presencia en los juzgados provinciales disputando su territorialidad con las haciendas como en otros lugares de la provincia de Tungurahua.

El conflicto de Leito, planteaba una continuada confrontación que tenía como contenido los intereses de un propietario que buscaba constituir un espacio territorial y de desarrollo empresarial basado en la violencia y el ejercicio de la autoridad. En este punto es importante señalar como las coyunturas políticas influyeron en el desarrollo y desenlace de las confrontaciones. El conflicto atravesó distintos momentos de configuración estatal y circunstancias de regulación de los conflictos con la intervención del Ministerio de Previsión Social con el marco de la Ley de Comunas y la Ley de Colonización y Tierras Baldías. Para Restrepo, los momentos que considera más críticos fueron los correspondientes a los gobiernos de Velasco Ibarra. En efecto, durante esos gobiernos se produjeron intervenciones que podían favorecer a las demandas de los campesinos, y esto ocurrió en 1935, 1945 y 1952. Incluso en 1935, Velasco Ibarra habría pedido la expatriación de Restrepo aunque éste buscó en 1944 mejorar sus relaciones con el caudillo. Restrepo no emite quejas sobre Galo Plaza y considera que con el gobierno de Camilo Ponce si habían condiciones más favo-

rables para tratar sus litigios.

En ningún momento Restrepo menciona la legislación laboral u otra legislación sobre aspectos agrarios. Lo que a él le interesaba era la actitud de apoyo que podría tener en las autoridades locales y los gobiernos de turno. Lo que sí relata constantemente es un entorno hostil a su ejercicio de poder y control despótico. Por ejemplo, el ocasional papel de tenientes políticos opuestos a su autoridad.

Restrepo siempre puso énfasis en suprimir las costumbres tradicionales en sus vínculos con los campesinos. Prefería la disciplina laboral y el imperio de las remuneraciones en efectivo como pago al trabajo.

Marco Restrepo provenía de una familia de terratenientes comerciantes de una zona de Antioquia donde siempre habían existido litigios por tierras baldías. De hecho evoca algunas situaciones conflictivas que presencié en sus años juveniles. Se trataba de una experiencia de expansión de la frontera agraria mediante la tala de bosques y su transformación en zonas de cultivo y pastos. Hace una referencia ocasional a la Ley de tierras de 1936 en Colombia a la que acusa de haber incidido en la pérdida de tierras suyas y de su familia. Por lo que se sabe, esta Ley que correspondía a un momento reformista, introdujo disposiciones para regular la propiedad de tierras baldías y la función social de la propiedad. Su aplicación fue débil y no frenó el desarrollo de la gran propiedad en Colombia.

Es necesario tener en cuenta que Restrepo movilizaba sentimientos nacionalistas puesto que al ser colombia-

no era visto con la desconfianza hacia un extranjero que había adquirido una importante presencia en la propiedad rural.

En 1945 Restrepo decidió comprar otra hacienda, esta vez, en el Valle del Chota en la provincia de Imbabura, la hacienda "Pinandro", dedicada principalmente a la caña de azúcar para la producción de aguardiente y panela. Así mismo, procuró establecer formas de trabajo con mayor disciplina y autoridad, eliminando costumbres laborales previas y el acceso a recursos que disfrutaban los campesinos con el anterior propietario. Para ello, vinieron trabajadores de Leito que le ayudaron a imponer el orden en una extensa hacienda, también recurriendo a medidas autoritarias.

Las circunstancias más graves se produjeron en noviembre y diciembre de 1952, coincidiendo con un nuevo gobierno de Velasco Ibarra. Un enfrentamiento con campesinos en una zona disputada (Algeciras) dejó un saldo de cuatro muertos que fueron atribuidos a su responsabilidad, aunque él relata no haber estado en los sucesos. Fue aprehendido y acusado de haber actuado de manera violenta. Como había ocurrido en otras ocasiones, Ambato fue la ciudad donde tuvieron eco los sucesos, puesto que los campesinos contaban con el apoyo de las organizaciones laborales y de abogados vinculados a la izquierda. Este apoyo urbano a los campesinos era observado por Restrepo con la identificación de "obreros comunistas". En Ambato pasó algunos días de cárcel y tuvo en su contra al Gobernador de la Provincia y otras autoridades locales. En esto él veía la intervención malévola de

Velasco Ibarra.

Aunque no se precisa la fecha, un nuevo enfrentamiento dejó en cambio tres fallecidos entre los trabajadores de Leito. Mientras tanto, la policía se había hecho presente constantemente en la hacienda para resguardar el orden, aunque Restrepo desconfiaba de la policía. De allí que después de 1952 prosiguieron los enfrentamientos con los comuneros de Poatug, llamados los “poatos” por Restrepo.

Acerca de la historia de Leito, se escribió después de mucho tiempo una versión distinta a la memoria que había establecido Marco Restrepo en su narración autobiográfica de 1958. *El triunfo de Leito Grande* de Enrique Freire Guevara (2003) es un relato que narra como se produjo una dilatada confrontación. Se encuentra sustentado en una información obtenida de los antiguos campesinos de Leito y de las comunidades, aunque recoge parcialmente los datos de Restrepo. Se puede encontrar tres grandes momentos de esta memoria que introduce narraciones cercanas a un relato de ficción. El primero, con una descripción de la historia colonial de la hacienda que carece de fuentes específicas. El segundo, localizado en la época de la última propietaria, cuando se produjo la terrible masacre de 1923. Y el tercer momento, relativo a la época de Marco Restrepo desde 1928 hasta los años sesenta cuando el conflicto finalizó. La época de la última propietaria, indica la operación de un sistema despótico de trabajo y el modo en el que el establecimiento de mayor disciplina provocó un malestar entre los campesinos de la hacienda, lo que había estado

como causa de la confrontación que terminó en la intervención represiva del ejército en 1923. Además se menciona que la masacre se produjo durante los trabajos de una minga que había sido convocada por el Teniente Político de Patate.

Aunque sin indicar fechas específicas, Freire Guevara ofrece una visión de la época de Restrepo cuando modernizó la hacienda con la incorporación de tecnología mecánica, expandió la ganadería y se dedicó a una explotación sistemática de los bosques. También vino mano de obra proveniente de otras regiones. El manejo había tomado la forma de “un Estado autocrático y soberano en que la única ley sería la sagrada voluntad del amo. Su objetivo era extender la propiedad hacia lo ilimitado sin que nadie se atreviera a reclamar derecho alguno” (Freire Guevara, p. 122). Por otra parte, había constituido una guardia interna de la hacienda que estaba conformada por personal entrenado en el manejo de armas quienes fueron considerados “Los soldados de Leito”. Se puede inferir que esta nueva condición de la hacienda estaba ya en marcha en la década de 1930. Aunque imperaban las relaciones salariales, en la hacienda se realizaban corridas de toros y persistían los vínculos de índole religiosa y ritual que habían existido tradicionalmente en torno al Señor del Terremoto, santo patrono de Patate.

La historia de los incidentes entre Restrepo y las comunidades de Patate Urcu, Poatug y Vizcaya, los relata Freire Guevara sin precisión en cuanto a sus fechas, pero queda claro que las comunidades campesinas disputaban abierta-

mente el dominio territorial de zonas donde hacían cultivos, tenían ganado y explotaban los bosques. La zona de mayor controversia era el valle de Río Verdechico. La distancia entre el núcleo central de la hacienda y los extensos territorios donde estaban los bosques hacía necesario que Restrepo estableciera campamentos con sus trabajadores. Uno de los castigos brutales que Freire menciona fue el de marcar con hierro candente a los campesinos capturados en las disputas con Restrepo. Con el paso de los años, los campesinos también aprendieron el uso de armas con la experiencia de quienes regresaban de la conscripción. Esto indica la existencia de respuestas campesinas que no esperaban pasivamente los enfrentamientos.

Vista en conjunto, la autobiografía de Restrepo tiene pocas referencias a su vida más íntima y familiar que parcialmente se refleja en las fotografías que ilustran

también el mundo de la hacienda. Como él confiesa, tenía pocos amigos, no pertenecía ni frecuentaba clubes, no sabía bailar y tenía pocos vínculos con otros colombianos residentes en el país (p.350). Los motivos centrales de su vida fueron consolidar sus propiedades, modernizarlas y obtener ganancias recurriendo a mecanismos despóticos de gestión con episodios de violencia continuos. Isidro Ayora, ex Presidente del Ecuador visitó Leito en 1958 y en una carta a Restrepo afirmó: "Don Marco, con el fajo de gruesos billetes en una mano para pagar generosamente el trabajo, y el revólver en la otra para hacerse respetar, es un gigante apostado en las breñas del Pastaza." (p.367). No obstante, su mayor obsesión era Velasco Ibarra como un enemigo que lo encuentra siempre presente en su intención de alentar las reivindicaciones campesinas tal como reiteradamente insiste en su relato.